CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
07 MAYO 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:10 PM

DICTAMEN CONJUNTO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR, QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

Periodo Anual de Sesiones 2023 – 2024

Señor Presidente:

Han ingresado para dictamen de las Comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, los proyectos de ley siguientes:

a) Proyecto de Ley 5472/2023-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone la "Ley de Contrataciones del Estado".
b) Proyecto de Ley 5362/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de la Congresista Lady Mercedes Camones Soriano, que propone la "Ley General de Contratación Pública".
c) Proyecto de Ley 6475/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País, a iniciativa del Congresista Alejandro Enrique Cavero Alva, que propone la "Ley que incorpora los principios de Facilidad de Uso y Mejora Continua a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 082-2019/EF".
d) Proyecto de Ley 7388/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País, a iniciativa del Congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, que propone la "Ley que crea un a nueva modalidad de constitución de garantías mediante la retención de pagos".

El presente dictamen fue aprobado por MAYORÍA en la sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, llevada a cabo de forma conjunta con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera[1], de fecha 30 de abril de 2024.

[1] La sesión inició el día 29 de abril de 2024. Fue suspendida para el día 30 de abril de 2024, en que se votó el dictamen.

DICTAMEN CONJUNTO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR, QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

De la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, votaron a favor 13 congresistas titulares. Ellos son: CAVERO ALVA, Alejandro; OBANDO MORGAN, Auristela; AGUINAGA RECUENCO, Alejandro; CAMONES SORIANO, Lady; CUETO ASERVI, José; ESPINOZA VARGAS, Jhaec; HUAMÁN CORONADO, Raúl; JUÁREZ GALLEGOS, Patricia; JULÓN IRIGOÍN, Elva; MUÑANTE BARRIOS, Alejandro; REVILLA VILLANUEVA, César; YARROW LUMBRERAS, Norma y ZEBALLOS MADARIAGA, Carlos.

Votaron en contra los congresistas PALACIOS HUAMÁN, Margot; BELLIDO UGARTE, Guido; CERRÓN ROJAS, Waldemar; ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, Hamlet; PAREDES GONZALES, Alex; PARIONA SINCHE, Alfredo y TAIPE CORONADO, María.

Votaron en abstención los congresistas ARRIOLA TUEROS, José; DOROTEO CARBAJO, Raúl; GUTIÉRREZ TICONA, Paul y PAZO NUNURA, José.

De la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, votaron a favor 13 congresistas titulares. Ellos son: REVILLA VILLANUEVA, César; CAVERO ALVA, Alejandro; FLORES RUÍZ, Víctor; LIZARZABURU LIZARZABURU, Juan; RAMÍREZ GARCÍA, Tania; JULÓN IRIGOÍN, Elva; ACUÑA PERALTA, María; MONTOYA MANRIQUE, Jorge; HERRERA MEDINA, Noelia; ANDERSON RAMÍREZ, Carlos; VARAS MELÉNDEZ, Elías; MONTEZA FACHO, Silvia y TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana.

Votó en contra el congresista PAREDES GONZALES, Alex.

Votaron en abstención los congresistas CORTEZ AGUIRRE, Isabel; TACURI VALDIVIA, Germán; FLORES ANCACHI, Jorge y LÓPEZ UREÑA, Ilich.

i. SITUACIÓN PROCESAL

1.1 El Proyecto de Ley 5472/2023-PE ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de junio de 2023. Fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Fiscalización y Contraloría como segunda comisión dictaminadora el 27 de junio de 2023. Asimismo, el 10 de octubre de 2023 se decretó a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como tercera comisión dictaminadora para su estudio y dictamen.

1.2 El Proyecto de Ley 5362/2023-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 15 de junio de 2023. Fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Fiscalización y Contraloría como segunda comisión dictaminadora el 19 de junio de 2023. Asimismo, el 10 de octubre de 2023 se decretó a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como tercera comisión dictaminadora para su estudio y dictamen.

1.3 El Proyecto de Ley 6475/2023-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos para estudio y dictamen el 22 de noviembre de 2023, fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda comisión dictaminadora el 23 de noviembre de 2023.

1.4 El Proyecto de Ley 7388/2023-CR, ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos para estudio y dictamen el 26 de marzo de 2024, fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda comisión dictaminadora el 27 de marzo de 2024.

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

En los periodos parlamentarios 2016-2021 se presentaron las siguientes propuestas legislativas:

Tabla 1

Propuestas Legislativas periodo parlamentario 2016-2021

PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ULTIMO ESTADO
06998/2020-CR	LEY QUE MODIFICA EL MARCO LEGAL EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS O CONVENIOS DE ESTADO A ESTADO, A FIN DE MEJORAR SU RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA	Propone modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado	ARCHIVO

06070/2020-CR	LEY QUE CREA EL PORTAL ""MONITOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA"", Y ESTABLECE MEDIDAS EXCEPCIONALES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	Propone la creación de un portal que permita difundir y transparentar las necesidades de las entidades para la contratación de bienes bajo la modalidad de contratación directa por situación de emergencia a nivel nacional, regulando aspectos urgentes relacionados a la contratación pública actualmente regida por la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con D.S. 344-2018-EF y su modificatorias, así como establecer medidas excepcionales en los procesos de contratación de bienes.	ARCHIVO
05864/2020-CR	LEY PARA LA PROMOCIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL Y EL EMPLEO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	Propone ley para la promoción temporal del desarrollo productivo nacional y el empleo en las contrataciones del Estado.	ACTUALIZADO
05533/2020-CR	LEY QUE PROMUEVE MAYOR TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTABLECE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA CONTRATACIÒN DE CONSULTORES DEL ESTADO Y EL USO DEL EXPEDIENTE DIGITAL OBLIGATORIO	Propone ley que tiene por objeto promover mayor transparencia en los procedimientos de contratación del Estado, mediante la creación de un sistema integrado de consulta amigable. Además de regular los requisitos mínimos que deben establecerse en los términos de referencia para la	ARCHIVO

		contratación de consultores en los niveles, poderes del Estado Peruano y organismos desconcentrados; lo cual no limita establecer requisitos adicionales dependiendo de la naturaleza de la consultoría y del tipo de consultor requerido.	
04772/2019-CR	LEY QUE MODIFICA LA LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Propone modificar la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.	ARCHIVO
04666/2019-CR	LEY QUE MODIFICA LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DEL ANÁLISIS DE PRECIOS INTERNACIONALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL EN EL CASO DE MEDICAMENTOS ONGOLÓGICOS DE CARÁCTER MONOPÓLICO.	Propone la modificación a la Ley de Contrataciones del Estado al establecer la obligatoriedad del análisis de precios internacionales para los medicamentos oncológicos que gocen de beneficios tributarios (y de protocolos internacionales para el petitorio) en los estudios de mercado base de las licitaciones.	ARCHIVO
04562/2018-CR	LEY QUE AUTORIZA A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE ADMINISTRAN LAS MUNICIPALIDADES A ADQUIRIR DIRECTAMENTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES	Propone autorizar a los Comités de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria y a los Comités de Administración del Programa de Vaso de Leche, reconocidos por la municipalidad correspondiente a adquirir directamente productos	ARCHIVO

		alimenticios nacionales a los pequeños productores locales de su jurisdicción, sin la condición de estar inmerso previamente ante una situación extrema de desabastecimiento de los insumos alimentarios como señala el literal C, Numeral 27.1 del Artículo 27 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.	
04155/2018-CR	LEY QUE ESTABLECE INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR EN LOS FALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, PARA MAXIMIZAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Propone modificar el artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado con el propósito de regular las incompatibilidades para contratar por parte de los altos funcionarios del Estado, esto con el fin de tutelar los intereses de la Nación y de proscripción de la corrupción, en concordancia con el artículo 39 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.	ARCHIVO
03901/2018-CR	LEY QUE ASEGURA LA CANCELACIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO CONTRAÍDAS POR ENTIDADES PÚBLICAS, EN EL RUBRO BIENES Y SERVICIOS, CUYA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVIENE, ENTRE OTRAS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Propone modificar el artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referente a la cancelación oportuna de las obligaciones de pago contraídas por entidades públicas, en el rubro bienes y servicios, cuya fuente de financiamiento proviene, entre otras, de recursos directamente recaudados.	ARCHIVO

02619/2017-CR	LEY QUE MODIFICA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 30225 SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE ESTADO A ESTADO A CARGO DEL OSCE	Propone modificar el literal e) del artículo 5 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a efectos de precisar la periodicidad de la supervisión a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, de los contratos de Estado a Estado.	ARCHIVO
02515/2017-CR	LEY QUE MODIFICA EL INCISO G DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA REGULAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESTATAL	Propone modificar el inciso g) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley 30225, para regular la contratación de servicios de publicidad estatal.	ARCHIVO
01921/2017-CR	LEY QUE PENALIZA A EMPRESAS CUESTIONADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y EN LAS OBRAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Propone penalizar a las personas jurídicas cuestionadas por delitos de corrupción en los procesos de contrataciones con el Estado regulados en la Ley 30225 y en las obras de la reconstrucción con cambios.	ARCHIVO
01707/2016-CR	LEY QUE MODIFICA LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1341	Propone modificar la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341	ARCHIVO
01435/2016-CR	LEY QUE ADICIONA EL LITERAL R) AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Propone modificar el artículo 11 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, constituye una modificación legislativa necesaria a efectos de lograr una lucha adecuada y eficaz contra la corrupción.	ARCHIVO

01366/2016-CR	LEY QUE PROHIBE A LOS CONDENADOS INHABILITADOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A CONTRATAR CON EL ESTADO	Propone modificar los literales 1 y m del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1341, que prohíbe a los condenados inhabilitados por los delitos contra la administración pública a contratar con el Estado.	ARCHIVO
01334/2016-CR	LEY QUE MODIFICA LA LEY 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Propone modificar el literal n) del artículo 11 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, busca ampliar el grado de impedimento para contratar con el estado, de las empresas que tengan directivos vinculados a actos de corrupción con sentencia consentida o ejecutoriada.	ARCHIVO
01214/2016-CR	LEY QUE PROHIBE LOS APORTES DE LAS EMPRESAS DE DERECHO PRIVADO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS	Propone establecer un marco normativo contra el conflicto de intereses que se genera en el ámbito de las contrataciones del estado, cuando las personas jurídicas de derecho privado que se han financiado a organizaciones políticas o candidatos participan en los procesos de contratación de bienes y servicios convocados por entidades públicas.	PUBLICADO EL PERUANO
01206/2016-CR	LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 Y DEROGA PARCIALMENTE LOS	propone modificar el artículo 11 y deroga parcialmente los artículos 5 y 45 de la Ley	ARCHIVO

	ARTÍCULOS 5, 45 DE LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1341, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341 y restituye parcialmente la vigencia de los artículos 29 y 45 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (Remitido por el Poder Ejecutivo el 11 de enero de 2017).	
01110/2016-CR	LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 7, 13, 21 Y DEROGA EL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1341 QUE MODIFICA LA LEY 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DEL D.S. 350-2015-EF MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO 056-2017-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, Y MODIFICA EL ARTÍCULO 2 E INCORPORA LOS ARTÍCULOS 6 AL 15 EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1018 QUE CREA LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PERÚ COMPRAS	Propone modificar el Decreto Legislativo 1341 que modifica la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Supremo 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones; y el Decreto Legislativo 1018 que crea la Central de Compras Públicas-Perú Compras.	ARCHIVO
01107/2016-CR	Ley que modifica el artículo 27 la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, derogando el literal g) del artículo 27 de dicha norma	Propone modificar el artículo 27 la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, derogando el literal g) del artículo 27 de dicha norma	ARCHIVO
00883/2016-CR	LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 31° DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Propone modificar el artículo 31 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, limita la posibilidad de acuerdos entre la entidad y el	ARCHIVO

		proveedor para direccionar la contratación bajo la modalidad de Acuerdo Marco, a través de información privilegiada respecto de la ficha técnica de los demás proveedores, con la finalidad de obtener la compra del bien o servicio.	
00880/2016-CR	LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1071, LEY DE ARBITRAJE Y LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ELIMINANDO EL ARBITRAJE AH HOC EN LOS CONTRATOS DEL ESTADO.	Propone modificar la Ley de Arbitraje y la Ley de Contrataciones del Estado, a efectos de establecer que los arbitrajes en materia de Contratación del Estado serán necesariamente institucionales.	ARCHIVO
00746/2016-CR	LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 30225- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOBRE EL IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO A PERSONAS JURÍDICAS Y/0 NATURALES APORTANTES DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N°28094- LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS.	Propone modificar el artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado sobre el impedimento de contratar con el estado a personas jurídicas o naturales aportantes de organizaciones políticas prevístos en el artículo 30 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.	ARCHIVO
00725/2016-CR	LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 33 DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Propone modificar el artículo 33 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de proponer mecanismos obligatorios y preventivos que permitirán tener confianza en las Cartas Fianzas que presenten los	ARCHIVO

		proveedores en los diferentes procesos de contratación.	
00327/2016 -CR	LEY QUE PROMUEVE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Propone modificar el artículo 32 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que promueve la contratación de trabajadores locales en la ejecución de obras públicas	ARCHIVO
00024/2016 -CGR	LEY QUE PLANTEA MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Propone fortalecer el control gubernamental sobre la inspección y supervisión de la ejecución de la obra pública, y establece medidas para cautelar la correcta ejecución de los procesos de contratación pública, mediante la participación directa de la Contraloría General de la República.	ARCHIVO

Fuente y elaboración: Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado 2022-2023.

Para la elaboración del presente predictamen, hemos recurrido a diferentes modalidades de consulta pública como son: 1) las opiniones a diferentes actores del sector público, privado y la academia; 2) Opiniones de los ciudadanos a través del Portal Web del Congreso de la República; 3) Mesas de Trabajo (presenciales y virtuales) con actores del sector público, privado y academia; 4) Consulta a expertos (nacionales e internacionales) en la materia que fueron convocados a las sesiones de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado o a reuniones bilaterales con la Comisión de Descentralización;

Ello con la finalidad de convocar a la mayor cantidad de actores involucrados o que pueden verse impactados con la norma, conocer los diversos puntos de vista sobre la materia y enriquecer la propuesta normativa. A continuación se detallan los diferentes niveles de participación realizados:

1. Opiniones solicitadas y recibidas

1.1 Respecto al Proyecto de Ley 5472/2023-PE, Ley de Contrataciones del Estado, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado solicitó opinión mediante los Oficios 194-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 195-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 196-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 197-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 198-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 199-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 200-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 201-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 202-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 203-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 204-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 205-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 206-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 207-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 208-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 209-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 210-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 211-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 212-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 203-2023 2024/CDRGLMGE-CR, 214-2023-2024/CDRGLMGE-CR, 215-2023 2024/CDRGLMGE-CR y 216-2023-2024/CDRGLMGE-CR de fecha 18 de octubre de 2023.

Tabla 2
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 5472/2023-PE

OFICIO	ENTIDAD	NOMBRE	FECHA DE ENVÍO
194-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Presidente de la Asociación de Exportadores – ADEX	Julio Pérez Alván	18/10/2023
195-2023-2024/CDRGLMGE-CR	La Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham Perú	Aldo R. Defilippi	18/10/2023
196-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX	Julia Torreblanca Marmanillo	18/10/2023
197-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP	Alfonso Bustamante Canny	18/10/2023

198-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Instituto Peruano de Economía – IPE	Carlos Gallardo Torres	18/10/2023
199-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Consejo Privado de Competitividad – PERÚ COMPITE	David Tuesta Cárdenas	18/10/2023
200-2023-2024/CDRGLMGE-CR	ONG Transparencia	Alvaro Henzler Vernal	18/10/2023
201-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Abogado – Estudio Echecopar	Jorge Danós Ordóñez	18/10/2023
202-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Abogado – Estudio Echecopar	Juan Carlos Morón Urbina	18/10/2023
203-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE	Dennys Cuba Rivera	18/10/2023
204-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR	Rohel Sánchez Sánchez	18/10/2023
205-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Colegio de Abogados de Lima. CAL	César Bazán Naveda	18/10/2023
206-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Cámara de Comercio de Lima – CCL	Rosa Bueno De Lercari	18/10/2023
207-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Colegio de Economistas de Lima – CEL	Julio Moreno Vargas	18/10/2023
208-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud – Cenares	Jorge Grimaldo Ramírez Castillo	18/10/2023
209-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Contraloría General de la República	Nelson Eduardo Shack Yalta	18/10/2023
210-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Seguro Social de Salud – EsSalud	María Elena Aguilar del Águila	18/10/2023
211-2023-2024/CDRGLMGE-CR	El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la	Karin Cáceres Durango	18/10/2023

	Propiedad Intelectual- INDECOPI		
212-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Presidencia del Consejo de Ministros – PCM	Luis Alberto Otárola Peñaranda	18/10/2023
213-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Procuraduría General del Estado – PGE	Daniel Soria Luján	18/10/2023
214-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP	Carlos Garatea Grau	18/10/2023
215-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT	Luis Enrique Vera Castillo	18/10/2023
216-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM	Gloria Ramón Ruffner de Vega	18/10/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado 2022-2023

A la fecha de la elaboración del presente dictamen, se han recibido las opiniones de:

a) Presidencia del Consejo de Ministros – PCM

Mediante Oficio D002913-2023-PCM-SG, de fecha 24 de octubre de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remite adjunto la Nota de Elevación D000561- 2023-PCM-OGAJ, elaborada por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM. Dicha nota señala que la propuesta legislativa es una iniciativa del Poder Ejecutivo, remitida al Congreso de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, en el marco de lo dispuesto en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política del Perú, la misma que contiene la correspondiente exposición de motivos con el fundamento técnico para la emisión de dicha iniciativa legislativa, así como, el análisis de impactos cuantitativos y cualitativos de la norma y el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. Por lo que **no corresponde emitir opinión al respecto.**

b) Contraloría General de la República – CGR

Mediante el Oficio D004069-2023-CG/DC, de fecha 09 de noviembre de 2023, la Contraloría General de la República (CGR) adjunta el anexo sobre el pedido de opinión del Proyecto de Ley 5472/2023-CR, Ley de Contrataciones del Estado. Concluye que el Proyecto de Ley propone la intervención de la CGR y de los demás órganos conformantes del Sistema Nacional de Control; lo que influye positivamente, toda vez que se rescata la importancia del papel que ejerce este organismo respecto del control gubernamental que se ejecuta en las entidades sujetas a control, conforme lo establece la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Asimismo, en cuanto a las materias que no inciden propiamente en las atribuciones ni en el ámbito de competencia de la Entidad Fiscalizadora Superior, sugiere poner en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); así como a la Dirección General de Abastecimiento, ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, que, de conformidad con el numeral 7 del inciso 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1439, tiene como función "Emitir opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento". Finalmente, la CGR remite aportes al proyecto legislativo en un cuadro adjunto, en el enlace: https://bit.ly/45gl8FV.

c) Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN

Mediante Cartas 170-2023 y 182-2023, de fecha 16 de octubre de 2023, el Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, remite opinión del Proyecto de Ley 5472/2022-PE, Ley de Contrataciones del Estado. La Asociación estima que la propuesta legislativa brinda una buena oportunidad para mejorar el sistema de contrataciones del país, especialmente en los proyectos de infraestructura bajo la modalidad denominada obra pública.

Asimismo, considera que el primer gran tema que encuentran es que la norma de contrataciones, la actual y la que se plantea en el proyecto, no se vincula a la calidad intrínseca del proyecto y que esta desconexión genera conflictividad y complicaciones en la ejecución, ya que no se asegura la calidad de los proyectos de inversión desde el principio.

De igual manera, que se sigue manteniendo un grave error al desvincular la salida al mercado de los proyectos sin vincularlos a la calidad de los proyectos de inversión. En el Perú, según la CGR, se invierte un 2.4% del costo de inversión en promedio, en el

estudio de ingeniería, mientras que en Chile ese mismo promedio está en un 7%. Por ello, si se tiene un mal proyecto de ingeniería, ese proyecto tendrá problemas para ejecutarse, tal como se ve en la actualidad, en algunos casos de obras paralizadas y que, si esta modificación legislativa no brinda soluciones, para que desde el inicio del proyecto se contemple la calidad, es probable que persistan los problemas actuales en la ejecución de los proyectos.

También que, según el Informe sobre el Análisis de la Inversión Pública de la CGR, abarcando el periodo 2017-2021, se destaca que las deficiencias en los expedientes técnicos son una de las principales amenazas para la ejecución de inversiones. Estas deficiencias provocan retrasos y paralizaciones en la ejecución física de proyectos, así como aumentos de costos evidenciados en adicionales de obra y extensiones de plazo. El informe señala también que en el registro Infobras de la CGR se documentaron 22 046 adicionales de obra, con un monto total de S/ 28 472 191 493. De este total, el 52.07% se atribuye a deficiencias en los expedientes técnicos.

Además, tomar en cuenta la conveniencia de considerar la contratación de servicios en este análisis. Existe una tendencia extendida a centrarse en la adquisición de materiales como el hierro y el cemento, sin tener en cuenta el servicio que la infraestructura proporcionará. Durante décadas, se ha prestado mayor atención a las medidas de las paredes de un hospital o una escuela, por ejemplo.

d) Cámara de Comercio de Lima – CCL

Mediante Carta DI 075.11.2023, de fecha 02 de noviembre de 2023, el Director Institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), remite el anexo adjunto con los comentarios respecto al Proyecto de Ley 5472/2022-PE. En ese sentido, señala que el principal problema en la contratación pública en nuestro país es la corrupción, que persiste a pesar de las numerosas reformas normativas. Según la CGR, la corrupción en la administración pública causó un perjuicio económico de más de 24 mil millones de soles en el año 2021. Asimismo, que la propuesta de reforma normativa no aborda de manera suficiente este problema, y se requieren precisiones para evitar la impunidad, posibles actos de corrupción y arbitrariedades en el ejercicio de la potestad sancionadora.

Asimismo, se precisa que es fundamental priorizar en la reforma la preservación del principio de concurrencia y promoción de la competencia para proteger los intereses del Estado y garantizar la participación equitativa de los postores. La falta de transparencia en los procesos de contratación, problemas en los expedientes técnicos, restricciones

para observaciones, y otros obstáculos desalientan la participación de empresas serias, afectando la calidad de las ofertas y la eficiencia en la contratación pública. Estos aspectos deben ser abordados de manera más integral en el proyecto de ley.

De igual modo, agregan que el proyecto de ley debe aclarar que las facultades de supervisión del OSCE deben ser amplias, oportunas, sin restricciones y a pedido de cualquier parte, evitando limitaciones vía reglamentaria. Es crucial distinguir la labor de supervisión de la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado, porque de lo contrario, las contrataciones sujetas a regímenes especiales, que son las que afectan la mayor parte del fondo público, continuarán sin control y en impunidad como sucede ahora.

También, se señala que el proyecto sea específico al fijar plazos perentorios máximos para las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, comenzando desde la presentación de denuncias, prohibiendo su modificación vía reglamentaria. De igual manera, la CCL reconoce aspectos positivos, como la incorporación de nuevas modalidades de contratos y la clarificación de impedimentos. Igualmente, adjuntan la posición del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima sobre las disposiciones relacionadas con el arbitraje.

e) Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR

El 10 de noviembre de 2023, el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), mediante el Oficio 1018-2023-ANGR/PE, envió su opinión a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera sobre el Proyecto de Ley 5472/2022-PE.

La opinión de la ANGR es favorable, enfatizando la intención del proyecto de modificar el capítulo vinculado a los métodos de solución de controversias para fortalecer un sistema resolutivo eficiente. Además, resalta la meta de maximizar la utilización efectiva de recursos públicos en las contrataciones estatales, alineándose con los objetivos públicos y buscando mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Asimismo, la ANGR propone modificaciones mencionando la necesidad de contraponer los principios de contratación y control, desarrollar la gestión de riesgos, emitir directivas y opiniones, establecer categorías de funcionarios certificados, definir la conformación de comités, incluir la programación multianual y el plan anual de contrataciones, establecer parámetros objetivos, mantener procedimientos ágiles, suprimir redundancias, prever la actuación de la CGR, reducir garantías para favorecer a

pequeñas empresas, definir mecanismos de resolución de disputas, considerar la proporcionalidad en las multas y aplicar responsabilidad subjetiva en sanciones.

f) Colegio de Notarios de Lima – CNL

El 07 de noviembre de 2023, el Fiscal y la Secretaria de la Directiva del Colegio de Notarios de Lima, mediante el Oficio 640-2023-CNL/JD, envió su opinión a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera sobre el Proyecto de Ley 5472/2022-PE.

Consideran que la participación notarial históricamente ha fortalecido la transparencia en las Licitaciones y Concursos Públicos, asegurando un acto público y la apertura de sobres en su presencia. La seguridad jurídica se reflejaba en actas notariales que documentaban estos eventos, proporcionando un registro público de los procedimientos. Sin embargo, el Reglamento actual prescinde de la participación notarial al prever la presentación electrónica de propuestas. Esta modalidad carece de la seguridad y transparencia necesarias, contraviniendo normas legales y constitucionales, desde el artículo 76 de la Constitución de 1993 hasta la Ley de Contrataciones del Estado.

Agregan, que la presentación electrónica, sin acto público ni documento notarial, vulnera las normas y genera desconfianza. La presencia notarial en actos públicos garantizaba la apertura de sobres y brindaba seguridad a los usuarios. La vía electrónica solo confía en la tecnología, sin garantías equivalentes. Asimismo, proponen que la nueva ley establezca que los actos públicos no pueden realizarse electrónicamente sin la presencia de un notario, asegurando transparencia. Precisan, además, que la participación notarial es una garantía para administrados, postores, autoridades y organismos de control.

g) Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, Sanitarias, de Suplementos Alimenticios y Dispositivos Médicos – ADIFAN.

Mediante Carta 305-2023, de fecha 04 de agosto de 2023, el presidente Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, Sanitarias, de Suplementos Alimenticios y Dispositivos Médicos – ADIFAN envió su opinión a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera sobre el Proyecto de Ley 5472/2022-PE. En dicho documento expresan su oposición al secretismo y solicitan la modificación de la Tercera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, mediante la Carta 493-2023 de fecha 06 de noviembre de 2023, la ADIFAN, reitera su posición y remiten opinión adicional a la Carta 305-2023, de fecha 04 de agosto de 2023.

De manera similar, mediante Carta 498-2023 de fecha 22 de noviembre de 2023, ADIFAN, remite opinión adicional a la remitida en la Carta 493-2023 de fecha 06 de noviembre de 2023. Señala, que la propuesta busca clasificar como confidencial la información relacionada con ofertas y negociaciones de acuerdos de riesgo compartido para tecnologías sanitarias. Sin embargo, esta clasificación solo puede hacerse mediante una ley aprobada por el Congreso, y este proyecto de ley podría ir en contra de un derecho fundamental.

En ese sentido, estiman que la disposición propuesta es demasiado amplia y genérica, abarcando cualquier información negociada para acuerdos de riesgo compartido. Esto pone en peligro el acceso a información pública, debilita la transparencia y podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones. Limitar este acceso podría dar lugar a abusos y opacidad, comprometiendo la integridad de los recursos públicos.

De igual manera, consideran que el acceso a la información pública es esencial para una democracia fuerte, facilitando la participación informada de los ciudadanos, previniendo la corrupción y asegurando el control sobre las instituciones públicas. Limitar este derecho, afirman, podría socavar la confianza ciudadana y comprometer la rendición de cuentas.

h) Colegio de Arquitectos del Perú – CAP

Mediante Carta 366-2023-DN-CAP, de fecha 12 de octubre de 2023, la Decana del Colegio de Arquitectos del Perú – CAP envió su opinión a la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre el Proyecto de Ley 5472/2022-PE, en la cual detallan los puntos del proyecto sobre los cuales solicitan aclaraciones y/o hacen propuestas de mejora.

Con relación al proyecto de ley y su impacto en los concursos de proyectos arquitectónicos, se destaca la importancia de estos concursos en la búsqueda de la calidad urbana y la promoción de la innovación. Hacen referencia al numeral 41.4, que establece que las condiciones serán indicadas en el reglamento, planteando la pregunta sobre si el espíritu de la Compra Pública de Innovación se aplica al objeto urbano arquitectónico.

En relación con los acuerdos marco, resalta que la propuesta de ley busca mejorar esta modalidad, y se presenta una propuesta del Colegio de Arquitectos del Perú para incorporar el numeral 42.3 sobre Acuerdos Marco Institucional, con condiciones y requisitos a determinar en el reglamento.

Asimismo, aborda la limitación de los concursos arquitectónicos por montos establecidos, y se expone la propuesta del Colegio de Arquitectos para modificar el artículo 45, proponiendo la inclusión explícita de la modalidad de concurso de proyectos arquitectónicos, permitiendo una reglamentación más adecuada.

También, plantean la pregunta sobre la definición de "instituciones nacionales autorizadas", indicando que el reglamento precisará este término y se cuestiona si el Colegio de Arquitectos del Perú podría considerarse una institución autorizada. Además, se plantea una interrogante sobre la definición de "instituciones nacionales autorizadas" que será clarificada en el reglamento.

i) Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX

Mediante la Carta 237-2023/DE/COMEXPERU, de fecha 28 de noviembre de 2023, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) emitió su opinión, en la cual estiman que, si bien el proyecto propone soluciones a algunos de los principales problemas públicos en materia de contrataciones con el Estado, se deben realizar una serie de precisiones. Considerando que el proyecto de ley presenta dificultades en los procesos de adquisición de tecnología, en el cumplimiento de compromisos y tratados internacionales, así como en la gradualidad en el régimen de infracciones.

j) Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

Mediante Carta N° 353-2023/SPDA, de fecha 13 de diciembre de 2023, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental remite su opinión, en la cual, entre otros, señala citando la publicación "Indicadores de riesgo de desastres y de gestión de riesgos: Programa para América Latina y el Caribe: Informe resumido" del Banco Interamericano de Desarrollo que el riesgo de desastres no solo depende de la posibilidad que se presenten fenómenos naturales intensos, sino también las condiciones de vulnerabilidad que favorecen que se desencadenan desastres cuando se presesntan dichos fenómenos.

1.2 Respecto al Proyecto de Ley 5362/2023-CR, "Ley General de contratación Pública", la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado solicitó opinión mediante los Oficios 376-2023-2024-

CDRGLMGE-CR, 377-2023-2024-CDRGLMGE-CR, 378-2023-2024-CDRGLMGE-CR, 379-2023-2024-CDRGLMGE-CR, 380-2023-2024-CDRGLMGE-CR y 381-2023-2024-CDRGLMGE-CR, de fecha 8 de noviembre de 2023.

Tabla 3
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 5362/2023-CR

OFICIO	ENTIDAD	NOMBRE	FECHA DE ENVÍO
376-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Asociación de Exportadores - ADEX	Julio Pérez Alván	8/11/2023
377-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Cámara de Comercio de Lima - CCL	Rosa Bueno De Lercari	8/11/2023
378-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Contraloría General de la República - CGR	Nelson Eduardo Shack Yalta	8/11/2023
379-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP	Alfonso Bustamante Canny	8/11/2023
380-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	Alex Alonso Contreras Miranda	8/11/2023
381-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Consejo Privado de Competitividad – PERÚ COMPITE	David Tuesta Cárdenas	8/11/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado 2022-2023

A la fecha de la elaboración del presente dictamen, se ha recibido la opinión de:

a) Contraloría General de la República – CGR

Mediante el Oficio D000025-2024-CG/DC, de fecha 08 de enero de 2024, el Contralor General de la República (CGR) emite opinión sobre el Proyecto de Ley 5362/2022-CR, para lo cual adjuntó un anexo con los comentarios formulados.

Al respecto, la CGR, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 27785, ha formulado comentarios sobre las disposiciones en las cuales el Proyecto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado hace referencia expresa a la intervención de la CGR y los demás órganos del Sistema Nacional de Control.

De igual manera, advierte que el Proyecto de Ley propone la intervención de la CGR y de los demás órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, lo que influye positivamente, toda vez que se rescata la importancia del papel que ejerce la CGR respecto del control gubernamental.

b) Sociedad de Comercio Exterior – COMEX

Mediante Carta 237-2023/DE/COMEXPERU de fecha 28 de noviembre de 2023, la Sociedad de Comercio Exterior envió su opinión, la cual considera que, si bien el proyecto propone soluciones a algunos de los principales problemas públicos en materia de contrataciones con el Estado, mencionan también las siguientes dificultades:

Con respecto a la adquisición de tecnología: consideran que existen dificultades en los procesos de adquisición de tecnología desde la Ley de Contrataciones del Estado, que no se solucionan y se agudizan con el proyecto de ley.

En el cumplimiento de compromisos internacionales: estiman que algunas disposiciones del proyecto de ley ignoran los compromisos internacionales asumidos por el país, especialmente en relación con el trato a empresas extranjeras en los procesos de contratación.

Sobre la gradualidad en el régimen de infracciones: sugieren evaluar si es necesario modificar la normativa actual en relación con las sanciones por infracciones en los procesos de contratación del Estado, a fin de evitar sanciones desproporcionadas.

c) **Presidencia del Consejo de Ministros** envió a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Oficio D001970-2023-PCM-SG de fecha 07 de julio de 2023, en el cual adjunta el Informe D000958-2023-PCM-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica que indica lo siguiente:

Por competencia, **no corresponde** a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley 5362/2022-CR, Ley General de Contratación Pública. Asimismo, que al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio D0003936-2023-PCM-SC se trasladó a dicho Ministerio el pedido de opinión.

d) **Ministerio Público - Fiscalía de la Nación** envió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría el Oficio 006609-2023-MP-FN-SEGFIN de fecha 19 de diciembre de 2023,

el informe 000725-2023-MP-FN-OGASEJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, el cual considera que, de acuerdo al marco legal del Ministerio Público, el Proyecto de Ley 5362/2022-CR, que propone una "Ley General de Contratación Pública" **no se encuentra relacionado** con las funciones propias del Ministerio Público.

1.3 Respecto al Proyecto de Ley 6475/2023-CR, "Ley que incorpora los principios de Facilidad de Uso y Mejora Continua a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 082-2019/EF", la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera solicitó opinión mediante los Oficios 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 y 1080–2023-2024/CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de enero de 2024

A la fecha de la elaboración del presente dictamen, se ha recibido la opinión de la **Presidencia del Consejo de Ministros** remitida a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera mediante Oficio D00257-2024-PCM-SG de fecha 12 de febrero de 2024, en el cual adjunta el Informe D000197-2024-PCM-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica que indica lo siguiente:

Por competencia, **no corresponde** a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley 6475/2023-CR, Ley que incorpora los principios de Facilidad de Uso y Mejora Continua a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, que al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio D000868-2024-PCM-SC se trasladó a dicho Ministerio el pedido de opinión.

1.4 Respecto al Proyecto de Ley 7388/2023-CR, "Ley que crea un a nueva modalidad de constitución de garantías mediante la retención de pagos", la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera solicitó opinión mediante los Oficios 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 y 1080–2023-2024/CMRV-CEBFIF-CR, de fecha 24 de enero de 2024.

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado solicitó opinión mediante los Oficios 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 y 1258-2023-2024-CDRGLMGE-CR, de fecha 22 de abril de 2024.

Tabla 4

Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 7388/2023-CR

OFICIO	ENTIDAD	NOMBRE	FECHA DE ENVÍO
1253-2023-2024/CDRGLMGE-CR	XXX - CAPECO		
1254-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	José Berley Arista Arbildo	
1255-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS		
1256-2023-2024/CDRGLMGE-CR	Cámara de Comercio de Lima - CCL	Rosa Bueno De Lercari	
1257-2023-2024/CDRGLMGE-CR	XXX- AFIN		
1258-2023-2024/CDRGLMGE-CR	XXX- SNCI		

Fuente y elaboración: Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado 2022-2023

2. Consulta Pública

A. Opiniones ciudadanas

A la fecha de elaboración de este dictamen, en la página web del Congreso de la República se han recibido múltiples opiniones ciudadanas sobre el Proyecto de Ley 5472/2023-PE en el que recae este predictamen.

El ciudadano Luis Ricardo Gandolfo Cortés emitió las siguientes opiniones:

a) Con fecha 13 de julio de 2023, refiriéndose al numeral 63.4 del proyecto de ley, comentó que este debería precisar lo siguiente: "Para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia en el ámbito de aplicación de la presente Ley, se requiere formar parte de las nóminas de una Institución Arbitral o Centro de Resolución de Disputas que se encuentre en el Listado que administra el OSCE. Si la Institución Arbitral o el Centro de Resolución de Disputas cumple con los requisitos

que establezca el Reglamento para ser incluido en el Listado que administra el OSCE debe respetarse sus criterios para seleccionar a sus árbitros".

b) Con fecha 14 de julio de 2023, propuso incorporar una disposición complementaria que precise lo siguiente: "Prorróguese la inscripción automática en el Registro Nacional de Árbitros de los profesionales que se encontraban en la Nómina de Profesionales aptos para Designación Residual del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a que se refiere el Decreto Supremo N° 141-2022-EF, desde la promulgación de esta Ley y hasta que entre en funciones el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas que crea la presente Ley." Fundamenta su pedido, señalando que actualmente, los árbitros que designan las entidades públicas y los árbitros que designan los centros de arbitraje, de manera residual, como presidentes de los tribunales arbitrales, cuando los árbitros designados por las partes no se han puesto de acuerdo en su elección, deben ser del Registro Nacional de Árbitros, cuyo número, desde el 30 de junio de 2023, se ha reducido a 72 árbitros al no haberse prorrogado el Decreto Supremo N° 141-2022-EF. Señala que este es un número absolutamente insuficiente para los más de 400 arbitrajes mensuales que confrontan las entidades.

c) Con fecha 6 de setiembre de 2023, sugiere modificar el artículo 63, numeral 63.3 en los siguientes términos: "Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de éstas, por parte de la Contraloría General de la República, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje o Junta de Resolución de Disputas, correspondiendo, en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Las controversias relacionadas a pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de éstas, por parte de la Entidad, sí pueden ser sometidas a arbitraje o Junta de Resolución de Disputas." Fundamenta su propuesta en que las prestaciones adicionales aprobadas por la Entidad no generan mayormente ninguna controversia, lo que sí sucede con las controversias no aprobadas. Por eso lo mejor es emplear el mismo texto.

d) Con fecha 21 de diciembre de 2023, haciendo referencia al numeral 63.4, sugiere agregar que quienes no forman parte de las nóminas de una institución arbitral o de un centro de resolución de disputas que se encuentre en el listado que administra el OSCE, pueden desempeñarse como árbitros o como adjudicadores si es que esos

mismos institutos o centros confirman sus designaciones. Eso permitirá abrir el universo de potenciales árbitros a profesionales ajenos a la función arbitral o no inscritos en determinadas nóminas, pero que tienen amplios conocimientos en las materias que son objeto de la controversia y contribuirán a la solución de cuestiones especialmente complejas.

El ciudadano Luis Arturo Rodríguez Caldas emitió las siguientes opiniones:

a) Con fecha 13 de julio de 2023, propone lo siguiente: Eliminación de la garantía por interposición del recurso de apelación: Se propone prescindir de la figura de garantía del 3% (mediante carta fianza) del valor referencial de la convocatoria como requisito obligatorio para interponer el recurso de apelación. En su lugar, se propone establecer una sanción monetaria y temporal al proveedor que interponga un recurso de apelación que sea declarado infundado por el TCE. Este proveedor no podrá contratar con el Estado hasta que realice el pago de la sanción o se cumpla el plazo de sanción dispuesto por el Tribunal (lo que ocurra primero). Esta propuesta tiene el propósito de refutar lo establecido en el numeral 61.3 del artículo 61 del Proyecto de ley.

   Sustenta su propuesta, precisando que se presenta un aprovechamiento de la barrera en la presentación del recurso de apelación: La garantía de 3% del valor referencial como requisito obligatorio para ingresar el recurso de apelación al otorgamiento de la buena pro al TCE. Esto es algo que se ha ratificado en el Proyecto de ley 05472 (numeral 61.3 del artículo 61 del Proyecto de ley) y que se justifica con el argumento de "evitar la interposición de recursos de apelación temerarios y que solo pretenden dilatar los procedimientos en mención" (punto 2.3.21 de la exposición de motivos del Proyecto de ley). Sin embargo, esta barrera permite fraguar el acuerdo ilícito entre el funcionario público y el postor favorecido, aprovechando que en procesos de selección de ejecutores de obras el monto de la garantía del 3% siempre es elevado, lo que favorece a la corrupción al ser muy baja la relación entre los postores que en definitiva apelan y los que no pueden hacerlo por la gran cantidad de dinero que esto supone. Esto termina constituyendo un mecanismo de blindaje a la corrupción establecido en la misma LCE".

b) Con fecha 14 de julio de 2023, propone eliminar el costo de este trámite y hacerlo de acceso universal y gratuito a los proveedores. Sin embargo, en caso de que el pronunciamiento del OSCE no sea favorable al postor, se propone aplicar una sanción monetaria leve y temporal a dicho postor, impidiéndole contratar con el Estado hasta que realice el pago de la sanción leve o se cumpla el plazo de sanción

dispuesto por OSCE (lo que ocurra primero). Esta propuesta tiene el propósito de complementar lo establecido en el artículo 72 del RLCE.

Por su parte, el ciudadano Miguel Angel Herrera Zevallos, el 14 de julio de 2023, respecto a la retención de la garantía de fiel cumplimiento en todas las modalidades de contratación, propone exigir la retención del 10% del monto contractual como garantía de fiel cumplimiento del contrato como medio alternativo a la presentación de fianzas; únicamente para contratos de suministro de bienes, prestación de servicios, consultoría y ejecución de obras que contemplen dos o más pagos periódicos en la ejecución del contrato. Esto sin discriminar en el tamaño de la empresa ni la envergadura del proyecto a realizar. Con esto se mejora lo establecido en el numeral 149.4 del artículo 149 del RLCE. El propósito de la retención de garantías es flexibilizar la ejecución de contratos que contemplen pagos periódicos, sin importar el monto del contrato o el tipo de empresa que se acoge.

Sustenta su pedido, precisando que ello no se condice con lo que la ley actual contempla al excluir, sin sustento aparente, a la más importante de las modalidades de selección de proveedores ejecutores de obras: la licitación pública. Si la modalidad de retención de la garantía de fiel cumplimiento no es adoptada de manera universal en un eventual nuevo RLCE, que no discrimine entre el tamaño de una empresa (si está inscrita en REMYPE o no), o la envergadura de una obra, la ineficiencia en la etapa de perfeccionamiento del contrato de obra seguirá estando implícita en los procesos de contratación al mantenerse la tasa de frustración de contratos en la etapa de perfeccionamiento y conllevando al contratista a ser sancionado por no mantener la oferta luego de resultar adjudicado.

El ciudadano Ricardo Freddy Llerena Morales, el 13 de octubre de 2023, respecto a la retención de la garantía de fiel cumplimiento en todas las modalidades de contratación, coincide en los mismos términos que la propuesta precedente.

A la fecha de elaboración de este dictamen, la página web del Congreso de la República no registra opiniones ciudadanas sobre el Proyecto de Ley 5362/2023-CR y 6475/2023-CR,

B. Mesas de Trabajo

Desde el mes de octubre de 2023 se han organizado 6 mesas de trabajo en las que han sido invitados los 25 gobiernos regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima; 27 cámaras de comercio a nivel nacional y 16 gremios empresariales (COMEX, ADEX, CONFIEP, CAPECO, AMCHAM, IPE, AFIN, SIN, CAL, SNCI, ALAFARPE, ALAFAL, ASEI).

C. Consulta a Expertos

En las sesiones ordinarias de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado hemos recibido a diez expositores, entre congresistas (Lady Camones Soriano), funcionarios (Mijail Vizcarra Llanos – Director General de Abastecimiento, Laura Gutiérrez Gonzáles – Presidenta Ejecutiva del OSCE, y académicos (Victor Baca Oneto, José Zegarra Pinto, Juan Carlos Morón Urbina, Alberto Retamozo Linares, Christian Guzmán Napurí, Milan Pejnovich)) para brindar su análisis sobre diferentes aspectos de los proyectos de ley en estudio.

Se han llevado a cabo reuniones bilaterales con 8 especialistas (Jorge Danos, Alfredo Bullard, Ramón Huapaya, Carlos Ireijo, Amalia Moreno, Renzo Zárate) incluidos expertos internacionales de Chile (Claudio Moraga) y México (Efraín Ceballos) — en materia de contrataciones públicas.

Adicionalmente, se han desarrollado varias reuniones técnicas con funcionarios y el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, con el Contralor General de la República y se ha realizado una visita al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

Asimismo, se ha trabajado en forma conjunta con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera en la elaboración del presente predictamen.

III. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

A continuación, se resume el contenido principal de los proyectos de ley que originan el presente dictamen:

1. **El Proyecto de Ley 5472/2023-PE,** propone establecer el marco normativo para la contratación de bienes, servicios y obras, así como regular la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación, para el cumplimiento de los fines públicos, bajo un enfoque de integridad y gestión por resultados, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2. **El Proyecto de Ley 5362/2023-CR**, propone dotar a la contratación pública de principios, procedimientos y mecanismo para salvaguardar la ejecución eficiente de los recursos públicos que se invierten y promueven bajo el enfoque de gestión por resultados en la contratación de bienes, servicios y obras, por parte de las entidades de

los tres niveles del Gobierno, para obtener una repercusión positiva sobre las condiciones de vida de los ciudadanos.

3. **El Proyecto de Ley 6475/2023-CR,** propone modificar el artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Este proyecto tiene como objeto garantizar la idoneidad de la normativa y procesos referidos a la contratación con el Estado, incorporando, a través del establecimiento de los principios de Facilidad de Uso y de Mejora Continua como criterios de interpretación de la ley.

4. **Proyecto de Ley 7388/2023-CR, propone, a través de la modificación del artículo 33 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, crear una nueva modalidad de constitución de garantías mediante la retención de pagos.**

IV. MARCO JURÍDICO

- Constitución Política del Perú.
- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras.
- Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, y su modificatoria por Ley 31738, Ley que modifica la Ley 29698.
- Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
- Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS.

V. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 y en lo pertinente del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, en lo que respecta a la formalidad de la exigencia del cumplimiento de requisitos para la presentación de propuestas legislativas,

se puede apreciar que ambas propuestas legislativas presentan una exposición de motivos que describe los problemas públicos que busca resolver y que, por tanto, se justifica la propuesta de solución que plantean en sus fórmulas legales.

Igualmente, de la revisión de las propuestas de ley, se evidencia que cuentan con un acápite relativo al efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional, otro sobre el análisis costo-beneficio correspondiente, expresando que son concordantes con el Acuerdo Nacional e impacta en 2 de sus objetivos sobre Promoción de la competitividad del país y Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

- Tercer Objetivo: Política 18 - Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.
- Cuarto Objetivo: Política 24 - Afirmación de un Estado eficiente y transparente, cuyo compromiso es construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios. En relación a dicho objetivo se ha planteado que el Estado, entre otros:
    a) Incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites, así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población;
    b) Establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal; y
    c) Mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles.

VI. ANÁLISIS TÉCNICO

1. Planteamiento del problema

La contratación pública eficiente y eficaz de bienes, servicios y obras es fundamental para el logro de objetivos y necesidades institucionales, el cumplimiento de la finalidad pública y la prestación de servicios en forma idónea y oportuna para los ciudadanos. Además, es una herramienta que impacta en el desarrollo del país.

En los últimos años, la regulación de la gestión de la contratación pública ha sufrido constantes modificaciones. Los diferentes enfoques con los que se han diseñado e implementado las regulaciones sobre este pilar de la Administración Pública, ha

impactado de manera positiva o negativa en la calidad de uso de los recursos públicos, así como en el desarrollo de la economía.

A pesar de los constantes esfuerzos por perfeccionar nuestro subsistema de compras públicas se han detectado varios problemas que persisten e impiden que se logre un eficiente y eficaz proceso de contratación pública, como los que se detallan a continuación:

a) Bajos niveles de competencia de proveedores en los procedimientos de selección[2]

La competencia de postores es el principio fundamental de los procedimientos de selección. Su promoción implica: a) obtener mejores ofertas en términos de precio, calidad y condiciones, b) obtener mejores productos o servicios al menor costo posible y c) fomentar la transparencia y reducir el riesgo de favoritismos o corrupción en los procesos de contratación.

Conforme a lo expuesto en el proyecto de ley del poder Ejecutivo, el número promedio de postores por procedimiento de selección es muy bajo, precisando que en los procedimientos de adjudicación simplificada y licitación pública desarrollados en el 2022, se presentaron menos de tres postores por procedimiento en comparación a los años 2021 y 2020 que fue mayor a tres y cuatro postores, respectivamente. Respecto de la subasta inversa electrónica y en el concurso público, en el 2022, se presentaron en promedio cuatro postores por procedimiento, mientras que en el 2021 y 2020 se presentaron más de cuatro postores.

Igualmente, se menciona que en el año 2022 de un total de 1´361,001 proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, solo 29,593 llegaron a concretar una transacción efectiva con el Estado, lo que equivale a solo el 2.2% del total de proveedores registrados.

La exigencia de muchos y complejos requisitos; altos costos para participar en el procedimiento de selección; impedimentos irracionales que impiden la participación; lentitud en los pagos; riesgos altos de inversión debido a la presencia de nulidades, resoluciones u otras incidencias respecto al ciclo de vida de la contratación, restringen la participación de proveedores.

[2] Este problema también ha sido identificado y reportado por la Contraloría General de la República. Análisis de la Contratación Pública 2020-2022. Presentación de fecha 23.06.2023.

b) Procedimientos de selección complejos y demoras en la ejecución de los contratos.[3]

De acuerdo a los reportes del Sistema de Inteligencia de Negocios CONOSCE-OSCE, la fase de contratación que mayor tiempo toma a las entidades en su ejecución es la relacionada a las actuaciones preparatorias, lo cual evidencia dificultades para definir los requerimientos.

Esta problemática no solo afecta la elaboración de los requerimientos, sino que impacta en la ejecución del bien, servicio u obra, así como en el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, dando lugar a quiebres no queridos en el desarrollo y ejecución del procedimiento de selección.

Como consecuencia de ello, así como de otras causas, en los últimos años se ha detectado un importante número de obras que se encuentran paralizadas. Así tenemos que, en el marco de la Ley de Contrataciones existen 361 obras paralizadas con avance físico mayor al 40%, que representan S/ 3,808.1 millones de soles en las contrataciones de los tres niveles de gobierno.

Las obras paralizadas con un avance físico mayor al 50% son 518, que representa 1, 621.80 millones de soles a nivel nacional.

Resulta necesaria por tanto, el desarrollo una estrategia previa adecuada y de una eficiente supervisión y seguimiento de los contratos por parte de las entidades contratantes.

c) Precaria gestión de riesgos en la contratación pública

La gestión de riesgos en las contrataciones públicas implica el proceso de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con los procedimientos de selección, anticipando problemas o contingencias que puedan surgir en el ciclo de vida del proceso de contratación. Una gestión de riesgos efectiva contribuye a mejorar la transparencia, eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos públicos.

Existe evidencia de la aplicación de este enfoque únicamente en la ejecución de obras públicas, mas no así en todas las fases del proceso de contratación y menos en todos las modalidades de procedimientos de selección, lo que constituye una brecha que impacta en: a) alto nivel de deficiencias en la elaboración de los términos de referencia,

[3] Este problema también ha sido identificado y reportado por la Contraloría General de la República, denominándolo Debilidades en los procedimientos de selección y deficiencias en la administración de los contratos. Análisis de la Contratación Pública 2020-2022. Presentación de fecha 23.06.2023.

b) deficiencias en el diseño de una estrategia de contratación eficiente; y c) deficiencias en la identificación anticipada de actos de corrupción o que atenten contra la integridad.

d) **Mecanismos insuficientes para fomentar la integridad y transparencia en el proceso de contratación pública**.
Se carece de un enfoque integral del proceso de contratación pública que incluya mecanismos de transparencia, fortalecimiento de los sistemas de control y supervisión, así como mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación pública.

De acuerdo a la información proporcionada por el OSCE, en el año 2019 el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a 1927 proveedores; en el año 2020 a 1502 proveedores y en el año 2021 a 3016 proveedores, lo que marca una clara tendencia al aumento de proveedores sancionados.

e) **Responsables de los procesos de contrataciones públicas desconocen la normativa y dinámica de los procesos de contratación**
Debido a la alta rotación de funcionarios y servidores, se pierde la oportunidad de que se fomente la especialización y una línea de carrera dentro de las entidades contratantes.

Existe una brecha considerable en la especialización permanente. En el 2022 de un total de 15,027 profesionales y técnicos capacitados, 10,001 lo hicieron en el nivel básico, 4585 en el nivel intermedio y solo 441 lo hicieron en el nivel avanzado.

En el año 2023, de un total de 17,358 profesionales y técnicos capacitados, 12,464 lo hicieron en el nivel básico, 4485 en el nivel intermedio y solo 409 en el nivel avanzado.

Esta brecha necesita ser superada, toda vez que, las deficiencias en la especialización de los compradores públicos inciden en la idoneidad en el desarrollo de sus funciones, en la eficiencia con que se ejecute el procedimiento de selección, así como en el seguimiento del cumplimiento de la finalidad pública buscada.

f) **Normas desalentadoras de inversiones con tendencia al castigo**
Normalizar la desconfianza en los funcionarios y servidores públicos involucrados en el proceso de contratación pública se ha convertido en una constante. La incidencia, casi

exclusivamente, en sus responsabilidades y en el endurecimiento de las sanciones por sus actuaciones (muchas veces en mérito a situaciones mediáticas, o situaciones aisladas) ha contribuido en la ralentización y temor en la toma de decisiones.

Esto desalienta la toma de decisiones y retrasa la consecución de los fines públicos para la cual están destinadas las compras públicas.

2. Importancia de la aprobación de una nueva Ley General de Contrataciones Públicas

Una de las principales problemáticas encontradas en la gestión de las contrataciones públicas está relacionada con la disminución de la competencia entre proveedores. Esta problemática ha ido en aumento a lo largo de los últimos años, por lo que es necesario fomentar la participación de más y mejores postores que permitan el cumplimiento del fin público a través de la entrega de los bienes, servicios u obras de calidad y de manera oportuna.

Sobre este particular, se ha podido evidenciar que, en el año 2016, el 7.9 % de los proveedores inscritos en el RNP realizaron transacciones con el Estado. En el año 2017, esta cifra disminuyó a 5.9%, y en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 este porcentaje ha tenido una constante disminución: 4.4 %, 3.1%, 2.7%, 2.2% y 2.2 %, respectivamente.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el registro de proveedores ha ido aumentando a través de los años, no ha sucedido lo mismo con la cantidad de proveedores que, efectivamente, participan en los procedimientos de selección.

Cuadro 1

Número de proveedores con inscripción vigente en el RNP y que adjudicaron procedimientos de selección
Años 2016 -2022

Año	Proveedores vigentes RNP	N° de Proveedores que adjudicaron procesos	% de Transacción con el Estado
2016	319,719.0	25,395.0	7.9%
2017	436,636.0	25,806.0	5.9%
2018	581,381.0	25,320.0	4.4%
2019	798,962.0	24,717.0	3.1%
2020	971,979.0	25,909.0	2.7%
2021	1,153,764.0	25,486.0	2.2%
2022	1,361,001.0	29,593.0	2.2%

Fuente: Estadísticas Generales de Contrataciones públicas. CONOSCE - OSCE

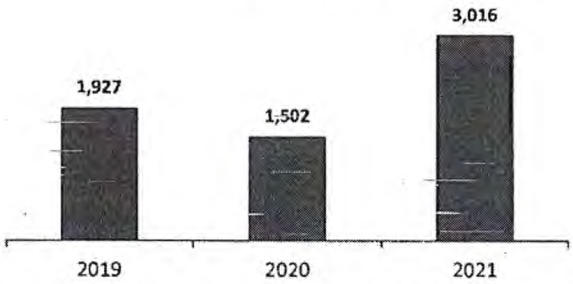
Fuente: Proyecto de Ley 5472-2022-PE

Si bien la disminución constante de proveedores permite generar propuestas para mejorar e incentivar su participación, también es importante analizar esta problemática de manera conjunta con el perfil idóneo que se requiere de los mismos. Así, es importante evaluar cuál ha sido el comportamiento de estos proveedores en estos últimos años.

Según el reporte del OSCE, la cantidad de sanciones a los proveedores determinadas por Tribunal de Contrataciones del Estado ha ido en aumento conforme se advierte en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

Resoluciones con aplicación de sanción emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado Años 2019 - 2021



Fuente: Informe para el estudio de evaluación del impacto de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado
Elaborado por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios OEI - OSCE

Fuente: Proyecto de Ley 5472-2022-PE

En ese sentido, la presente norma busca brindar reglas que permitan contar con más postores, pero que estos postores sean calificados e idóneos para el cumplimiento de los fines de la compra pública.

Otra problemática que afecta la buena gestión, desarrollo y ejecución del proceso de contratación pública es la forma como se desarrollan las diferentes etapas o fases del proceso de contratación, lo que genera retrasos, aprobación de adendas, problemas en la ejecución de los contratos, entre otras consecuencias. Una investigación importante sobre esta situación es la realizada por la Contraloría General de la República respecto a lo sucedido en los años 2018 al 2022.

Así tenemos que en dicho periodo y a través del control simultáneo, de un total de 22,625 situaciones adversas por fases de contratación, 9236 se presentaron en la fase de las actuaciones preparatorias que representa el 40.3% del total; 6248 (27.3%) corresponde a aspectos generales; 5402 (23.6%) a la fase de procedimientos de selección; y, 2039 (8.9%) a la fase de ejecución contractual. Todo ello según se puede apreciar en el cuadro siguiente[4]:

[4] Análisis de la Contratación Pública 2020-2022. Presentación de fecha 23.06.2023.

Cuadro 3

LA CONTRALORÍA

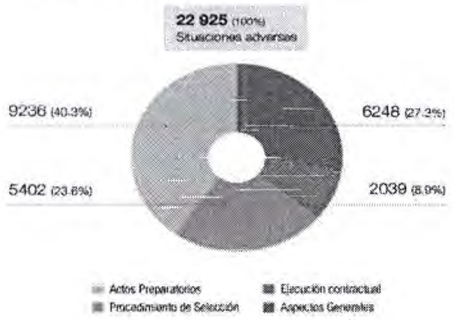
Resultados de los servicios de control simultáneo 2018-2022

SERVICIOS DE CONTROL POR AÑO Y NIVEL DE GOBIERNO

Año / Nivel de Gobierno	Control Concurrente	Orden de Control	Orden de Control de oficio	Total
2018	**41**	**1481**	**835**	**2357**
NACIONAL	9	546	286	841
REGIONAL	4	319	173	496
LOCAL	28	616	376	1020
2019	**908**	**457**	**1492**	**2857**
NACIONAL	306	200	429	935
REGIONAL	149	83	277	509
LOCAL	453	174	786	1413
2020	**2361**	**581**	**2102**	**5044**
NACIONAL	362	139	433	934
REGIONAL	298	124	277	699
LOCAL	1641	318	1.452	3411
2021	**1344**	**133**	**827**	**2304**
NACIONAL	372	59	215	646
REGIONAL	238	31	148	417
LOCAL	734	49	464	1247
2022	**3299**	**474**	**1297**	**5070**
NACIONAL	1989	103	297	1796
REGIONAL	580	65	317	962
LOCAL	1351	276	783	3310
Total	**7953**	**3126**	**6813**	**17892**

El estudio los 1215 servicios de acción simultánea y las 41 series preventivas realizadas durante los años 2018 y 2019

SITUACIONES ADVERSAS POR FASES DE CONTRATACIÓN



FUENTE: Sistema de Control Gubernamental, del 01.01.2018 al 31.12.2022

Resulta preocupante que los principales inconvenientes se presenten en la fase de actuaciones preparatorias a consecuencia de los siguientes eventos:

Cuadro 4

LA CONTRALORÍA

Tipología de observaciones y/o hechos con presunta irregularidad identificados en los servicios de control posterior 2018-2022

FASE DE ACTOS PREPARATORIOS	%
Presuntas irregularidades en la Definición Inicial del Requerimiento	53.8%
Requerimientos de área usuaria incompletos o con deficiencias utilizados para el inicio del Proceso de selección	16.2%
Sobre presuntas irregularidades en la aprobación de las bases iniciales	13.3%
Presuntas irregularidades en la designación y actuación del comité previo a la convocatoria	12.3%
Presuntas irregularidades con la Solicitud de certificación y aprobación de presupuesto	3.5%
Otros (irregularidades en el registro de información en el PAC, irregularidades en aprobación de expediente técnico)	0.9%
Total	100.0%

FASE DE SELECCIÓN	%
Problemática durante el Otorgamiento de Buena Pro y firma de contrato (incumplimiento de requisitos por parte del postor, incumplimiento de especificaciones o parte en la oferta, no presentación de documentación, entre otros)	56.0%
Contratación sin ejecutar proceso de selección (incluye fraccionamiento)	20.8%
Problemática durante la Admisión, Evaluación y Calificación de ofertas (incluye direccionamiento a postores)	17.1%
Problemática durante la Integración de Bases (cambios de características no sustentadas)	1.7%
Presuntas irregularidades durante la absolución de consultas y observaciones	1.3%
Otros (fraccionamiento, contrataciones bajo modalidades distintas a las establecidas en la normativa)	2.2%
Total	100.0%

FUENTE: Sistema de Control Gubernamental del 01.01.2018 al 31.12.2022

Por su parte, en el proyecto de ley del poder Ejecutivo se coincide en la problemática de la fase de los actos preparatorios en los que se hace un contraste entre los actos preparatorios y los procedimientos de selección en el periodo 2019-2022:

Cuadro 5

Duración promedio de Actos preparatorios y de Procedimientos de Selección (CP/LP)
Años 2019 -2022

Objeto de Contratación	Actuaciones Preparatorias (Año 2019)	Procedimiento de Selección (CP/LP)			
		2019	2020	2021	2022
Bienes	67.4	64	56	56	48
Servicios	68	62	58	52	48
Obras	28	63	46	45	43
Consultoría de obras	55.6	77	62	56	48

Nota: Los días de las actuaciones preparatorias son en días calendario y las de procedimiento de selección son en días hábiles.
Fuentes: Medición de la Duración de las Actuaciones Preparatorias Año 2019 - OEI / OSCE
CONOSCE – OSCE. Información al 11 de marzo 2023

Fuente: Proyecto de Ley 5472-2022-PE

Y por su parte, en la fase de ejecución contractual y aspectos generales se advierte las siguientes:

Cuadro 6

LA CONTRALORÍA

Tipología de observaciones y/o hechos con presunta irregularidad identificados en los servicios de control posterior 2018-2022

FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	%
Deficiencias o no correspondencia entre características del bien, servicio u obra con especificaciones, TDR o expediente (contrato) - incluye etapa de recepción	40.8%
Inaplicación de Penalidades por incumplimientos contractuales (demoras en entrega, incumplimiento de especificaciones de ejecución de obra, consultoría de obra, bienes o servicios)	32.0%
Otorgamiento de ampliaciones de plazo, adicionales de obra, adelantos o adendas sin sustento o mal sustentados	7.9%
No entrega de bienes o no ejecución (total o parcial) de la obra o servicio (trabajos no realizados)	7.6%
Deficiencias o presuntas irregularidades durante el Perfeccionamiento del contrato	2.8%
Relacionados con deficiencias en almacenamiento de bienes, servicios, equipos.	2.2%
Otros (No aplicación de carta fianza o garantía, Deficiencias constructivas (obra) respecto de expediente técnico, Ausencia de personal clave en la obra, demoras en el pago a proveedores)	6.7%
Total	100%

OBSERVACIONES IDENTIFICADAS	%
Irregularidades vinculadas a la fase de actos preparatorios, etapa de selección y/o ejecución contractual	73.1%
Modificaciones de especificaciones técnicas sin aprobación de área usuaria, ampliaciones de plazo sin aprobación de titular, inaplicación de penalidades	0.7%
Problemática en otorgamiento de buena pro, emisión de conformidad pese a que no se cumplió con plazos, inaplicación de penalidades	0.5%
Ausencia de equipamiento y mecanismos de seguridad, salud, accidentes y otros	0.4%
Documentación falsa en varias etapas del proceso	0.2%
Otros (Problemática en otorgamiento de buena pro, emisión de conformidad pese a que no se cumplió con plazos, inaplicación de penalidades; Deficiencias constructivas (obra) respecto de expediente técnico; documentación falsa en ambas etapas del proceso; Problemática durante la Evaluación y Calificación de ofertas (incluye direccionamiento a postores; ausencia de equipamiento y mecanismos de seguridad, salud, accidentes y otros)	25.1%
Total	100.0%

FUENTE: Sistema de Control Gubernamental, del 01.01.2018 al 31.12.2022

21

Respecto a los deficientes niveles de ejecución y/o paralización de obras el Proyecto de ley del poder Ejecutivo revela las siguientes cifras:

Cuadro 7

Obras paralizadas con avance físico ≥ 40% en el marco de la Ley de Contrataciones

NIVEL DE GOBIERNO	N° de Obras	Monto en Millones
GOBIERNO LOCAL	211	S/ 1,570.90
GOBIERNO NACIONAL	85	S/ 1,012.20
GOBIERNO REGIONAL	65	S/ 1,225.00
TOTAL	**361**	**S/ 3,808.1**

Fuente: Cruce de información entre INFOBRAS - CGR y Data DGPMI. Fecha de corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección de Adquisiciones – DGA.

Obras paralizadas con avance físico ≥ 50% mediante Administración Directa

NIVEL DE GOBIERNO	N° de Obras	Monto en Millones
GOBIERNO LOCAL	457	S/ 1,057.60
GOBIERNO NACIONAL	21	S/ 125.90
GOBIERNO REGIONAL	40	S/ 438.30
TOTAL	**518**	**S/ 1,621.8**

Fuente: Cruce de información entre INFOBRAS - CGR y Data DGPMI. Fecha de corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección de Adquisiciones – DGA.

Finalmente, una preocupación adicional sobre la cual se ha podido recabar la siguiente evidencia por parte de la Contraloría General de la República, es la cantidad de contrataciones de menor cuantía que se han realizado en los 3 niveles de gobierno:

Cuadro 8

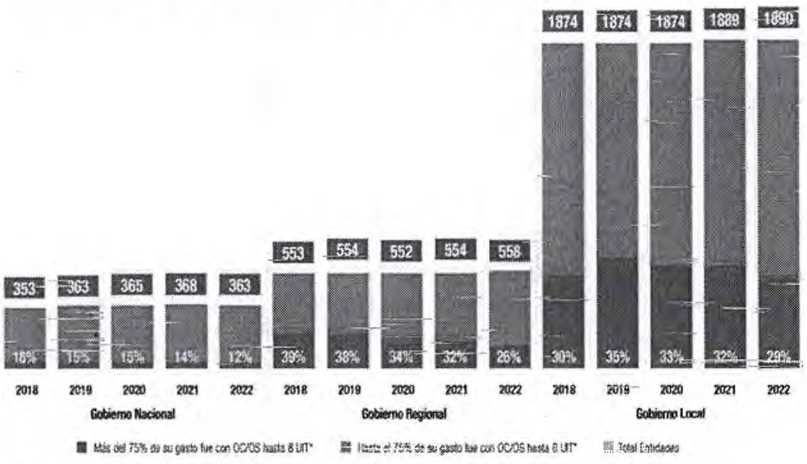
LA CONTRALORÍA

Entidades que contratan sin proceso 2018-2022

ENTIDADES CUYO 75% DEL GASTO EN CONTRATACIONES SE EFECTÚO SIN PROCESO

Nivel de Gobierno	Nivel de Gobierno	Más del 75% con	Nivel de Gobierno
Nacional	363	53	15%
Regional	554	187	34%
Local	1880	594	32%

NOTA: Fueron 506 entidades (23 del Gobierno Nacional, 44 del Gobierno Regional y 441 del Gobierno Local) que el 100% de su gasto en algún año dentro del periodo 2018 a 2022, fue solo mediante contrataciones sin proceso. El monto de estas entidades ascendió a S/ 1076 millones.



* El tope para contratar sin proceso se amplio a 8 UIT, para órdenes que se emitan desde el 19/07/2022 al 31/12/2022

FUENTE: SIAF gasto periodo 2018 a 2021 al 16 de noviembre de 2022, SIAF gasto 2022 al 16 de enero de 2023. / ELABORADO: Subgerencia del Observatorio Anticorrupción - CGR.

En atención a la problemática planteada líneas arriba y a la evidencia analizada, se han propuesto determinadas propuestas normativas con la finalidad de brindar una solución en lo que a alternativas regulatorias se refiere. Estas serán analizadas y detalladas en los siguientes apartados.

3. Fundamentación técnica de la propuesta normativa

3.1 Disposiciones Generales

Contenidas en el título I, las disposiciones generales se enmarcan en la denominación de "Ley de Contrataciones Públicas" que acoge la propuesta del Proyecto de Ley 5362/2022-CR, que busca proporcionar un marco amplio para regular, de manera general, todas las

fases del proceso de contratación, cuya aplicación corresponde a los tres niveles de gobierno y, además, que sirva de guía para el desarrollo reglamentario que requiere para su entrada en vigencia.

La finalidad de la propuesta busca maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que el Estado cumpla de forma oportuna con los fines públicos y tengan repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

El objeto que persigue la propuesta es establecer un marco normativo claro y simple para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Con dicho objetivo se ha incorporado también un apartado de definiciones sobre los actores, el proceso de contratación y terminología técnica o especializada en que se fundamentan las disposiciones sobre contrataciones públicas que, adicionalmente, faciliten la comprensión de los enfoques que sustentan el articulado y su acceso a la ciudadanía en general.

3.1.1 Principios que rigen las contrataciones públicas

Uno de los pilares básicos sobre los cuales se asienta la contratación pública son los principios que fundamentan e informan las normas y actuaciones que se desarrollan dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Sobre el particular, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2022-PE se precisa que "los principios generales de la contratación pública se encuentran enunciados en los textos normativos de diversos países, comunidades de países e incluso de organizaciones internacionales, como piezas clave de buen gobierno y como objetivo de la legislación. En ese sentido, son la base de toda regulación, garantía del debido procedimiento y la buena administración, permiten el control de la discrecionalidad administrativa y facilitan un ambiente de seguridad y certeza jurídica en materia de aplicación e interpretación que ayuda a que los recursos que se destinan a la contratación de bienes, servicios y obras cumplan la finalidad que tiene asignada".

Es importante destacar que la mayor parte de los principios que se proponen en los proyectos de ley 5472/2022-PE y 5362/2022-CR, se encuentran vigentes actualmente en

la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, como son los principios de competencia, eficacia y eficiencia, equidad y colaboración, igualdad de trato, integridad, libertad de concurrencia, publicidad, transparencia y vigencia tecnológica, los cuales se mantienen en el texto sustitutorio.

Resulta trascendental destacar que en el texto sustitutorio, se han incorporado varios principios que tienen como finalidad orientar las actuaciones de todos los actores del proceso de contratación pública en torno a la consecución del fin público, promoviendo un cambio de paradigmas y modos de afrontar los avances y retos que se presentan cada vez de manera más rápida, así tenemos:

a) **Principio de eficacia y eficiencia,** se ha precisado que este principio también implica garantizar la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como la ejecución contractual, aspectos que se han tornado en situaciones problemáticas en la consecución de un óptimo proceso de contratación y su ejecución, conforme a la evidencia esbozada en los numerales 1 y 2 del apartado: Planteamiento del Problema .

   Asimismo, se ha precisado que los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales, optimizando de forma permanente el proceso de contratación pública, conforme a la propuesta contenida en el proyecto de ley 6475/2023-CR, Ley que incorpora los principios de facilidad de uso y mejora continua en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que buscan garantizar el fomento de la simplificación y la mejora continua[5] dentro del proceso de contrataciones. [6]

b) **Principio de valor por dinero**, se ha incorporado en consideración a que ha sido propuesto en los proyectos de ley 5472/2022-PE y 5362/2022-C; principio que implica que se debe garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, considerando para ello la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre

[5] OCDE (2015). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública (VII recomendación): los países adherentes deben desarrollar procedimientos que, satisfaciendo las necesidades de la administración pública y de los ciudadanos, impulsen la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública. Consultado en https://web-archive.oecd.org/2019-11-14/401029-OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf Pag. 10

[6] Como fundamento de la justificación del principio de mejora continua, se señala que esta se basa en la idea que los procesos deben ser evaluados y ajustados de manera constante para alcanzar niveles óptimos de eficiencia. Aplicar este principio, continúa, implica un proceso permanente con la revisión y la adaptación de los procedimientos existentes, permitiendo identificar áreas de oportunidad, eliminar redundancias y mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos.

otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y no únicamente el menor precio.

La OCDE en el estudio sobre las Contrataciones del Perú, acota que las entidades públicas en el Perú tienden a basar su adjudicación en el precio más bajo y no en la oferta más ventajosa económicamente, que puede incluir costo del ciclo de vida, calidad, desempeño ambiental y más. El enfoque del precio más bajo puede facilitar el proceso de evaluación y selección, garantizándose los requisitos mínimos. Sin embargo, la adjudicación de una oferta basada únicamente en el precio puede resultar en diversos impactos negativos para la entidad, como calidad menor, suministro inseguro y desempeño insatisfactorio del proveedor.[7]

En coherencia con ello, la OCDE recomienda que Perú debe ampliar los criterios de adjudicación y adoptar la oferta más económica que refleje proporcionalmente el mejor precio y calidad (la mejor relación calidad/precio).

El principio de valor por dinero persigue la maximización del valor que se obtiene de cada contratación, a través del uso efectivo, eficiente y económico de los recursos, así como de la evaluación de los riesgos dentro del ciclo del proceso de contratación, asegurando, entre otros aspectos, que[8]:

- La transparencia y la integridad se logren a lo largo del ciclo del proceso de contratación.
- Las necesidades de los usuarios finales y otras partes interesadas se identifiquen adecuadamente y se tengan en cuenta en el proceso de contratación.
- Se desarrollen claramente las necesidades y objetivos de la contratación, incluidos los requisitos socioeconómicos o ambientales permitidos, si los hubiere.
- Se elija una modalidad de contratación proporcional al riesgo, valor, contexto e importancia estratégica de la contratación (es decir, hacer que el proceso se ajuste al propósito).
- Los requisitos técnicos se especifiquen adecuadamente.
- Se seleccione una forma contractual adecuada a los objetivos.
- Se establezcan criterios de evaluación claros y alineados con las necesidades y objetivos desarrollados.

[7] OCDE (2017) La Contratación Pública en el Perú. Consultado en https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-contratacion-publica-en-el-peru_9789264281356-es#page136 Pag. 136

[8] Exposición de Motivos del Proyecto de ley 5472/2022-PE, Pág. 11

- Se seleccione al postor cuya oferta satisfaga mejor las necesidades y objetivos.
- Se desarrolle un plan eficaz de gestión del contrato para garantizar que el contrato se implemente con éxito y que los entregables se cumplan según lo acordado en el contrato.

Se propone con este principio, apostar por la sostenibilidad futura, desempeño y calidad de los bienes, servicios y obras, en lugar de únicamente comprar siempre lo más barato. Es importante que este nuevo enfoque lo asuman todos los actores del proceso de contratación, pero primordialmente la Contraloría General de la República al momento de ejercer su rol de control gubernamental.

c) **Principio de legalidad**, a propuesta del Proyecto de Ley 5362/2022-CR se evidencia que resulta importante la incorporación del principio de legalidad, como principio básico de la actuación de la administración pública, con la finalidad de enfatizar el deber de las partes involucradas en el proceso de contratación de actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas.

Esta rigurosidad en la exigencia de lo expresamente establecido, es lo que debe informar el cumplimiento de funciones de los actores en el proceso de contratación, de los actores encargados del acompañamiento y supervisión, así como de las autoridades de control gubernamental en la determinación de inconductas funcionales.

d) **Principio de presunción de veracidad**, si bien está previsto como principio del procedimiento administrativo en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 24777, Ley del Procedimiento Administrativo General, se ha considerado pertinente incorporarlo para enfatizar el cumplimiento del principio de la buena fe o de confianza respecto de los administrados que se relacionan con la administración pública[9]. La aplicación de este principio en la contratación pública

[9] El Tribunal de Contrataciones del Estado, sustenta la aplicación de este principio en el Fundamento 25 de la Resolución N° 1025-2018-TCE-S4: *"En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todas los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario en tanto el citado principio implica la fijación del deber del administrado de comprobar la autenticidad de la documentación e información que declare ante la Entidad [...] de lo cual se desprende que por el hecho de presentar al procedimiento un determinado documento, se presumirá que, su veracidad ha sido comprobado por quien lo emplea en el procedimiento [...]*

debe regularse en el reglamento acorde con los fines buscados en los procedimientos de selección.

Al respecto, debe dejarse claramente establecido que esta presunción admite prueba en contrario. Así Santy, concluye: *"La presunción de veracidad puede desvirtuarse si existe prueba de que lo afirmado en documentos y declaraciones juradas no corresponde a la verdad de los hechos. Al respecto, la prueba que permita verificar la transgresión al principio de presunción de veracidad corresponderá a la naturaleza del documento o declaración jurada objeto de fiscalización, dicha prueba deberá generar convicción sobre la falta de veracidad o inexactitud en el titular de la Entidad."*[10]

e) **Principio de causalidad,** si bien este principio se encuentra previsto en el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General como principio de la potestad sancionadora, resulta importante que se precise a fin de informar de manera clara que la asunción de responsabilidad es de quien realmente ha omitido o realizado la conducta constitutiva de infracción.[11]

f) **Principio de transparencia**, se ha incorporado como correlato al principio **de Facilidad de Uso**, de acuerdo a lo propuesto en el citado proyecto de Ley 6475/2023-CR, con el objetivo de que toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites deben permitir un acceso público sencillo y oportuno, garantizando la seguridad y brindando información confiable, oficial y útil. Uno de los obstáculos que se arguye para el incumplimiento de las disposiciones normativas es la complejidad de las mismas o de los procesos[12] o procedimientos para su cumplimiento, por ello, cuyo contenido busca simplificar los procesos y hacerlos más asequibles para los usuarios. Este principio también implica que el diseño de las regulaciones debe hacerse de manera clara y concisa, evitando tecnicismos legales complicados que puedan dificultar la interpretación y cumplimiento de la normativa por parte de los usuarios y la supervisión de por parte de los órganos de control.

---

[10] Santy Cabrera, Luiggi. El principio de presunción de veracidad en el ámbito de las contrataciones. Publicado en https://works.bepress.com/luiggiv-santycabrera/168/

[11] León Pacheco, citando a Palma del Teso, A. señala: Este principio es denominado por autores extranjeros como "*Principio de Personalidad de las Sanciones*", y su aplicación conlleva la individualización de la sanción e impide hacer responsable a una persona de un hecho ajeno. De este modo, la potestad sancionadora sólo podrá ejercitarse frente a los sujetos que han realizado una acción u omisión sancionable, sin que pueda disociarse autoría y responsabilidad. Consultado en https://prometheo.pe/la-determinacion-de-responsabilidad-en-materia-de-contratacion-estatal-se-encuentra-alineada-al-principio-de-causalidad/

[12] El proyecto de ley 6475/2023-CR precisa que al hacer los procesos más accesibles, se reduce la carga administrativa tanto para los funcionarios públicos como para los proveedores y ciudadanos, promoviendo así una participación más amplia, transparente y democrática en los procesos de contrataciones y compras del Estado.

g) **Principio de sostenibilidad económica, ambiental y social**, otro aspecto sustancial que se ha incorporado en este principio, que guarda coherencia con el principio de valor por dinero, es precisar el carácter económico de la sostenibilidad de las contrataciones públicas.

En ese sentido, las compras públicas sostenibles son aquellas contrataciones públicas que consideran los impactos ambientales, sociales y económicos de las adquisiciones[13]. Las compras públicas sostenibles generan beneficios que, por lo regular, corresponden a la creación de una demanda de bienes y servicios sostenibles, un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, la mejora de la calidad de los bienes y servicios contratados, la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción de la inversión y de la competitividad.[14]

h) **Principio de innovación,** el Proyecto de Ley 5472/2022-PE propone incorporar a este principio, el cual cobra relevancia ante los constantes cambios y retos que trae consigo la implementación de políticas públicas que fomentan la ciencia, tecnología e innovación, por lo que resulta crucial su incorporación. Este principio busca, como se señala en el citado proyecto, optimizar el uso de los recursos públicos, apalancar sectores, promover la competitividad y mejorar la prestación de servicios públicos en las citadas materias, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.[15]

En la misma línea, se enfatiza en el citado proyecto de ley, que la inclusión de este principio es fundamental en la medida que habilita a las entidades contratantes a aplicar la innovación para impulsar la generación de soluciones y crear o desarrollar bienes, servicios u obras o adquirir los resultados innovadores que no existen en el mercado a fin de satisfacer las necesidades que surjan en el marco del cumplimiento de las funciones de la entidad contratante, así como para el cumplimiento de los

---

[13] Las compras públicas son una herramienta crucial y pueden ser un catalizador para la implementación y alicación de políticas y prácticas sostenibles que influencien y promuevan que los productores, consumidores, proveedores y la sociedad civil incorporen los más altos estándares ambientales, sociales y económicos en sus procesos de producción y consumo, generando beneficios a la socidad, a la economía y al medio ambiente. Consultado en https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2022/09/informe-compras-publicas-sostenibles-ap.pdf Pag. 7

[14] APEC. Informe sobre compras públicas sostenibles en la Alianza del Pacífico. Pag. 6. Consultado en https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2022/09/informe-compras-publicas-sostenibles-ap.pdf

[15] La OCDE (2017) en La Contratación Pública en el Perú, recomienda al Perú considerar la posibilidad de desarrollar una política de contratación en materia de innovación, identificando varias categorías que permitan la compra preferencial de productos de nueva tecnología e introduzca más flexibilidad en el proceso de licitación, para fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras. Consultado en https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-contratacion-publica-en-el-peru_9789264281356-es#page136 Pag. 137

fines públicos que permitan el desarrollo integral de la comunidad, siempre que cumplan los requisitos de rendimiento y costos máximos acordados por las partes.

Este catálogo de principios, conforme se indica en el texto sustitutorio, sirve de criterio de interpretación para la aplicación de la ley y la del reglamento, de integración ante sus vacíos y como parámetro de actuación de todos aquellos involucrados en el proceso de contratación. Es importante destacar, además, que el texto sustitutorio establece que este catálogo de principios de las contrataciones del Estado, se aplica sin perjuicio de los otros principios generales del derecho que resulten aplicables.

3.1.2. Enfoques de la ley

A diferencia de la vigente ley, se han incorporado varios enfoques que buscan focalizar, informar u orientar la actuación de los actores participantes en el proceso de contratación pública. Así tenemos, el enfoque de integridad, de gestión por resultados, gestión de riesgos, gobernanza, territorial y finalmente, el enfoque orientado a la profesionalización de la contratación pública.

a) **Enfoque de Integridad,** conforme se señala en el pProyecto de Ley 5472/2022-PE, se busca promover la integridad en las compras públicas, pues la presencia de la corrupción en las contrataciones públicas genera una serie de consecuencias nocivas importantes como: i) pérdidas económicas, como resultado de la apropiación indebida de fondos públicos; ii) desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, así como en los funcionarios o servidores encargados de administrar el dinero de los contribuyentes en aras del interés público, entre otros; iii) menos competencia; y, iv) pérdida para el Estado en la medida que no obtiene bienes, servicios u obras de buena calidad y precio.

b) **Enfoque de gestión por resultados**, si bien es un enfoque que orienta la administración pública en general, es importante visibilizar la adecuada toma de decisiones en la gestión de los recursos públicos, cuyos resultados deben impactar en beneficio de la ciudadanía y contribuir a mejorar la calidad del gasto público.

c) **Enfoque de gestión de riesgos**, el cual es un proceso dinámico y debe ser implementado en todas las fases de todas las modalidades de procesos de contratación, se pretende contar con un mapeo proactivo, preventivo y transversal de acciones y actividades que contribuyan a manejar de manera sistémica y óptima los riesgos positivos y disminuir la posibilidad de impacto de los riesgos negativos que puedan

afectar el cumplimiento de la finalidad pública que se busca en la contratación de bienes, servicios y obras.

Actualmente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE viene desarrollando una estrategia de gestión de riesgos en la ejecución de obras públicas, sin embargo, resulta necesario que este enfoque se realice también a lo largo de todas las etapas del proceso de contratación y en todas las modalidades de procedimientos de selección de acuerdo a la planificación y estrategias de implementación del organismo especializado.

La Contraloría General de la República, haciendo referencia a este aspecto, señala: "(...) En ese sentido, en las últimas versiones de la Ley de Contrataciones del Estado; y, sólo para el caso de la ejecución de las obras, se considera la obligación de incluir como uno de los documentos del expediente técnico la matriz de riesgos y la asignación de estos a las partes que firman el contrato. A su vez, el OSCE ha generado directivas y documentos complementarios para la aplicación de las herramientas de gestión de riesgos. Sin embargo, aún no ha logrado que en la práctica se haga un uso adecuado de estos instrumentos de gestión, en la medida que está concebido que los riesgos son estáticos, es decir, no cambian en la medida que se desarrolla la ejecución de la obra, además, no se le da la importancia de su seguimiento y monitoreo de los riesgos. En este contexto la gestión de riesgos no está generando los beneficios esperados." [16]

La OCDE recomienda a los países adherentes a este organismo mutilateral, integren las estrategias de gestión de riesgos para la definición, detección y atenuación de éstos a lo largo del ciclo de la contratación pública.[17]

Con este enfoque se busca brindar un marco general que impacte y contribuya a superar la precaria gestión de riesgos en la contratación pública que se reseña en el apartado VI sobre el planteamiento de la problemática.

d) **Enfoque de gobernanza en la contratación pública,** implica la gestión efectiva, eficaz, ordenada y transparente del proceso de contratación pública. Este proceso debe venir acompañado de la participación de todos los actores; en este sentido, la OCDE[18]

[16] Oficio N° 003398-2023-CG/DC del 19.10.2023.

[17] OCDE (2015). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. Este proceso implica: a) Elaborar herramientas de evaluación de riesgos que permitan identificar y abordar amenazas al óptimo funcionamiento del sistema de contratación pública; y b) Dar a conocer las estrategias de gestión de riesgos. Consultado en: https://web-archive.oecd.org/2019-11-14/401029-OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf Pag. 12

[18] OCDE (2017) La contratación pública en el Perú. Consultado en https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-contratacion-publica-en-el-peru_9789264281356-es#page73 Pag. 73

precisa que el Perú podría considerar un proceso estándar al formular cambios en el sistema de contratación pública. Tal proceso debe promover las consultas públicas, solicitar comentarios del sector privado y de la sociedad civil y, garantizar la publicación de los resultados[19].

e) **Enfoque de profesionalización de la contratación pública**, se incorpora como un enfoque indispensable que permita contar con profesionales especializados en contrataciones que puedan desarrollarse dentro de la entidad, contribuyendo a la predictibilidad de las actuaciones en la compra pública y a la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos[20]. Esto guarda consistencia con el objetivo buscado por el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es profesionalizar no sólo a aquellos que tienen a cargo de los procesos de contratación, sino a todos los que participan en la cadena de abastecimiento público (por ejemplo, aquellos encargados de la programación, almacén, etc.)

   Sobre este aspecto, la OCDE[21] en el año 2017 (sin embargo, válido también para estos efectos) a propósito de la aplicación de la Ley 30225 recomendó al Perú: fortalecer las capacidades de contratación, precisando que la puesta en práctica eficaz requiere una fuerza laboral de contratación pública debidamente capacitada. Ello, a su vez, requiere planificación estratégica de la fuerza laboral. La identificación de brechas en capacidades y conocimiento ayudará a determinar la mejor manera de perfeccionar las capacidades de adquisición. Los pasos a seguir incluyen: reconocer el carácter único y la especificidad de la función de contratación, definir los perfiles de los puestos de contratación, introducir un sistema de certificación y gestión del desempeño, desarrollar un plan de capacitación específico y detallado para la contratación pública, así como evaluar cursos y capacitadores de forma más sistemática, incluyendo contar con la participación del sector privado.

---

[19] Si bien, actualmente, es obligatoria la elaboración de un Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante respecto de las normas que generan costos de cumplimiento, no solo la reglamentación de la ley debe incorporar procesos de consulta pública con la participación de los actores del sector público, sector privado y sociedad civil, sino también las directivas e instrumentos de desarrollo de la ley general.

[20] OCDE (2015). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. En las que se precisa que los adherentes dispongan de un personal dedicado a la contratación pública con capacidad de aportar en todo momento, de manera eficaz y eficiente, la debida rentabilidad en este ámbito. Esto implica: a) Asegurarse de que los profesionales de la contratación pública tienen un alto nivel de integridad, capacitación teórica y aptitud para la puesta en práctica, para lo que les proporcionan herramientas específicas y periódicamente actualizadas; b) Ofrecer a los profesionales de la contratación pública un sistema de carrera atractivo, competitivo y basado en el mérito; y c) Fomentar la adopción de enfoques colaborativos con entidades como universidades, think tanks o centros políticos a fin de mejorar las capacidades y competencia del personal de contratación pública. Consultado en https://web-archive.oecd.org/2019-11-14/401029-OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf Pag.11

[21] OCDE (2017) La contratación pública en el Perú. Consultado en https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-contratacion-publica-en-el-peru_9789264281356-es#page24

El desarrollo e implementación de este enfoque permitirá incidir y superar la situación problemática relacionada con el desconocimiento de la normativa y dinámica de los procesos de contratación por parte de los responsables a cargo de estos procesos.

3.2 Supuestos excluidos del ámbito de contrataciones del Estado

El Proyecto de Ley 5472/2022-PE señala que el ámbito de aplicación de la ley se delimita, teniendo en consideración tres criterios: uno subjetivo, referido a los sujetos que deben adecuar sus actuaciones a las disposiciones de dicha normativa; otro objetivo, que involucra aquello que contrata el Estado (bienes, servicios y obras); y, finalmente, aquel referido al uso de fondos públicos para realizar dicha contratación.

En dicho sentido, el ámbito de aplicación de la ley abarca a todas las entidades u organismos que contratan bienes, servicios y obras con fondos públicos.

Como bien se precisa en el citado proyecto de ley, existen supuestos de contrataciones que, a pesar de cumplir con los tres criterios antes señalados, se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la ley, ya sea por razones de especialidad, de mercado o porque la aplicación de la ley afectaría la adecuada gestión de la contratación por parte de las entidades contratantes.

Dentro de los supuestos de excepción se encuentran los que la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece actualmente. Se ha excluido de dicho listado a la Junta de Participación Social debido a que el Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, determina que éstas no se constituyen como entidades públicas y la contratación de sus bienes, servicios y obras se rige por lo establecido en el Código Civil.

Asimismo, se coincide con los criterios precisados en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2022-PE que sustentan la incorporación, en este listado de la propuesta normativa, de los siguientes supuestos de exclusión:

a) "Las contrataciones internacionales que realice el Estado peruano conjuntamente con otros Estados en el marco de lo establecido por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de Salud u otros acuerdos supranacionales para el acceso equitativo a tecnologías sanitarias", en la medida que la contratación internacional con otros países bajo acuerdos supranacionales, como aquellos realizados por la Organización

Panamericana de Salud (OPS), aumenta el poder de negociación del grupo de países que demandan cierta tecnología y genera economías de escala, lo cual permite adquirir la misma tecnología a precios más accesibles o con acuerdos más favorables.

Como se señala en el proyecto de ley del poder Ejecutivo, este supuesto, ha sido materia de ejecución en nuestro país, a través de experiencias exitosas de la adquisición de vacunas por medio del Fondo Rotatorio de la OPS, por el cual se ha logrado que los Estados miembros del mismo mantengan una cobertura de vacunación superior al 80% y cubran más del 95% de los costos de vacunación con recursos propios de sus presupuestos nacionales.

b) "Las contrataciones de bienes, servicios, servicios de consultoría de obras y obras necesarias para los procesos de adquisición de predios y liberación de interferencias en los proyectos que se requieran en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública de los que el Perú es parte", ello en razón de la especialidad y complejidad de las gestiones administrativas que irrogan dichas contrataciones siendo necesario ejecutarlas de manera célere. Se busca viabilizar la adquisición y liberación de interferencias, y a su vez, dinamizar la ejecución de inversiones públicas y público privadas, lo cual va a generar un impacto positivo en el cumplimiento de obligaciones contractuales del Estado como es la entrega del área para la ejecución del proyecto de inversión.

Respecto a "La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor", se precisa que si por el contrario, existe más de un proveedor en virtud de la regulación específica del servicio a contratar, se deberá realizar el proceso de contratación bajo el ámbito de aplicación de la ley. El servicio público está definido como aquel que satisface una necesidad acolectiva por medio de una organización administrativa y regida por la administración pública, así tenemos por ejemplo los servicios de agua, energía eléctrica, gas, alcantarrillado, gas natural y otros servicios básicos.

Cabe anotar que, si bien existen supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley, algunos de estos por sus especiales características (los referidos en los literales f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) y q) del numeral 7.1 del artículo 7 serán objeto de supervisión por parte del OECE, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la ley.

En aplicación del principio de transparencia y con la finalidad de proponer un mayor acceso a la información correspondiente se ha previsto que todos los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones públicas, publiquen información sobre sus procesos en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Pladicop). El reglamento establece las condiciones y oportunidad de dicha publicación.

Como bien se señala en la exposición de motivos del proyecto de ley del poder Ejecutivo, a diferencia de la Ley 30225, el listado de supuestos excluidos de aplicación de la ley no incluye aquellos supuestos que por su naturaleza y características forman parte de otros sistemas funcionales del Estado con rectoría del MEF, como las Asocisciones Público Privadas y Proyectos en Activos, que corresponden al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada regulado por el Decreto Legislativo 1362, o aquellos que corresponden a los procedimientos qu eno cumplen las condiciones del ámbito de aplicación de la ley como el remate o subasta pública regulados en la Ley 27728, Ley del Martillero Público, a los cuales se les aplica su propia regulación. Se precisa también que ello de ninguna manera implica que la norma plantee extender su aplicación a dichos supuestos; por el contrario, al retirar su mención expresa de la Ley significa reconocer su independencia.

3.3. Actores involucrados en el proceso de contratación

A lo largo de los últimos años se han realizado diferentes esfuerzos y se han emitido diferentes normativas con la finalidad de regular la estructura de los organismos encargados de las contrataciones públicas en el Perú.

En dicho contexto, se han emitido la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que creó el Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE. Entidad que posteriormente, fue reemplazada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado -OSCE a través del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, en el año 2008 con el Decreto Legislativo 1018 se creó la Central de Compras Públicas – Perú Compras, como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, la cual entró en funcionamiento recién en el 2015.

Si bien con el Decreto Ley 22056 se instituyó el Sistema de Abastecimiento, es a través del Decreto Legislativo 1439 que se desarrolla el contenido el Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), sistema integrado por la Dirección General de Abastecimiento del

Ministerio de Economía y Finanzas, el cual ejerce la rectoría; el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado; la Central de Compras Públicas y las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público.

Resulta oportuno en este apartado, coincidir con lo que precisa la OCDE[22], según la cual, el diseño organizacional general y la gobernanza de toda función de contratación juega un papel enorme en determinar si el marco de la adquisición es, o no, eficaz y responsable. Las estructuras y sistemas de gobenanza débiles obstaculizan la eficiencia y afectan directamente los gastos públicos y los recursos de los contribuyentes. Para optmizar el valor público a lo largo del ciclo de adquisiciones, es esencial garantizar la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas a través de la estructura y gobernanza de la función de contratación. En numerosos países, el desafío clave para la reforma del proceso, junto con la reforma del marco jurídico, es el problema de cómo diseñar mejor la estructura organizativa central para la coordinación, la aplicación y el seguimiento.

En coherencia con lo expuesto, es necesario destacar que uno de los aspectos innovadores de la propuesta normativa lo constituye, en el marco de la gobernanza de las contrataciones públicas, la incorporación de un título que identifica de manera clara a los actores que participan en el proceso de contratación pública y define los roles y funciones que cumple cada uno de ellos.

Así tenemos, que dentro del proceso de contratación participan los siguientes actores: a) La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), b) El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), c) La Central de Compras Públicas (Perú Compras), d) Las entidades contratantes y e) Los proveedores.

Resulta fundamental que el desempeño y esfuerzo de estos actores se realice de manera cercana y coordinada, con miras a lograr que se satisfaga la finalidad de las contrataciones públicas. La DGA, como ente rector, la OECE como organismo técnico especializado y Perú Compras como órgano público ejecutor deben actuar de manera articulada, proactiva y sistémica con miras a que se cuente con procesos de contrataciones eficientes, transparentes y que cumplan con la finalidad pública de las contrataciones.

[22] OCDE (2017) La contratación pública en el Perú. Consultado en https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-contratacion-publica-en-el-peru_9789264281356-es#page28

3.3.1 Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas

La Dirección General de Abastecimiento es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y por ende, ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que se concreta a través de la Cadena de Abastecimiento Público que, a su vez, es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del sector público.

En línea con ello, el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece las funciones de la Dirección General, encontrándose entre estas, la de dictar normas relacionadas al ámbito de su competencia que es el Sistema Nacional de Abastecimiento; así como emitir normas y directivas complementarias referidas a la estandarización e integración en la prestación de servicios de mantenimiento, alquiler de locales, seguro, seguridad, distribución, almacenamiento y otras actividades relacionadas al sistema.

Igualmente, es el órgano encargado de conducir y promover la operatividad, articulación e integración del SNA con las entidades del sector público, pero también de programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que componen el SNA, por lo que tiene atribuida una gran responsabilidad en el establecimiento de metas e indicadores de desempeño para el cumplimento cabal, en el caso específico de las contrataciones públicas, de las funciones, actividades y estrategias que ejecuten tanto OECE como Perú Compras.

3.3.2.Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE

Tradicionalmente, tanto al OSCE como a su antecesor CONSUCODE se le ha definido como un órgano preponderantemente supervisor de las contrataciones. Sin embargo, a pesar de la precisión de las funciones de OSCE (gestión y supervisión) y de la Contraloría General de la República (control gubernamental), se ha llegado a afirmar la existencia de dos instituciones encargadas de la supervisión de las mismas actividades del proceso de contratación (y en muchas ocasiones, coincidiendo en el mismo tiempo de desarrollo de las mismas actividades), lo que no se condice con las reales funciones que realiza cada una de estas entidades.

Bajo este esquema, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2022-PE del Poder Ejecutivo afirma que dicha propuesta normativa busca fortalecer al OSCE a través de una supervisión que tiene como componente el acompañamiento a través de la asistencia técnica para el logro de resultados, participando con la entidad contratante en la mejora de sus procesos de gestión, suponiendo en algunos casos, la aplicación de medidas o disposiciones que las ayuden a corregir o validar los procesos en curso o, en otros casos, la suspensión de los procedimientos de selección.

En coherencia con dicho cometido, se ha considerado oportuno cambiar el nombre de Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) a Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), precisando en primer lugar, que su rol fundamental debe estar focalizado en las contrataciones a través del acompañamiento con asistencia técnica y orientación a las entidades contratantes para lograr una gestión de compras públicas eficientes que impacten en el bienestar común. En segundo lugar, precisando como función primigenia brindar asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación, que se traduce en el acompañamiento a las entidades contratantes en la gestión de los procesos de contratación con el objetivo de coadyuvar a que las entidades realicen contrataciones eficientes, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley, su reglamento y normativa complementaria.

Con la finalidad de materializar dicha disposición, se ha considerado pertinente, que el OECE acompañe obligatoriamente las contrataciones públicas, para lo cual, en consistencia con la Programación Multianual de bienes, servicios y contrataciones, el OECE, anualmente, determina la priorización de las contrataciones públicas en el Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica. Los criterios de clasificación de las contrataciones públicas en cuanto a tipo y cuantía serán determinados vía reglamento. El acompañamiento del OECE para otros procesos de contratación es solicitado por las entidades contratantes, conforme lo establezca el reglamento.

Esta función implica un mecanismo de acción directa, en la que el OECE se involucre con los procesos de contratación de las entidades. Así, el OECE debe establecer lineamientos o pautas para contribuir a la eficiencia en la contratación pública, brindando criterios de aplicación oportunos en el ámbito operativo, acorde a las necesidades de las instituciones de forma particular y no sólo de manera general.

Este acompañamiento a través de la asistencia técnica y orientación en modo alguno implica la asunción de responsabilidad por parte de OECE, ni sustituir el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la entidad contratante.

Es importante también señalar que la priorización que se realiza para el cumplimiento de la función de asistencia técnica y orientación, debe ir fortaleciéndose de manera gradual hacia el establecimiento de criterios e indicadores (por parte de OECE, en coordinación con la DGA) que permitan medir el impacto en términos económicos y de eficiencia de las contrataciones públicas.

Se mantienen las funciones del OECE que actualmente establece la Ley 30225 relacionadas a:

a) Supervisión de oficio, de forma selectiva o aleatoria, y a pedido de parte de la gestión de procesos de selección, pudiendo disponer la suspensión de los mismos cuando se identifiquen riesgos o transgresiones que impidan el cumplimiento de los fines de la contratación. Sobre el particular, es importante destacar que:
    1. Esta función contiene un importante pilar de participación ciudadana. La ciudadanía puede solicitar la supervisión de determinados procesos de contratación por parte del OECE, competencia que es exclusiva de este organismo técnico especializado y que contribuye a generar mecanismos para fomentar la integridad y transparencia que impacten en una de las situaciones problemática esbozadas en el apartado VI.
       En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima señala que se debe aclarar que las facultades de supervisión del OSCE deben ser amplias, oportunas, sin restricciones y a pedido de cualquier parte, evitando limitaciones vía reglamentaria.[23]
    2. Si bien los roles de control gubernamental de la CGR y el de supervisor del OECE, están claramente diferenciados, en su desarrollo y aplicación práctica cumple un rol fundamental la DGA, a través de la realización de coordinaciones con la CGR sobre el enfoque de la supervisión y del control gubernamental. El OECE no debe focalizarse solo en el procedimiento de selección, sino que debe participar en las tres etapas del proceso de contratación para conducir a una contratación eficiente.

b) Administrar, diseñar, desarrollar, operar, integrar datos y evaluar el desempeño de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. La gestión y evaluación del desempeño de las plataformas digitales a su cargo es fundamental como herramienta para la oportuna y eficiente toma de decisiones .

[23] Carta DI 075.11.2023, de fecha 02 de noviembre de 2023.

c) **Desarrollar acciones de capacitación y difusión sobre la aplicación de la ley y su reglamento; evaluando el impacto cuantitativo y cualitativo de las mismas, así como emitir la certificación** de los responsables de las áreas involucradas en las contrataciones públicas,[24] conforme a las disposiciones de la DGA. Resulta importante que el OECE mantenga esta función, toda vez que es propio de un organismo técnico especializado ejercer las mismas, más aún si una de las principales fortalezas de su función es justamente la del acompañamiento de las entidades contratantes a través de la asistencia técnica y orientación sobre la normativa de contratación pública.

Se ha complementado esta disposición, precisando que se debe evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de las capacitaciones y la difusión, con la finalidad de determinar objetivamente si las acciones de capacitación estan funcionando. Es importante resaltar que no solo se debe tener en cuenta el número de entidades o servidores capacitados sino que es necesario conocer si el conocimiento ha sido asimilado conforme a los objetivos propuestos. Por ejemplo, esta evaluación permitirá priorizar acciones de capacitación en entidades que han tenido inconvenientes en la ejecución de sus procedimientos, o en las que tienen un elevado porcentaje de procedimientos declarados nulos, ya sea de oficio, o como consecuencia de la interposición de recursos de apelación

Adicionalmente, se ha incorporado que el OECE pueda emitir la certificación de los responsables de las áreas involucradas en las contrataciones públicas, por cuanto es una labor consustancial a la de la capacitación.

Debe diferenciarse esta facultad de la establecida en el inciso 8, del D. Leg. 1439, pues la DGA tiene esta función respecto de toda la cadena de abastecimiento, sin embargo, al existir un organismo técnico especializado del subsistema en contrataciones públicas, le corresponde capacitar y difundir las acciones en torno a dicha especialización. No está demás precisar la experiencia en el desarrollo de capacitaciones especializadas desplegadas por parte de OSCE en el desarrollo de estas actividades a lo largo de los últimos años. Así tenemos, que en el año 2022 OSCE ha capacitado a un total de 123,830 personas y en el año 2023 a un total de 118,378 personas[25]. En lo que corresponde a la certificación, según cifras de OSCE, actualmente, se cuenta con un total de 17,523 profesionales y técnicos con certificación vigente, distribuidos en los niveles básico, intermedio y avanzado, por lo que también es innegable la labor que ha venido realizando OSCE. Es importante también que la DGA como rector del SNA

[24] Esta propuesta también está contenida en el proyecto de ley 5362/2022-CR
[25] https://www.gob.pe/1072

realice las coordinaciones y armonización del sistema en torno a esta facultad y a la funcionalidad con la que debe contar el CONECTAMEF.

d) Diseño, formulación, aprobación y difusión de directivas en materia de su competencia y respecto de las plataformas o herramientas que administra, incluyendo las de gestión para el cumplimiento de su rol de supervisor y acompañamiento. En coherencia con el enfoque de gobernanza de las contrataciones públicas se ha precisado que todos los anteproyectos de carácter general, independientemente de su nivel jerárquico de aprobación, deben ser pre publicados[26] para fomentar la participación de los actores de la compra pública en su diseño y formulación. Esta prepublicación resulta exigible respecto de las normas que se dirigen a los actores externos al proceso (postores, contratistas), mas no así respecto a las normas que son internas o regulan la gestión administrativa de la entidad.

e) **Absolver consultas sobre el alcance de la normativa de contrataciones públicas, que no versen sobre el carácter interpretativo de la misma, formuladas por las entidades contratantes,** así como por el sector privado y la sociedad civil, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Esta propuesta también está contenida en el Proyecto de Ley 5362/2022-CR que propone la Ley General de Contratación Pública. En consistencia lógica con la naturaleza de órgano técnico especializado, es importante unificar criterios de las consultas que de forma más cercana y especializada se realizan ante el OECE. En este mismo sentido opina la CGR, según la cual: "*En ese sentido, se sugiere mantener la competencia del OSCE para absolver las consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, así como interpretarla con carácter vinculante a través de opiniones, considerando que se trata de un organismo especializado que debe garantizar la especialidad e imparcialidad en la materia.*"[27] Igualmente, la Cámara de Comercio de Lima, acota que la eliminación de esta facultad (como ha sido propuesto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo) no contribuye con la necesidad de seguridad jurídica, considerando que es necesaria para logra una mejor aplicación del sistema de contrataciones públicas[28],

---

[26] Morón Urbina, Juan en Revista Digital de Derecho Administrativo N. 19 (Primer Semestre 2018, Pag. 130) precisa: "Desde la perspectiva formal o del procedimiento de generación, estas directivas son aprobadas a puerta cerrada por las autoridades administrativa y sus propios órganos, sin ninguna participación de los interesados, contratistas, expertos, profesores universitarios, funcionarios y servidores públicos. No media una prepublicación de sus anteproyectos, ni tampoco justificando, si en algún caso así hubiese correspondido, dicha acción sea innecesaria, contraría a la seguridad o al interés público. Es más, en los contados casos en los que se han pre publicado, no se han justificado sus razones por las que se descartan los aportes ciudadanos recibidos."

[27] Oficio 003398-2023-CG/DC Matriz de comentarios.

[28] Cámara de Comercio de Lima. Carta DI 041.08.2023, del 29.08.2023.

Como parte complementaria a la función a la que se hace referencia en el numeral b) del presente párrafo se está precisando como función del OECE, en el literal e) del párrafo 11.3 del artículo 11: Integrar, procesar y evaluar la información registrada en el Pladicop para generar evidencias sobre el desempeño de las entidades públicas, de los proveedores y de los efectos de la normativa de contratación pública. El OECE deberá elaborar informes semestrales mediante el cual se evidencie el comportamiento de las entidades públicas contratantes, así como los resultados de los procedimientos de selección convocados.

Se busca con esta precisión que se **procese la información registrada en el Pladicop con la finalidad de contar con elementos objetivos para identificar los ámbitos y entidades que necesitan acompañamiento o intervención técnica por parte de OECE**. Así, por ejemplo, es importante conocer el número de procedimientos de selección declarados nulos, desiertos, cancelados y qué entidades son las que reiteradamente incurren en este tipo de incidencias. Es importante analizar los elementos que pueden desprenderse de la información que gestiona el Pladicop, además de generar estadísticas de cuántos procedimientos son elevados para pronunciamiento del OECE, cuáles son los motivos de la solicitud de elevación y qué entidades son las que más pronunciamientos tienen respecto a sus procedimientos.

Asimismo, se ha incluido como función del OECE administrar el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Junta de Resolución de Disputas que resuelvan controversias en materias de contrataciones del Estado; encargándosele además la supervisión de oficio, de manera selectiva o aleatoria o a pedido de parte, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento para ser incluidos y/o excluidos dentro del citado listado.

Como fundamento de la supervisión, la exposición de motivos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo señala que la ley privilegia al arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc, y por ello, debe buscarse asegurar la idoneidad de las instituciones arbitrales a través de la supervisión del OECE. En tal sentido, el OECE también deberá aprobar el Código de Ética para Arbitraje en Contrataciones Públicas.

Adicionalmente, se le otorga la función de sancionar a dichas instituciones arbitrales y a los Centros de Administración de JRD, como correlato de la función de supervisión asignada.

Finalmente, el OECE podrá exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

Por otra parte, se ha eliminado el literal d) del artículo 52 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, precisión con la que coincide la CGR, toda vez que según señala, la CGR y sus órganos de control institucional ejercen el control gubernamental en el marco de los principios establecidos en la Ley 27785, particularmente aquellos vinculados a la selectividad y materialidad.

Asimismo, se han eliminado las funciones previstas en los literales j), k), l) y m) del artículo 52 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en consideración a que son entidades del sector privado quienes prestan los servicios sobre arbitrajes en general. Además, los centros de arbitraje cuentan con secretaría arbitral de acuerdo a su propia regulación, incluyendo la designación de árbitros y emiten pronunciamientos en casos de recusación de los mismos.

Sobre el particular, conforme lo señala el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos de su propuesta normativa, se ha verificado que -en atención a las disposiciones previstas en la Ley 30225, que promueve el uso del arbitraje institucional por sobre el arbitraje ad hoc – se han visto reducidas las solicitudes presentadas al OSCE en comparación con los años anteriores, remitiéndose al siguiente cuadro:

Cuadro 9

Cuadro 2
Solicitudes de designación residual de árbitros

Años	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Expedientes ingresados	733	689	511	300	174	220	112	24(**)
% de reducción respecto al año anterior		-6%	-25%	-41%	-42%	26% (*)	-49%	(***)

Fuente y elaboración: Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
* La demanda del año 2020 se vio afectada además por la pandemia del COVID 19 que se resumió en menos días laborables, menos personal para atender el servicio y Decretos de Urgencia que suspendieron el computo de plazos para la atención de los procedimientos en trámite, así como la reactivación económica por fases.
** La información del 2023 es hasta el 20 de abril.
*** Hasta el 20 de abril de 2023 se ha producido un 78% de porcentaje de reducción respecto al 2022.

Respecto a la estructura organizacional, el OECE cuenta con un consejo directivo que es la máxima autoridad y tiene a su cargo las decisiones estratégicas institucionales y ejerce los controles internos. Cuenta además con la presidencia ejecutiva, máxima autoridad

ejecutiva y con el Tribunal de Contrataciones del Estado, órgano resolutivo. El consejo directivo está conformado por 3 miembros designados mediante resolución suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, por un periodo de 3 años renovables.

Asimismo, se precisan los requisitos para la designación de los miembros del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo, destacándose el aumento de 3 a 5 años de experiencia requerida en cargos directivos, así como el aumento de 5 a 8 años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en la ley. Con ello, se mejora el perfil técnico de los integrantes del Consejo Directivo para un mejor desempeño en sus funciones. También se establece que el periodo de designación de los miembros del Consejo Directivo es por un periodo de 4 años, siguiendo la lógica de otros organismos técnicos especializados, como por ejemplo, en el caso de la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR.

Sobre el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), la designación de sus vocales es por un periodo de 3 años y se realiza por concurso público a cargo de un Comité Multisectorial integrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los cuales emiten los procedimientos para la evaluación, selección y designación de los vocales. Su presidente es designado por el Consejo Directivo del OECE.

Respecto a los requisitos para ser designados vocales del TCP se ha incrementado, de 5 a 8, los años de experiencia en las materias relacionadas con la ley y se está requiriendo contar con por lo menos un año de experiencia en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.

Respecto a las funciones del TCP se han mantenido las funciones actualmente vigentes en la Ley 30225. Sobre ello, es importante resaltar la facultad de **emitir precedentes de observancia obligatoria de modo expreso y con carácter general**, mediante acuerdos en Sala Plena, en las materias de su competencia. Se ha precisado que los acuerdos de Sala Plena deben tener en cuenta las opiniones vinculantes que la DGA emita en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ello a efectos de mantener la coherencia en sus decisiones en casos análogos y en cumplimientio del principio de predictibilidad previsto en el numeral 5 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. El proyecto de ley 5362/2022/CR, en la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final también propone que se mantenga la citada función, enfatizando en la periodicidad con la que se deben realizar estos plenos.

Esta función resulta fundamental que se mantenga, conforme lo señala también la Contraloría General en su opinión[29] sobre el proyecto de ley 5472/2022-PE, lo que resulta acorde con la posición de Morón Urbina (2018)[30], quien precisa que la facultad de los diversos tribunales administrativos existentes para emitir precedentes de observancia obligatoria proviene de la regulación general, esto es del numeral 2.8 del artículo V del Título Preliminar de la Ley 27444, que reconoce a los precedentes como una de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo.

Continúa señalando el citado doctrino, que estas normas tienen como contenido común aspectos procesales y sustantivos de temas de su competencia, los cuales al ser constantes en su experiencia resolutiva, ameritan la fijación de una regla común, general y obligatoria para que los operadores estén advertidos de cómo procederá el Tribunal en el futuro, aunque en determinados casos ha servido también para unificar posiciones hacia el futuro que fueron plasmadas en actos contradictorios por diversas salas del Tribunal.

Por otra parte, se ha incluido como facultad del Tribunal el sistematizar las resoluciones que emite en ejercicio de sus funciones, como parte de la gestión del conocimiento y acceso a todos los actores del subsistema de contratación pública y ciudadanía en general.

3.3.3. La Central de Compras Públicas – Perú Compras

La Central de Compras Públicas es un organismo técnico ejecutor adscrito al MEF con autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera, su función es promover y ejecutar estrategias y mecanismos que aseguren la eficiencia del SNA, en los componentes que correspondan.

Perú Compras cuenta con un jefe que es la máxima autoridad ejecutiva, designado mediante resolución suprema, refrendada por el ministro de Economía y Finanzas por un periodo de 3 años renovables. Se exige, entre otros requisitos para su designación, que cuente con no menos de 5 años de experiencia en cargos directivos o no menos de 8 años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en la ley.

En la exposición de motivos de proyecto de ley del poder Ejecutivo se acota que Perú Compras busca optimizar las compras públicas a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, aprovechando la tecnología y la economía de escala, reduciendo

[29] Oficio N. 003398-2023-CG/DC de fecha 19 de octubre de 2023
[30] Morón Urbina, Juan en Revista Digital de Derecho Administrativo N. 19, Primer Semestre 2018, Pag. 135 y 136

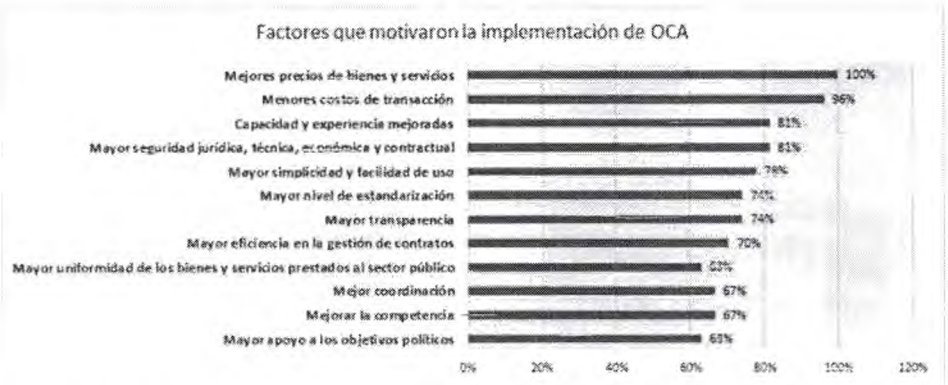
así los costos de transacción (costos de búsqueda, costos de contratación, costos de coordinación, entre otros) de la cadena de abastecimiento público.

Se ha incluido como parte de sus funciones la promoción, conducción y gestión de las compras corporativas, compras centralizadas, así como la conducción y gestión de compras centralizadas de emergencia, en atención a su especialidad y conocimiento técnico especializado para ejecutarlas.

Resulta, particularmente importante hacer referencia a la encuesta de la OCDE sobre los factores que motivaron la implementación de órganos centrales de adquisiciones en los países OCDE, entre los que se encuentran: mejores precios de bienes y servicios, menores costos de transacción, mayor simplicidad y facilidad de uso, mayor transparencia, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 10

Gráfica 1.3. **Factores que motivaron la implementación de Órganos Centrales de Adquisiciones en los países de la OCDE**



Fuente: Basado en la Encuesta de la OCDE sobre Contratación Pública de 2014.

Fuente: OCDE. La Contratación Pública en el Perú.

En línea con lo señalado, y en consistencia con la función de diseño, desarrollo, gestión, integración de datos y evaluación del desempeño de las herramientas digitales a su cargo (literal b) del párrafo 20.2 del artículo 20), se ha precisado también como una de sus funciones: diseñar y desarrollar indicadores que midan la eficiencia de las modalidades de contratación a su cargo (literal d) del párrafo 20.2 del artículo 20. Resulta importante, entre otros aspectos, que se realice una estimación de los ahorros en el proceso, costos de transacción y la obtención de precios menores que implica recurrir a estos tipos de

contrataciones corporativas y centralizadas, así como realizar estudios de satisfacción de los usuarios de estas modalidades de contratación.

Se ha incorporado también como función la de orientar a las entidades contratantes en materias de su competencia. Si bien es un organismo ejecutor, tiene a su cargo la estandarización de requerimientos, así como la promoción de compras corporativas y centralizadas, lo que demanda una labor de orientación dirigida a las entidades contratantes.

3.3.4. Las entidades contratantes

A. Roles y responsabilidades en las entidades contratantes

Este apartado es otro de los aspectos innovadores de la norma con la finalidad de tener claridad en los roles y responsabilidades en la organización interna de las entidades contratantes. En ese sentido, se han precisado las siguientes:

a) **Titular de la entidad:** máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante conforme a sus normas de creación y organización. En el caso de las entidades contratantes es aquél que ejerce la máxima autoridad al interior de estas.

b) **Autoridad de la Gestión Administrativa:** es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad contratante, que ejerce las funciones previstas en la presente ley y su reglamento, para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al titular de la entidad. En el caso de los Ministerios, es la Secretaría General; en los Gobiernos Regionales, la Gerencia General Regional; en los Gobiernos Locales, la Gerencia Municipal; en los organismos públicos y en las empresas del Estado, la Gerencia General; en los Programas y Proyectos, el Director Ejecutivo; y, en las demás entidades contratantes, aquél que ejerza la máxima autoridad administrativa. En el caso de los órganos desconcentrados y aquellas organizaciones a las que hace referencia el párrafo 3.2 del artículo 3 de la Ley, es el titular de la entidad.

c) **Área usuaria:** es la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras, programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Es responsable de la adecuada formulación de sus requerimientos en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones,

así como de la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de su conformidad respectiva.

d) **Área técnica estratégica:** es la unidad de organización a la que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria siendo responsable de la formulación de los requerimientos de otra u otras unidades de organización, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como, la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de la conformidad respectiva.

e) **Dependencia encargada de las contrataciones:** es la unidad de organización responsable de los procesos de contratación de la entidad contratante, incluyendo la preparación de la estrategia de contratación. Puede asumir el rol de área técnica estratégica en los casos que corresponda, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico.

f) **Compradores públicos:** son los funcionarios y servidores de la dependencia encargada de las contrataciones responsables de realizar las actividades relativas a la gestión de las contrataciones de la entidad contratante.

Este esquema de roles dentro de las entidades contratantes permitirá generar un mejor diseño y estrategia del proceso de contratación, contar con mejores requerimientos como primer paso para un proceso eficiente de contratación, así como realizar un óptimo seguimiento al cumplimiento y ejecución contractual.

Se han precisado también en este apartado, tres disposiciones que orientan la actuación de los servidores y funcionarios de las entidades contratantes: responsabilidad, discrecionalidad y supervisión.

Respecto a la responsabilidad en el proceso de contratación se ha señalado que:

- La organización, elaboración de la documentación y conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones discrecionales cuando correspondan, es realizada por los funcionarios y servidores de la entidad contratante, con independencia del régimen jurídico de su vínculo, priorizando los principios, de publicidad y valor por dinero, así como los enfoques de la ley, cautelando la efectividad de los resultados de las decisiones que adopten.

- La determinación de las responsabilidades en el proceso de contratación pública se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a los funcionarios y servidores con la entidad contratante.
- Las entidades contratantes son responsables de prevenir y solucionar, de manera efectiva, los conflictos de intereses que puedan surgir en el proceso de contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de la ley.

Respecto a la discrecionalidad de los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones se ha incorporado el criterio de rigor técnico[31], que se debe seguir durante el estudio y la preparación de cada obra, bien o servicio; así como la dirección positiva de la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la determinación de los factores de evaluación, con la finalidad que no se le otorgue una excesiva ponderación al precio como factor de evaluación.

En efecto, en esa línea, se ha precisado lo siguiente:

a) La facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos.
b) Dicha decisión debe ser la más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato, de modo que garantiza la adquisición de bienes, servicios u obras que maximicen el valor de los recursos públicos. Esta decisión se toma en observancia del principio de valor por dinero, entre otros de la ley y a los criterios establecidos por la cuarta disposición final complementaria de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
c) El control referido en el párrafo anterior se concentra en el cumplimiento de la legalidad que rige a la contratación pública, mas no en las decisiones y rigurosidad técnicas que adoptan los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas en el marco de facultad discrecional con la que cuentan.

[31] Propuesto por el proyecto de ley 7099-2023-CR, proyecto de ley que fortalece las contrataciones del Estado y Salvaguarda el uso eficiente de los recursos públicos, propuesto por el grupo parlamentario Avanza País a iniciativa de la congresista Adriana Tudela.

Finalmente, respecto a la supervisión se ha previsto que la autoridad de la gestión administrativa es responsable de implementar mecanismos y establecer disposiciones para supervisar que el proceso de contratación en todas sus fases, así como la actuación de aquellos que intervienen en este, responda al cumplimiento de los fines públicos que se buscan lograr con la contratación. Las actividades de supervisión que realice este organismo especializado no eximen a la autoridad de la gestión administrativa del cumplimiento de sus obligaciones

3.3.5. Proveedores de bienes, servicios y obras

Los proveedores son las personas naturales, jurídicas o patrimonios autónomos u otras formas asociativas, nacionales o extranjeras que, a partir de sus actividades como agentes de mercado, contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de los bienes, servicios y obras necesarios para alcanzar la finalidad de la ley.

También se ha previsto que el reglamento establezca disposiciones que garanticen el trato igualitario en la inscripción de los proveedores nacionales frente a los extranjeros, en la determinación de su capacidad máxima de contratación en el caso de ejecución de obras, y en la medición de su desempeño en el RNP. Asimismo, establece herramientas de medición de desempeño de los proveedores inscritos en el RNP, así como los incentivos para la participación en las contrataciones públicas de aquellos proveedores mejor calificados conforme a dicha medición.

Esta categoría de habilitación para la contratación con el Estado, se la brinda su registro o inclusión en el RNP. Constituye requisito indispensable para contratar con el Estado no encontrarse impedido de contratar con este. Se ha dispuesto también que el reglamento establezca las disposiciones que garanticen el trato igualitario de los proveedores nacionales frente a los extranjeros en su inscripción, en la determinación de su capacidad máxima de contratación en el caso de ejecución de obras, y en la medición de su desempeño en el RNP.

A. Impedimentos

Para evitar conflictos de intereses en el desarrollo de los procesos de contratación se han establecido 4 clasificaciones de impedimentos: i) Impedimentos de carácter personal, ii) Impedimentos en razón de parentesco, iii) Impedimentos de personas jurídicas y por representación, y iv) impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusión en otros registros.

Morón Urbina, precisa que *"las prohibiciones para contratar son limitaciones establecidas por el legislador al derecho de acceso igualitario de algunos agentes económicos para contratar con el Estado por razones de interés público vinculadas con la moralidad e integridad y que tienen por efecto impedir presentar propuestas, ser adjudicatario, contratar o subcontratar (e incluso interponer recursos) en todo procedimiento de selección convocado por las entidades del Estado (en caso de ser prohibición general), o únicamente con respecto a un determinado proceso específico (prohibición relativa)".*[32]

Por su parte, en el Proyecto de Ley 5362/2022-CR, citando a NAVAS RONDÓN[33], se señala que la naturaleza de los impedimentos *"(...) vienen a constituir situaciones de excepción que deben ceñirse a sus propios términos y racionalidad. Debe quedar claro que su objeto no es cerrar el mercado a un determinado grupo de personas, sino fomentar la transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, por las circunstancias mencionadas y establecidas en la propia Ley de Contrataciones del Estado (LCE). Se trata de evitar que determinados proveedores por situaciones especiales como su alta investidura, su injerencia directa en la toma de decisiones, el acceso previo de la información de la contratación o cuando se encuentren suspendidos sus derechos, entre otras razones, tengan una posición privilegiada respecto de los demás potenciales competidores o postores."*

Morón Urbina[34], continúa señalando que las prohibiciones de contratar con el Estado *"solo se consideran justificadas si persiguen un objetivo de protección al interés general, de mantenimiento de la rectitud en la competencia y siempre que cumpla el principio de proporcionalidad. De esta manera, es necesaria la búsqueda de un déficit equilibrio entre: garantizar el interés del órgano de contratación en no contratar con quienes, en atención a su comportamiento del principio de igualdad a la hora de aplicar tales prohibiciones y, por último, asegurar que estas restricciones no van más allá de lo necesario para cumplir con las finalidades previstas en las Directivas a fin de exigir que estas prohibiciones no constituyan una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la esencia misma del derecho al acceso a la contratación pública y dificulten la realización de las libertades fundamentales establecidas en los Tratados".*

---

[32] Morón Urbina, Juan Carlos. Derecho Global y Comparado de la Contratación Pública. Contratación Administrativa Práctica, N° 188, Nov. 2023, Editorial La Ley. Pág 2.

[33] Navas Rondón, Carlo. "Los impedimentos para contratar con el Estado como causal de sanción". En: Administración Pública & Control N° 40, Gaceta Jurídica, Lima, abril 2017.

[34] Citando a Medina Arnaiz y Gómez Fariñas. En Derecho Global y Comparado de la Contratación Pública. Contratación Administrativa Práctica, N° 188, Nov. 2023, Editorial La Ley. Pág 5

A nivel de Latinoamérica, somos el país con la ley más agresiva a las contrataciones públicas en lo que respecta a impedimentos para postular. Morón Urbina, precisa que, a nivel comparado, la regulación peruana de los impedimentos dista de ser racional, no solo por la extensión de su regulación, sino por su complejidad y difícil control, lo que a su vez afecta gravemente la participación efectiva de más postores.[35]

En la legislación peruana el tratamiento de los impedimentos para contratar con el Estado ha estado marcado por una tendencia represiva y generalizada a la sospecha de la existencia de conflictos de intereses. Ello ha originado que se hayan incorporado cada vez más supuestos, inclusive que obedecían a situaciones mediáticas o de casos aislados. Por ello, la propuesta normativa busca establecer ciertos parámetros con criterios razonables, que no limiten la libertad de contratar y que promuevan la participación de todos los agentes de mercado en condiciones de igualdad.

En las siguientes líneas procederemos a delimitar los impedimentos, poniendo énfasis en aquellos en los cuales se han establecido algunas modificaciones respecto a los establecidos en la vigente Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

a) Impedimentos de carácter personal:

1. En los impedimentos de **Tipo 1.A** se mantienen al presidente de la República[36], vicepresidentes, congresistas. Se ha agregado en este tipo a los diputados, senadores y a los ministros de Estado[37], en atención a que el poder político del cargo y representación que ejercen a nivel nacional en coordinación con los diferentes sectores, podría conllevar la presencia de conflictos de intereses en los procesos de contratación pública a nivel nacional. Se ha clasificado estos supuestos en razón a la naturaleza política del cargo o representación que desempeñan.
   En atención a ello, el impedimento se produce durante el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes de culminado este, en todo proceso de contratación a nivel nacional. Se ha detallado también, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional citada, que, en el caso de los vicepresidentes, el impedimento se

[35] Idem pág. 20

[36] La Sentencia del Tribunal Constitucional en el fundamento 29 del expediente 3150-2017-PA/TC, señala: Ello significa que, además de encabezar el Poder Ejecutivo (como jefe de Gobierno), se coloca por encima de los demás poderes constituidos (como jefe de Estado). La categoría de Jefe de Estado "pone al Presidente de la República por encima de los demás poderes existentes y como un gran regulador de la vida política"

[37] En la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que modifica el alcance del impedimento de los ministros, no se precisa los fundamentos por los cuales éstos dejan de estar impedidos en todo proceso de contratación para pasar a estar impedidos solo en el ámbito de su sector.

presentará solo cuando asuman el cargo de presidente de la República, salvo que ejerzan otro cargo distinto, en cuyo caso se aplica el del impedimento correspondiente.

2. Como impedidos de **Tipo 1.B** se encuentran: los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República y los integrantes de los siguientes organismos constitucionalmente autónomos: los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los Fiscales Supremos del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
   El impedimento para contratar con el Estado es durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes de culminado este, en todo proceso de contratación a nivel nacional. Se ha disminuido la temporalidad del impedimento luego de culminado el cargo, en atención al principio de proporcionalidad dado que son cargos de naturaleza jurisdiccional o técnica, que no tienen la misma exposición o poder político o intervención y representación que los impedidos del Tipo 1.A.

3. En los impedimentos del **Tipo 1.C**, se han considerado a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. También se encuentran comprendidos en este tipo los viceministros de Estado, gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales; alcaldes y regidores; jueces superiores de las Cortes Superiores de Justicia y fiscales superiores.

   El impedimento para contratar con el Estado es en todo proceso de contratación a nivel nacional, durante el ejercicio del cargo. Dentro de los seis meses siguientes de culminado este, resulta razonable que sea únicamente en los procesos de competencia institucional **(órganos constitucionalmente autónomos),** sectorial **(viceministros de Estado),** territorial **(gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, en el ámbito de sus funciones)** o jurisdiccional **(jueces y fiscales)** a la que pertenecieron, según corresponda.

   Respecto de los consejeros regionales y regidores, se mantiene el criterio de la ley vigente que es en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial (en el ámbito de sus funciones), durante el ejercicio del cargo y hasta seis meses después de culminado este.

4. Respecto a los impedimentos de **Tipo 1.D** se encuentran los titulares de las entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa distintas a las autoridades tipo 1.A, 1.B y 1.C; los funcionarios públicos, directivos públicos, servidores de confianza y otros servidores civiles con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia; así como los gerentes de las empresas del Estado. Se mantiene el alcance durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y se precisa durante los seis meses de culminado el cargo en los procesos de la entidad contratante a la que pertenecieron.
5. Se mantienen igualmente, los criterios de alcance y temporalidad de la Ley 30225, respecto de los impedidos del Tipo 1.E, Tipo 1.F y Tipo 1.G durante el ejercicio del cargo, y se precisa dentro de los 6 meses siguientes de culminado este para los impedidos del Tipo 1.E.
6. Para determinar en 6 meses el impedimento luego de cesar el impedido en el cargo, en coherencia con el principio de proporcionalidad y tratando de establecer un parámetro razonable, se ha recurrido a los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional (expediente 3150-2017-PA/TC), que fundamentan su decisión atendiendo al principio de la libre concurrencia (al limitar el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación estatales) y al principio de competencia (pues los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia).[38]

b) Impedimentos en razón del parentesco:

Morón Urbina, señala que la regulación de los impedimentos en la que el impedimento del pariente de los altos funcionarios se aplica de manera absoluta, es un caso aislado y único del derecho peruano.[39]

Sobre el particular, resulta trascendental hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el Expediente 03150-2017-PA/TC[40], en mérito a la demanda de

[38] Morón Urbina, señala que el tiempo de operatividad del impedimento, el tiempo de operatividad de ésta ha de limitarse en función de la importancia y gravedad de la causa determinante, pues no existe un "Derecho la "perpetuidad", noi seria oportuna y constitucionalmente admisible una prohibición de establelecer lazos contractulaes con todas las entidades del sector público. Derecho Global y Comparado de la Contratación Pública. Contratación Administrativa Práctica, N° 188, Nov. 2023, Editorial La Ley. Pag. 11.

[39] Idem. Pag. 13

[40] La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, en su carta N° 170-2023 del 16.10.2023, sugiere que para este tipo de impedimentos en razón del parentezco se deben ajustar a los criterios establecidos en la sentencia 3150-2017-PA/TC del Tribunal Constitucional.

acción de amparo interpuesta contra el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado por Domingo García Belaunde, quien renunció a su condición de proveedor de servicios para el Estado, pues según se señala en la sentencia, se le hizo saber (de modo extraoficial) que había incurrido en una incompatibilidad prevista en la normativa de contrataciones del Estado, ya que (en ese momento) tenía un hermano congresista.

La causal de inaplicación a su caso, solicitada por el demandante, fue el inciso "f" del artículo 10 del derogado Decreto Legislativo 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda y concluyó que el demandante sí podía ser proveedor del Estado, excepto del Congreso de la República y ordenó que el OSCE permita la inscripción del demandante en el RNP. La sentencia de segunda instancia, declaró improcedente la demanda de amparo por cuanto se había producido la sustracción de la materia al haber sido derogado el citado Decreto Legislativo 1017.

Por su parte, el Tribunal Constitucional determinó que, si bien había sustracción de la materia (por cuanto su hermano congresista ya no tenía tal condición en el momento que asumió conocimiento de la causa), emitiría pronunciamiento a fin de evaluar para casos futuros si este supuesto constituía o no una violación de derechos.[41]

Si bien el Decreto Legislativo 1017 había sido derogado, el Tribunal Constitucional señaló que la Ley 30225 contiene la misma prohibición de contratar con el Estado alusiva a los parientes de algunos altos funcionarios del Estado. En ese sentido, analiza la disposición contenida en los literales a) y h) del artículo 11 de la Ley 30225, según el cual:

> *Artículo 11. Impedimentos*
> *11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas:*
>
> *a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la*

[41] Expediente 3150-2017-AA/TC. Fundamento 4: (...) este Tribunal, en aplicación del segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, procederá a emitir pronunciamiento de fondo, a fin dilucidar si es que la aplicación de la norma en otros casos futuros que eventualmente puedan ser similares, supone o no una violación de derechos según la Constitución.

República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos.
(...)

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
(...)

La citada sentencia, pronunciándose sobre el fondo, y haciendo referencia al derecho a la libertad de contratación, que se funda en el principio de autonomía privada, analiza la tensión entre la libertad de contratación y la libertad del legislador de establecer restricciones a dicho derecho, plasmado concretamente en el impedimento de contratar con el Estado que tienen como destinatario a los familiares de los congresistas, detallados en el artículo 11, inciso "h" de la Ley 30225.

El Tribunal Constitucional recurre al test de proporcionalidad para evaluar el caso y determinar: i) si la medida restrictiva responde a un fin constitucional legítimo; ii) si la medida es adecuada para cumplir dicho fin (juicio de idoneidad); si no existe otro medio alternativo menos gravoso respecto de los derechos comprometidos (juicio de necesidad); y si la medida adoptada es proporcional (test de proporcionalidad en sentido estricto.[42]

En consistencia con dichos principios y el Test de Proporcionalidad, el Tribunal Constitucional, señala entre otros puntos, lo siguiente:

i) *"En base a todo lo expuesto, se observa que las normas contenidas en el artículo 11.1, inciso "h" de la Ley 30225 (modificada por el Decreto Legislativo 1444) relativas al impedimento del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas naturales citadas en el artículo 11.1. a) de la referida norma, para ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas con el Estado, configuran una amenaza de violación al derecho a la libre contratación, por lo que corresponde declarar su inaplicación al presente caso, con las siguientes excepciones: a) la contratación con la propia entidad en la que labore dicha persona natural; y b) la contratación del cónyuge, conviviente y parientes cercanos del presidente de la República."*

[42] Idem. Fundamento 23

ii) *"En esa línea, resulta razonable el impedimento si es que la contratación se realiza con el Congreso de la República, pues se trata de la entidad a la que pertenece el congresista y, resulta evidente, sobre la cual puede ejercer influencia directa, generándose suspicacias y notorios conflictos de interés. Este mismo razonamiento puede hacerse extensivo a todos aquellos familiares o parientes de los funcionarios públicos mencionados en el citado artículo 11.1, inciso "a". Sin embargo, lo mismo no puede predicarse respecto a extender el impedimento a las contrataciones que el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas naturales señaladas en dicho artículo realicen con cualquier otra entidad estatal."*

iii) *"Atendiendo a este hecho, existe un conjunto de alternativas que resultan menos onerosas para conseguir los fines que la norma bajo análisis persigue. Queda claro, entonces, que, a juicio de este Colegiado, las medidas bajo examen no superan el juicio de necesidad y, por consiguiente, no logran sortear el test de proporcionalidad, a consecuencia de lo cual las normas contenidas en el artículo 11.1, inciso "h" de la Ley 30225 (modificada por el Decreto Legislativo 1444) relativo al impedimento del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas naturales citadas en el artículo 11.1. a) de la referida norma, para ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas con el Estado, resulta desproporcionada y configura una amenaza de transgresión al derecho a la libre contratación, por lo que corresponde declarar su inaplicación al presente caso, con las siguientes excepciones: a) conforme se establece en el fundamento 22 supra, la prohibición de contratación con la propia entidad en la que labore dicha persona natural; y b) la excepción que se describe en los fundamentos 28 a 32 infra, relativa al cónyuge, conviviente y parientes cercanos del presidente de la República, las cuales sí se encuentran justificadas."*

En consonancia con el citado pronunciamiento se han realizado algunas precisiones en los impedimentos en razón del parentesco, buscando revertir el efecto señalado en dicha sentencia, según la cual: "la norma bajo análisis contraviene algunos de los principios que, según la propia ley, deben regir las contrataciones del Estado, tales como el principio de la libre concurrencia (al limitar el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación estatales) y el principio de competencia (pues los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia)."

Por ello, también se ha incorporado un criterio objetivo[43] y razonable para la aplicación del impedimento, considerando pertinente precisar que los parientes que hayan tenido un historial o antecedentes de contratación con una determinada entidad no se vean perjudicados con la designación o asunción del cargo por parte del impedido originario, pues esta deviene en una situación imprevisible. En ese sentido, se ha establecido como salvedad para la configuración del impedimento que el familiar hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado cuatro contratos menores, en el mismo tipo de objeto al que postula (bien, servicio u obra), en los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor. [44]

Adicionalmente, se ha disminuido la temporalidad del impedimento una vez culminado el ejercicio del cargo respectivo, pasando de ser de 12 a 6 meses, siendo este un rango razonable de temporalidad, como se precisó líneas arriba, en la que se podría ejercer influencia para la contratación de los familiares o parientes del impedido originario.

En concordancia con estas dos premisas, la propuesta normativa establece, respecto a los parientes de los impedidos del Tipo 1.A, 1.B y 1.C, que este se configure ya no en todo proceso de contratación a nivel nacional, sino dentro del ámbito de competencia institucional (Congreso de la República y organismos constitucionalmente autónomos), sectorial (ministros y viceministros), territorial (autoridades de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus funciones) o jurisdiccional (jueces y fiscales).. El impedimento es mientras el impedido se encuentre en ejercicio del cargo y hasta seis meses siguientes de culminado el ejercicio del cargo. El mismo criterio se ha establecido respecto de los parientes de los impedidos del Tipo 1.D y 1.E.

Situación distinta ocurre con los familiares del presidente de la república, pues como bien los señala el Tribunal Constitucional el presidente tiene un nivel de intervención en las políticas de Estado a nivel nacional como jefe de Estado y como Jefe de Gobierno. En el caso de los parientes del presidente de la república y vicepresidentes de la República, el impedimento aplica para todo proceso de contratación a nivel nacional, mientras el

---

[43] La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, en su carta 170-2023 del 16.10.2023, señala que los impedimentos para contratar con el Estado por razón de parentesco deberían sustentarse en criterios objetivos y que se expresen en reales "conflictos de intereses" y no en presunciones (sospechas). Y ser razonables en su aplicación.

[44] Morón Urbina, señala que en el derecho comparado regulaciones que cuando lo consideran, moderan la extensión, como por ejemplo, limitarla únicamente a los parientes más cercanos, restringirlo a su propia entidad, excluir de su alcance cuando se trate de un proveedor único, cuando el objeto del contrato sea la actividad ordinaria del pariente o existe un interés manifiesto de colaborar con la administración por parte del pariente proveedor o crear la figura del levantamiento de la prohibición cuando se evidencia que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición o en el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, si demuestran que ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. En Derecho Global y Comparado de la Contratación Pública. Contratación Administrativa Práctica, N° 188, Nov. 2023, Editorial La Ley. Pag. 14

impedido se encuentre en ejercicio del cargo y hasta seis meses siguientes de culminado el ejercicio del cargo respectivo.

En lo que se refiere a los parientes de los impedidos de Tipo F y Tipo G los criterios de la ley vigente se mantienen.

c) Impedimentos para personas jurídicas o por representación:

Respecto de este tipo de impedimentos, se han mantenido los criterios, alcance y temporalidad de los impedimentos de acuerdo a la Ley 30225.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por la inclusión en otros registros:

Se mantienen los impedimentos de la ley vigente, habiéndose realizado las siguientes precisiones:

1. Inclusión de los proveedores con sanción firme por infracción calificada como muy grave, previstos en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y modificatorias, están incluidos aquí los casos de reducción de la sanción aplicable regulados en el citado decreto legislativo. Durante los doce meses siguientes desde que la sanción quedó firme. En todo proceso de contratación a nivel nacional.
2. El impedimento a las Personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) o el que haga sus veces. En este caso no aplica el impedimento si a la suscripción del contrato, el deudor acredita el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o autoriza el descuento del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos. El impedimento es en todo proceso de contratación pública a nivel nacional, durante la permanencia en el registro, o la vigencia de la sanción.
3. En el caso del impedimento de las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces, por la comisión de infracciones relacionadas a su actuación en materia de contratación pública.

   Se ha eliminado el impedimento para personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso

electoral, debido a que actualmente, se encuentran prohibidos dichos aportes de personas jurídicas nacionales o extranjeras con fines de lucro, de personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, de personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 30689, Ley que modifica el Título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y la Ley 30225, Ley de Contrataciones Generales del Estado, con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política.

Se ha previsto también, **que el reglamento desarrolle los supuestos de inaplicación temporal del impedimento si como consecuencia de este se genera riesgo de deabastecimiento en la prestación de servicios.**

Este tipo de medidas contribuirá a superar los bajos niveles de competencia de proveedores en los procesos de contratación que se han expuesto en el rubro VI sobre Planteamiento de la Problemática.

B. Ficha Única del Proveedor (FUP) y verificación de los impedimentos

A efectos de evidenciar o visibilizar estos impedimentos, se ha incorporado un articulado sobre la Ficha Única del Proveedor (FUP) del Registro Nacional de Proveedores, que consolida la información relevante de los proveedores, sobre la base de la información que administra el OECE y provenientes de fuentes externas mediante mecanismos de interoperabilidad.

En el FUP se registran los impedimentos a que se hace referencia líneas arriba. En aquellos casos en los que por razones objetivas no se puede realizar el registro se procede a hacer una verificación previa por parte de la entidad contratante.

En el articulado propuesto, se ha precisado lo siguiente:

Respecto al registro en la FUP: que el OECE es responsable de realizar las acciones para que la FUP, mediante mecanismos de interoperabilidad con otras entidades o en base a lo declarado por los propios proveedores, contenga la información necesaria para la determinación del impedimento.

Respecto de la verificación de los impedimentos: a) La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante revisa la FUP a fin de verificar que los participantes,

postores, contratistas y subcontratistas no se encuentren impedidos para contratar con el Estado, en la etapa que corresponda. b) La autoridad de gestión administrativa de cada entidad contratante es responsable de adoptar los mecanismos necesarios para que la dependencia encargada de las contrataciones revise la existencia de impedimentos y verifique la información obrante en la FUP, de manera previa a la contratación; y c) **Las inconsistencias en la información contenida en la FUP, respecto al párrafo 31.2 del artículo 31, son de responsabilidad del OECE.**

3.4 Modalidades y herramientas de contratación pública eficiente

3.4.1 Modalidades

a) Contratos Menores

De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2023-PE, se denomina "Contratos Menores" a aquellas contrataciones cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes al momento de la contratación, a fin de que éstas puedan ser identificadas con una nomenclatura específica sin atribuir al rango nominativo de su aplicación.

Las contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UIT, ahora denominados "Contratos Menores" representan, en su conjunto, un gasto importante que realiza el Estado, el cual fluctúa entre los nueve y once mil millones de soles por año, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Contrataciones Menores
Ordenes de compra y Servicios hasta 8 UIT

Tipo de Orden	AÑOS					
	2020		2021		2022	
	Cantidad	Monto (Millones de S/)	Cantidad	Monto (Millones de S/)	Cantidad	Monto (Millones de S/)
Orden de Compra	499,308	S/ 3,293.0	589,053	S/ 3,833.0	520,131	S/ 3,583.0
Ordenes de Servicio	1,389,577	S/ 6,591.0	1,700,210	S/ 8,104.0	1,537,819	S/ 8,092.0
	1,888,885	S/ 9,884.0	2,289,263	S/ 11,937.0	2,057,950	S/ 11,675.0

Nota: Información al 11 de marzo de 2023
Fuente: CONOSCE - OSCE
Elaboración: Dirección de Adquisiciones - DGA

En esa medida, a efectos de procurar que la erogación de fondos públicos, a través de estas contrataciones, revistan de un marco de pluralidad, transparencia y

supervisión, resulta oportuno establecer ciertos parámetros para su ejecución por parte de las Entidades Contratantes, distintos a los de los procesos de contratación que superen dicho monto y que se adapten a su naturaleza cotidiana, lo que en ningún caso implica que se pierda el dinamismo que debe caracterizar dichas contrataciones y enfocados a transparentar la información que involucran estos procesos de contratación.

En esa medida, la ley indica que las entidades contratantes realizan el proceso de contratación para contratos menores, de acuerdo a las disposiciones en materia de transparencia que se establecerán en el reglamento, de manera que se garantice la publicidad de los mismos.

b) Compra por encargo

De la incorporación de esta modalidad de compra eficiente en la vigente Ley de Contrataciones con el Estado, y de acuerdo a la información alcanzada por el OSCE en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2022-PE, se evidencia que es una alternativa eficaz para la satisfacción de las entidades contratantes al generar ahorros significativos.

Es la especialidad o buenas prácticas que ostenta la entidad u organismo internacional a quien se realiza el encargo, siendo relevante en todo el proceso de contratación, tanto en el procedimiento de selección como en la realización de las actuaciones preparatorias, sin perjuicio de la responsabilidad que mantiene la entidad que efectúa el encargo. En ese sentido, no podrá utilizarse el encargo para desligarse de la responsabilidad que tiene toda entidad contratante como destinataria de los fondos públicos asignados a la contratación.

Así también, se hace la precisión de que la entidad encargante brindará atención a los requerimientos de acceso a dicha información que estimen necesarios los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, dándose cumplimiento a lo ya dispuesto a las normas especializadas en la materia.

Cabe mencionar que del análisis de la información que se muestra en el siguiente cuadro:

Uso de las Compras por Encargo 2021-2022

Año	Cantidad de entidades	Número de procedimientos	Monto adjudicado
2021	07	84	S/ 326.2 millones de soles
2022	09	74	S/ 268.6 millones de soles

Fuente Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), elaboración propia.

Se evidencia que el uso de este mecanismo de compra eficiente, del 2021 al 2022, ha caído en 17% aproximadamente, ante esto y siendo que el mecanismo ayuda a las entidades contratantes en enfocar sus esfuerzos (recursos de diversa índole) en las actividades de su sector, dejando este tipo de compra en manos de otros compradores. La promoción de su uso y la reglamentación de los detalles operativos está a cargo de MEF.

c) Compra centralizada

El Proyecto de Ley 5472/2022-PE introduce la figura de las compras centralizadas como una forma estratégica por la cual una o más entidades contratantes, y en la exposición de motivos del mismo se arguye que por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, las entidades contratantes encargan a Perú Compras u a otra entidad, todas las fases del proceso de contratación, hasta la liquidación o pago total, de bienes, servicios u obras. Así, el objetivo principal de las compras centralizadas es que una entidad con el conocimiento técnico especializado pueda ejecutarlas, pudiendo aplicarse para atender el requerimiento de una o más entidades contratantes.

En esa línea, y habida cuenta que Perú Compras es el organismo ejecutor del SNA, recae en el la función de centralizar las contrataciones que revisten las condiciones antes mencionadas.

Se señala que Perú Compras podrá colaborar con la elección adecuada de proveedores, y sobre todo transferir conocimiento a las entidades contratantes que recurran a ella, generando mayores niveles de eficiencia en la contratación individual de determinada entidad contratante y, en general, en el régimen de compras públicas.

En la propuesta de ley del Poder Ejecutivo se reconoce la posibilidad de que existan otras entidades con la capacidad de asumir el rol de Perú Compras descrito en el párrafo precedente.

Cabe anotar que, considerando que la compra centralizada implica además la realización de una transferencia financiera de una entidad a otra, la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final establece disposiciones específicas para tal efecto.

Así también, la propuesta de ley del Poder Ejecutivo contempla la posibilidad de que Perú Compras pueda gestionar compras centralizadas de emergencia conforme a las disposiciones señaladas en el reglamento.

Sustentando dicha posibilidad en el siguiente argumento: *"durante la pandemia, diversas entidades realizaron compras simultáneas para la obtención de productos relacionados con la salud, entre ellas, las pruebas rápidas y mascarillas; muchas de estas compras se realizaron mediante un número indeterminado de contrataciones menores a 8 UIT, es decir, por debajo del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública.*

Este tipo de contrataciones no coordinadas en el Estado evidencia la distorsión en el mercado, debido a que cuando varias entidades realizan compras simultáneas genera un aumento desfavorable de la demanda, lo cual afecta los costos y el acceso a los productos.

Aunado a ello, la pandemia evidenció que en una situación de emergencia es sumamente importante que, entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, que conocen la necesidad de su población de manera directa, existan coordinaciones inmediatas para atender la emergencia, salvaguardando que las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos estén acordes al principio de integridad en la contratación pública.

Al respecto, cabe traer a colación las adquisiciones que ha realizado el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES a nivel nacional, en el marco de la pandemia por COVID-19, entre los años 2020 al 2022, para la compra de diversos productos como los Equipos de Protección Personal (EPP), pruebas de diagnóstico, material desinfectante, otros insumos y/o equipos y medicamentos. Estos productos han sido distribuidos en todas las regiones del país. Asimismo, en el siguiente cuadro se muestran los montos adjudicados en millones de soles".

Adquisición por COVID 19 Nacional CENARES

Años	Monto Total (millones de S/)
2020	S/ 895.8
2021	S/ 750.6
2022	S/ 187.8
Total general	**S/ 1,834.1**

Fuente: Base de datos CENARES.
En: http://sol.cenares.gob.pe/covid19.xhtml
Elaboración: Dirección de Adquisiciones – DGA

Se evidencia así que la propuesta descrita, es razonable y es recomendable que exista una modalidad de contratación eficiente que sea dirigida desde el gobierno central, de modo que se consolide una única demanda, que represente beneficios como la economía de escala, se obtenga menores costos de transacción y se logre una mejor transparencia de las compras, y que además pueda ser utilizado en los periodos de emergencia.

d) Compra corporativa

El proyecto de norma del Poder Ejecutivo establece disposiciones respecto de la compra corporativa, permitiendo que dos o más entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, mediante un procedimiento de contratación único, a fin de alcanzar condiciones más ventajosas.

Se señala que se trata de una estrategia logística eficiente que permite fortalecer el poder de compra del Estado, pues implica la organización de un grupo de entidades contratantes para que, de manera conjunta, adquieran los bienes y servicios de naturaleza similar, que requieren para el cumplimiento de sus fines, aprovechando las ventajas de comprar a grandes volúmenes a través de un solo procedimiento de selección, único y centralizado, con el fin de lograr mejores precios y condiciones que las que se obtendrían si cada entidad contratante comprara de manera individual.

Se trata de una modalidad que, al agregar la demanda, requerimientos de las entidades contratantes, genera un ahorro económico respecto de los precios en compras individuales.

De acuerdo al calculo sustenta por el Poder Ejecutivo estamos ante un ahorro estimado que es detallado en el cuadro siguiente, el mismo que corresponde al periodo 2017-2021:

Estimación del ahorro obtenido a través de la estrategia de Compras Corporativas Años 2017 - 2021

ESTRATEGIA DE PERÚ COMPRAS	NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN DE OBJETO	VALOR ESTIMADO (A)	VALOR ADJUDICADO (B)	AHORRO (C=A-B)	AHORRO %
COMPRAS CORPORATIVAS	CP-SM-1-2017-PERUCOMPRAS/CCF-1	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES EN LIMA Y A NIVEL NACIONAL	S/61,460,205	S/72,102,607	S/0	0%
	SIE-SIE-1-2017-PERUCOMPRAS/CCF-1	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	S/192,005	S/167,012	S/24,993	0%

		TRANSITO - SOAT				
	CP-SM-1-2021-PERUCOMPRAS/CCF-1	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	S/23,195,721	S/16,382,718	S/6,813,003	29%
	CP-SM-3-2021-PERUCOMPRAS/CCF-1	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS ENTIDADES PARTICIPANTES: SUNEDU Y PRODUCE	S/10,052,308	S/9,038,569	S/1,013,739	10%
	AS-SM-1-2021-PERUCOMPRAS/CCF-1	Servicio de vigilancia para las entidades participantes: ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A. y ELECTROCENTRO S.A. - Compra Corporativa Facultativa	S/ 52,892,045	S/59,859,148	S/0	0%

TOTALES	S/147,792,284	S/157,550,054	S/7,851,735	

Elaboración: Perú Compras

Por último, se señala que la homogeneización de los requerimientos permitió establecer calidades similares de servicio para la satisfacción de necesidades comunes, incorporar mejoras en los términos contractuales de cada entidad participante y reducir el riesgo de direccionamiento de los términos contractuales al estandarizar las características técnicas y las condiciones de contratación. En la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2022-PE, se exponen algunos resultados de este tipo de compra, los mismos que evidencias los beneficios que su uso trae.

e) Compra Pública de Innovación

La propuesta de norma del Poder Ejecutivo incluye esta modalidad de compra eficiente, la misma que orienta a que las entidades contratantes puedan optar por adquirir productos y servicios que aún no existen en el mercado o mejoran un bien o servicio existente, de tal manera que se consiga la finalidad pública con esta contratación. Esto se enmarca a la respuesta que ofrece el mercado para mejorar la prestación de servicios públicos y estos radican en el uso de soluciones innovadoras.

En este marco es importante resaltar la precisión hecha en la exposición de motivos del proyecto de norma del Poder Ejecutivo. *En mérito a las características de su obtención y a la gestión del riesgo que ello implica, se dispone que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual generados de las actividades de investigación y desarrollo, será de la entidad contratante, del contratista o de ambos, de acuerdo con las condiciones que el reglamento disponga.*

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual son parte del incentivo que tienen los proveedores de estos bienes y servicios para poder compartir el riesgo con las entidades contratantes; y, si bien es cierto, en cada proceso de contratación la entidad contratante evaluará (indagará) en ese mercado particular las condiciones de contratación, debe de actuar en el marco del rigor técnico que amaina el riesgo que se genera en cualquier proceso de innovación.

Carillo[45] sostiene que *los procedimientos de compra pública de innovación no siguen las pautas ordinarias de la contratación pública. En estos casos, tanto la preparación y adjudicación del contrato como su ejecución han de adaptarse a una forma de comprar que se basa en unas premisas singulares que en buena medida cuestionan los principios clásicos de la contratación: objeto cierto, precio determinado, inmediatez y corto plazo, riesgo y ventura del empresario, etc., evolucionado hacia modelos en los que prima la negociación con el mercado y el reparto de riegos ante la incertidumbre que inevitablemente conlleva la adquisición de innovación y la apuesta por la investigación aplicada.*

En ese sentido, se debe tener en cuenta la necesidad de explicitar los beneficios que se obtienen del uso de esta modalidad de compra, de tal manera que se reduzcan las resistencias descritas.

Así también, se expone que la publicación de Banco de Desarrollo de América Latina CAF - titulada *"La compra pública como catalizador del ecosistema de govtech"*[46], los países de Iberoamérica más avanzados en CPI son España, Portugal y Brasil, seguidos de Chile, México, Uruguay, Colombia y Argentina, los cuales se encuentran en un proceso de adopción; mientras que Perú y Paraguay tienen un avance incipiente. En dicho estudio se señala que los criterios de análisis del nivel de desarrollo de CPI que obtienen mayor puntuación son el marco legal, seguido del diseño de política de CPI y la sofisticación de políticas de compra. Además, para implementar métodos ágiles de compra pública de innovación se recomienda el desarrollo de esquemas de financiamiento para la CPI, flexibilizar los procesos normativos de regulación y la incorporación de modelos de evaluación de iniciativas CPI.

Por su parte, según el estudio "Programa especial de fortalecimiento de la innovación para la competitividad" elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)[47]:

---

[45] Carrillo Donayre, Juan Antonio (2021): La compra pública de innovación: retos y oportunidades para el desarrollo de la I+d+i desde la demanda pública. Revista IUS ET VERITAS Nº 62, junio 2021. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/23894/22732/

[46] Recuperado de https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/02/la-innovacion-en-las-compras-publicas-puede-acelerar-el-ecosistema-govtech-en-iberoamerica/

[47] Recuperado de https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/Programa_Especial_de_Fortalecimiento_de_Innovaci%C3%B3n_para_la_Competitividad.pdf

- Una política de innovación es crucial para los países en vías de desarrollo, ya que la innovación y el aprendizaje, entendidos en sentido amplio son fundamentales para el crecimiento y la competitividad industrial y, por tanto, para disminuir las brechas con los países más desarrollados.

- Una política de innovación puede orientarse a resolver o mitigar determinados problemas de desarrollo (escasez de alimentos, enfermedades, desastres naturales, etc.), las condiciones económicas restrictivas (por ejemplo, las innovaciones en el sector financiero con la introducción de microcréditos) o estructuras (economía informal) que dominan la estructura económica de muchos países en desarrollo.

- Según el Índice de Innovación Global (en adelante IIG), publicado por la Universidad de Cornell, INSEAD, y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Perú obtiene un IIG de 32,5 sobre una escala de 0 a 100; valor bajo que lo ubica en la posición 71 de 128 países del mundo, y en la última posición de los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico. Paralelamente, el país obtiene una ratio de eficiencia en la innovación de 0.5 (que lo ubica en la posición 109 a nivel mundial). En la siguiente tabla se observa el score y ranking de Perú en los últimos años:

Calificación y posición de Perú en el índice de Innovación Global

Indicador	Año					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Score	30.34	34.10	35.96	34.73	34.87	32.51
Posición Global/N° Países	83/125	75/141	69/142	73/143	71/141	71/128
Posición LAC*	12	7	9	10	9	8

*LAC=Latinoamérica y el Caribe
Fuente: Datos del Global Innovation Index (WIPO, 2016)
Elaboración: CONCYTEC

Cabe señalar, que el Perú escaló 5 posiciones en el Índice Global de Innovación (IGI) 2022, situándose en el puesto 65 de 132 economías y, por segundo año consecutivo, mostró un rendimiento superior a su nivel de desarrollo, destacando como líder mundial en disponibilidad de préstamos de instituciones de microfinanzas. En la región ocupó el 6° lugar, mejorando 1 posición respecto al 2021, y lidera en los indicadores sobre capital humano e investigación (47°) y sofisticación del mercado (40°).

En esa línea, de acuerdo a la publicación *Impulsar la innovación para el crecimiento en América Latina y el Caribe a través de la Compra Pública*[48], realizada por la División de Competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo – BID se identifican 4 recomendaciones para el uso de la compra pública de innovación que son aplicables a las entidades contratantes y en si a todo el Sistema Nacional de Abastecimiento, las recomendaciones buscan mejorar la capacidad y disposición del Estado así como fomentar una cultura de uso de la compra pública de innovación

Recomendación	Detalle
Fomento de la conciencia y construcción de capacidades	Es importante diseminar las recomendaciones del estudio, demostrando el creciente interés en la *compra pública de innovación* y destacando la necesidad de aprendizaje cruzado entre países. Por ejemplo, se sugiere continuar el apoyo al trabajo de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Revisión de los criterios en las políticas de adquisiciones del banco	La inclusión de criterios amigables e incentivos para el uso de la *compra pública de innovación* de manera proactiva. Se recomienda utilizar la flexibilidad existente en la definición de criterios de selección durante la negociación de transacciones e incluir criterios pro-innovación siempre que sea posible.
Apoyo a los instrumentos que incorporan el lado de la demanda en la mezcla de políticas	La División de Innovación y Competitividad del BID podría fomentar el desarrollo de instrumentos de apoyo a la *compra pública de innovación* en los países, basándose en trabajos previos y fomentando la implementación exitosa de los primeros pilotos.

[48] *'Spurring Innovation-led Growth in Latin America and the Caribbean through Public Procurement'* https://publications.iadb.org/en/spurring-innovation-led-growth-latin-america-and-caribbean-through-public-procurement

de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)	
Fortalecimiento y promoción del uso de sistemas nacionales de adquisiciones públicas en operaciones financiadas por el BID	Se propone concentrarse en apoyar proyectos piloto que puedan servir de ejemplo, especialmente en países donde los sistemas nacionales de adquisiciones públicas permitan la introducción de procedimientos y criterios amigables con la innovación más fácilmente que con las reglas del BID.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo – BID
Elaboración propia.

En el mismo estudio se pueden identificar 6 recomendaciones para el manejo del riesgo que reviste esta modalidad, entre ellos: (i) Desarrollar y aplicar una metodología de gestión de riesgos específica para la *compra pública de innovación*; (ii) Capacitar y fortalecer las competencias de los compradores públicos; (iii) Uso de pilotos y contratos de prueba; (iv) Crear un fondo específico para cubrir los riesgos; (v) Fomentar los ecosistemas colaborativos de innovación; y (vi) Medidas de seguimiento y evaluación.

Así también de acuerdo a otra publicación del Banco Interamericano de Desarrollo[49], el comprador [público] no se decide a incorporar innovación a la prestación de sus servicios al no tener claras sus opciones de compra o no tener seguridad sobre cumplimiento de plazos y estándares de calidad; y por otra, los proveedores, temen arriesgar su inversión en el desarrollo de nuevos productos o servicios al no evidenciar una demanda clara que pueda rentabilizar dicha inversión.

Para esto han publicado 10 beneficios encontrados en los países que han utilizado la compra pública de innovación, estos son:

[49] Recuperado de https://blogs.iadb.org/innovacion/es/beneficios-de-la-compra-publica-de-innovacion/

Actor	Beneficio	Comentarios
compradores	**Permite conseguir ahorros.**	Si no consideramos aisladamente el costo de la contratación que incluye investigación y desarrollo (I+D) e innovación, y entendemos las compras en términos de "ciclo de vida de producto o servicio", incluyendo su mantenimiento posterior y gastos de operación, podemos ver que la *compra pública de innovación* nos permite conseguir ahorros en la prestación de los servicios públicos.
	Mejora los procesos.	El hecho de pensar en términos de problemas y no en soluciones, permite a las entidades públicas compradoras cuestionar de manera constante sus procesos y buscar nuevas maneras de hacer las mismas cosas, poniendo en valor el conocimiento que existe en el interior de las organizaciones.

Beneficios de la compra pública de innovación para los diferentes actores

promotores de innovación	Tiene un mayor impacto frente otros instrumentos.	Es un instrumento que clasifica dentro de las políticas de fomento de la innovación desde la demanda, las cuales según diferentes estudios tienen un mayor impacto que aquellas políticas de innovación que se enfocan en la oferta, incluso hasta 10 veces mayor en algunos casos. Además, el esfuerzo privado inversor se duplica frente al que se consigue vía subsidios públicos a la innovación en las empresas.
	Promueve la innovación abierta.	El introducir prácticas sistemáticas de identificación de retos en las entidades públicas compradoras y generar mecanismos para consultar al mercado sobre posibles soluciones, promueve de manera clara la innovación abierta.
	Facilita la internacionalización y el logro de más innovación.	Una de las preocupaciones de los promotores de innovación es la internacionalización de tecnología y el crecimiento de las exportaciones de empresas de alto valor añadido. En los procesos de *compra pública de innovación* los derechos de propiedad industrial se ceden a los proveedores en todo o en parte, permitiéndoles así poder internacionalizar los productos o servicios desarrollados, al tiempo que se vuelve más fácil producir innovaciones adicionales.
empresas proveedoras	Referencia abre puertas	"Es una herramienta muy positiva para pymes especializadas y que asuman el riesgo. Es un proceso demasiado enriquecedor como para perdérselo por los miedos. Puedo decir en este sentido, que soy un convencido de la *compra pública de innovación*, ya que a las pymes nos brinda la oportunidad de complementar nuestros servicios con una cartera más amplia de productos innovadores".

	Aporta entorno real y permite co-creación	Las empresas o universidades que participan en procesos de *compra pública de innovación* contarán con escenarios de prueba reales (hospitales, sistemas de transporte, colegios, etc.) para realizar sus pruebas y testeos. Esto es de enorme valor, no sólo por el disponer de un entorno de prueba real, sino por contar con el conocimiento del personal técnico de las entidades públicas en la co-creación de la solución.
	Comparte riesgos y beneficios	Las empresas ven a las entidades que lanzan un proceso de *compra pública de innovación* como un socio con el que compartir riesgos y beneficios. El hecho de contar con este aliado hace que se impliquen más en aportar recursos propios para los desarrollos de I+D e innovación.
tomadores de decisión públicos	Mejora la prestación de servicios a los ciudadanos	A través del desarrollo de la *compra pública de innovación*, las autoridades públicas conseguirán ofrecer a sus ciudadanos mejores servicios, alcanzando así una mayor satisfacción por parte de los usuarios.
	Desarrolla la cultura de innovación en las entidades públicas	El introducir la *compra pública de innovación* como una práctica sistemática dentro de las entidades públicas impacta en el desarrollo de una cultura de innovación y generación de herramientas de gestión de innovación: metodologías de ideación y levantamiento de retos, o ejercicios vigilancia tecnológica para determinar si estamos ante un reto realmente innovador. Todos estos elementos contribuyen a que las entidades públicas se vuelvan organizaciones innovadoras al servicio de los ciudadanos.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
Elaboración propia

f) Acuerdos Marco

El proyecto de norma del Poder Ejecutivo incorpora una disposición sobre Acuerdos Marco, señalando que a través de estos las entidades contratantes realizan en etapas el proceso de contratación, determinando en un primer momento los proveedores y/o condiciones que formarán parte del Acuerdo Marco y en otro la adjudicación del contrato, entre otros aspectos.
En la exposición de motivos de la mencionada propuesta normativa se señala que esta inclusión responde a la necesidad de regular, a nivel reglamentario, tipos de acuerdos marco que no utilicen necesariamente un Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

De igual forma, el proyecto normativo establece disposiciones especiales respecto de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, promoviendo que las entidades contratantes puedan efectuar sus contrataciones de manera directa, sin realizar procedimiento de selección para adquirir los bienes y servicios que se incorporen en dichos Catálogos como producto del perfeccionamiento de Acuerdos Marco.

Dicha exposición de motivos evidencia la información comparativa entre el periodo 2015 a 2021, remitida por Perú Compras sobre las contrataciones realizadas a través de esta herramienta, señalando que:

- Perú Compras inicia operaciones el 16 de marzo de 2016, existiendo a dicha fecha, 11 catálogos electrónicos divididos en 5 convenios marco. Esta herramienta fue rediseñada para posibilitar la realización de compras con competencia multi-marca, hacer obligatorio los descuentos por volumen con el objeto de lograr verdaderas economías de escala y disminuir la discrecionalidad de los operadores de la herramienta, reduciendo significativamente los riesgos de prácticas no deseadas.

- Desde el 2017 hasta 2021, Perú Compras incrementó a 41 los Catálogos Electrónicos operativos, agrupados en 25 Acuerdos Marco vigentes.

- El número de contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos, en comparación con el año 2015 (línea base antes de la entrada en operaciones de Perú Compras), para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se incrementó en 5.3%, 21.4%, 45.7%, 86.0%, 8.4% y 39.3%, respectivamente. Para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 los aumentos se dieron principalmente

por los incrementos de las órdenes de compra a través de los Catálogos de Útiles de escritorio, Papeles y cartones15 y Servicio de emisión de boletos aéreos; para los años 2020 y 2021, se dio principalmente por las órdenes de compras en los Catálogos Electrónicos de Papeles y cartones y Materiales e insumos de limpieza16.

- Los montos negociados a través de los Catálogos Electrónicos, en comparación al año 2015 (línea base), han disminuido en 27.0%, 41.9%, 25.8%, 15.7% y 3.9% para los años 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, respectivamente; los cuales se sustentan, principalmente, por la disminución en los montos contratados de los Catálogos Electrónicos de Computadoras de escritorio, Computadoras portátiles y Útiles de oficina, en donde se venían contratando (en el 2015) montos superiores a los S/ 232 millones de soles. En cambio, el monto para el año 2019 presentó un aumento del 13.3%, el cual se sustenta por la creación de nuevos Catálogos Electrónicos, así como por el considerable monto contratado en el Catálogo Electrónico de Computadoras de escritorio que alcanzó los S/ 398.84 millones de soles.

Asimismo, en lo que respecta al año 2020 la exposición de motivos señala que, debe tenerse presente que la disminución de los montos negociados obedece ineludiblemente a la suspensión de realizar procedimientos de selección en los periodos de cuarentena obligatoria y al poco uso de catálogos electrónicos sobre productos que no resultaban prioritarios en la emergencia sanitaria, debido al desarrollo de trabajo remoto como, por ejemplo, los catálogos electrónicos de útiles de escritorio y de papeles y cartones.

- Si bien en algunos años disminuyeron los montos contratados, el número de operaciones siempre se incrementó, por lo que se concluye que se redujo el gasto y se incrementó la compra, ello se explica en la obligatoria reducción de precios por el mecanismo de la gran compra.

Por último se señala que en el año 2022, se implementaron tres (03) Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (Productos de madera aserrada para uso estructural, Productos de madera aserrada para uso en encofrados y Calzado), siendo que con ello se cuenta con cuarenta y dos (42) Catálogos Electrónicos, de los cuales cuarenta (40) están destinados para la adquisición de bienes y dos (2) para la adquisición de servicios, agrupados en veinticinco (25) Acuerdos Marco, el detalle se encuentra en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2023-PE.

El uso de esta herramienta bajo el ámbito de aplicación de la Ley 30225, no ha significado cambios en la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, destacando el hecho del crecimiento del número de contrataciones generadas a través de éstos, así como el hecho que, debido a los ahorros generados, sea posible comprar más productos por menos dinero.

Este ahorro es consecuencia natural de lograr a través de la herramienta un incremento de las ofertas recibidas por compra. Con el proyecto de norma del Poder Ejecutivo, se busca la implementación de nuevos Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, puesto que constituye una modalidad de compra eficiente que reduce el número de procesos de contratación, previene efectivamente riesgos de corrupción y ayuda a obtener valor por dinero y, por ende, un mayor resultado posible en el uso de los fondos públicos.

3.4.2 Contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia

El proyecto de norma del Poder Ejecutivo, incorpora disposiciones específicas sobre contrataciones para atender situaciones de emergencia, definiéndose la "situación de emergencia" conforme al siguiente detalle:

a) Las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia y desastre del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
b) Las emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud.
c) Los estados de alerta o emergencia fito y zoosanitaria, declarados por la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria.
d) Las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado, o el orden público, tanto en el entorno físico o digital.
e) Las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural de la nación.

Ahora bien, es importante mencionar que, en los últimos años, en el Perú se ha incrementado la recurrencia y gravedad de los desastres asociados a fenómenos de origen natural, siendo uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel nacional por cuanto incide en la pobreza, el hambre y la desnutrición, al verse afectada la producción agrícola por los impactos de la naturaleza, así como por el abandono de las tierras de cultivo, lo que a su vez implica el desplazamiento de la población rural a la zonas

urbanas, generando mayor desempleo y pobreza, incrementando el sector informal. En ese contexto, reviste importancia la formulación y adopción de políticas públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres. Por ello, se aprobó la Ley N° 29664, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como lineamientos y demás normas complementarias para el cumplimiento de los mismos.

El SINAGERD es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, creado con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos; evitar la generación de nuevos riesgos; así como de encargarse de la preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

En esa misma línea, se aprobó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2022 - 2030, producto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres – SGRD de la PCM, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED y el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, así como de los demás integrantes del SINAGERD.

En el caso específico de las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia y desastre del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cabe indicar que en el Reglamento de la Ley N° 29664 se establecen las siguientes definiciones:

- Desastre: Conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana.

- Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.

En ese sentido, al encontrarse todas las Entidades del sector público bajo el marco del SINAGERD, la Ley hace referencia expresa al referido sistema al definirse qué se entiende por "situación de emergencia", de manera que se logre la articulación entre los Sistemas de Abastecimiento y de Gestión de Riesgos de Desastres.

De otro lado, cabe indicar que se reconocen también como "situaciones de emergencia" aquellas emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, así como las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado, o el orden público, las cuales también fueron reconocidas en la Ley N° 30225 y su Reglamento.

Asimismo, la Ley ha considerado pertinente incluir como un supuesto de situación de emergencia a los estados de alerta o emergencia fito y zoosanitaria declarados por la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, ante la inminencia del riesgo de introducción, diseminación o resurgencia, o ante la presencia de plagas o enfermedades en determinada zona geográfica del territorio nacional que representan riesgo para la vida y la salud de las personas, los animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1059, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria.

Adicionalmente, se reconoce como emergencia a las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública, que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural. Ello tiene como objetivo abarcar aquellos casos en los que, si bien no necesariamente se encuentren dentro del marco de las definiciones del SINAGERD, exista una inmediatez en el riesgo al que se está exponiendo la integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural, por situaciones de riesgo estructura o de ruina de una infraestructura pública.

Por último, la Ley establece tres formas en que las Entidades Contratantes podrán accionar respecto de estas situaciones de emergencia. La primera de ellas está relacionada con la prevención, estimación, reducción y preparación del riesgo que se produzca, para tal fin, podrán utilizar los procedimientos competitivos contemplados en la Ley, considerando las estrategias de ejecución contractual para emergencias que se definirán en el Reglamento, como los Acuerdos Marco Cerrados u otros, que permitan un abastecimiento eficiente de aquellos bienes, servicios y obras necesarios para

prevenir las situaciones de emergencia, en el marco del Plan Nacional de Emergencia de Riesgos y Desastres.

Al respecto, la Ley Nº 29964, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), señala que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que integra los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta y rehabilitación, y reconstrucción, tiene por objeto establecer las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones, procesos y protocolos de carácter plurianual necesarios para concretar lo establecido en su contenido.

Por ello, la primera forma para el accionar de las Entidades ante situaciones de emergencia, se encuentra relacionada con los artículos del Reglamento de la Ley Nº 29964 que desarrollan la estimación del riesgo, su prevención y reducción, así como la preparación para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

La segunda forma está referida a la atención específica de la emergencia, ya sea por su ocurrencia o por la inminencia de su ocurrencia, esta forma se encuentra directamente relacionada con el proceso de respuesta incluido en el Reglamento de la Ley Nº 29664, dado que el mismo se encuentra constituido por el conjunto de acciones y actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así como ante la inminencia del mismo. Para tal efecto, podrán utilizar el procedimiento de selección no competitivo, para contratar directamente con un proveedor especifico, o bien contratar con un proveedor no domiciliado, ambos reconocidos en la Ley, para lo cual no será necesario que acredite encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en dicho literal, sino únicamente sustentar la situación de emergencia en sí misma.

Asimismo, las Entidades se encuentran posibilitadas de utilizar el referido procedimiento de selección no competitivo durante el primer año luego de ocurrido el suceso de emergencia y/o desastre, para la contratación de inversiones de rehabilitación, dado que el tiempo inmediato luego de los hechos que configuran la emergencia es determinante para la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, entre otros.

Por su parte, la tercera forma se refiere a la utilización de los procedimientos de selección ad hoc competitivos señalados en el Reglamento de la Ley, que permitan que las contrataciones que sean necesarias para la rehabilitación y la reconstrucción sean

contratadas de forma oportuna, conforme a las definiciones y alcances establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Acerca de ello, debe indicarse que la Ley N° 29964 dispone que la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con diversos procesos, entre los que se encuentran la preparación, respuesta y rehabilitación: acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre.
Asimismo, respecto al proceso de reconstrucción, la Ley N° 29964 prevé que se trata de acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas.

Por su parte, el Reglamento de la Ley N° 29964, aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece que el proceso de rehabilitación es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre, agregando que se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción, mientras que el proceso de reconstrucción comprende las acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física y social, así como la reactivación económica de las comunidades afectadas.

De acuerdo con lo expuesto, la normativa de Contrataciones del Estado tiene como objetivo fundamental brindar las herramientas adecuadas para que las Entidades Públicas actúen de forma célere, eficiente y oportuna ante una situación de emergencia, resaltando que la oportunidad resulta vital en estos casos.

3.4.3 Herrmientas facilitadoras de las contrataciones públicas

a) Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop)

El Decreto Legislativo 5307/2022-CR que dispone la transparencia en los procesos de contratación de servicios de consultorías y similares requeridos por las entidades del

Estado, propone establecer la obligación de las entidades públicas de difundir la información detallada de los diversos contratos de servicios de consultorías y otros similares prestados a las entidades públicas del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, a fin de que las entidades de control público tomen conocimiento del uso eficiente de los recursos públicos.

Sobre el particular, esta iniciativa como parte de la transparencia que debe orientar a todos los procesos de contratación pública, se viene implementando a través del Portal de Transparencia Estandar (PTE) que se puede visualizar en www.gob.pe y en los portales de las entidades del Estado. En el PTE se ubica un rubro específico sobre información de contrataciones, en el cual se detallan las contrataciones de bienes, servicios y obras, así como las exoneraciones y contrataciones directas aprobadas y las órdenes de servicios.

La consolidación y evaluación de esta información corresponde ser sistematizada por el OECE en el marco de la administración del Pladicop que integra a toda plataforma que se utilice para salvaguardar el acceso y disponibilidad de la información sobre contrataciones dentro del ámbito de la presente ley, regímenes especiales y contratos menores, conforme se precisa en el artículo 41 de la propuesta normativa.

La importancia de la transparencia en las contrataciones del Estado ha sido corroborada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.° 020-2003-AI/TC, que señala que: *"En términos generales, el principio de transparencia estará garantizado cuando haya publicidad en la convocatoria, en el adecuado control de calidad en los productos a adquirir, en los resultados de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los recursos destinados a la compra en general."*

Estas disposiciones, en definitiva, pretenden constituirse en mecanismos para fomentar la integridad y transparencia en los procesos de contratación, que impacten en la problemática planteada en el Numeral VI del presente dictamen.

b) Estandarización de requerimientos

En concordancia a lo señalado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2023-PE, se promueve la estandarización de requerimientos como un mecanismo que coadyuva al desarrollo de contrataciones eficientes, independientemente del régimen de contratación aplicable.

Este proceso conlleva a uniformizar los términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución contractual de los bienes, servicios u obras, según corresponda, lo cual permite a las Entidades Contratantes efectuar compras conjuntas o agregadas, en vez de contrataciones de manera aislada, y así acceder a los beneficios de las economías de escala[50]

En esa línea, la mencionada exposición de motivos precisa que los instrumentos para la estandarización de requerimientos son la Ficha Técnica y la Ficha de Homologación, las cuales son de uso obligatorio para las Entidades Contratantes, con independencia del monto de contratación, salvo las excepciones previstas en el Reglamento, incluyendo aquellas contrataciones que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley o se sujeten a otro régimen de contratación.

El proceso de estandarización de requerimientos para generar Fichas Técnicas (utilizadas para contratar bienes y servicios comunes) es conducido y ejecutado por Perú Compras. En tanto, para efectivizar el empleo de la homologación, la Ley establece que el proceso de estandarización de requerimientos para generar Fichas de Homologación sea ejecutado por los Ministerios, a quienes les corresponde formular y aprobar las Fichas de Homologación referidas a los requerimientos dentro del ámbito de su competencia, con el acompañamiento de Perú Compras.

Se refuerza el rol de Perú Compras, quien lidera estos procesos, definiendo las condiciones que se debe tener en cuenta para la estandarización de requerimientos. En ese sentido, una vez estandarizados los bienes, servicios y obras, estas características y especificaciones resultan de obligatorio cumplimiento para las Entidades Contratantes.

Es importante que las Entidades elaboren y aprueben un plan de homologación de requerimientos; para tal efecto, la Ley dispone que los Ministerios deben conformar su Equipo de Homologación, sujetándose a las disposiciones que establezca Perú Compras.

Las disposiciones previstas en la Ley sobre la estandarización de requerimientos tienen sus antecedentes en la Ley 30225[51], mediante la cual se determinó la uniformización de los requerimientos, como una estrategia para promover una contratación estatal eficiente y transparente.

---

[50] El concepto de "economías de escala" se desarrolla en el marco de la Teoría de Costos, donde las empresas pueden ser más eficientes debido al ahorro en la ampliación de sus procesos de producción (por indivisibilidad de los equipos, especialización de labores, la imposibilidad de reducción en costos fijos y/o financiamiento, así como complejidades en la obtención de insumos). Por su parte, los precios se determinan por la interacción entre la Oferta y la Demanda.

[51] Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de julio de 2014, vigente desde el 09 de enero de 2016.

Mediante modificaciones normativas posteriores[52], se logra mayor impulso de los instrumentos para la estandarización de requerimientos, como son la Ficha de Homologación y la Ficha Técnica, dado que se establece la obligatoriedad de uso, para todas las contrataciones que realiza el Estado peruano, con independencia del monto y del régimen de contratación que le sea aplicable; asimismo, se determina el uso de procedimientos abreviados, para la selección de proveedores, en el caso de la Homologación, siendo que para la contratación de bienes y servicios comunes, ya se contaba con un procedimiento abreviado, la Subasta Inversa, con anterioridad a la emisión de los dispositivos señalados (véase el siguiente cuadro comparativo presentado en la mencionada exposición de motivos).

Cuadro comparativo de la Ley de Contrataciones del Estado

Estrategia de estandarización de requerimientos	Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873	Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; Ley de Contrataciones del Estado	TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Homologación	La homologación es un procedimiento que no se encontraba contemplado en dicha normativa.	***Artículo 17. Homologación de Requerimientos*** *Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación.*	***Artículo 17. Homologación de requerimientos*** *17.1 Los Ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan de homologación de Requerimientos conforme a las disposiciones*

[52] Tales como los Decretos Legislativos 1341 y 1444, publicados en el Diario Oficial "El Peruano" el 7.01.2017 y 16.09.2018, Respectivamente.

		Una vez aprobada la homologación deben ser utilizadas por las Entidades que se rijan bajo la Ley, incluyendo a las contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación.	*establecidas por la Central de Compras Públicas–Perú Compras. Una vez aprobadas las Fichas de homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación.* *17.2 La Central de Compras Públicas–Perú Compras promueve el proceso de homologación de los requerimientos, priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos identificados como estratégicos.* (Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444)
Subasta Inversa	***Artículo 15. Mecanismos de contratación*** *Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público, adjudicación*	***Artículo 26.*** *La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos*	***Artículo 26. Subasta inversa electrónica*** *26.1 La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos*

	directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar de manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversa o Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento (...).	*en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.*	*en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.* *26.2 La ficha técnica debe ser utilizada, incluso en aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación.* (Texto modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444)

De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2023-PE, estos cambios normativos han ido posicionando la estrategia de estandarización de requerimientos como medio para generar valor en la compra pública, puesto que los aspectos de calidad relativos a la definición de características, especificaciones y otras condiciones de la ejecución del contrato han sido determinados a los documentos estandarizados, según el nivel de uniformización que corresponda, y siguiendo procesos técnico-participativos, que involucran a diferentes actores según su relevancia para el proceso, tales como: los sectores, en su calidad de rectores, los organismos técnicos, los organismos especializados, los entes de supervisión y de control, las entidades contratantes, el mercado representado por los gremios y las empresas privadas (proveedores), la academia, los colegios profesionales, la sociedad civil organizada, y finalmente, también la participación ciudadana, como beneficiaria final en todos los servicios que provee las entidades contratantes del Estado.

La estandarización de requerimientos genera beneficios para las entidades públicas y para los proveedores, tales como:

Beneficios - Entidades públicas	
Calidad	La definición de características y especificaciones técnicas se sustentan en documentos técnico-normativos y se promueve la verificación de la calidad de los requerimientos durante la ejecución del contrato.

Objetividad	Se promueve la definición clara y objetiva de las características de los bienes o servicios, para una satisfacción adecuada de la necesidad.
Eficiencia	Se reducen los costos y los plazos al agilizar los procesos de formulación de requerimientos y los procedimientos de selección, generando compras oportunas y de calidad, con una mínima intervención de la Entidad Contratante.
Predictibilidad	Al contarse con Fichas de Homologación y Fichas de Subasta Inversa Electrónica publicadas, los proveedores disponen del tiempo necesario para la formulación de ofertas.
Transparencia	Las Fichas de Homologación y Fichas de Subasta Inversa Electrónica se elaboran siguiendo un proceso público que convoca la participación de todos los actores interesados: Entidades Contratantes, proveedores, gremios, academia, sociedad civil organizada, ciudadanía, entre otros.
Competencia	Se promueve la agregación de la demanda, lo que incrementa condiciones ventajosas de compra para el Estado, accediendo a los beneficios de la economía de escala.
Gestión por resultados	En la Homologación los Ministerios cuentan con una herramienta ágil y eficiente para la implementación de las Políticas Públicas en las que ejercen rectoría.

Beneficios - Proveedores	
Competitividad	Al contar con un requerimiento estandarizado, los proveedores aumentan sus posibilidades de abastecer a más de una Entidad Contratante con el mismo bien o servicio, favoreciendo la especialización en la oferta.
Predictibilidad	La demanda predictiva del Estado permite a los proveedores planificar sus ventas, explorar nuevas oportunidades de negocio y mejorar su capacidad de respuesta para atender al Estado.
Objetividad	La definición clara y objetiva de las características de los bienes o servicios que requiere el Estado facilita a los proveedores la formulación de ofertas competitivas.
Transparencia	Promueve la participación de los proveedores en la formulación de los requerimientos, a través de la publicación de los proyectos de documentos estandarizados de compra, antes de su aprobación.

En ese sentido, la estandarización de los requerimientos de lo que contrata el Estado, ofrece modernización, transparencia, simplificación en la optimización de los procesos de contratación pública, cuyo eje transversal, adicionalmente, apoya la lucha contra la corrupción, al reducirse la facultad discrecional en la determinación de requerimientos.

Asimismo, sobre la base de dichos instrumentos de estandarización de requerimientos, se contribuye a que los ministerios y sus organismos, programas y proyectos especiales adscritos, cumplan los objetivos y metas trazadas en sus políticas nacionales y/o sectoriales.

Como puede apreciarse, a razón de la metodología del proceso de estandarización de requerimientos y del involucramiento de actores, se promueve la articulación del Estado, no solo a nivel de instituciones de los tres niveles de gobierno, sino también una articulación con los agentes privados, lo que trae como externalidad positiva del proceso, la generación de confianza en el SNA.

En virtud de lo expuesto, Perú Compras, en el marco de sus funciones y bajo el amparo de la normatividad de contratación pública vigente generó, a través de los instrumentos de uniformización y/o estandarización de requerimientos, Fichas Técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y mediante su acompañamiento y asistencia técnica a los Ministerios ha promovido la aprobación de Fichas de Homologación.
Así también, de acuerdo a la información presentada en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2023-PE, se verificó que, a través de la página institucional de Perú Compras a junio del 2023, se tiene:

- 1588 Fichas Técnicas en los rubros de salud, construcción, alimentación y textil dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes.
- 332 Fichas de Homologación aprobadas por los ministerios.

c) Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y en coincidencia con el texto sustitutorio incorpora una disposición sobre Acuerdos Marco, señalando que a través de estos las entidades contratantes realizan en etapas el proceso de contratación, determinando en un primer momento los proveedores y/o condiciones que formarán parte del Acuerdo Marco y en otro la adjudicación del contrato, entre otros aspectos. Al respecto, cabe señalar que esta inclusión responde a la

necesidad de regular, a nivel reglamentario, tipos de acuerdos marco que no utilicen necesariamente un Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

De igual forma, el texto sustitutorio establece disposiciones especiales respecto de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, promoviendo que las entidades contratantes puedan efectuar sus contrataciones de manera directa, sin realizar procedimiento de selección para adquirir los bienes y servicios que se incorporen en dichos Catálogos como producto del perfeccionamiento de Acuerdos Marco.

Perú Compras, en el documento denominado "Informe anual sobre el impacto de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado en las contrataciones públicas"[53], con relación con la información comparativa entre el periodo 2015 a 2021, sobre las contrataciones realizadas a través de esta herramienta, señala que:

- Perú Compras inicia operaciones el 16 de marzo de 2016, existiendo a dicha fecha, 11 catálogos electrónicos divididos en 5 convenios marco. Esta herramienta fue rediseñada para posibilitar la realización de compras con competencia multi-marca, hacer obligatorio los descuentos por volumen con el objeto de lograr verdaderas economías de escala y disminuir la discrecionalidad de los operadores de la herramienta, reduciendo significativamente los riesgos de prácticas no deseadas.

- Desde el 2017 hasta 2021, Perú Compras incrementó a 41 los Catálogos Electrónicos operativos, agrupados en 25 Acuerdos Marco vigentes.

- El número de contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos, en comparación con el año 2015 (línea base antes de la entrada en operaciones de Perú Compras), para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se incrementó en 5.3%, 21.4%, 45.7%, 86.0%, 8.4% y 39.3%, respectivamente. Para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 los aumentos se dieron principalmente por los incrementos de las órdenes de compra a través de los Catálogos de Útiles de escritorio, Papeles y cartones[15] y Servicio de emisión de boletos aéreos; para los años 2020 y 2021, se dio principalmente por las órdenes de compras en los Catálogos Electrónicos de Papeles y cartones y Materiales e insumos de limpieza[16].

- Los montos negociados a través de los Catálogos Electrónicos, en comparación al año 2015 (línea base), han disminuido en 27.0%, 41.9%, 25.8%, 15.7% y 3.9% para los años

[53] Remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Oficio 000132-2022-PERÚ COMPRAS-GG, de fecha 23 de mayo de 2022.

2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, respectivamente; los cuales se sustentan, principalmente, por la disminución en los montos contratados de los Catálogos Electrónicos de Computadoras de escritorio, Computadoras portátiles y Útiles de oficina, en donde se venían contratando (en el 2015) montos superiores a los S/ 232 millones de soles. En cambio, el monto para el año 2019 presentó un aumento del 13.3%, el cual se sustenta por la creación de nuevos Catálogos Electrónicos, así como por el considerable monto contratado en el Catálogo Electrónico de Computadoras de escritorio que alcanzó los S/ 398.84 millones de soles.

Asimismo, en lo que respecta al año 2020, debe tenerse presente que la disminución de los montos negociados obedece ineludiblemente a la suspensión de realizar procedimientos de selección en los periodos de cuarentena obligatoria y al poco uso de catálogos electrónicos sobre productos que no resultaban prioritarios en la emergencia sanitaria, debido al desarrollo de trabajo remoto como, por ejemplo, los catálogos electrónicos de útiles de escritorio y de papeles y cartones.

Si bien en algunos años disminuyeron los montos contratados, el número de operaciones siempre se incrementó, por lo que se concluye que se redujo el gasto y se incrementó la compra, ello se explica en la obligatoria reducción de precios por el mecanismo de la gran compra.

El uso de esta herramienta bajo el ámbito de aplicación de la Ley 30225, no ha significado cambios en la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, destacando el hecho del crecimiento del número de contrataciones generadas a través de éstos, así como el hecho que, debido a los ahorros generados, sea posible comprar más productos por menos dinero.

Este ahorro es consecuencia natural de lograr a través de la herramienta un incremento de las ofertas recibidas por compra. El promedio de ofertas por compra a través de los Catálogos Electrónicos al cierre del año 2020 asciende a 22 ofertas por compra, lo que reduce los riesgos de comportamientos no deseados de parte de los proveedores, como determinación de precios, concertación o formación de cárteles, riesgos que se producen cuando el número de oferentes en la contratación pública es bajo.

d) Mecanismos diferenciados de Adquisición (MDA)

De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, las enfermedades de alto costo, también llamadas enfermedades catastróficas,

hacen referencia a un conjunto específico de enfermedades de baja prevalencia que tiene un alto impacto económico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de enfermedades involucran tratamientos que generan un costo directo mayor al 40% del ingreso del hogar (Parra-Baltazar, et al., 2016; OMS, 2005).

Las Enfermedades Raras o Huérfanas[54], en adelante ERH, son definidas como enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica. Estas enfermedades son poco frecuentes y, en conjunto, afectan a 6-8% de la población mundial. Estas enfermedades presentan dificultades para ser diagnosticadas o efectuar su seguimiento, por lo que conllevan a múltiples problemas sociales (Barakat, et al., 2014).

Las ERH y las enfermedades de alto costo suelen requerir tecnologías sanitarias específicas —como procedimientos, vacunas, medicamentos, dispositivos médicos o pruebas de diagnóstico *in vitro*— para la prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia, rehabilitación o cuidados paliativos. Sin embargo, a pesar de los recientes avances, el acceso a tecnologías sanitarias seguras, eficaces, de calidad y asequibles se mantiene como una preocupación a nivel mundial. Por tal razón, representan un reto para la salud y requieren atención urgente (OMS, 2020).

Por las características mencionadas, tanto las ERH como las enfermedades de alto costo generan un impacto negativo en el presupuesto familiar, lo que origina la insolvencia financiera temporal o definitiva en las familias. Por ello, el financiamiento de estas enfermedades suele ser insostenible desde el gasto de bolsillo y así, el financiamiento público cobra vital importancia (Tobar, 2010). Esto se encuentra respaldado por declaraciones de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, quienes en una entrevista afirmaron la importancia de establecer un plan de contingencia, puesto que solo el 3% de individuos, con elevado poder adquisitivo, pueden tener un gasto de bolsillo suficiente para cubrir las pruebas requeridas en estas enfermedades.

En el Perú, desde el año 2009, se viene aplicando la estrategia de Aseguramiento Universal de Salud tal como lo indica la Ley 29344, la cual establece el marco normativo del aseguramiento universal en salud, el acceso y las funciones de regulación, financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento. Posteriormente, se toma una decisión acelerada por la pandemia al emitirse el Decreto de Urgencia 046-2021, que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el aseguramiento universal en salud en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19,

[54] RM 109-2022-MINSA.

uno de cuyos efectos es el lograr un aseguramiento en salud en el país que alcanza al 98% aproximadamente (Susalud, 2022). Esta cobertura nominal importante, a pesar de que incluye el Plan complementario del Seguro Integral de Salud (SIS), no es efectiva por limitaciones en el financiamiento aun persistentes y limitaciones de la oferta pública de servicios.

En ese sentido, en el Perú, existe el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) que pertenece al pliego presupuestal del SIS y que se encarga de financiar las atenciones de salud a las personas que padecen de alguna ERH o enfermedad de alto costo. El primer grupo comprende 456 códigos CIE-10 que se encuentran en la Lista de ERH[55]; y el segundo refiere a los 7 tipos de cáncer más frecuentes y a la insuficiencia renal crónica (IRC), los cuales se ubican en la Lista de enfermedades de alto costo[56]. No obstante, cabe resaltar que el financiamiento de FISSAL no es equitativo entre estos últimos grupos, sino que se concentra en el tratamiento para IRC, generando que la asignación de recursos a los casos de cáncer sea relativamente pequeña (OPS, 2020).

El Seguro Social de Salud (EsSalud) también brinda cobertura a tecnologías de alto costo que se encuentran en el Listado de Medicamentos de Alto Costo Supervisados, la cual pertenece a su Petitorio Farmacológico y que se revisa bienalmente para su actualización[57]. Cabe recalcar que, de manera excepcional, un paciente puede solicitar el uso de un producto farmacéutico no incluido en el Petitorio Farmacológico en casos de patologías complejas[58].

A pesar de lo mencionado, los elevados costos que suponen estas enfermedades obligan al sistema de salud público a buscar estrategias para no perjudicar su sostenibilidad financiera. En esa línea, algunos países han implementado instituciones públicas que se encargan de realizar evaluaciones técnicas y económicas de las tecnologías sanitarias y que se hacen cargo de definir qué es lo que debe ser cubierto con los recursos públicos.

En el Perú, existen cuatro instituciones de salud[59] que realizan evaluación de tecnologías sanitarias (ETS); sin embargo, presentan deficiencias en temas metodológicos, conexión institucional, entre otros, siendo que, además, no abordan el reto del acceso a tecnologías

[55] RM 230-2020-MINSA.
[56] RM 325-2012- MINSA.
[57] Directiva 01-IETSI-EsSalud-2017.
[58] Directiva 003-IETSI-EsSalud-2016.
[59] Las entidades son Institución Nacional de Salud (INS), EsSalud, el Ministerio de Salud a través de su Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

sanitarias de alto costo de una manera sistemática, con intervenciones que vinculen a los diferentes procesos involucrados.

Medido en términos de volumen, el sector público es el comprador más importante de tecnologías sanitarias en el país. Sin embargo, medido en términos monetarios, la situación se invierte y es el sector privado quien tiene el protagonismo. Esto ocurre porque el sector público compra, principalmente, tecnologías genéricas o sin patente, las cuales representan costos más bajos. No obstante, las tecnologías para ERH o para enfermedades de alto costo suelen ser innovadoras, contar con patentes y presentar un alto costo (Ugarte, 2019).

La oferta de este tipo de tecnologías se centra en los laboratorios farmacéuticos[60] que producen medicamentos innovadores. Al producir tecnologías sanitarias innovadoras, estas suelen contar con patentes que duran, en promedio, 20 años y generan un monopolio durante ese tiempo. Sin embargo, también se aprecia una oferta creciente de productos biosimilares que son manufacturados por distintas empresas asentadas en diferentes países. En cualquier escenario, es fundamental que el Estado peruano cautele una oferta segura, eficaz y de calidad de estas tecnologías sanitarias accesible a los ciudadanos.

(...) La contratación de tecnologías sanitarias es compleja, puesto que depende de la interrelación de tres procesos distintos con marcos normativos diferentes. El primero corresponde a la regulación de las tecnologías, las cuales deben cumplir con criterios de seguridad, eficacia y calidad[61]. Estas tecnologías, para ser financiadas, deben ser ponderadas previamente mediante ETS[62] y cumplir con criterios de costo-efectividad. Además, para abastecerse de dichas tecnologías, se debe emplear los procedimientos de selección establecidos[63] en la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, un grave problema se origina porque la regulación no está adaptada para la contratación de tecnologías sanitarias de alto costo en el sector salud. Por tal razón, no se contempla el uso de mecanismos especiales que permitan un enfoque de riesgo

---

[60] En el país hay laboratorios farmacéuticos productores e importadores agrupados en diferentes gremios empresariales: Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, Sanitarias, de Suplementos Alimenticios y Dispositivos Médicos (ADIFAN) que agrupa a productores nacionales; ALAFARPE, a empresas innovadoras de alcance global; Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL), a laboratorios farmacéuticos latinoamericanos; y el gremio COMSALUD de la Cámara de Comercio de Lima, que agrupa a empresas importadoras y productoras de distinto origen.

[61] La Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, es la que define y establece principios, normas, criterios y exigencias básicas de estos productos en concordancia con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos.

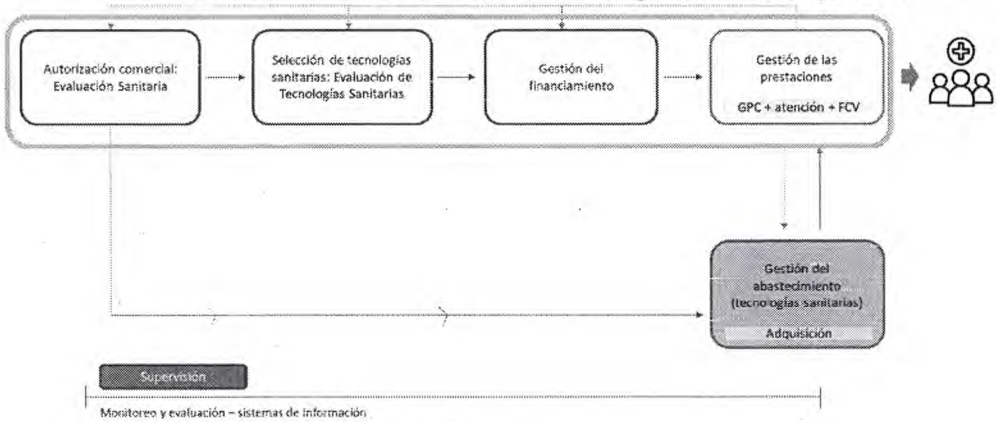
[62] Según RM 190-2020-MINSA, se conforma la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA), la cual proponer criterios y metodología para priorización de las ETS.

[63] Según el Texto Único Ordenado de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

compartido[64] para el caso de tecnologías innovadoras. Si bien la Ley 31336, Ley Nacional del Cáncer, ha dado un primer paso al proponer el uso de Acuerdo de Riesgo Compartido[65] de tecnologías sanitarias orientados a enfermedades oncológicas, esto aún no ha tenido sustento en las anteriores normas de contrataciones del Estado.

No obstante lo indicado, el proceso de gestión de adquisición de tecnologías sanitarias —en particular, el referido a las consideradas de alto costo— presenta diversas restricciones, las cuales dificultan el acceso a tecnologías seguras, eficaces y de calidad de manera oportuna y sostenible.

Procesos del SNS relacionados a la gestión de adquisición



Elaboración: Videnza Consultores

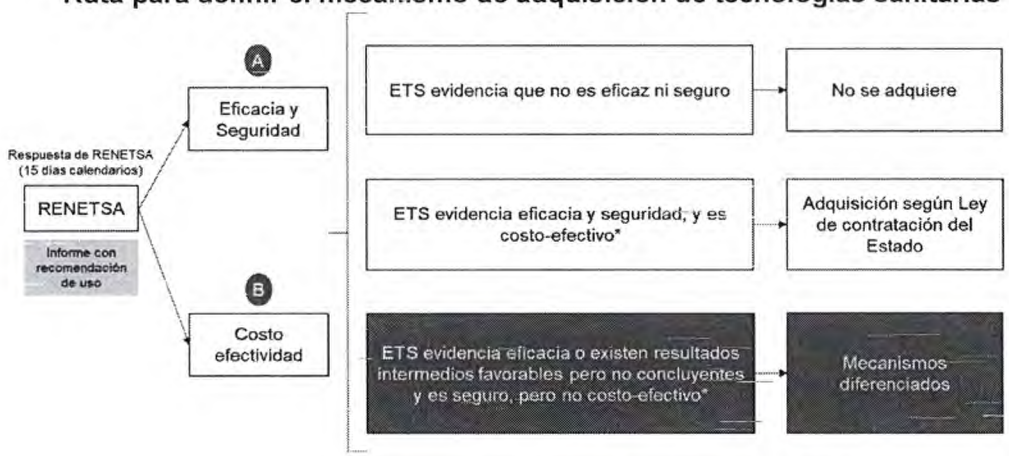
Como pueda observarse en la ilustración, los procesos del SNS relacionados a la gestión de adquisición abarcan la autorización sanitaria, la selección de tecnologías sanitarias, la gestión del financiamiento y la gestión de las prestaciones. Esta configuración indica que la gestión del abastecimiento es el principal soporte de la gestión de las prestaciones. En paralelo, su desempeño es modulado por desarrollo de la prestación en sí misma, que actúa como el proceso usuario y por los otros procesos mencionados que la anteceden, de los cuales depende en una lógica de cadena de valor.

[64] Los mecanismos de riesgo compartido corresponden a esquemas que, en su complejidad, intentan resolver distintivamente incertidumbres propias de la introducción de tecnologías de alto costo unitario por la vía de comprometer desempeño financiero o clínico, alinear incentivos, explicitar y administrar riesgos (Paredes & Lenz, 2019).

[65] La Ley Nacional del Cáncer aborda los ARC bajo la denominación de mecanismos diferenciados de adquisición.

Tomando en cuenta lo anterior, el empleo de las ETS es fundamental para la toma de decisiones. De esta forma se busca elegir tecnologías eficaces, seguras y costo-efectivas. No obstante, las tecnologías de alto costo no siempre cumplen con este último criterio, incluso, en muchas ocasiones, no se cuenta con información suficiente y, por ende, presentan mayor grado de incertidumbre. Esto es algo que suele ocurrir con las tecnologías destinadas a ERH, las cuales, adicionalmente, son necesarias para un grupo muy reducido de pacientes. En esos casos, la adquisición podría considerarse valiosa por criterios adicionales, como los sociales. Por esa razón, un abordaje multicriterio al momento de evaluar su compra es vital, tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Ruta para definir el mecanismo de adquisición de tecnologías sanitarias



* Idealmente bajo el criterio de determinación de umbrales

Fuente: Minsa
Elaboración Videnza Consultores

No obstante, es necesario tener cuidado con la implementación de los ARC, ya que por sí solos no resuelven todos los problemas de acceso a tecnologías sanitarias. En este punto, vuelve a tomar importancia un diseño e implementación sistémico, que considere a todos los procesos de manera holística, de otro modo, la solución no será sostenible por diversos motivos (Ferrario, et al., 2017).

Además, será necesario que los mecanismos permitan el financiamiento de la investigación de tecnologías para aliviar las necesidades médicas actuales no satisfechas. Se considera, por el momento, que los ARC son un primer paso para ir solucionando la falta de acceso a tecnologías sanitarias de alto costo (Ferrario, et al., 2017).

Desde el enfoque de contratación pública, se ha considerado la posibilidad de que CENARES, así como aquellas Entidades Contratantes designadas por el Ministerio de Salud, pueden celebrar Acuerdos de Riesgos Compartidos para contratar las tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, y de enfermedades de alto costo, dejando para el Reglamento, los criterios y condiciones para el uso de los indicados acuerdos.

Las anteriores normativas de contrataciones del Estado no contemplaban mecanismos que faciliten la adquisición de tecnologías sanitarias de alto costo o empleados en ERH. En ese sentido, existe sustento para emplear los ARC. Las nuevas actividades a desplegar, con este propósito, deben tener la característica de ser trazables en todos los procesos de abastecimiento y uso. Si bien es cierto que el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer ya contempla los ARC para tecnologías oncológicas, la presente propuesta normativa amplia la posibilidad de utilizarlos para enfermedades raras y huérfanas y enfermedades de alto costo.

3.5 Proceso de Contratación

El proceso de contratación pública es el hilo conductor en el que los actores, principios, enfoques, por un lado, y las fases, las modalidades y tipos de contratación, así como los mecanismos alternativos de resolución de controversias, por otro, se articulan con el propósito de conseguir los fines públicos para los que se adquieres bienes, servicios y obras.

En ese orden de ideas, es gravitante que la ley de contrataciones públicas responda de manera estratégica e integral a la evidente necesidad de contar con disposiciones oportunas, simples, claras y eficaces, que aseguren la participación de los actores desde el sector público, como del sector privado. Así también, debe responder a la urgencia de modernizar la contratación pública en todos los niveles de gobierno.

Las 3 fases del proceso de contratación: a) Actuaciones preparatorias; b) Selección; c) Ejecución contractual, son desarrolladas en la norma objeto del presente dictamen, a fin

de establecer los conceptos generales y la orientación que el reglamento y demás regulaciones complementarias deben de observar.

De esta manera, al poder observar cada una de las fases y sus características, las obligaciones y responsabilidades, se evidencia las necesidades de recursos, decisiones y enfoques que las entidades contratantes han de procurar a fin de cumplir la ley.

3.5.1 Actuaciones Preparatorias

a) Elaboración del requerimiento

El punto de inicio del proceso de contratación pública se da al elaborar el requerimiento, para esto las entidades contratantes deben partir de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, como documento que refleja la planificación realizada en torno a las prioridades de atención de la entidad.

La planificación de las contrataciones públicas a realizar, forma parte integral del Sistema Nacional de Abastecimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1439[66]. Cabe resaltar el aseguramiento de la programación presupuestaria correspondiente en cada requerimiento, con el fin de evitar pausas y retrasos en la ejecución de los contratos y por ende la afectación directa a los beneficiados por las adquisiciones de bienes, servicios u obras según corresponda.

Como ya se ha señalada en párrafos precedentes, el rol del área usuaria o área técnica estrategia acarrea la responsabilidad de la coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones dentro de la entidad para la determinación de requerimientos que ayuden a cumplir la finalidad pública y objetivos de contratación.
La elaboración del requerimiento debe observar, tal como lo sugiere la Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública (MAPS, Methodology for Assessing

---

[66] **Artículo 12.- Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras**
12.1 La Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, como parte del Proceso de Programación de Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público; así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública.
12.2 La Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla a través de la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades.
Artículo 13.- Cuadro Multianual de Necesidades
13.1 El Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un período no menor de tres (3) años.
13.2 Para la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades se requiere de los siguientes insumos:
1. La Programación Multianual de Inversiones.
2. Información del Catálogo Único de Bienes y Servicios.
3. Información del Registro Nacional de Proveedores.

Procurement Systems) de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos – OCDE[67]:

1. Análisis exhaustivo de las necesidades, enlazada a la planificación y a la información del mercado para poder identificar las estrategias de contratación más beneficiosas para la entidad contratantes.
2. Definición de los resultados que se buscan alcanzar con la contratación pública, debe darse de manera clara y teniendo en cuenta los impactos económicos, ambientales y sociales de acuerdo a las prioridades de política pública del sector, especialmente en contrataciones de alto impacto o relevancia.
3. Descripción de los requisitos de manera fácil de comprender por los futuros proveedores, a tenor de la rigurosidad de cada bien, servicio u obra de manera específica.

Las condiciones de igualdad, la no obstaculización de la competencia o el no direccionamiento del proceso a determinado proveedor, son condiciones fundamentales para conducir el procesos de contratación de manera que se alinea a los principios ya expuestos, esto impacta de manera directa a la confianza que se genera en el mercado de la contratación pública, en el que para bien de las entidades contratantes, y del Estado en general, se debe procurar contar con la mayor cantidad de ofertas y así conseguir condiciones, precios y plazos que optimicen el uso de recursos públicos.

La precisión al elaborar las especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios), expediente técnico de obra u objetivos funcionales (obras y mantenimiento vial), en este caso particular se dispone el contar con una estructura de costos definida de acuerdo a las especialidades que demanda la complejidad del proyecto.
En el caso de los contratos estándar de ingeniería y construcción de uso internacional y las compras públicas de innovación, pueden plasmarse en los objetivos funcionales o en aquellos documentos en los que obre el alcance según corresponda al objeto contractual.

b) Interacción con el mercado

Respecto de la ley vigente, la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, hay una variación del término 'indagación' por 'interacción' con el fin de proporcionar una mirada más amplia a la acción de las entidades contratantes al momento de buscar perfeccionar el requerimiento, en tanto mediante la interacción de mercado se determina la existencia de

[67] Información de la metodología en https://www.mapsinitiative.org/es/metodologia/

oferta y competencia, se estima el presupuesto que se requiere así como se identifica la modalidad de contratación pública eficiente que corresponde para alcanzar el fin público. Esta variación de termino se encuentra en conformidad con lo mencionado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 5472/2022-PE.

A partir del proceso de contrataciones públicas se genera una relación entre los proveedores y el Estado encarnado por las entidades contratantes. Hoy en día esta dinámica se traduce en un enfrentamiento entre las partes, con un ánimo persecutorio, dilatorio y lejano a la buena fe; en ese marco la propuesta normativa busca que el intercambio de información, por ende, la comunicación y articulación, se dan en un marco de transparencia y veracidad. Es así que la responsabilidad de las entidades contratantes respecto del mercado es tangencial para fortalecer el mercado de la compra pública.

Entendiendo que la competencia es la rivalidad efectiva entre empresas en un mismo mercado, el cual incentiva la reducción de precios, la mejora de las condiciones que se ofrecen al comprador en tanto calidad e innovación, así como observar medidas anti corrupción y anti soborno, las entidades contratantes deben buscar la participación de nuevos y mejores postores, generando así un mayor valor por dinero.

La promoción de la competencia y su incidencia positiva en el mercado de la compra pública, recae en la capacidad de las entidades contratantes para planificar, programar y anticipar los requerimientos que serán objeto de contratación. Es aquí que la estrategia de contratación cobra mayor sentido, al generar la necesidad de comunicar a los ofertantes de manera transparente, oportuna y completa la información suficiente para conseguir mejores ofertas en beneficio de la ciudadanía, con el único propósito de cumplir con el fin público.

Para las entidades contratantes, el acercamiento con el mercado les permitirá perfeccionar sus requerimientos, identificar formas de mejorar sus procesos, alentar mejores ofertas, conocer cómo piensa el mercado y educarlo con el fin de que tenga claro que las contrataciones públicas se rigen, entre otros, por el principio de valor por dinero[68].

Por su parte, la interacción con el mercado permitirá a los proveedores comprender la diferencia que existe entre las compras que realiza el sector público y las que realiza el sector privado, replantear su estrategia con el fin de que sus futuras ofertas sean más exitosas, entre otras[69].

---

[68] Exposición de Motivos del Proyecto de ley 5472/2022-PE, Pág. 37
[69] Ídem

Finalmente, la interacción con el mercado es un mecanismo fundamental para que las entidades contratantes cuenten con información desde la oferta que les permita mejorar la selección de bienes, servicios u obras que pretenden adquirir; es decir, comprende la indagación de mercado que hoy figura en la ley vigente y que con la propuesta de norma se ve complementada.

c) Cuantía de la contratación

De la evaluación realizada por el Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma de contratación pública, se ha concluido que el establecer un monto fijo referencial para el caso de obras y consultoría de obras puede resultar contrario al principio de valor por dinero, toda vez que no genera una competencia real entre los postores, quienes solo ofertan en un rango de entre el 90% y el 110%, sin que haya una competencia real a nivel técnico, y con una competencia limitada a nivel económico, lo que en lugar de promover ahorros hace que los postores traten de acercarse al 90% del alor referencial aun cuando los costos de los expedientes técnicos ya se encuentran por debajo de su real costo, confiados en la obtención de adicionales por deficiencias en el expediente técnico.

Asimismo, cabe indicar que, en los sistemas de entrega de obra diferentes al tradicional, la información que se brinda a los postores es limitada, por lo que no resulta conveniente establecer un valor referencial para las ofertas, bastando su estimación para la asignación presupuestal correspondiente.

De otro lado, cabe indicar que se busca que la interacción con el mercado no tenga como único objetivo la obtención de un valor económico, sino que esté centrada en la mejora del requerimiento, toda vez que, en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras del sistema nacional de abastecimiento, es durante la programación que este monto debe ser calculado de la manera más precisa posible, lo que facilitará la asignación presupuestaria correspondiente.

En ese sentido, se plantea el uso del concepto de cuantía de contratación.a fin de promover la aplicación del principio de valor por dinero de tal manera que las entidades contratantes accionen en el marco de discrecionalidad con rigor técnico de las decisiones, considerando los fines e interés público que motiva cada adquisición, siendo el precio una variable a considerar, pero no la único o primordial de acuerdo a cada proceso de contratación.

d) Estrategia de contratación

Se señala que la estrategia de contratación es el proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública, considerando los enfoques de la presente ley según corresponda, elaborada por la dependencia encargada de las contrataciones, en atención a la planificación de la entidad contratante a través de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras para la atención de las necesidades dentro de su ámbito de acción.

Ahora bien, es fundamental que la entidad contratante identifique su necesidad de manera correcta y suficiente, para esto debe estar abierta a recibir información del mercado, propendiendo a la adquisición de soluciones que cumplan con los objetivos de la contratación.

Por lo tanto, es preciso que la entidad contratante de acuerdo a la recomendación de la OCDE[70] deba *elaborar una estrategia adecuada para la integración de los objetivos secundarios de política en los sistemas de contratación pública. En relación con los objetivos secundarios de política a cuyo logro va a colaborar la contratación pública, deberán desarrollarse una adecuada planificación, un análisis de referencia y una evaluación de riesgos, y deberán establecerse los resultados previstos, todo ello de cara al desarrollo de los oportunos planes de acción o directrices de puesta en marcha.*

Para que una entidad contratante cuente con una estrategia de contratación, es necesario que esta planifique la atención de sus necesidades con las herramientas que proporciona el Sistema Nacional de Abastecimiento, como son la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, el Cuadro Multianual de Necesidades, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, el Registro Nacional de Proveedores, entre otros que el ente rector vea por conveniente para asistir y orientar a las entidades contratantes en la modernización de la contratación pública.

De esta manera y conjuntamente con los otros instrumentos de gestión, la contratación pública será eficiente, eficaz y oportuna, evitando retrasos, falta de financiamiento y vacíos en los detalles de los requerimientos, otorgándole a la contratación pública estándares de

[70] OCDE (2015). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública (V recomendación) precisa que los países adherentes reconozcan que todo uso del sistema de contratación pública que pretenda conseguir objetivos secundarios de política deberá sopesar estas finalidades frente al logro del objetivo principal de la contratación, para ello (ii) elaboran estrategias en base a la planificación. Consultado en https://web-archive.oecd.org/2019-11-14/401029-OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf Pag. 9

confianza para la participación decidida y dinámica de más potenciales proveedores del Estado.

En esa línea y, de acuerdo a la recomendación de la OCDE[71] se debe tener en cuenta la necesidad de *fomentar la presupuestación y financiación plurianuales para optimizar el diseño y la planificación del ciclo de la contratación pública. Debe aprovecharse la flexibilidad que las opciones plurianuales de financiación – siempre que estén justificadas y con la oportuna supervisión – pueden proporcionar, pues permiten evitar la toma de decisiones de contratación que no asignan adecuadamente los riesgos o que resultan ineficaces en razón de una normativa presupuestaria estricta y de una asignación ineficiente.*

Así también, y en el mismo marco la OCDE recomienda *"armonizar, en lo posible, los principios por los que se rige la contratación pública en las distintas tipologías de prestaciones de servicios públicos, incluidas las de obras públicas, las alianzas entre el sector público y el privado y las concesiones. Para la prestación de servicios mediante acuerdos con socios privados, que pueden presentar una gran variedad, los Adherentes deberán garantizar el mayor grado posible de armonización entre los marcos e instituciones que rigen la prestación de servicios públicos, con el fin de estimular la eficiencia de los participantes públicos y ofrecer previsibilidad a los participantes del sector privado".*

Debe tenerse presente que una adecuada planificación en etapas tempranas de definición de los procesos de contratación y el alcance de los requerimientos durante la etapa de actuaciones preparatorias permitirá que las etapas de las fases de selección y ejecución contractual se realicen en cumplimiento del principio de valor por dinero y no estén sujetas a cambios que encarezcan las contrataciones[72].

Particularmente, en el caso de obras y consultoría de obras, cuya complejidad técnica haya sido determinada por el área usuaria o área técnica estratégica, la Ley establece que la estrategia de contratación incluye, adicionalmente, el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra, la evaluación del uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, así como de metodologías de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública (BIM - Building Information Modeling), en caso se proponga su utilización, y de la posibilidad de que dicho

[71] OCDE (2015). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública (XIII recomendación) precisa que los países adherentes favorezcan la integración de la contratación pública en la gestión de las finanzas públicas en general, la presupuestación y los procesos de prestación de servicios, para ello (ii) se tiene en cuenta el ciclo de contratación pública de manera integral. Consultado en https://web-archive.oecd.org/2019-11-14/401029-OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf Pag. 13

[72] Exposición de Motivos del Proyecto de ley 5472/2022-PE, Pág. 38

contrato establezca incentivos a cambio de beneficios de naturaleza técnica, económica y de plazo para la Entidad y la obra, entre otros.

Los distintos sistemas de entrega de proyecto disponibles en la contratación pública internacional y las buenas prácticas de leyes modelo de UNCITRAL y distintos bancos multilaterales. Estos sistemas de entrega deben plasmarse en contratos que sean adecuados para el funcionamiento de la asignación de riesgos que es utilizada internacionalmente por la industria de la ingeniería y construcción, pero para que ello se cumpla, la entidad contratante debe analizar debidamente su utilización.

Es necesario poner énfasis a la adecuada determinación del alcance de la contratación y a la preparación de una estrategia de contratación que se corresponda con dicho alcance. Se parte de la premisa que ningún proceso de contratación es igual y que por tanto ningún proceso de contratación puede ser la copia de otro aun cuando hubiera tenido éxito. Precisamente, haber considerado por mucho tiempo que -por un tema de economía o eficiencia- era correcta la estandarización sin evaluación de los procesos de contratación, trae consigo que muchas veces se realicen procedimientos de selección o suscriban contratos inadecuados a las condiciones, circunstancias y objetivos de una contratación.

Las entidades contratantes deben desarrollar una estrategia de contratación tanto para bienes, servicios como obras, dependiendo de la magnitud de la contratación.

e) Supuestos de Fraccionamiento

El fraccionamiento es la división injustificada de las contrataciones a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, para eludir la aplicación de la ley y su reglamento dando lugar a contratos menores y/o evadir el cumplimiento de los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública[73].

La propuesta de norma señala que constituye fraccionamiento en la contratación de bienes, servicios y obras cuando se pretende:

a) Evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual.

[73] Exposición de Motivos del Proyecto de ley 5472/2022-PE, Pág. 38

b) Dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección de bienes, servicios y obras idénticos o similares, evadiendo la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, para dar lugar a Contratos Menores.
c) Evadir el cumplimiento de los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

Así también se señala los dos únicos supuestos que no constituyen fraccionamiento:

a) La contratación de bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, si la contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad, debido a que no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratación completa, o surge una necesidad imprevisible adicional a la programada.
b) La contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, salvo en los casos que determine el OSCE a través de Directiva.

En el reglamento se establecen las sanciones aplicables cuando la entidad contratante incurre en fraccionamiento.

Cabe mencionar que, la normativa de contratación pública ha recogido históricamente la tendencia logística del agrupamiento de los objetos contractuales, en virtud de la cual se busca acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras esencialmente similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la competencia y economía de escala, y simplificar las relaciones contractuales. La división injustificada de esa unidad esencial de los bienes, servicios y obras configura el fraccionamiento, lo que se encuentra prohibido.

f) Expediente de contratación

Es el documento que acompaña todo el proceso de contratación pública, contiene toda la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual.

Se dispone que la dependencia encargada de las contrataciones es el responsable de ordenar, archivar y preservar el expediente de contratación, así como de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna; y tiene a su cargo la

custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del comité de selección.

g) Evaluadores

Con el objetivo de visibilizar las responsabilidades en la etapa de selección y, como parte de la reforma de la contratación pública, debe quedar clara la separación entre aquella dependencia encargada de las contrataciones, que es la responsable del proceso de contratación en su conjunto (y no únicamente de la fase de selección), con aquellos cuya función es básicamente la realización del procedimiento de selección.

3.5.2 Fase de selección

Se establece que la entidad contratante, de acuerdo al requerimiento previamente elaborado en el marco de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, selecciona el tipo de contratación de acuerdo a las características de la necesidad a atender, en observancia de los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

3.5.3 Fase de Ejecución Contractual

Por otro lado, se ha recogido la propuesta del Proyecto de Ley 5362/2022-CR, para precisar que cuando la supervisión es contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Los mecanismos aplicables en los casos que surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que este dure, son establecidas en el reglamento.

Del citado proyecto también se ha recogido que, durante la vigencia del periodo de supervisión, el inspector o el supervisor deben informar a la entidad contratante sobre todos los actos que puedan poner en riesgo la correcta ejecución y culminación de la obra o del servicio, bajo responsabilidad.

Contratos estandarizados

En este capítulo también se desarrolla la herramienta de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. El uso de estos contratos es propuesto por el proyecto de ley 5472/2022-PE en los párrafos 50.2, 50.3 y 50.4 de su artículo 50, en los

que se faculta a las entidades contratantes el utilizar estos contratos si así lo determina la estrategia de contratación seleccionada. Además, el proyecto de ley 392/2021-CR tiene menciona como finalidad que se permita el uso de un tipo particular de contrato estandarizado —los contratos NEC: New Engineering Contract— para implementar proyectos de infraestructura con mayor celeridad, eficacia y a menor costo. Asimismo, se hace mención a estos tipos de contratos en el párrafo 36.5 del artículo 36 del proyecto de ley 5362/2022-CR.

El presente predictamen recoge el uso de estos contratos estandarizados, con el articulado propuesto en el proyecto de ley 5472/2022-PE. En dicho proyecto de ley, la regulación de estos contratos se incluye dentro del artículo sobre contratos en el capítulo sobre ejecución contractual. En este predictamen se ha decidido separar los párrafos mencionados líneas arriba en un artículo aparte. Ello se debe a que estos contratos son una innovación respecto a la ley de contrataciones públicas vigente y un tipo de contrato hasta ahora poco utilizado en el territorio peruano, por lo que es opinión de esta Comisión que estas disposiciones sean agrupadas en un artículo propio.

Los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional son modelos de contratos cuya característica básica es que se rigen por lo establecido en sus propias cláusulas. Las condiciones generales y particulares incluidas en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción se regirán por lo establecido en los propios contratos, salvo temas muy específicos establecidos en la Ley y el Reglamento, como los porcentajes máximos de variaciones. Las condiciones particulares de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción deberán elaborarse teniendo en consideración los principios de contratación pública establecidos en la Ley —principalmente el valor por dinero— así como aquellas disposiciones establecidas en el Reglamento para este tipo de contratos.

La incorporación de estos contratos en el marco normativo peruano de contrataciones públicas responde a la necesidad de reconocer que las obras tienen distintos sistemas de entrega de proyecto, definidos como la estructura organizativa adoptada por el cliente para la gestión del diseño y la construcción de un proyecto de construcción. Según la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, tradicionalmente en Perú se ha mantenido un sistema de "solo construcción", en el cual la entidad contratante entrega un expediente técnico de obra completo para que sea ejecutado por el contratista. Sin embargo, este tipo de sistema restringe la posibilidad de que cada proyecto se gestione de una manera particular según sus propias características o riesgos.

Otros modelos de sistema de entrega de proyectos se caracterizan por una distribución específica de riesgos y obligaciones a cargo de las partes que intervienen en la ejecución del proyecto. Ello permite identificar qué actor puede ser más eficiente para ejecutar cada obligación según las características del proyecto. Internacionalmente, algunos de los sistemas de entrega de proyectos más usados en contratación pública son:

Sistema de entrega de proyectos	***Principales riesgos***		
	Diseño	**Construcción**	**Procura de materiales y equipos**
Tradicional	Cliente/diseñador (en nuestro caso, la entidad contratante)	Contratista	Contratista/cliente
Diseño y construcción	Contratista (salvo por aquellos requerimientos o información que el cliente haga confiable o prescriptiva)	Contratista	Contratista
Managing contracting o Gerencia al riesgo	Cliente, en colaboración con el Contratista-Gerente	Subcontratistas, contratados directamente por el cliente y dirigidos por el Contratista-Gerente	Cliente/subcontratistas, dirigidos por el Contratista-Gerente
Colaborativo	Acuerdos entre cliente/diseñador/contratista/subcontratista		

Fuente: Exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE

La contratación pública de países como Reino Unido o Australia, líderes en la innovación y compra pública, permite la utilización de distintos sistemas de entrega de proyecto desde la fase de definición del proyecto como se propone en la ley y el reglamento. La razón es que mientras más temprano se haga un análisis de la estructura de riesgos y responsabilidades en un proyecto, es más eficiente y económico ajustar el requerimiento o el contrato para la entrega de un requerimiento determinado. Por ello, el texto sustitutorio permite que la Entidad Contratante durante la estrategia de contratación, bajo el principio de valor por dinero, realice la evaluación técnica del sistema de entrega a utilizarse.

Sobre la base de la evaluación del sistema de entrega de proyecto adecuado, se toma una decisión respecto al tipo de contrato estandarizado por utilizar. Los principales contratos estandarizados de ingeniería y construcción utilizados mundialmente son los NEC —New Engineering Contract— y FIDIC —Federación Internacional de Ingenieros Constructores— . Las guías de uso de estos contratos emiten recomendaciones para la contratación y para el uso de sus distintos tipos de contratos, según el sistema de entrega de proyectos empleado. En la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, se presenta el siguiente cuadro en el que se resumen las principales formas de contratación con contratos estandarizados:

Sistema de entrega de proyecto	Contratos estandarizados de ingeniería y construcción
Tradicional	• FIDIC libro Rojo: Condiciones de Contrato para Construcción. • FIDIC libro Verde: Forma corta de Contrato de Construcción. • FIDIC libro Azul-Verde: Condiciones de Contrato para trabajos de Dragado y Relleno. • NEC4: Contrato de Ingeniería y Construcción Opciones A, B, C, D, E. • NEC4: Contrato Corto de Ingeniería y Construcción Opciones A, B, C, D, E.
Diseño y construcción	• FIDIC libro Amarillo: Condiciones de Contrato para Proyecto y Obra. • FIDIC libro Plata: Condiciones de Contrato para Proyectos llave en mano. • FIDIC libro Esmeralda: Condiciones de Contrato para Trabajos Subterráneos. • NEC4: Contrato de Ingeniería y Construcción Opciones A, B, C, D, E. • NEC4: Contrato Corto de Ingeniería y Construcción Opciones A, B, C, D, E.
Gerenciamiento al riesgo de diseño y la construcción	• NEC4: Contrato de Ingeniería y Construcción Opción F.
Gerenciamiento sin riesgo del diseño y la construcción	• FIDIC libro Blanco: Condiciones de Contrato para Servicios de Consultoría. • NEC4: Contrato de Servicios Profesionales

Alianzas o sistemas integrados para la ejecución del diseño y la construcción	• NEC4: Contrato de Alianza. • PPC2000[74]: Formato de Contrato para Project Partnering. • FAC-1[75]: Framework Alliance Contract.

De esta manera, según las características particulares de la obra y luego de una evaluación técnica, la entidad contratante tendrá la facultad de decidir por el uso de distintos tipos de contratos estandarizados.

Utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional contribuye a reducir las modificaciones que podrían suscitarse durante la ejecución contractual, así como los conflictos entre las partes. Con ello, dichos contratos incentivan el interés de potenciales proveedores en el ámbito local e internacional, elevando la competencia de proveedores adecuados para la ejecución de las obras. Así también, este tipo de contratos favorecen a la Entidad Contratante, puesto que tienen la característica de ser simples y flexibles; por consiguiente, reciben oportunamente la culminación de sus proyectos, considerando criterios de calidad, precio y plazo.

Debido a que estos modelos de contrato son creados y desarrollados por colegios de ingenieros internacionales y el Estado peruano se convertiría en un usuario de estos contratos de uso internacional, es fundamental evitar la modificación injustificada de las condiciones generales de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción. El uso adecuado de los contratos estandarizados radica fundamentalmente en que sus cláusulas son internacionalmente conocidas, y su contexto e interpretación está desarrollado por las organizaciones que preparan los modelos a través de guía de aplicación. En ciertos casos, además, sus cláusulas han sido interpretadas por jueces en cortes en distintos países como en el caso de FIDIC en Inglaterra y Gales, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, India o Singapur. En el caso de NEC, existen decisiones de las cortes de Inglaterra y Gales para NEC3 y con su nuevo contrato NEC4, se espera que existan decisiones judiciales en más jurisdicciones.

Asimismo, los referidos contratos estandarizados FIDIC y NEC, coinciden en que las condiciones particulares o especiales de los contratos sean redactadas de manera clara, evitando ambigüedades y fundamentalmente sin cambiar el balance de riesgos o derechos asignados a las partes en las condiciones generales de estos contratos. Cambios sin

[74] PPC: Project partnering contracts.
[75] Framework alliance contract.

justificación podrían generar inevitablemente que los roles, obligaciones y derechos pensados en estos contratos estandarizados se distorsionen y no se cumpla con las finalidades establecidas en estos.

Cabe precisar que estos contratos no están estrechamente relacionados con ninguna modalidad de contratación; por el contrario, pueden ser utilizados por las diferentes modalidades establecidas en el Título III de este texto sustitutorio. Si bien estos contratos han sido vinculados en el imaginario público con las contrataciones de gobierno a gobierno —ambos conceptos suelen considerarse sinónimos— no existe una obligación de que ésta modalidad de contratación se realice exclusivamente con contratos estandarizados.

El uso de estos contratos corresponde a una de las actuales buenas prácticas internacionales de contratación pública a fin de lograr el mayor provecho en su ejecución. Dichos contratos fueron utilizados con éxito durante la ejecución de las obras para los Juegos Panamericanos Lima 2019. La inclusión de distintos sistemas de entrega de proyecto permitirá al Perú aspirar a un mejor, más eficiente y eficaz sistema de contratación pública.

3.5.4 Nulidad

a) **Nulidad de actos procedimentales**
b) **Nullidad del contrato**

3.6 Solución de Controversias antes del perfeccionamiento del contrato

La ley ha dividido la temática de solución de controversias entre aquellas que versan sobre actuaciones producidas antes del perfeccionamiento del contrato, y aquellas producidas con posterioridad al perfeccionamiento del mismo. Con relación a la solución de controversias antes del perfeccionamiento del contrato, señala que las discrepancias que surjan entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, siendo que la resolución que resuelve dicho recurso agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

Conforme se advierte de la propia estadística aportada en la exposición de motivos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en relación a los recursos de apelación presentados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022

se emitieron 962, 1023, 843, 916 y 1140 resoluciones, respectivamente, según se detalla a continuación:

Cuadro 11

RESOLUCIONES DE APELACIÓN EMITIDAS POR EL TCE
Años 2018 – 2022

	2018		2019		2020 (2)		2021		2022	
DECISIÓN (1)	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Fundado	532	55%	551	54%	390	46%	430	47%	563	49%
Infundado	177	18%	178	17%	109	13%	127	14%	148	13%
Improcedente	30	3%	39	4%	61	7%	67	7%	40	4%
Declaración de nulidad	215	22%	249	24%	229	27%	281	31%	369	32%
Otros	8	1%	6	1%	54	6%	11	1%	20	2%
TOTAL DE RESOLUCIONES	962	100%	1023	100%	843	100%	916	100%	1140	100%
Promedio en días hábiles	28		29		24		24		25	
Promedio en días calendario	42		43		35		36		38 (3)	

Fuente: Sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado
(1) No incluye resoluciones de errores materiales.
(2) Para el cálculo del promedio no se ha considerado los recursos resueltos desde el 15.03 hasta el 31.07, puesto que dichos expedientes se vieron afectados por el periodo de suspensión dispuesto por la emergencia sanitaria
(3) Incremento en días calendario afectado por mayor cantidad de feriados para el sector público.

Sobre el particular, respecto a la necesidad de exigir la presentación de una garantía a favor de la entidad contratante o del OECE, según corresponda, algunas de las opiniones ciudadanas plantean mecanismos alternativos, o inclusive su eliminación y otras propuestas plantean la reducción del monto de la garantía. En el presente texto sustitutorio se ha mantenido la necesidad de establecer dicha garantía, pero evaluando su cuantía.

Del detalle del cuadro anterior, podemos destacar que el porcentaje de las decisiones que declaran fundado el recurso de apelación o declaran la nulidad del procedimiento, oscilan entre el 73 al 81% del total de recursos de apelación a cargo del TCE, en comparación con las decisiones que declaran infundado o improcedente el recurso de apelación, superando con ello la afirmación de una supuesta interposición de recursos temerarios o con el objetivo de dilatar los procedimientos, por lo que resulta atendible la reducción de la cuantía de la garantía.

En atención a lo manifestado, es importante ponderar que la garantía por la interposición del recurso de apelación no impida o se convierta en una barrera o desincentivo para el respeto del debido procedimiento y del principio de doble instancia administrativa, por lo que se ha previsto disminuirla de 3% (vigente actualmente) al 1% de la cuantía del procedimiento de selección. Igualmente, se ha determinado que en ningún caso la garantía

puede ser mayor a cien (100) UIT vigentes al momento de interponer el recurso de apelación.

Esta propuesta también fue recibida en las mesas de trabajo de las Comisiones dictaminadoras y puntualizada por la Cámara de Comercio de Lima[76], la cual sugiere revisar el porcentaje establecido como garantía para la interposición del recurso de apelación, que en muchos casos, según señala, se vuelve prohibitivo, pues desincentiva al proveedor a presentar el recurso por temor a que ejecuten la carta fianza.

3.6.1 Solución de Controversias desde del perfeccionamiento del Contrato

El texto sustitutorio, de acuerdo al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, divide la solución de controversias entre aquellas que versan sobre actuaciones producidas antes del perfeccionamiento del contrato, y aquellas con posterioridad al perfeccionamiento del mismo. Con relación a la solución de controversias antes del perfeccionamiento del contrato, señala que las discrepancias que surjan entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, siendo que la resolución que resuelve dicho recurso agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

Además, mantiene la necesidad de establecer una garantía a favor de la entidad contratante o del OECE, según corresponda, con la finalidad de evitar la interposición de recursos de apelación temerarios y que solo pretenden dilatar los procedimientos en mención.

Con relación a los recursos de apelación presentados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, tenemos que, en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 se emitieron 962, 1023, 843, 916 y 1140 resoluciones, respectivamente.

Por otro lado, con relación a las controversias surgidas durante la ejecución contractual, se establece que se resuelven por conciliación, arbitraje, Junta de Resolución de Disputas y/o por otros mecanismos de resolución de disputas que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo a las disposiciones de la Ley y su reglamento. Al respecto, se mantiene los medios de solución

[76] Cámara de Comercio de Lima. Carta N° DI 041.08.2023 DEL 29.08.2023.

de controversias existentes actualmente para las contrataciones públicas, y reconoce aquellos que se establezcan en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional.

Adicionalmente, se establece que las Instituciones Arbitrales y los Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas, deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento para ser incluidos en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de disputas que resuelven controversias en contrataciones del Estado, y remiten sus nóminas de árbitros y adjudicadores.

De otra parte, se ha dispuesto que para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia en el ámbito de aplicación de la ley, se requiere formar parte de las nóminas de una Institución Arbitral o Centro de Resolución de Disputas que se encuentre en el Registro que administre OECE, así como cumplir las cualificaciones que establece el Reglamento. En esa medida, se ha eliminado el Registro Nacional de Árbitros (RNA).

Asimismo, se precisa que para administrar u organizar arbitrajes o Juntas de Resolución de Disputas en una controversia en el ámbito de aplicación de la ley, se requiere formar parte del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de disputas que administra el OECE.

3.7 Régimen de Infracciones y Sanciones

El Tribunal de Contrataciones del Estado, ejerce también una función sancionadora para aplicar sanciones a los proveedores que participan y/o contratan con el Estado, además de la de resolver controversias que surjan entre las entidades contratantes y los participantes o postores durante los procedimientos de selección.

El régimen de infracciones y sanciones, conforme se señala en la exposición de motivos del proyecto de ley del Ejecutivo, tiene como finalidad la protección de los principios y disposiciones que rigen las contrataciones públicas, a fin de fomentar el cumplimiento de las normas establecidas y desincentivar su incumplimiento, toda vez que el objetivo de la provisión de bienes, servicios y obras por parte de las entidades contratantes se encuentra orientada al logro de resultados mediante el empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos en el desarrollo de la cadena de abastecimiento público.

Danós Ordoñez, señala que la potestad sancionadora se debe entender como un poder natural o corolario de las competencias otorgadas a la administración en determinadas materias, y citando a Alejandro Nieto, precisa: "quien tiene la potestad de ordenar, mandar y prohibir, ha de ostentar la potestad de sancionar, pues sin ésta resultarín inoperativas aquéllas".[77]

La propuesta normativa establece un listado de doce (12) supuestos de infracción (establecidos en la actual Ley 30225) en los que, de incurrir los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, cuando corresponda, serían pasibles de sanción por parte del Tribunal de Contrataciones Públicas, los cuales se detallan a continuación:

a) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar Acuerdos Marco.
b) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad Contratante o en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido parar contratar con el Estado.
c) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.
d) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP.
e) Elaborar expedientes técnicos de obra con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados, o no absolver oportunamente las consultas formuladas por la entidad contratante respecto del expediente técnico durante la ejecución contractual de la obra, ocasionando retraso en su ejecución.
f) Supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación ocasionando perjuicio económico a las entidades contratantes.
g) Perfeccionar el contrato, luego de notificada la suspensión en la Pladicop o recomendación de nulidad por el OECE o la nulidad del proceso de contratación dispuesta el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones.
h) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la ley.

[77] Danós Ordoñez, Jorge. Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública. Ius Et Veritas, Pág. 149. Consultado en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/15485/15935/0

i) Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos los que se perfeccionen a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
j) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad Contratante, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral.
k) Presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, a OECE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.
l) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades Contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras.

Se ha eliminado de esta lista la conducta de desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, por cuanto no constituye una conducta reñida con la legalidad y se ha incorporado la conducta mencionada en el literal f) del párrafo precedente con la finalidad de incidir en la realización de una supervisón idónea por parte de los proveedores del cumplimiento de sus responsabilidades.

Como correlato a las conductas típicas previstas, se ha establecido un sistema escalonado y gradual de sanciones. Así, se han establecido 3 tipos de sanciones[78] aplicables a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas que incurran en dichas conductas, con la finalidad de evitar malas prácticas o disuadir a estos actores de incurrir en ellas. Este tipo de sanciones son: i) la multa; ii) la inhabilitación temporal; y, iii) la inhabilitación definitiva.

Con relación a ello, el proyecto del Poder Ejecutivo, resalta que la propuesta normativa busca privilegiar la aplicación de multas sobre inhabilitaciones temporales. Ello debido a que, la inhabilitación puede significar la reducción del universo de proveedores, lo que tiene como consecuencia que baje la competencia, lo cual puede llevar a sobrecostos que deben ser asumidos por el propio Estado. En ese sentido, si bien se desea desincentivar la

[78] Danós Ordoñez, Jorge, citando a García de Enterría precisa que la sanción administrativa es "un mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Op. Cit. Pág. 156.

comisión de infracciones por parte de los proveedores, es importante resguardar los intereses del Estado frente a estas consecuencias negativas especialmente en un mercado no tan desarrollado como el peruano. Al respecto, se ha precisado, además lo siguiente:
Respecto a las multas:
La sanción de multa corresponde imponerse respecto a la comisión de las conductas previstas en los literales a, b, c, y d) del numeral 87.1 del artículo 87 de la ley, siempre que se trate de la primera o segunda comisión de infracción en los últimos 4 años.

También se ha previsto que:

- En el caso de las sanciones con multa se establece que ésta será no menor del 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato, en ningún caso puede ser inferior a una (1) UIT, como resarcimiento al perjuicio que se le causa a la entidad contratante y en general al sistema.
- En el caso de las MYPES, la multa no puede ser mayor al 8% de la oferta económica o del contrato. En caso no se pueda determinar el monto de la oferta económica o el contrato, la multa no puede ser mayor a 8 UIT.
- En el caso de los contratos menores, el Tribunal de Contrataciones Públicas puede imponer una multa por debajo de los montos indicados.
- En el reglamento se establecen las condiciones o incentivos por el pago oportuno de las multas impuestas por el Tribunal de Contrataciones Públicas.
- En caso de no pagarse la multa impuesta en el plazo establecido, el OECE puede iniciar los actos de ejecución coactiva que corresponda. La falta de pago de la multa es un criterio de graduación para las siguientes infracciones que cometa el proveedor.

Respecto a la inhabilitación temporal:
Se han previsto los siguientes supuestos que corresponder ser sancionados con inhabilitación temporal:

a) Por la comisión de las infracciones previstas en los literales a), b), c), y d), del numeral 87.1 del artículo 87, siempre que, en los últimos cuatro años, ya se hubiera impuesto al proveedor dos o más sanciones de multa o inhabilitación temporal. La sanción a imponer no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 18 meses.
b) Por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los literales e), f), y g), del numeral 87.1 del artículo 87. La sanción a imponer no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 18 meses.
c) Por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los literales h), i), j) y k) del numeral 87.1 del artículo 87. La sanción a imponer no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 24 meses.

d) Por la comisión de la infracción prevista en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87, la sanción a imponer no puede ser menor de 24 meses ni mayor de 60 meses.

Adicionalmente, se ha precisado que:

- El Tribunal de Contrataciones Públicas, a través de la resolución de sanción de inhabilitación temporal que emita, puede otorgar al proveedor sancionado la opción del pago de una multa, conforme a lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley, por la comisión de las infracciones establecidas en los literales e), f), g), h, i), j) y k) del numeral 90.1 del artículo 90, siempre que se trate de la primera o segunda sanción impuesta al proveedor en los últimos cuatros años y el plazo de la sanción impuesto sea igual o menor a 12 meses.
- En el supuesto previsto en el numeral precedente, en caso el proveedor realice el pago total de la multa, la inhabilitación temporal queda sin efecto al día siguiente de efectuado el pago respectivo.
- 90.3 En los casos de reiterancia en las comisión de los supuestos de infracción previstos en los literales e), f), y g), la sanción a imponer no puede ser menor de 8 meses ni mayor de 24 meses.

Respecto a la inhabilitación definitiva:

Respecto a la aplicación de la inhabilitación definitiva, se ha previsto que esta se aplique en los supuestos de infracción previstos en los literales h), i), j), k) y l) siempre que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuestoal proveedor más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. Para efectos de la aplicación de esta sanción, no se consideran las sanciones impuestas relacionadas a los contratos menores, salvo aquellas derivadas de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada.

Finalmente, se ha dejado establecido que también se sancionará con inhabilitación definitiva los casos en los que el proveedor ya cuenta con dicha sanción y se determina que corresponde sancionarlo por la comisión de alguna de las infracciones previstas en los literales h), i), j), k) y l) del numeral 87.1 del artículo 87.
Estas disposiciones permitirán superar los bajos niveles de competencia de proveedores en los procesos de contratación que se han expuesto en el rubro VI sobre Planteamiento de la Problemática.

Criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones Públicas

El TUO de la Ley 24777, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el numeral 10 del artículo 248 establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en los que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. En atención a ello, en la presente propuesta normativa se ha previsto que la responsabilidad derivada de las infracciones es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta.

Se ha previsto también que el reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, así como las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposición de la sanción, el régimen de caducidad y demás reglas necesarias. En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 87.1 del artículo 87. Tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante.

Por otro lado, la propuesta normativa mantiene el mismo plazo de prescripción de tres (3) años, previsto en la Ley anterior, señalando que, para el caso de presentación de documentación falsa o adulterada, el plazo de prescripción es de siete (7) años de cometida la infracción.

Finalmente, como consecuencia de la función que se le otorga al OECE de sancionar a las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas que resuelvan controversias en materia de contrataciones del Estado, la Ley precisa las conductas sancionables de dichas instituciones, conforme se detalla a continuación:

a) La negativa, obstrucción o resistencia al ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización.
b) No proporcionar dentro del plazo otorgado la información que el OECE solicite para poder ejercer sus funciones supervisoras ni aquella que, conforme a la presente ley y su Reglamento, deba remitir.
c) Presentar documentación falsa y/o inexacta ante el OECE.
d) No velar que sus árbitros y/o adjudicadores, que conforman sus nóminas, cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su Reglamento, para poder ejercer como Árbitros o Adjudicadores.
e) No sancionar a los Árbitros y/o Adjudicadores, que conforman sus nóminas, cuando incumplan con las disposiciones expresamente establecidas en la ley o su Reglamento,

para el desarrollo del arbitraje, solicitud de arbitraje de emergencia, o la Junta de Resolución de Disputas en el que participa.

f) No hacer cumplir las disposiciones establecidas en su Código de Ética.
g) No mantener los requisitos y condiciones que dieron origen a su incorporación en el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas.

Asimismo, se señala las sanciones aplicables a dichas conductas. Con esta disposición, se espera contar con Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas confiables y que ofrezcan un servicio idóneo en materia de contrataciones con el Estado.

3.8 Disposiciones Complementarias

En esta sección del análisis técnico se desarrollará el fundamento de las disposiciones complementarias incorporadas en el texto sustitutorio.

3.8.1 Disposiciones Complementarias Finales

La **primera disposición complementaria final** incorpora la prevalencia de las normas de contratación pública, una disposición propuesta por los proyectos de ley 5362/2022-CR y 5472/2022-PE. En conformidad con lo mencionado en la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, destaca la prevalencia de la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables, salvo en el caso de los contratos estandarizados que se regulan conforme con las cláusulas establecidas en los mismos.

Asimismo, se dispone la aplicación supletoria a los regímenes especiales de contratación, siempre que no resulten incompatibles con tales normas especiales, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la Ley de Contrataciones Públicas. Adicionalmente, se dicta que la conciliación y el arbitraje se regulan especialmente por lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, y se sujetan supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

La **segunda disposición complementaria final** incorpora un enfoque de pertinencia a las exigencias que se demandan a las entidades contratantes para contratos menores y catálogos electrónicos de acuerdo marco. La incorporación de este enfoque se explica en

la heterogeneidad que existe entre entidades contratantes en relación a sus capacidades institucionales y en contextos específicos. Considerando estas condiciones especiales, se dispone que el MEF adecue los rangos de cumplimiento de los requisitos, consideraciones y otros que exige a las entidades contratantes. Es importante precisar que esta pertinencia solo aplica a contrataciones que se encuentren por debajo de umbrales establecidos en acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales de los que Perú es parte, de esta manera asegurando que las condiciones especiales no colisionen con disposiciones incluidas en estos acuerdos y compromisos. Por último, la implementación de estas condiciones especiales no representa una excepción a los principios y enfoques que guían a las contrataciones públicas y que se establecen entre las disposiciones generales de este texto sustitutorio.

En la **tercera disposición complementaria final** se establece la implementación progresiva del pago a contratistas a través de medios electrónicos. Esta disposición se incorpora como propuesta de los proyectos de ley 5362/2022-CR y 5472/2022-PE.

En principio, la mencionada disposición se sustenta en la transparencia y trazabilidad que los medios electrónicos —por ejemplo, transferencias bancarias e interbancarias— otorgan al proceso de pago. De esta manera, se reducen las oportunidades para posibles actos de corrupción en la forma de pagos indebidos en efectivo.

En esa línea, es preciso mencionar que, en vista de las brechas existentes en el uso de soluciones tecnológicas en los diversos contextos territoriales del país, se establece la obligación del uso de medios electrónicos en implementación progresiva liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, esta disposición tiene concordancia con la necesidad de dar predictibilidad a los proveedores respecto a los plazos de pagos y reducir el espacio para la arbitrariedad de los funcionarios de las entidades contratantes, de esta manera incentivando la participación de proveedores en los procesos de contratación del Estado.

Como se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, la **cuarta disposición complementaria final** regula la excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información, en atención al artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. Esta disposición también incorpora la propuesta realizada en la décima séptima disposición complementaria final del proyecto de ley 5362/2022-CR.

En esa línea, el texto sustitutorio propone la incorporación de tres casos en los cuales la información debería estar sujeta a la excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información, por calificar como información confidencial, por las siguientes razones:

a) El banco de preguntas utilizado para la rendición del examen para la certificación de los profesionales y técnicos de la dependencia encargada de las contrataciones. Esta excepción se sustenta en el hecho de que dicha información es una base de datos con preguntas gestionadas y seleccionadas por el OECE para que se utilicen en una evaluación a través de la cual se corrobora las competencias de los profesionales y técnicos que deseen laborar en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas. Por lo tanto, entregar esta información a las personas que la demanden, en aplicación del principio de publicidad, podría afectar la transparencia del proceso de certificación al cual se someten los interesados.

b) La información con respecto a las ofertas que contenga secretos comerciales y hojas de vida de personas originada en los catálogos electrónicos de acuerdos marco. En dichos documentos se encuentra información comercial y técnica de las empresas interesadas en venderle al Estado y que, en algunos casos, podrían ser los aspectos y características que hacen destacar a una marca o producto entre la competencia. De esta manera, entregar o divulgar esta información a un tercero generaría prácticas comerciales desleales y/o una violación de la protección del secreto comercial, que incluso no ha sido autorizada por la empresa afectada. Los supuestos a) y b) se disponen en el párrafo 1 de la cuarta disposición complementaria final.

c) La información de las ofertas y la negociación derivada de los acuerdos de riesgo compartido para la adquisición de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, enfermedades oncológicas y de enfermedades de alto costo. Para pactar un mecanismo diferenciado de adquisición, se da una negociación entre la entidad contratante y el proveedor, para lo cual, según el acuerdo, este último puede ofrecer descuentos o algún tipo de pacto a favor de la contraparte. En ese sentido, para incentivar este tipo de medidas, se considera necesaria la confidencialidad de este tipo de información.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, la **quinta disposición complementaria final** precisa que las entidades contratantes habilitadas a utilizar regímenes especiales de contratación efectúan la contratación de sus bienes,

servicios y consultoría y ejecución de obras conforme con lo establecido en dichos regímenes, en tanto se implemente la integración progresiva de estos al régimen general. No obstante lo establecido, se dispone que las contrataciones a través de los regímenes especiales cumplen con los principios establecidos en la Ley Contrataciones Públicas, lo que resulta congruente con la perspectiva de integración.

A través de los regímenes especiales de contratación, las entidades contratantes realizan contrataciones bajo disposiciones particulares, distintas a las previstas en la Ley de Contrataciones Públicas, para determinados objetos contractuales. Como ejemplo, se puede mencionar a la contratación de empresas supervisoras de Osinergmin conforme a la Ley 28964; las contrataciones y adquisiciones de Petroperú conforme a la Ley 28840 (segunda disposición complementaria final); la contratación de empresas supervisoras por parte de Ositran conforme a la Ley 26917 (tercera disposición complementaria, transitoria y final); las contrataciones del Programa Nacional Cuna Más y del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma conforme al Decreto Supremo 001-2013-MIDIS; entre otros.

Adicionalmente, la disposición precisa que la creación o modificación de las normas que regulan los referidos regímenes especiales de contratación requieren opinión previa no vinculante de la DGA. Al respecto, de conformidad con el Decreto Legislativo 1439, la DGA, en su condición de rector, cuenta con competencias para emitir las disposiciones necesarias referidas a la política de contratación pública, la misma que no solo abarca el régimen general de contratación pública sino también a aquellos regímenes especiales de contratación, procurando la integración progresiva de los diversos regímenes legales de contratación en un régimen unificado.

Aunado a ello, esta disposición se enmarca en las recomendaciones de la OCDE, organismo que sugiere que se favorezca la predictibilidad de las contrataciones, a través de un marco normativo uniforme y unificado. En ese sentido, con esta disposición se busca que, de manera progresiva, se regule los procedimientos de contratación necesarios que se ajusten a la naturaleza especial y/o particular de aquellos regímenes especiales de contratación que coexisten con el régimen general.

Se señala también que en el reglamento de la Ley se establecen, para los regímenes especiales de contratación, las disposiciones referidas al uso de la Pladicop y el RNP, entre otras disposiciones que resulten aplicables.

Además, en virtud de la falta de información respecto al desempeño de los regímenes especiales de contratación, se dispone que el MEF elabore, cada dos años, evaluaciones de los regímenes especiales de contratación. Estas evaluaciones son publicadas y abarcan variables de cumplimiento contractual y la medición de la eficacia y eficiencia de las contrataciones bajo los regímenes especiales. Sobre la base de estos documentos, el Poder Ejecutivo evalúa la justificación de que estos regímenes especiales continúen vigentes y la pertinencia de que sean integrados al régimen general.

La **sexta disposición complementaria final** incorpora lo propuesto en los proyectos de ley 5362/2022-CR y 5472/2022-PE respecto al régimen especial para las contrataciones de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). A diferencia de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, Ley 30225, se dispone que las modificaciones decididas por el directorio de Proinversión tendrán opinión previa no vinculante de la DGA.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en mesas de trabajo realizadas durante la elaboración de este predictamen, la OCDE ha recomendado que se favorezca la predictibilidad de las contrataciones, a través de un marco normativo uniforme y unificado, por lo que recae en la DGA que aquellos regímenes especiales de contratación que coexisten con el régimen general sean compatibles con los principios de la Ley y, además, congruentes entre sí, al formar parte del mismo Sistema Administrativo.

De esta manera, según el Ministerio, incorporar la opinión previa de la DGA sobre las disposiciones específicas que regularían el régimen especial de PROINVERSIÓN aportaría las siguientes ventajas: i) permitirá que las disposiciones de dicho régimen se encuentren alineadas con los principios de la normativa de Contrataciones del Estado, como eficacia y eficiencia, transparencia e integridad, entre otros, ii) garantizará que los procesos de contratación sean trazables, por ende, se encuentran sujetos a rendición de cuentas, considerando el uso de fondos públicos, y iii) velará por la congruencia normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, en cumplimiento de los estándares OCDE.

La **séptima disposición complementaria final** se incorpora como propuesta de los proyectos de ley 5362/2022-CR y 5472/2022-PE. Según la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, se establece que los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios pueden ser contratados a través de proveedores nacionales o internacionales mediante el procedimiento de selección y las condiciones que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el titular de la entidad. Se dispone que no se requiere la verificación

de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluida la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o servicios.

Asimismo, dispone que la lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa del Estado, sea establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

La **octava disposición complementaria final** establece lineamientos para la implementación del enfoque de profesionalización de los compradores públicos. Esta disposición representa una innovación respecto a la vigente Ley 30225 y es propuesta por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley 5472/2022-PE. Cabe precisar que el enfoque de profesionalización se establece en el artículo 6 del texto sustitutorio y que este enfoque deviene en crucial para las contrataciones públicas debido a que permite una ejecución eficiente de las mejores estrategias de aprovisionamiento.

La profesionalización se ejecuta en cuatro ámbitos: i) la DGA y la Autoridad Nacional del Servicio Civil establecen progresivamente medidas que permitan la profesionalización de los compradores públicos, en coordinación con Servir y con la DGA; ii) las entidades contratantes son responsables de supervisar que se cumplan las disposiciones referidas a la profesionalización de los compradores públicos que se emitan en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento; iii) el OECE, en coordinación con la DGA, determinan los componentes específicos de la profesionalización de los compradores públicos, incluyendo la certificación; y iv) el OECE y la DGA, en coordinación con la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General de la República promueven actividades de capacitación para los funcionarios y servidores a cargo de las actividades de defensa pública y de las actividades de control.

El primer ámbito responde a la necesidad de establecer la profesionalización como objetivo estratégico dentro del sistema de contrataciones públicas. De acuerdo con la Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública llevada a cabo por la OCDE, el establecimiento de la profesionalización del sistema de contrataciones públicas en el Perú no se distingue con claridad en el marco legal como objetivo estratégico de relevancia nacional y solo se consigna a nivel normativo operativo. La DGA y Servir serán responsables de establecer una definición clara de los objetivos de la profesionalización que guíen las medidas implementadas para la certificación y el desarrollo de capacidades de los funcionarios encargados de las compras públicas.

Los siguientes ámbitos corresponde a la articulación que los objetivos estratégicos y medidas establecidas por la DGA y Servir deben tener con otros actores del sistema de contrataciones públicas. En el segundo, las entidades contratantes en los distintos niveles de gobierno cumplen con las disposiciones emitidas en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de políticas y planes internos para el seguimiento y organización de la profesionalización. En el tercero, el OECE y la DGA determinan medidas específicas —incluida la certificación— para la profesionalización de los funcionarios vinculados a compras públicas. En tanto, la profesionalización también alcanza a los funcionarios de la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General de la República, quienes deben ser capacitados y certificados en las funciones del sistema de contrataciones públicas, a fin de que sus actividades de defensa pública y de control sean predecibles y no incurran en arbitrariedad.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, la **novena disposición complementaria final** dispone que, bajo responsabilidad, de manera gratuita y sin límite de consultas, en el marco de la legislación vigente sobre la materia de interoperabilidad, todas las entidades públicas de las que pueda requerirse información deben proporcionar el acceso a la información pertinente y oportuna con la finalidad de que la DGA, el OECE y Perú Compras puedan desarrollar las funciones que la ley le otorga, salvaguardando las reservas o excepciones previstas por Ley. Las entidades públicas proporcionan la información mediante mecanismos de interoperabilidad. Aquellas entidades que no cuenten con las capacidades tecnológicas para interoperar con la Pladicop proporcionan el acceso a la información mediante otro canal digital o físico.

La interoperabilidad se realiza a través del bloque de interoperabilidad de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital conforme a la normatividad vigente; así como las normas que aseguran que las entidades intercambien datos, documentos e información de manera gratuita, permanente y sin limitación de consultas, para promover la transformación digital de procesos y servicios.

Se incorpora la **décima disposición complementaria final** para establecer el vínculo y la concordancia entre la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) realizada por cada entidad contratante y las fases del proceso de contratación pública. En vista de que el proceso de contratación se inicia con la elaboración del requerimiento, éste debe estar enmarcado en la PMBSO de la entidad contratante. Más aún, esta Programación se realiza según los lineamientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, establecidos en el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, y en conformidad con las disposiciones que emita la DGA como ente rector de este Sistema.

De acuerdo con el proyecto de ley 5472/2022-PE, se incorpora la **undécima disposición complementaria final** para disponer que el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas establece los procedimientos de selección para la contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial regulado en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Asimismo, se precisa que las entidades contratantes pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional en este tipo de servicios, conforme con las disposiciones que se establezcan en el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, la **duodécima disposición complementaria final** establece que el OECE y Perú Compras informan a la Contraloría General de la República las transgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado y/o a la prestación de servicios al Estado, o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.

Adicionalmente, establece que el supervisor de obra está obligado a remitir a la Contraloría General de la República, cuando este órgano lo solicite y bajo responsabilidad, la información de la ejecución de la obra, de acuerdo con los lineamientos regulados por dicho organismo a través de directiva.

La **décima tercera disposición complementaria final** dispone que se habiliten recursos en favor del OECE y Perú Compras para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el mandato de la presente Ley. Asimismo, se establece que el OECE y Perú Compras, determinen su Plan de implementación para el cumplimiento de las funciones que el proyecto de ley les asigna.

Según el Poder Ejecutivo, la **décima cuarta disposición complementaria final** establece disposiciones relacionadas con la previsión presupuestal para el caso de las compras centralizadas.

La **décima quinta disposición complementaria final** es propuesta por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, se faculta excepcionalmente al Minsa y/o Essalud a realizar contrataciones de productos farmacéuticos o dispositivos médicos estratégicos con proveedores no domiciliados, siempre y cuando se sustente la ventaja de dichas contrataciones a través de un informe

técnico y legal, cautelando el cumplimiento de los principios y enfoques que rigen las contrataciones, los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales vigentes en los que el Perú sea parte, así como las disposiciones del texto sustitutorio correspondientes a la determinación del requerimiento e interacción con el mercado. Asimismo, la disposición precisa un plazo mínimo que debe otorgarse a los proveedores para que presenten sus cotizaciones, la obligación de registrar las contrataciones en la Pladicop, y que estas se encuentran sujetas a la supervisión del OECE.

Según el Poder Ejecutivo, cabe señalar que la Ley 30225 contempla la realización de las referidas contrataciones por parte del Minsa y/o Essalud. Sin embargo, a diferencia de dicha Ley, el texto sustitutorio de este predictamen considera que estas contrataciones deben cautelar el cumplimiento de los principios y enfoques que rigen la contratación pública, así como las pautas que da la norma para la determinación del requerimiento e interacción con el mercado, contribuyendo a la transparencia e integridad que debe regir toda contratación que realice el Estado, así como un enfoque orientado a que el Estado peruano obtenga, a través de estas contrataciones, las condiciones más ventajosas que pueda ofrecer el mercado. Asimismo, se ha considerado un plazo mínimo que debe otorgarse a los proveedores para que presenten sus cotizaciones a fin de cautelar el cumplimiento de los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales vigentes en los que el Perú sea parte en lo referente a la contratación pública, en beneficio de la interacción entre el Estado peruano y los proveedores no domiciliados, con la consecuente oportuna atención de las necesidades de la población.

Adicionalmente, de acuerdo con el sustento brindado por el Minsa, la mencionada facultad contribuiría a evitar el desabastecimiento en el Estado de productos farmacéuticos o dispositivos médicos estratégicos, ocasionado por la falta de oferta en el mercado nacional. De esta manera, se evitaría que, en determinados bienes, el Estado tenga que incurrir en un mayor gasto por su adquisición, debido a la existencia de proveedores únicos en el mercado nacional u otras condiciones provenientes de la interacción del mercado que encarezcan la contratación. Por lo tanto, esta facultad permite la eficacia y eficiencia en la oportunidad de obtención de los mencionados bienes, cautelando el derecho a la salud y a la vida de la población.

La **décima sexta disposición complementaria final** dispone que se autorice a las entidades contratantes a establecer políticas de bonificaciones de carácter anual para los miembros de los comités de selección de proveedores. Las condiciones y requisitos para el otorgamiento de estas bonificaciones son determinados en el reglamento. Esta autorización

es incorporada a raíz de la propuesta presentada en el proyecto de ley 5362/2022-CR en su tercera disposición complementaria final.

Esta disposición busca incentivar una actuación correcta dentro de los comités de selección. De esta manera, se obtienen mejores resultados para el Estado en los procedimientos de contratación y se reducen las posibilidades de actos de corrupción de estos funcionarios. Además, con ello se busca tener mayor celeridad y competencia en los procedimientos de selección que convocan las entidades contratantes.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, la **décima séptima disposición complementaria final** establece las instancias competentes en caso de acciones contencioso-administrativas sobre las actuaciones del OECE; de solicitudes de medida cautelar; y de procesos constitucionales de amparo sustentados en la presunta vulneración de derechos constitucionales.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, en la **décima octava disposición complementaria final** se autoriza a la entidad contratante realizar contrataciones directas bajo el supuesto de desabastecimiento, para garantizar la continuidad del proyecto, ante la caducidad de un contrato de asociación pública-privada o proyecto en activos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

La **décima novena disposición complementaria final** establece el mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores. Esta disposición tiene como objeto que información objetiva acerca del desempeño de proveedores fortalezca la transparencia en las contrataciones públicas y tenga un impacto positivo en la conducta y selección de proveedores de calidad. Dicho mecanismo recoge la preocupación por transparencia en las contrataciones públicas expresada en el proyecto de ley 5307/2022-CR. Asimismo, incorpora el sentido de la propuesta de creación de un sistema de contratación por puntos hallada en el proyecto de ley 5362/2022-CR.

Este mecanismo incluye tres tramos de difusión de información sobre los proveedores del Estado, donde cada tipo de información tiene diferentes propósitos para el proceso de contratación. En el primer tramo, se dispone que el OECE sistematice y consolide información sobre los proveedores acerca de las buenas prácticas de contrataciones públicas que éstos han implementado históricamente. Entre este tipo de información se encuentra aquella referida al cumplimiento normativo de los proveedores y a sus

antecedentes de cumplimiento oportuno de la ejecución contractual. La difusión de esta información tiene como objeto que exista transparencia acerca del desempeño de los proveedores cuando han contratado con el Estado.

Un segundo tramo establece la evaluación de desempeño de proveedores en el RNP. Se determina un puntaje para los proveedores considerando variables asociadas a los atributos de cada proveedor y a su desempeño en los contratos que han suscrito con entidades contratantes. El puntaje resultante se incorpora como elemento a ser considerado durante los procedimientos de selección de los proveedores, conforme a las disposiciones que establece el reglamento y en las bases de estos procedimientos. De esta manera, se busca distinguir y recompensar a aquellos proveedores que han provisto bienes, servicios y obras de calidad y así, a mediano plazo, elevar el nivel de los proveedores que contraten con el Estado.

Es de suma importancia que los criterios utilizados para la evaluación de desempeño se basen en información objetiva. El sentido de esta evaluación se vería desvirtuado si se considerase información no medible. De esta manera, en el texto sustitutorio se establecen ciertos criterios generales que guiarán el desarrollo específico de los mecanismos de puntuación en el reglamento de ley. La clasificación que asigna el RNP debe ponderar, entre otros, i) variables de cumplimiento contractual ante entidades públicas, ii) sanciones impuestas por infracciones a la Ley, en virtud de su reincidencia o gravedad, iii) nivel de riesgo registrado en la SBS y iv) adecuación a estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado peruano. Se considera que estas variables cumplen con la objetividad deseada y contribuirían a una mayor participación de proveedores de calidad.

Por último, un tercer tramo difunde información brindada por el Ministerio Público acerca de las investigaciones en curso que tengan los proveedores. La inclusión de este tipo de información responde a que, en los últimos años, proveedores con investigaciones en curso y sospechas de corrupción han sido seleccionados en procesos de contrataciones. Establecer un impedimento de contratación para estos proveedores o que reciban una menor calificación en un proceso de selección podría ser potencialmente inconstitucional al colisionar con el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, se busca que exista transparencia entre las entidades contratantes acerca de proveedores potencialmente infractores.

La **vigésima disposición complementaria final** establece medidas para generar congruencia entre las disposiciones establecidas en el texto sustitutorio acerca del proceso

general de contrataciones públicas y los procedimientos especiales de contratación establecidos en el numeral 11.4 del artículo 11 de la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta disposición es incorporada por solicitud de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, para lo cual el Poder Ejecutivo envió información adicional a la provista en el proyecto de ley 5472/2022-PE.

Dicho numeral hace referencia a la regulación de procedimientos especiales de contratación con la ANIN para la contratación de la asistencia técnica especializada en gestión de proyectos y para la aplicación de modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional. En particular, la vigésima disposición establece medidas sobre la resolución de controversias de los contratos celebrados en el marco del numeral 11.4 del artículo 11 de la Ley 31841.

La **vigésima primera disposición complementaria final** establece el marco legal para las contrataciones de gobierno a gobierno. Los lineamientos generales de este marco legal son similares a los dispuestos en la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. En esta disposición complementaria final se precisan requisitos y obligaciones para estas contrataciones y se disponen condiciones adicionales.

Estas contrataciones deben ser utilizadas únicamente en casos excepcionales. En este sentido, el párrafo 2 de la disposición complementaria final limita los casos en los que se procede el uso de estas contrataciones: i) objetos contractuales de alta complejidad para los que el Estado peruano requiera asistencia técnica especializada por parte de otro Estado o ii) para bienes y servicios estratégicos para la defensa nacional y el orden interno. Limitar estos casos es necesario para evitar un incremento desordenado de contrataciones de gobierno a gobierno para contrataciones que no poseen la complejidad suficiente para requerir de la asistencia de gobiernos extranjeros.

El párrafo 3 señala los requisitos que deben cumplirse para la autorización de estas contrataciones. Esta disposición complementaria final desarrolla en mayor detalle estos requisitos en comparación con lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1444. En particular, se detalla el contenido de los informes que sustenten la necesidad de la contratación con otro gobierno y que identifiquen potenciales gobiernos que puedan cumplir con lo requerido por la entidad contratante. Además, se dispone la necesidad de opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPP) respecto a la capacidad presupuestal del pliego que solicita contratar con otro Estado. En este último extremo, se busca evitar que

las contrataciones gobierno a gobierno resulten en aumentos excesivos de presupuesto público y que solo se autoricen en casos excepcionales adecuadamente financiados.

En lo que respecta al párrafo 4, se incorporan costos de inversión mínimos para poder contratar con otro gobierno para objetos contractuales de alta complejidad, umbrales que no están establecidos en el marco normativo vigente de las contrataciones de gobierno a gobierno. También se incorpora que el pliego contratante debe remitir trimestralmente a la DGPP las actualizaciones de las proyecciones de costos de la cartera de inversiones y/o intervenciones asociadas a las contrataciones de gobierno a gobierno. Asimismo, se establece que durante la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión la unidad formuladora debe haber determinado el sistema de entrega del proyecto de inversión. Esta última disposición tiene como propósito evitar una situación de "prueba y error" en la determinación del sistema de entrega luego de suscrito el contrato o acuerdo de gobierno a gobierno, situación que puede incrementar los costos de contratación.

En cuanto a las cláusulas que deben ser incluidas obligatoriamente en los contratos o acuerdos suscritos, éstas se desarrollan en mayor detalle en comparación al marco normativo vigente. Por parte de las obligaciones del otro gobierno, se detalla el contenido mínimo que debe incluir el plan de gestión de transferencia de conocimientos: i) evaluación de madurez de las capacidades de la entidad contratante y ii) transferencia de conocimientos por cada componente respecto del cual se prestará asistencia técnica especializada. Por parte de las obligaciones del pliego correspondiente, se incorpora la obligación de remitir la documentación solicitada por el OECE en el marco de su función de supervisión, además de mantener la obligación de remitir esta documentación a la Contraloría General de la República cuando ésta la solicite.

Por último, se establece que la ejecución de las contrataciones en el marco de la contratación de gobierno a gobierno se somete al control simultáneo de la Contraloría. Es importante precisar que este control simultáneo por parte de la Contraloría ya está establecido en el marco normativo vigente de las contrataciones gobiernos a gobierno, en el numeral 6 de la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1444.

Se incorpora la **vigésima segunda disposición complementaria Final** acerca de los procesos de adquisición y contratación de Petroperú regulados en la Ley 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. Según esta disposición, Petroperú está obligada a emplear la Plataforma Digital de las Contrataciones Públicas (Pladicop).

El contenido de esta disposición es el mismo que el de la vigente séptima disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. El proyecto de ley 5472/2022-PE, en su disposición complementaria derogatoria única, propone la derogatoria del total del Decreto Legislativo 1444 con excepciones, entre ellas, la séptima disposición complementaria final de dicho decreto legislativo. Es opinión de esta Comisión que no representa una buena práctica de técnica legislativa derogar casi la totalidad de una norma y mantener únicamente vigentes pocas disposiciones de la misma. Por lo tanto, se propone incorporar la séptima disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1444 al presente texto sustitutorio. De esta manera, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en dicha disposición complementaria final y se cuida un mejor orden del marco normativo en materia de contrataciones públicas.

La **vigésima tercera disposición complementaria final** establece **que el OECE articula y orienta el trabajo de los ministerios durante la elaboración y emisión de documentos metodológicos para la elaboración de expedientes técnicos de obras. Esta disposición es incorporada como fruto de la discusión de las mesas técnicas organizadas por esta Comisión durante el estudio de los proyectos de ley en este predictamen.**

Según especialistas, las deficiencias en los expedientes técnicos de obras están entre las principales razones de las paralizaciones de obras públicas. En respuesta a ello, se dispone que los documentos metodológicos propuestos establezcan los criterios, estándares y procedimientos técnicos requeridos para asegurar la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de las obras, y así evitar las deficiencias mencionadas.

Se dispone que la elaboración de documentos sea realizada por los ministerios, dado su conocimientos específico en la materia del proceso de contratación en su sector. Sin embargo, es opinión de esta Comisión que la elaboración de estos documentos por parte de los sectores correspondientes se vería favorecida si se establecieran lineamientos básicos en cuanto al contenido de los documentos. Sin estos lineamientos, los documentos emitidos por sector podrían resultar muy disímiles entre sí, en perjuicio de los usuarios de los procesos de contrataciones. Con ello, se propone que el OECE articule el trabajo de los ministerios a cargo de la elaboración de estos documentos.

La **vigésima cuarta disposición complementaria final** se incorpora para precisar que, ante el cambio de denominación del OSCE, toda referencia en las leyes y sus normas de desarrollo a este organismo debe entenderse como OECE, la denominación propuesta en este predictamen.

La **vigésima quinta disposición complementaria final** recoge lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, acerca de la protección y promoción de la competencia y prevención del delito.

Se dispone que al verificarse la existencia de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, las entidades contratantes, el OECE o el Tribunal de Contrataciones Públicas debe remitir toda la información pertinente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Luego, dicha secretaría inicia el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, cuya decisión debe ser mantenida en reserva.

Asimismo, se dispone que el OECE ordena a la entidad contratante que elimine requisitos o reglas en los documentos del procedimiento de selección que contravengan los principios de publicidad y libertad de concurrencia y competencia. Más aún, al tomar conocimiento de la existencia de un delito, el OECE debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Público.

Esta Comisión ha optado por mantener estas medidas para fortalecer las acciones que el OECE puede tomar ante conductas anticompetitivas. Se considera que la existencia de estas conductas en el procedimiento de selección abre la puerta a proveedores sin experiencia que no logren los fines públicos deseados y lleven a paralizaciones y al incremento de los costos para el Estado. Estas medidas son concordantes con las funciones del OECE establecidas en el párrafo 11.3 del texto sustitutorio, particularmente con el literal b).

La **vigésima sexta disposición complementaria final** establece que se integra en el RNP la información de los Beneficiarios Finales de los proveedores inscritos en éste. La figura de beneficiarios finales se incorpora en el marco normativo a través del Decreto Legislativo 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales, con el objetivo de enfrentar la elusión y evación fiscal. Se opta por incorporar esta información en el RNP para trazar a aquellos proveedores que han cumplido con declarar a sus beneficiarios finales. Debido a

que esta información es recabada por la SUNAT, se establece que el OECE integra esta información a través de mecanismos de interoperabilidad.

La **vigésima séptima disposición complementaria final** establece que, mediante decreto supremo, refrendado por el MEF, se reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas, en el plazo de ciento ochenta días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Ley. Se dispone que en dicha reglamentación se desarrolle, entre otros, los procedimientos, requisitos y condiciones aplicables a las disposiciones previstas en esta Ley.

Asimismo, se establece que la reglamentación se desarrolle en títulos diferenciados por tipos de procesos y sus modalidades. Ello responde a la propuesta del Ministerio de Vivienda y Construcción de regular el proceso de contratación en tres diferentes reglamentos según el objeto de contratación —consultoría, licitaciones y contratos de obra, y adquisiciones. Es opinión de esta Comisión que la publicación de diferentes reglamentos puede restar orden al marco legal de contrataciones, dificultando su utilización para el usuario. Sin embargo, es relevante señalar en la fórmula legal que el reglamento debe regular las contrataciones públicas considerando las diferencias entre objetos y modalidades de contratación, entre otras características específicas que pueden tener los procesos de contrataciones públicas.

La **vigésima octava disposición complementaria final** establece la entrada en vigor de la Ley. Se dispone que la norma entra en vigor a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente a la publicación del reglamento de la ley. Se exceptúa la décima tercera, décima séptima, vigésima y vigésima séptima disposiciones complementarias finales, las cuales entran en vigor a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Esta excepción se sustenta en que no se requiere la publicación del reglamento de la ley para que estas disposiciones puedan ser implementadas.

3.8.2 Disposiciones Complementarias Transitorias

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la **primera disposición complementaria transitoria** establece que la Pladicop es parte de los sistemas de información que administra el Ministerio de Economía y Finanzas y que la información del SEACE, el RNP y otros sistemas complementarios sobre contrataciones públicas forman parte de la Pladicop, siendo que la integración de la información de dichos sistemas es progresiva y su implementación está a cargo del OECE. Además, se especifica que se establecerá una

plataforma enfocada en contratos menores, la cual también será implementada de manera progresiva, conforme las disposiciones del reglamento.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE del Poder Ejecutivo, la **segunda disposición complementaria transitoria** reconoce la importancia de realizar proyectos pilotos para mecanismos diferenciados de adquisición para la adquisición de tecnologías sanitarias. Para tal efecto, se establece que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Ministerio de Salud y las entidades designadas por el Ministerio de Salud —como ente rector del Sistema Nacional de Salud— mediante resolución ministerial, con el acompañamiento de Perú Compras, realizan pilotos para la utilización de los mecanismos diferenciados de adquisición para la adquisición de tecnologías sanitarias a los que hace referencia el artículo 44 del texto sustitutorio.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 5472/2022-PE, la **tercera disposición complementaria transitoria** precisa que los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas que a la entrada en vigor de la Ley cuenten con designación vigente, continúan en el ejercicio de sus funciones hasta completar el período para el cual fueron elegidos. Asimismo, una vez vencido el período para el cual fueron elegidos y en caso no se haya designado a los vocales que los sustituyan, como resultado del Concurso Público conducido por el Comité Multisectorial respectivo, puede permanecer en el cargo por un periodo máximo de un año.

Por su parte, tratándose de los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas que a la fecha de entrada en vigor de la Ley se encuentren con designación vencida, su permanencia en el cargo puede extenderse únicamente por un periodo máximo de seis meses.

Se incorpora la propuesta del Poder Ejecutivo de la **cuarta disposición complementaria transitoria**. Según la exposición de motivos del proyecto, se regula la aplicación de la norma en el tiempo, señalando que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, ello en virtud del principio de temporalidad y vigencia de la norma, bajo criterios de predictibilidad.

Se incorpora la propuesta del Poder Ejecutivo de la **quinta disposición complementaria transitoria**, la cual establece que en tanto culmine el proceso de implementación al régimen del Servicio Civil, el personal del OSCE y Perú Compras mantiene su régimen laboral.

La **sexta disposición complementaria transitoria** se incorpora de la propuesta del proyecto de ley 5472/2022-PE. Según la exposición de motivos de este proyecto, esta disposición establece que los procesos arbitrales a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje que hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley seguirán siendo organizados y administrados por el OECE hasta su finalización. De igual forma, se atienden hasta su culminación los servicios que estuvieron a cargo de la Dirección de Arbitraje y que se encuentran en el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) del OECE y que hubiesen ingresado antes de la entrada en vigencia de la ley, con excepción del servicio de solicitud de copia de documentación obrante en expediente arbitral administrado por la Dirección de Arbitraje a solicitud de parte acreditada en el proceso arbitral, de Árbitro Único o de miembros del Tribunal a cargo del proceso arbitral, que seguirá brindándose.

Asimismo, se establecen disposiciones transitorias acerca de los árbitros que integran el vigente Registro Nacional de Árbitros hasta la finalización de los procesos arbitrales en los que participen. Más aún, se permite de manera excepcional que los árbitros que conformaban el Registro podrán ser designados para arbitrajes institucionales por un plazo máximo de seis meses.

La **séptima disposición complementaria transitoria** establece medidas para la implementación de la validación de impedimentos en la Ficha Única de Proveedor. Dicha disposición ha sido incorporada sobre la base de información adicional provista por el Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la propuesta de la Ficha Única de Proveedor. En esta disposición se establece que, hasta que culmine el proceso de implementación de la validación de impedimentos en la FUP, la verificación de no existencia de impedimentos se realiza mediante la presentación de declaración jurada de no encontrarse impedido. Asimismo, se dispone que las entidades públicas responsables de la información necesaria para la implementación de la validación de impedimentos realizan las acciones para brindar al OECE el acceso a esta información, bajo responsabilidad.

La **octava disposición complementaria transitoria** se incorpora sobre la base de información adicional provista por el Ministerio de Economía y Finanzas no contemplada inicialmente en el proyecto de ley 5472/2022-PE. Esta Disposición busca evitar vacíos y colisiones entre lo dispuesto en el texto sustitutorio y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, respecto a los márgenes establecidos para los procedimientos de selección contemplados en dicha Ley.

En la **novena disposición complementaria transitoria** se dictan medidas para la aplicación de la retención de pago como garantía en procesos de contratación iniciados

antes de la entrada en vigor de la ley. La retención de pago como modalidad de garantía se establece en los párrafos 61.6 y 61.7 del Texto Sustitutorio.

Se establece que la entidad contratante puede otorgar la facultad de retener el pago como garantía tanto antes como después del otorgamiento de la buena pro. En caso aún no se haya dado aún la buena pro, la decisión de la entidad se comunica en el acta de otorgamiento de la buena pro. En tanto, cuando ya se cuente con la buena pro y previo a su consentimiento por parte del proveedor, la decisión de la entidad se comunica al postor ganador como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

Esta disposición incorpora lo establecido en el párrafo 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo 1553, párrafo que permite la retención de pago como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento por parte del postor adjudicado durante el Año Fiscal 2023. Es opinión de esta Comisión que esta alternativa debe continuar y ser permitida para procesos de contratación en curso mientras el Poder Ejecutivo finaliza el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y las disposiciones respecto a garantías de fiel cumplimiento entren en vigor. En ese sentido, se incorporan estas medidas dentro de una disposición complementaria transitoria.

La **décima disposición complementaria transitoria** dicta medidas para la implementación progresiva del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas propuesto en el Texto Sustitutorio. Esta implementación es conducida por el OECE hasta el 31 de diciembre del 2026 y constituye un tránsito del Registro Nacional de Árbitros vigente. Se dispone que desde el 01 de enero de 2027 las entidades contratantes designen a árbitros o adjudicadores de las nóminas de las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas.

3.8.3 Disposición Complementaria Derogatoria

Se recoge la **disposición complementaria derogatoria única** del proyecto de ley 5472/2022-PE. Esta disposición deroga un conjunto de normas y disposiciones.

Primero, se deroga la ley de contrataciones públicas vigente, Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Segundo, se derogan dos decretos legislativos que realizaron modificatorias a la Ley 30225: el Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, y el Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. En el caso del Decreto Legislativo 1444, el proyecto de ley 5472/2022-PE del Poder Ejecutivo propone la derogación de dicha norma con la excepción de su cuarta y séptima disposiciones complementarias finales. Como se observa líneas arriba, la cuarta disposición mencionada —referida a los contratos de gobierno a gobierno— ha sido incorporada, con modificaciones, entre las disposiciones complementarias finales de este texto sustitutorio. De la misma manera, la séptima disposición complementaria final del Decreto Legislativo —acerca de las contrataciones de Petroperú en el marco de la Ley 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. — ha sido incorporada sin modificaciones. En este sentido, se propone la derogación completa del Decreto Legislativo 1444.

Tercero, se deroga el Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras, debido a que en el Título II, Capítulo III del texto sustitutorio se establecen las funciones y otras disposiciones de Perú Compras.

Cuarto, se deroga el artículo 6 de la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, modificado por el artículo 1 de la Ley 31738, Ley que modifica la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. Este artículo hace referencia al acceso oportuno a tratamientos que garanticen la atención integral en salud a través de los productos farmacéuticos, incluyendo terapias génicas o genéticas y dispositivos médicos. Dicho tratamiento se regulará en la décima sexta disposición complementaria final del texto sustitutorio.

Por último, se deroga el segundo párrafo del numeral 2 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. Dicho párrafo dispone:

> *"En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece el/la juez/a o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar,* ***dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento****. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según corresponda".* (Énfasis agregado)

Se observa que, según lo establecido en dicho párrafo, el monto de la contracautela ante la adopción de medidas cautelares no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. El artículo 86 del texto sustitutorio establece disposiciones específicas que reducen la carga financiera que podría representar una contracautela para el contratista; entre ellas, se dispone que en el caso de contrataciones de hasta 200 UIT o en el caso de que los contratistas sean microempresas o pequeñas empresas, la contracautela es la caución juratoria. De este modo, se deroga el párrafo mencionado para evitar que las disposiciones sobre contracautela establecidas en el artículo 86 del texto sustitutorio contravengan al Decreto Legislativo 1071.

3.9 Debate en la sesión conjunta entre la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de fechas 29 y 30 de abril de 2024

En la sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado realizadas de forma conjunta con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, se presentaron el ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, quién durante su presentación, observó lo dispuesto en el párrafo 3 de la décima novena disposición complementaria final, respecto del mandato que se le otorga al OECE para integrar y difundir información acerca de las investigaciones penales en curso de los proveedores en el RNP. Según el ministro, esta medida afectaría la presunción de inocencia de dichos proveedores. En respuesta, se ha optado por retirar este párrafo de la décima novena disposición complementaria final.

Asimismo, manifestó su preocupación por las obras paralizadas actualmente y la necesidad de incorporar alguna disposición en el texto sustitutorio que faculte al MEF a tomar medidas para reactivar dichas obras. Sobre la base de ello, se incorporó la disposición complementaria modificatoria única, la cual modifica el párrafo 5.12 del artículo 5 de la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada por el Decreto Legislativo 1584. Esta modificación adecuaría las disposiciones de dicha ley a la potencial sustitución del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

En su presentación, el doctor Morón Urbina señaló la potencial inconstitucionalidad de lo dispuesto en el párrafo 3 de la décima novena disposición complementaria final. Sobre la base de dicha observación, así como la del ministro de Economía y Finanzas, esta Comisión optó por retirar dicho párrafo del texto sustitutorio.

También recomendó que se agregue la infracción que se encuentra regulada en el literal a) del párrafo 50.1 del artículo 50 de la vigente ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado debido a que es un supuesto por el cual se podría iniciar procedimientos administrativos sancionadores en los que se investigue a los proveedores imprudentes o dolosos que hagan propuestas y luego las retiren sin justificación alguna. En atención a ello, se ha incorporado como infracción la siguiente: "Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada" Respecto de las funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas-OECE, en el literal g) se ha eliminado la frase "que no versen sobre su carácter interpretativo", toda vez que conforme lo ha manifestado por el doctor Morón Urbina, si el OECE va a realizar orientación, asistencia técnica y acompañamiento a las entidades contratantes, por ende, en dichas actuaciones va a emitir consultas que necesariamente van a versar sobre la aplicación e interpretación de la norma, por lo que debe contar con dicha función.

Por último, tanto el ministro de Economía y Finanzas, como el doctor Morón Urbina coincidieron en la observación al párrafo 34. 2, cuyo texto podía generar confusión respecto del tratamiento de los contratos menores en la Pladicop. Al respecto, se ha precisado que la obligación que tienen las entidades que contraten a través de contratos menores, es la publicación de la información referida a estos contratos en la Pladicop a efectos de garantizar la trazabilidad de las operaciones, salvaguardando la flexibilidad de esta modalidad de contratación.

El debate en la sesión conjunta, respecto del predictamen de la Ley de Contrataciones Públicas, los congresistas asistentes realizaron los siguientes aportes:

El congresista ZEBALLOS MADARIAGA propuso modificaciones en el artículo 46 —acerca de la elaboración de requerimientos— y en la vigésima tercera disposición complementaria final.

En el primer caso, señaló la necesidad de que las entidades contratantes utilicen metodologías de trabajo colaborativo —entre ellas, la Building Information Modeling (BIM)— para la elaboración de expedientes técnicos de obra. Ello permitiría una mejor calidad de estos expedientes, lo que resultaría en una reducción de paralizaciones y demoras en la ejecución de obras. Sobre la base de lo señalado por dicho congresista, se incorporó el párrafo 46.6 del artículo 46 del texto sustitutorio.

Respecto de la vigésima tercera disposición complementaria final, el congresista anotó que, en su opinión, debía ser el OECE quien elabore —no solo articule— los documentos metodológicos que orienten la generación de los expedientes técnicos de obra. Sobre la base de esta acotación, se modificó dicha disposición en los términos propuestos.

Por su parte, el congresista FLORES RUÍZ, solicitó que en la segunda disposición complementaria que regula las contrataciones de productos farmacéuticos o dispositivos médicos estratégicos con proveedores no domiciliados, específicamente en el tercer párrafo, la inclusión del término 'equipos' médicos.

A raíz de la solicitud de la congresista RAMÍREZ GARCÍA, se ha incorporado el siguiente texto como segundo párrafo en la segunda disposición complementaria final, "Perú Compras establece condiciones especiales en los catálogos electrónicos para fomentar la participación de las micro y pequeñas empresas".

El congresista TACURI VALDIVIA propuso la inclusión del literal d) del párrafo 77.1 del artículo 77 que regula los requisitos para resolver controversias en contrataciones públicas. El mencionado literal establece que "para arbitrajes o junta de prevención y resolución de disputas de contrataciones que superen las dos mil UIT, la institución arbitral o centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas deben contar con certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno".

Así también, se realizaron algunas precisiones de técnica legislativa.

Todos los cambios realizados son los que se presentan en el texto sustitutorio de este dictamen.

V. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

La aprobación de la ley que aprueba la Ley General de Contrataciones Públicas impacta en la legislación la legislación vigente, pues se está aprobando una nueva ley que deroga la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras y el artículo 6 de la de la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, modificado por el artículo 1 de la Ley 31738, Ley que modifica la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas; así como modifican los artículos 7 y 8 del Decreto Legislativo 1439, Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento.

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República, establece que los proyectos de ley contengan un Anáiisis Costo Beneficio, que exprese en términos cuantitativos y cualitativos de los impactos económicos y sociales.

La fórmula legal propuesta a través del presente dictamen no contiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto público vigente. No se está creando un sistema administrativo ni funcionai que requiera la transferencia de recursos presupuestales adicionales para su implementación.

La presente propuesta normativa tiene por objeto establecer el marco normativo claro y simple para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Para esto, es necesario identificar los grupos de interés involucrados con la vigencia de una nueva Ley General de Contrataciones Públicas que busca maximizar el uso de los recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del

Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Justamente dentro de la búsqueda del cumplimiento de la finalidad pública, podemos encontrar a los primeros beneficiarios de las disposiciones del texto sustitutorio, la ciudadanía, la cual va a verse benefciciada con el cumplimiento de la programación, desarrollo de los procedimientos de selección y finalmente, con la ejecución de los bienes, servicios y obras que buscan cubrir determinadas brechas de atención del Estado con la ciudadanía en general.

En esa línea se ha identificado los beneficios que conlleva la aprobación de la presente presente fórmula legal:

a. Para los actores de las entidades contratantes:
   - Contar con un enfoque sistémico sobre el proceso de contratación pública, así como la interacción de los diferentes actores en el marco del sistema nacional de abastecimiento.
   - Contar con mayores niveles de competencia de proveedores.
   - Planificar los procesos de contratación de manerara estratégica y con enfoque de gestión de riesgos que permita cumplir la finalidad pública buscada.
   - Implementar el proceso de profesionalización para generar mayores niveles de especialización en los procesos de contratación pública.

b. Para los proveedores:
   - Competir con mayores oportunidades.
   - Simplificación en los procesos de contratación lo que impacta en la ejecución de obras

Respecto de los costos, es evidente que este proceso necesitará una implementación y capacitación por parte de los actores del sistema nacional de abastecimiento, sin embargo es un proceso necesario que redundará en superar las actuales falencias que atraviesa el subsistema de contratación pública.

VII. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Descentralización Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recomiendan la aprobación los proyectos de ley **5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR ,** con el siguiente texto sustitutorio:

LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad de la ley

La presente ley tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

Artículo 2. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública.

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la ley

3.1. La presente ley es aplicable para la contratación de bienes, servicios y obras, siempre que las entidades contratantes asuman el pago con fondos públicos. Los contratos menores se rigen por esta ley.

3.2. Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la ley, bajo el término genérico de entidad contratante:

a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos.
b) Los ministerios, sus organismos públicos, programas y proyectos especiales.
c) Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos.

d) Los gobiernos locales, sus programas y proyectos.
e) Las universidades públicas.
f) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.
g) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o de derecho privado.
h) El Seguro Social de Salud (Essalud).
i) Las Fuerzas Armadas.
j) La Policía Nacional del Perú.
k) Los órganos desconcentrados.
l) Las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones.

Artículo 4. Definiciones

Para los fines de esta ley, se entiende por:

a) **Contratos:** son acuerdos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor, con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras.
b) **Subcontratación:** es la relación contractual entre un contratista y un tercero, a fin de ejecutar determinadas prestaciones del contrato conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante.
c) **Compra corporativa:** es una modalidad de contratación pública eficiente que agrupa la demanda de más de una entidad para contratar en forma conjunta bienes y servicios en general, de naturaleza similar, para alcanzar condiciones más ventajosas para el Estado.
d) **Compra centralizada:** es una modalidad de contratación pública eficiente por la cual una o más entidades contratantes, atendiendo a consideraciones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, encargan a otra entidad todas las fases del proceso de contratación, hasta la liquidación o pago total, de bienes, servicios u obras.
e) **Compra centralizada de emergencia:** es una modalidad de compra centralizada destinada tanto a la prevención como a la atención de emergencias, sobre todo en zonas donde se dificulta la obtención de proveedores.
f) **Comparación de precios:** es un procedimiento de selección competitivo para la contratación de bienes y servicios en los que el único factor de evaluación es el precio, conforme a las condiciones que señala el reglamento.
g) **Subasta inversa electrónica:** es un procedimiento de selección utilizado por las entidades contratantes para la contratación de bienes y servicios comunes que

cuenten con ficha técnica. En este procedimiento, los proveedores pujan por un precio más bajo. Las especificaciones, excepciones y condiciones del uso de la subasta inversa electrónica se encuentran establecidas en el reglamento.

h) **Acuerdo de convenio marco:** **es una modalidad de compra pública eficiente en la que el proceso de contratación se realiza en dos etapas diferenciadas, una para seleccionar los proveedores que serán parte del Acuerdo Marco y otra para adjudicar el contrato.**

i) **Catálogo electrónico de acuerdo marco:** **es una herramienta facilitadora de la contratación pública que forma parte de la *Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas* (Pladicop), a través de la cual las entidades contratantes se proveen de bienes o servicios sin mediar un procedimiento de selección, con los proveedores seleccionados por la Central de Compras Públicas (Perú Compras) que forman parte del catálogo electrónico.**

j) **Multa:** es la obligación pecuniaria impuesta al infractor que consiste en pagar un monto económico por la comisión de una infracción conforme a las disposiciones que establece esta ley.

k) **Inhabilitación temporal:** es la privación, por un periodo determinado, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección y en procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, así como de contratar con el Estado.

l) **Inhabilitación definitiva:** es la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y en procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, así como de contratar con el Estado.

m) **Amonestación escrita:** es la sanción no pecuniaria que se aplica por la comisión de infracciones que no revisten mayor gravedad.

n) **Retiro temporal del registro:** es la sanción no pecuniaria que consiste en el retiro por un tiempo determinado del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que administra el OECE.

o) **Exclusión:** es la sanción no pecuniaria que consiste en el retiro definitivo del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que administra el OECE.

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios:

a) **Legalidad:** las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos.
b) **Eficacia y eficiencia**: las entidades contratantes actúan de forma efectiva y oportuna para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. Implica garantizar la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como la ejecución contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de contratación pública.
c) **Valor por dinero:** las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure únicamente el menor precio.
d) **Integridad:** es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien, guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.
e) **Presunción de veracidad:** es la presunción, en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación, de que los documentos y declaraciones formulados por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
f) **Causalidad:** este principio establece que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. No es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios.
g) **Publicidad:** Las entidades contratantes garantizan que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.
h) **Libertad de concurrencia:** Las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitar exigencias y formalidades innecesarias.
i) **Transparencia y facilidad de uso:** son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades contratantes garantizan el acceso

público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la Ley de la materia. El acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil.

j) **Competencia:** los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, garantizando el equilibrio entre la calidad y el precio. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

k) **Igualdad de trato:** las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Por tanto, está prohibido el otorgamiento de privilegios o el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que situaciones similares no se traten de manera diferenciada, y que situaciones diferentes no se traten de manera idéntica, siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

l) **Equidad y Colaboración:** todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones asumidos, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue; sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades contratantes de acuerdo con el marco normativo vigente.

m) **Sostenibilidad de las contrataciones públicas:** las entidades contratantes deben promover prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, considerando los aspectos económicos, sociales y medioambientales, contribuyendo a alcanzar objetivos de sostenibilidad en todo proceso de contratación pública.

n) **Innovación:** Las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes, siendo la innovación un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas.

o) **Vigencia tecnológica:** Las entidades contratantes deben adquirir bienes, servicios y obras que reúnan las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para la que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración; debiendo preverse la posibilidad de repotenciarse, integrarse o adecuarse a los nuevos avances científicos y tecnológicos.

5.2. Las contrataciones públicas se rigen también por los principios previstos en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, sin perjuicio de otros principios generales de derecho público que resulten aplicables.

5.3. Los principios que rigen las contrataciones públicas sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente ley y su reglamento, de integración ante sus vacíos y como parámetros para la actuación de todos aquellos involucrados en el proceso de contratación.

Artículo 6. Enfoques de la ley

Al aplicar la presente ley, los operadores consideran los siguientes enfoques:

a) **Integridad:** consiste en la promoción de la conducta funcional y actividad comercial responsable, así como en el diseño e implementación de instrumentos, mecanismos y acciones para prevenir las prácticas indebidas o corruptas en la contratación pública. Los actores de la contratación pública, en el marco de sus respectivas competencias, impulsan y desarrollan mecanismos de apertura de datos y mejoras en la gestión de la comunicación y publicidad de las decisiones de las entidades contratantes, pactos de integridad, orientaciones que instruyan a los servidores públicos en la identificación y solución de situaciones que presenten conflictos de intereses, y otras que puedan afectar la integridad pública, de modo que dichos servidores garanticen la transparencia de la información pública sobre las contrataciones y la respectiva rendición de cuentas en todas las instancias.
b) **Gestión por resultados:** es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales, bienes y servicios (productos), y resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Contribuye a la mejora de la calidad del gasto público al propiciar que las entidades contratantes empleen los recursos públicos con eficacia y eficiencia, así como a mejorar la toma de decisiones en materia presupuestal y de gestión.
c) **Gestión de riesgos en contratación pública:** es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la

probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos.

d) **Gobernanza de la contratación pública**: es el enfoque que prioriza la gestión efectiva, eficaz, ordenada y transparente del proceso de contratación pública, en cumplimiento del mandato constitucional que busca promover la transparencia y la protección del interés general. Tanto los mecanismos internos de las entidades contratantes como las vías externas de participación de los otros actores conforman este enfoque multidimensional, el cual requiere la articulación de los involucrados en el proceso de contratación pública y es fundamental para la consecución del fin público de adquirir bienes, servicios y obras.
e) **Profesionalización de la contratación pública:** la promoción de estrategias de profesionalización integrales y dinámicas de los compradores públicos es una prioridad para la mejora continua en las contrataciones públicas. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), en coordinación con la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), es responsable de generar espacios de capacitación, entrenamiento y certificación de los compradores públicos, para conformar equipos especializados y profesionales en toda entidad contratante, capaces de reducir los riesgos y de garantizar la seguridad jurídica, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

Artículo 7. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación

7.1. Se excluyen de las disposiciones de la presente ley los siguientes supuestos, con excepción de aquellas referidas a los principios que rigen las contrataciones públicas:

a) Los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares de un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en el Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
b) Las contrataciones realizadas por los órganos del Servicio Exterior de la República fuera del territorio nacional, exclusivamente para su funcionamiento y gestión.
c) La contratación de notarios públicos por debajo de los montos que sean establecidos en el reglamento.
d) Las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, así como sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno,

altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales de los que el Perú es parte.

e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, peritos, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, el amigable componedor y demás provenientes de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de controversias previstos o no en la presente ley y su reglamento.
f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, organismo multilateral, Estados o entidades cooperantes, siempre que se financien por operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.
g) Los contratos celebrados con los presidentes de directorios para desempeñar funciones a tiempo completo en las empresas del Estado.
h) La contratación de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación en la etapa de trato directo y en la fase arbitral o de conciliación para la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión que efectúe el Ministerio de Economía y Finanzas.
i) La suscripción a publicaciones científicas y/o especializadas, así como la contratación de licencia, renovación y/o la suscripción para el uso de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales de los que el Perú es parte.
j) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades contratantes, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde, no se persigan fines de lucro, no se obtengan utilidades y solo se reconozcan los costos en que incurre la entidad a cargo de la entrega del bien, servicio u obra, previo informe técnico y legal.
k) Las contrataciones internacionales que realice el Estado peruano con otros Estados en el marco de lo establecido por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud u otros acuerdos supranacionales para el acceso equitativo a tecnologías sanitarias.
l) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas

en el convenio suscrito para tal efecto. En caso de que las donaciones provengan de organismos multilaterales financieros, no se requiere el porcentaje señalado.

m) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar a más de un proveedor.

n) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, cuando se cumpla uno de los siguientes supuestos: i) no sea posible realizar la contratación a través de los mecanismos de contratación o los procedimientos de selección de la presente ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero; y, iii) las contrataciones relacionadas a actividades de promoción y participación del Perú que tengan carácter oficial en ferias, cumbres, competiciones y similares, en materia comercial, de inversiones, exportaciones, turismo, así como de imagen país, en territorio extranjero. Los supuestos señalados precedentemente se sustentan con informe técnico y legal.

o) Las contrataciones gobierno a gobierno y sus contratos derivados conforme a los acuerdos del comercio internacional y a las normas y principios del derecho internacional, en observancia a lo referido en la vigésima primera Disposición Complementaria Final de la Ley.

p) Las contrataciones de bienes, servicios, servicios de consultoría de obras y obras necesarias para los procesos de adquisición de predios y liberación de interferencias en los proyectos que se requieran en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencias de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública de los que el Perú es parte.

q) Las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales.

7.2. Los supuestos señalados en los literales f), g), h), i), j), l), m), n), o), p) y ***q)*** del párrafo 7.1 del presente artículo son supervisados por el OECE.

7.3. **Todas las entidades contratantes que apliquen los supuestos comprendidos en el párrafo 7.1 del presente artículo, publican información de sus procesos en la Pladicop. El reglamento establece las condiciones y oportunidad de dicha publicación.**

Artículo 8. Sujeción a acuerdos comerciales

8.1. Los procesos de contratación deben cumplir con las disposiciones establecidas en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales vigentes en los que el Perú es parte.

8.2. En las contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, las entidades contratantes conceden incondicionalmente a los bienes y servicios de la otra parte y a los proveedores de la otra parte un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes y servicios nacionales y a los proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente ley, su reglamento y en la normativa de la materia.

TÍTULO II
ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
ACTORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 9. Actores del proceso de contratación

En el proceso de contratación pública participan los siguientes actores:

a) La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA).
b) El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
c) La Central de Compras Públicas (Perú Compras).
d) Las entidades contratantes.
e) Los proveedores.

Artículo 10. Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA)

La DGA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, ejerce sus funciones de acuerdo con el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento.

CAPÍTULO II
ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES - OECE

Artículo 11. Definición y funciones del OECE

11.1. El OECE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera.

11.2. El OECE brinda asistencia técnica y orientación, y supervisa el cumplimiento de la normativa de contratación pública y el desarrollo de todo el proceso de contratación con sujeción a la presente ley, para contribuir a la eficiencia del Sistema Nacional de Abastecimiento.

11.3. El OECE tiene las siguientes funciones:

a) Brindar asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública, a las entidades públicas, como parte de las estrategias en la gestión eficiente de los procesos de contratación, las que pueden incluir el acompañamiento en los procesos de contratación, de acuerdo con lo que establezca el reglamento.
b) Supervisar de forma selectiva o aleatoria, incluso a pedido de parte, la gestión de los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores. Asimismo, suspender los procedimientos de selección en los que, durante las acciones de supervisión, se identifiquen riesgos o transgresiones que impidan el cumplimiento de los fines de la contratación.
c) Orientar a los usuarios en el manejo de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop), incluyendo el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
d) Administrar, diseñar, desarrollar, operar, integrar datos y evaluar el desempeño de la Pladicop, en el marco del principio de eficacia y eficiencia.
e) Integrar, procesar y evaluar la información registrada en la Pladicop para generar evidencias sobre el desempeño de las entidades públicas, de los proveedores y de los efectos de la normativa de contratación pública.
f) Diseñar, formular, aprobar y difundir directivas y lineamientos en materia de su competencia, así como de las plataformas o herramientas que administra, incluidas las de gestión para el cumplimiento de su rol supervisor y de acompañamiento. Los anteproyectos de alcance general deben ser prepublicados para fomentar la participación de los actores de la compra pública en su diseño y formulación.
g) Absolver consultas sobre el sentido o alcance de la normativa de contrataciones públicas, formuladas por las entidades contratantes y por el sector privado y la

sociedad civil, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Las consultas solicitadas por entidades públicas son gratuitas.

h) Administrar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
i) Desarrollar acciones de capacitación y difusión sobre la aplicación de la presente ley y su reglamento para evaluar su impacto cuantitativo y cualitativo. Asimismo, emitir la certificación de los responsables de las áreas involucradas en las contrataciones públicas, conforme a las disposiciones de la DGA.
j) Administrar y sistematizar el Banco de Laudos Arbitrales sobre contrataciones públicas.
k) Administrar el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que resuelven controversias en materia de contrataciones públicas.
l) Supervisar de oficio, de manera selectiva o aleatoria, o incluso a pedido de parte, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento para ser incluidos o excluidos en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de disputas que resuelven controversias en contrataciones públicas.
m) Sancionar a las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que resuelven controversias en materia de contrataciones públicas, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento.
n) Aprobar el Código de Ética para Arbitraje en Contrataciones Públicas.
o) Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

11.4. Las entidades contratantes se encuentran obligadas, bajo responsabilidad, a brindar de manera oportuna la información u opinión técnica requerida por el OECE en el ejercicio de sus funciones.

11.5. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en los literales a) y b) del párrafo 11.3, el OECE aprueba un Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica, en el cual, sobre la base de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), se determinan el tipo y la cuantía de las contrataciones por supervisar y las entidades contratantes que reciben asistencia técnica obligatoria en sus contrataciones. El OECE puede asistir técnicamente a otras entidades contratantes, de oficio o a solicitud de estas, conforme lo establezca el reglamento.

11.6. La asistencia técnica y orientación a las que se hace referencia en el literal a) del párrafo 11.3 del presente artículo no implica responsabilidad del OECE en los actos que se realicen en los procesos de contratación ni sustituye el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la entidad contratante.

11.7. Como parte del cumplimiento de la función establecida en el literal e) del párrafo 11.3 del presente artículo, el OECE elabora informes semestrales mediante los cuales se evidencia el comportamiento de las entidades contratantes, así como los resultados de los procedimientos de selección convocados.

Artículo 12. Órganos del OECE

12.1. El OECE tiene los siguientes órganos:

a) Consejo directivo: máximo órgano del OECE integrado por tres miembros designados por un período de cuatro años renovables. Sesiona, como mínimo, una vez al mes. Sus miembros reciben dietas a excepción de su presidente ejecutivo.
b) Presidente ejecutivo: es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la entidad.
c) Tribunal de Contrataciones Públicas: órgano resolutivo del OECE, con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

12.2. El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica del OECE, así como las funciones generales y específicas de sus órganos.

12.3. El OECE cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas que rigen el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

Artículo 13. Requisitos para la designación de los miembros del consejo directivo y del presidente ejecutivo

13.1. Para ser designado miembro del consejo directivo o presidente ejecutivo del OECE, se requiere lo siguiente:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita con la comprobación de no menos de cinco años de experiencia en cargos directivos o no menos de ocho años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en esta norma.
b) Contar con título profesional universitario.

c) No tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso ni encontrarse inhabilitado administrativa o judicialmente para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional.
d) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
e) No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año previo a la designación.
f) No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado conforme a la presente ley.
g) No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación.

13.2. La designación de los miembros del consejo directivo y del presidente ejecutivo se realiza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 14. Causales de vacancia del cargo de miembro del consejo directivo o del presidente ejecutivo

14.1. La vacancia de los miembros del consejo directivo o del presidente ejecutivo del OECE se produce por las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.
b) Fallecimiento.
c) Incapacidad física o mental permanente.
d) Condena por delito doloso, mediante sentencia consentida o ejecutoriada.
e) Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada.
f) Vencimiento del período de designación.
g) Inasistencia injustificada a tres sesiones del consejo directivo consecutivas o a cinco no consecutivas, en el período de un año.
h) Incompatibilidad sobreviniente al cargo.

14.2. La declaración de vacancia del cargo de miembro del consejo directivo o del presidente ejecutivo se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 15. Recursos del OECE

Los recursos del OECE son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

b) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional, las donaciones, transferencias y otros que se efectúen a su favor de acuerdo con la normativa sobre las materias.
c) Los demás que le asigne la normativa.

Subcapítulo I
Tribunal de Contrataciones Públicas

Artículo 16. Funciones del Tribunal de Contrataciones Públicas

16.1. El Tribunal de Contrataciones Públicas tiene las siguientes funciones:

a) Resolver las controversias relacionadas a las actuaciones desarrolladas durante los procedimientos de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, que surjan entre las entidades contratantes y los proveedores, o entre estos y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en los casos que corresponda según la presente ley y el reglamento.
b) Aplicar las sanciones de multa, así como la inhabilitación temporal y definitiva a los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que sean pasibles de sanción.
c) Aplicar multas a las entidades contratantes **que** hayan cometido una infracción en su calidad de proveedores.
d) Emitir precedentes de observancia obligatoria de modo expreso y con carácter general, mediante acuerdos adoptados en sala plena, en las materias de su competencia. Los acuerdos de sala plena deben tener en cuenta las opiniones vinculantes que la DGA emita en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
e) Sistematizar las resoluciones que emite en ejercicio de sus funciones.
f) Las demás funciones que le otorga la normativa.

16.2. En todas sus actuaciones, el Tribunal de Contrataciones Públicas considera la aplicación de los principios y enfoques contemplados de la presente ley y los principios establecidos en el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

16.3. El Tribunal de Contrataciones Públicas debe respetar el principio de predictibilidad, a fin de mantener coherencia en la solución de controversias y otorgar seguridad jurídica a los operadores del sistema.

Artículo 17. Designación de vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas

17.1. Los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas son elegidos por concurso público de méritos conducido por un comité multisectorial integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la presidencia del Consejo de Ministros; asimismo, tienen la condición de funcionarios de designación y remoción regulada.

17.2. La designación es por un período de tres años. Vencido el periodo de designación, el vocal continúa en el ejercicio de sus funciones, hasta por un período de un año o se designe al vocal que lo sustituya, lo que ocurra primero.

17.3. El presidente del Tribunal de Contrataciones Públicas es designado por el consejo directivo del OECE.

17.4. Los procedimientos para la evaluación, selección y designación de los vocales son establecidos mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

17.5. La conformación inicial del Tribunal de Contrataciones Públicas, el número de salas y de las secretarías técnicas son establecidas mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 18. Requisitos para ser vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas

Para ser vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas se requiere lo siguiente:

a) Contar con título profesional universitario.
b) Tener experiencia profesional acreditada no menor a ocho años en las materias relacionadas con la presente ley, así como tener por lo menos un año de experiencia en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.
c) No tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional.
d) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
e) No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año previo a la postulación.
f) No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado conforme a la presente ley.

g) No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación.

Artículo 19. Causales de vacancia del cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas

19.1. La vacancia de los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas se produce por las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.
b) Fallecimiento.
c) Incapacidad física o mental permanente.
d) Condena por delito doloso, mediante sentencia consentida o ejecutoriada.
e) Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada.
f) Vencimiento del período de designación, salvo la continuación en el ejercicio de las funciones a la que se refiere el párrafo 17.2 del artículo 17 de la presente ley.
g) Incompatibilidad sobreviniente.

19.2. La vacancia se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO III
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS (PERÚ COMPRAS)

Artículo 20. Definición y funciones de la Central de Compras Públicas (Perú Compras)

20.1. Perú Compras es el organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público. Constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

20.2. Son funciones de Perú Compras:

a) Promover, conducir y efectuar, según corresponda, la estandarización de los requerimientos del Estado, así como gestionar el **listado de fichas técnicas**, y determinar sus características.
b) Diseñar, desarrollar, gestionar e integrar datos, y evaluar el desempeño de las herramientas digitales a su cargo, las cuales forman parte de la Pladicop.
c) Diseñar, formular, aprobar, y difundir directivas y lineamientos en materias de su competencia y respecto de las herramientas digitales que administra, así como herramientas de gestión para el cumplimiento de sus funciones.

d) Diseñar y desarrollar indicadores que midan la eficiencia de las modalidades de contratación a su cargo.
e) Promover, conducir y gestionar los procedimientos de selección para la generación de catálogos electrónicos de acuerdo marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes.
f) Promover, conducir y gestionar compras corporativas y compras centralizadas.
g) Conducir y gestionar compras centralizadas de emergencia.
h) Realizar contrataciones por encargo a favor de otras entidades contratantes.
i) Orientar a las entidades contratantes en las materias de su competencia.

Artículo 21. Organización de Perú Compras

Perú Compras se organiza y estructura de acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Cuenta con un jefe que es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la entidad, el cual es designado mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas por un periodo de tres años renovables.

Artículo 22. Requisitos para la designación del jefe de Perú Compras

Para ser designado jefe de Perú Compras, se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Experiencia en cargos directivos no menor a cinco años; y, en temas afines a las materias reguladas en la presente ley, no menor a ocho años.
b) Contar con título profesional universitario.
c) No tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso ni encontrarse inhabilitado administrativa o judicialmente para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional.
d) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública, conforme a la normativa sobre la materia.
e) No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año previo a la designación.
f) No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado.
g) No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación.

Artículo 23. Causales de vacancia del jefe de Perú Compras

23.1. La vacancia del jefe Perú Compras se produce por las siguientes causales:
a) Renuncia al cargo.
b) Fallecimiento.

c) Incapacidad física o mental permanente.
d) Condena por delito doloso, mediante sentencia consentida o ejecutoriada.
e) Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada.
f) Vencimiento del período de designación.
g) Incompatibilidad sobreviniente.

23.2. La vacancia del cargo se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 24. Recursos de Perú Compras

Son recursos de Perú Compras:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
b) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional, las donaciones y transferencias.
c) Los que se efectúen a su favor de acuerdo con la normativa sobre las materias.

CAPÍTULO IV
ENTIDADES CONTRATANTES

Artículo 25. Entidades contratantes

25.1. En el ámbito de las entidades contratantes, se encuentran los siguientes actores involucrados directamente en el proceso de contratación pública:

a) **Titular de la entidad:** máxima autoridad ejecutiva al interior de la entidad contratante conforme a sus normas de creación y organización. En el caso de las entidades contratantes señaladas en los literales k) y l) del párrafo 3.2 del artículo 3 de la presente ley, es aquel que ejerce la máxima autoridad al interior de estas.
b) **Autoridad de la gestión administrativa:** es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad contratante, es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al titular de la entidad. En el caso de los ministerios, es la secretaría general; en los gobiernos regionales, la gerencia general regional; en los gobiernos locales, la gerencia municipal; en los organismos públicos y en las empresas del Estado, la gerencia general; en los programas y proyectos, el director ejecutivo; y, en las demás entidades contratantes, quien ejerce la máxima autoridad administrativa. En el caso de los órganos desconcentrados y aquellas organizaciones a las que hace referencia en los literales k) y l) del párrafo 3.2 del artículo 3 de la presente ley, es el titular de la entidad.

c) **Área usuaria:** es la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras, programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Es responsable de la adecuada formulación de sus requerimientos en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como de la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de su conformidad respectiva.
d) **Área técnica estratégica:** es la unidad de organización a la que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria siendo responsable de la formulación de los requerimientos de otra u otras unidades de organización, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de la conformidad respectiva.
e) **Dependencia encargada de las contrataciones:** es la unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, incluida la preparación de la estrategia de contratación, conducción y realización de los procesos de contratación, desde que se presenta el requerimiento hasta su culminación. Puede asumir el rol de área técnica estratégica en los casos que lo ameriten, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico.
f) **Compradores públicos:** son los funcionarios y servidores de la dependencia encargada de las contrataciones responsables de realizar las actividades relativas a la gestión de las contrataciones de la entidad contratante, las cuales incluyen la organización, elaboración de la documentación y conducción del proceso de contratación, así como el seguimiento de la ejecución del contrato y su conclusión.

25.2. El titular de la entidad y la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante pueden delegar, mediante resolución, las facultades que la presente ley les otorga, salvo las excepciones previstas en el reglamento.

25.3. En el reglamento se establecen los casos en los que se conforman comités o jurados en el marco de los procedimientos de selección, así como las funciones a su cargo.

Artículo 26. Responsabilidades en el proceso de contratación

26.1. La organización, elaboración de la documentación y conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante con independencia del régimen jurídico de su vínculo, habiendo priorizado los principios de publicidad y valor por dinero, así como

los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados de las decisiones adoptadas.

26.2. La determinación de las responsabilidades en el proceso de contratación pública se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas, señaladas en el párrafo precedente, con la entidad contratante.

26.3. Las entidades contratantes son responsables de prevenir y solucionar, de manera efectiva, los conflictos de intereses que puedan surgir en el proceso de contratación.

Artículo 27. Discrecionalidad y rigor técnico de los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones

27.1. La facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos.

27.2. Dicha decisión debe ser la más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato, de modo que garantiza la adquisición de bienes, servicios u obras que maximicen el valor de los recursos públicos. Esta decisión se toma en observancia del principio de valor por dinero, entre otros de la ley y a los criterios establecidos por la cuarta disposición final complementaria de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

27.3. El control referido en el párrafo anterior se concentra en el cumplimiento de la legalidad que rige a la contratación pública, mas no en las decisiones y rigurosidad técnicas que adoptan los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas en el marco de facultad discrecional con la que cuentan.

Artículo 28. Supervisión en el proceso de contratación

28.1 La autoridad de la gestión administrativa es responsable de implementar mecanismos y establecer disposiciones para supervisar que el proceso de contratación en todas sus fases, así como la actuación de aquellos que intervienen en este, responda al cumplimiento de los fines públicos establecidos para la contratación. Esta labor incluye la implementación de las medidas correctivas o preventivas recomendadas por el OECE.

28.2 Las actividades de supervisión que realice este organismo especializado no eximen a la autoridad de la gestión administrativa del cumplimiento de sus obligaciones.

CAPÍTULO V
PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Artículo 29. Requisitos para ser proveedor de bienes, servicios y obras

29.1. Los proveedores son personas naturales, jurídicas o patrimonios autónomos u otras formas asociativas, nacionales o extranjeras que, a partir de sus actividades como agentes de mercado, contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de los bienes, servicios y obras necesarios para alcanzar la finalidad de la presente ley.

29.2. Para ser proveedores, los interesados deben estar inscritos, sin impedimento de contratar con el Estado, en el RNP de acuerdo con los requisitos, excepciones y demás condiciones establecidas en el reglamento.

29.3. La inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada sujeta a la actualización de información, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

29.4. El reglamento establece disposiciones que garanticen el trato igualitario en la inscripción de los proveedores nacionales frente a los extranjeros, en la determinación de su capacidad máxima de contratación en el caso de ejecución de obras, y en la medición de su desempeño en el RNP.

29.5. El reglamento establece herramientas de medición de desempeño de los proveedores inscritos en el RNP, así como los incentivos para la participación en las contrataciones públicas de aquellos proveedores mejor calificados conforme a dicha medición.

29.6. Los proveedores que participen en procesos de contratación suscriben los pactos de integridad que establece el reglamento.

Artículo 30. Impedimentos para contratar

30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas con la entidad contratante son los siguientes:

1. **Impedimentos de carácter personal:** aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en siete tipos:

Impedimentos de carácter personal	Alcance
Tipo 1.A: • Presidente de la República. • Vicepresidentes de la República. • Congresistas, diputados o senadores de la República. • Ministros de Estado.	Durante el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional. En el caso de los vicepresidentes ***de la República.*** el impedimento aplica solo cuando asuman el cargo de presidente de la República, salvo que ejerzan otro cargo distinto, en cuyo caso se aplica el del impedido correspondiente.
Tipo 1.B: • Jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República. • Miembros del Tribunal Constitucional. • Miembros de la Junta Nacional de Justicia. • Fiscales supremos del Ministerio Público. • Defensor del Pueblo. • Contralor General de la República. • Miembros del Jurado Nacional de Elecciones.	Durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional.
Tipo 1.C: • Titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. • Titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. • Titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y	Durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y durante los seis meses siguientes a la culminación de este en los procesos dentro de la competencia institucional (órganos constitucionalmente autónomos), sectorial (viceministros de

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. • Miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. • Viceministros de Estado. • Gobernadores y vicegobernadores regionales y consejeros regionales • Alcaldes y regidores. • Jueces superiores de las Cortes Superiores de Justicia. • Fiscales superiores del Ministerio Público.	Estado), territorial (gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, en el ámbito de sus funciones) o jurisdiccional (jueces y fiscales) a la que pertenecieron, según corresponda. Los consejeros regionales y regidores, en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial **(en el ámbito de sus funciones)** durante el ejercicio del cargo y hasta los seis meses siguientes de la culminación de este.
Tipo 1.D: • Titulares de las entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa, distintas a las autoridades de los tipos 1.A, 1.B y 1.C. • Funcionarios públicos, directivos públicos, servidores de confianza y otros servidores civiles con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia. • Gerentes de las empresas del Estado.	Durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y **dentro de** los seis meses **siguientes** a la culminación del cargo en los procesos de la entidad contratante a la que pertenecieron.
Tipo 1.E: • Directores de las empresas del Estado. • Miembros de los Consejos directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo.	Durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación de la entidad contratante de la cual forma parte el directorio o consejo directivo y en la entidad contratante a la que representan, según corresponda.
	Durante la vigencia del vínculo laboral con la entidad en todo proceso de

Tipo 1.F: Servidores públicos distintos a las personas de los tipos 1.A, 1.B, 1.C, 1.D y 1.E, incluidos aquellos sujetos a carreras especiales y los trabajadores de las empresas del Estado.	contratación de la entidad a la que pertenecen. Dentro de los seis meses siguientes a la culminación de dicho vínculo en los procesos de contratación de la entidad siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos, o presenten conflicto de intereses.
Tipo 1.G: Personas naturales o jurídicas que, como parte o representante de la entidad contratante, intervengan directamente en las siguientes actuaciones: a. Determinación del requerimiento o la estimación del presupuesto, salvo que se trate de la participación en la etapa de interacción con el mercado, prevista en el Título IV de la presente ley. b. Elaboración de documentos del procedimiento de selección. c. Calificación o evaluación de ofertas. d. Conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión.	En el proceso de contratación respectivo, mientras este dure.

2. **Impedimentos en razón del parentesco:** aplicables a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la presente ley. **El impedimento no aplica si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado cuatro contratos menores, en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años**

previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor. Para el caso de servicios, los dos años de experiencia son consecutivos.

De otro modo, estos impedimentos se aplican conforme a las siguientes precisiones:

Impedimentos en razón del parentesco	Alcance del impedimento
Tipo 2.A: Parientes de los impedidos de los tipos 1.A, 1.B y 1.C del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30.	Durante el ejercicio del cargo de los impedidos de los tipos 1.A, 1.B y 1.C, y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del ejercicio del cargo respectivo. En el caso de los parientes del presidente de la República y vicepresidentes de la República, el impedimento aplica para todo proceso de contratación a nivel nacional. En los demás casos de los impedidos del tipo 1.A, 1.B y 1.C, según corresponda, en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia institucional (Congreso de la República y organismos constitucionalmente autónomos), sectorial (ministros y viceministros), territorial (autoridades de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus funciones) o jurisdiccional (jueces y fiscales).
Tipo 2.B: Parientes de los impedidos del tipo 1.D del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30.	Durante el ejercicio del cargo del impedido del tipo 1.D y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del cargo respectivo.

	En todo proceso de contratación de la entidad contratante.
Tipo 2.C: Parientes de los impedidos del tipo 1.E del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30.	Durante el ejercicio del cargo del impedido del tipo 1.E y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del ejercicio del cargo respectivo. En todo proceso de contratación de la entidad de la cual el impedido del tipo 1.E forma parte del directorio o consejo directivo, y en la entidad a la que estos representan, según corresponda.
Tipo 2.D: Parientes de impedidos del tipo 1.F del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30.	Durante la vigencia del vínculo laboral del impedido del tipo 1.F en todo proceso de contratación de la entidad contratante; y dentro de los seis meses siguientes a la culminación del vínculo laboral, en todo proceso de contratación de la entidad contratante, siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos, o presenten conflicto de intereses.
Tipo 2.E: Parientes de impedidos del tipo G del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30.	Durante el proceso de contratación de la entidad contratante siempre que el impedido del tipo 1.G, haya intervenido en las actuaciones del respectivo proceso de contratación.

3. **Impedimentos para personas jurídicas o por representación.** El alcance del impedimento para contratar con el Estado obedece a las siguientes precisiones:

Impedimentos para personas jurídicas o por representación de estas	Alcance del impedimento
Tipo 3.A: Personas jurídicas con fines de lucro en las que los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 tengan o	

hayan tenido una participación individual o conjunta superior al treinta por ciento del capital o patrimonio social, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección o requerimiento de invitación al proveedor, en caso de contratos menores.	El alcance y la temporalidad aplicables para los impedidos son los mismos de los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30, según el impedido que corresponda. El impedimento para la persona jurídica se produce al inicio del cargo de la persona impedida, sea con su designación o juramentación en el cargo, conforme lo determine la normativa de la materia.
Tipo 3.B: Personas jurídicas sin fines de lucro en las que los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 participen o hayan participado como miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección o a la fecha del requerimiento de invitación al proveedor, en caso de contratos menores.	
Tipo 3.C: Personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, donde los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 se desempeñen como miembros de los órganos de administración, apoderados o representantes legales en asuntos vinculados a contrataciones públicas. En el caso de los apoderados el poder debe estar referido a actuaciones o actos que como proveedor le corresponde en el marco de un proceso de contratación ante una entidad contratante.	
Tipo 3.D: Personas naturales que tengan como apoderados o representantes a los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 en asuntos vinculados a contrataciones públicas.	

En el caso de los apoderados el poder debe estar referido a actuaciones o actos que como proveedor le corresponde en el marco de un proceso de contratación ante una entidad contratante.	
Tipo 3.E: Personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes (representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% del capital o patrimonio social) formen o hayan formado parte, en la fecha cuando se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva.	Durante la vigencia de la sanción, en todo proceso de contratación a nivel nacional. El impedimento para la persona jurídica se produce al inicio del cargo de la persona impedida, sea con su designación o juramentación en el cargo, conforme lo determine la normativa de la materia.
Tipo 3.F: Personas naturales o jurídicas que, encontrándose impedidas, constituyan, absorban o se fusionen con otra persona jurídica del mismo rubro.	Mientras dure el impedimento de la persona que lo origina, en todo proceso de contratación a nivel nacional.
Tipo 3.G: Personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico, conforme se defina en el reglamento de la ley.	En un mismo procedimiento de selección o ítem correspondiente, salvo cuando las personas del mismo grupo económico participen en forma consorciada, mientras dure dicho procedimiento.

4. **Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusión en otros registros:** el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las personas naturales o jurídicas, conforme a las siguientes precisiones:

Impedimentos derivados de sanciones o por la inclusión de otros registros	Alcance del impedimento
Tipo 4.A: Proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con sanción de inhabilitación temporal o definitiva.	Durante el tiempo de la inhabilitación, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional.
Tipo 4.B: Personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso, emitida en el país o el extranjero. Personas jurídicas, cuyos representantes legales cuenten con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada emitida en el país o el extranjero, por la comisión de los siguientes delitos: • Delitos tipificados en los artículos 382 al 401 y 241 del Código Penal Peruano, tales como concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; así como los comprendidos en el Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.	Durante el plazo de la condena, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional.
Tipo 4.C: Proveedores con sanción firme por infracción calificada como muy grave, previstos en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.	Durante los doce meses siguientes desde que la sanción quedó firme, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional.
Tipo 4.D:	Durante la permanencia en el registro, o la vigencia de la

Personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) o el que haga sus veces a nombre propio o a través de una persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces, por la comisión de infracciones relacionadas a su actuación en materia de contratación pública. Personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) o el que haga sus veces. En este caso, no aplica el impedimento si, a la suscripción del contrato, el deudor acredita el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o autoriza el descuento del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos.	sanción, según corresponda, salvo las disposiciones previstas para el REDAM, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional.
Tipo 4.E: Personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en alguna de las listas de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas.	Durante la permanencia en el listado, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional.

30.2. El reglamento desarrolla los supuestos de inaplicación temporal del impedimento si como consecuencia de este se genera riesgo de desabastecimiento en la prestación de servicios.

Artículo 31. Ficha Única de Proveedor (FUP)

31.1. La Ficha Única del Proveedor (FUP) del RNP consolida la información relevante de los proveedores, sobre la base de la información administrada por el OECE y provenientes de otras fuentes externas mediante mecanismos de interoperabilidad.

31.2. En la FUP se informa respecto de los proveedores que tengan los siguientes impedimentos previstos en el párrafo 30.1 del artículo 30:

a) De carácter personal: tipos 1.A, 1.B, 1.C, 1.D y 1.E.

b) Por parentesco: tipos 2.A, 2.B y 2.C.
c) Respecto de personas jurídicas o por representación: tipos 3.C y 3.D.
d) Derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por inclusión en otros registros: tipos 4.A, 4.C, 4.D y 4.E.

31.3. El OECE es responsable de realizar las acciones para que la FUP, mediante mecanismos de interoperabilidad con otras entidades o sobre la base de lo declarado por los propios proveedores, contenga la información necesaria para la determinación del impedimento.

31.4. **La FUP contiene información histórica de los proveedores, incluyendo los contratos que hubiera suscrito y los procedimientos de selección en los que hubiera participado, entre otros. Las entidades contratantes no pueden exigir a los proveedores la información que conste en la FUP.**

Artículo 32. Verificación de impedimentos para contratar

32.1. La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante revisa la FUP a fin de verificar que los participantes, postores, contratistas y subcontratistas no se encuentren impedidos para contratar con el Estado, en la etapa que corresponda.

32.2. La autoridad de gestión administrativa de cada entidad contratante es responsable de adoptar los mecanismos necesarios para que la dependencia encargada de las contrataciones revise la existencia de impedimentos señalados en el párrafo 30.1 del artículo 30 y verifique la información obrante en la FUP, de manera previa a la contratación.

32.3. Las inconsistencias en la información contenida en el FUP, respecto al párrafo 31.2 del artículo 31, son de responsabilidad del OECE.

32.4. La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante, bajo responsabilidad, verifica de forma previa a la contratación, la existencia de los siguientes impedimentos previstos en el párrafo 30.1 del artículo 30:

a) De carácter personal: tipos 1.F y 1.G.
b) Por parentesco: tipos 2.D y 2.E.

Artículo 33. Acreditación de impedimentos a través de declaración jurada

33.1. **Previamente a la contratación, los siguientes impedimentos se acreditan con la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para contratar con el Estado,** según lo dispuesto en el párrafo 30.1 del artículo 30:

a) Respecto de personas jurídicas o por representación: tipos 3.A, 3.B, 3.E, 3.F y 3.G.
b) Derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por inclusión en otros registros: los señalados en el tipo 4.B.

33.2. En el supuesto de excepción referido a los impedimentos en razón del parentesco establecido en el **numeral 2 del** párrafo 30.1 del artículo 30, la entidad contratante remite al órgano de control institucional, la declaración jurada presentada por el proveedor, en la que se haga constar la condición de desafectación que habilite su participación en el proceso de contratación.

TÍTULO III
MODALIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EFICIENTE

CAPÍTULO I
MODALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EFICIENTE

Artículo 34. Contratos menores

34.1. Se consideran contratos menores a aquellos **celebrados por las entidades contratantes** cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la contratación, y que no requieren procedimientos de selección **para su contratación**. Los contratos menores se encuentran sujetos a la supervisión del OECE.

34.2. **Las entidades contratantes publican en la Pladicop la información referida a los contratos menores. Esta debe garantizar la trazabilidad de las operaciones, salvaguardando la flexibilidad de dicha modalidad de contratación, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento.**

Artículo 35. Compra por encargo

35.1. Una entidad contratante puede encargar a otra entidad u organismo internacional la realización de las fases de actuaciones preparatorias o selección, a través de un convenio. El reglamento establece las condiciones y los procedimientos para la compra por encargo.

35.2. El procedimiento de selección que realice el organismo internacional debe ser acorde con los principios que rigen la contratación pública y con los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el Perú.

35.3. El convenio de encargo debe incluir cláusulas que establezcan la obligación, de la entidad u organismo internacional encargado, de remitir a la entidad encargante la documentación referida a su ejecución. La entidad encargante brinda atención a los requerimientos de acceso a dicha información que los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control estimen necesarios.

Artículo 36. Compra centralizada

36.1. Por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, las entidades contratantes pueden encargar a Perú Compras u a otra entidad todas las fases del proceso de contratación, hasta la liquidación o pago total, de bienes, servicios u obras. Asimismo, se puede incluir la distribución de estos dentro del encargo.

36.2. Para tal efecto, las entidades encargantes están autorizadas a realizar una transferencia financiera a Perú Compras o a la entidad encargada, conforme lo disponga la Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal correspondiente.

36.3. Cuando la totalidad de la ejecución contractual o parte de ella se realice en más de un ejercicio presupuestario, la entidad encargada incluye en su Programación Multianual Presupuestaria el monto estimado de la contratación por ejecutar en los años fiscales siguientes.

Artículo 37. Compra corporativa

37.1. Dos o más entidades contratantes pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, a fin de alcanzar condiciones más ventajosas en el mercado nacional o internacional, conforme a las disposiciones desarrolladas en el reglamento de la ley.

37.2. Las compras corporativas pueden ser facultativas u obligatorias; en este último caso, se encuentran a cargo de Perú Compras.

Artículo 38. Compra pública de innovación

38.1. Las entidades contratantes utilizan la compra pública de innovación (CPI) para la generación de soluciones innovadoras soportadas por actividades de investigación y desarrollo cuando dicha solución no esté disponible en el mercado o requiera de adaptaciones, ajustes o mejoras que impliquen la incorporación de elementos innovadores.

38.2. La CPI conlleva la asunción de riesgos vinculados al proceso de innovación, el diseño de medidas de mitigación de dichos riesgos y reconoce la participación de todos aquellos actores que puedan aportar a la identificación de soluciones, productos y servicios que mejoren la prestación de los servicios públicos e impacten positivamente en el desarrollo de innovación en el sector privado.

38.3. El procedimiento de selección de la CPI, la titularidad de los derechos de uso generados de las actividades de investigación y desarrollo, así como el estándar de rendición de cuentas, incluido el sustento de la decisión de optar por este tipo de contratación, son establecidos en el reglamento.

Artículo 39. Acuerdos marco

39.1. Mediante acuerdos marco, las entidades contratantes realizan por etapas el proceso de contratación, habiendo determinado en un primer momento los proveedores o condiciones que van a formar parte del acuerdo marco y, en otro, la adjudicación del contrato, entre otros aspectos.

39.2. El reglamento establece las condiciones, requisitos y excepciones del acuerdo marco.

CAPÍTULO II
CONTRATACIONES PARA LA PREVENCIÓN O ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Artículo 40. Contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia

40.1. Los siguientes supuestos constituyen una situación de emergencia:

a) Las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia o desastre del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
b) Las emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud.
c) Los estados de alerta o emergencia fitosanitaria y zoosanitaria, declarados por la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria.
d) Las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado, o el orden público, en el entorno físico o digital.
e) Las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural de la Nación.

40.2. Para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencias o desastres, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante procedimientos de selección competitivos, considerando las estrategias de ejecución contractual para emergencias, según lo dispuesto en el reglamento.

40.3. Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia o desastre, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante el procedimiento de selección no competitivo previsto en el literal b) del párrafo 55.1 del artículo 55 de la presente ley o con proveedores no domiciliados en el país, de acuerdo con lo dispuesto en el literal n) del párrafo 7.1 del artículo 7 de la presente ley. En este último caso, no se requiere acreditar ninguno de los supuestos señalados en el referido artículo.

40.4. Tratándose de contrataciones de inversiones de rehabilitación, se utiliza el procedimiento de selección no competitivo previsto en la presente ley, dentro del plazo de un año computado desde la ocurrencia de la emergencia o desastre. Luego de transcurrido el referido plazo, se utilizan los procedimientos de selección competitivos que establece el reglamento para las inversiones de rehabilitación y para la reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.

40.5. Perú Compras gestiona compras centralizadas para situaciones de emergencia o desastre.

CAPÍTULO III
HERRAMIENTAS FACILITADORAS DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Artículo 41. Naturaleza y funciones de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop)

41.1. Pertenece a los sistemas de información del Ministerio de Economía y Finanzas, e integra a toda plataforma **que** salvaguarde el acceso y disponibilidad de la información sobre contrataciones dentro del ámbito de la presente ley, regímenes especiales y contratos menores. El OECE define en el ámbito operativo las características específicas de esta integración, mediante los instrumentos técnicos correspondientes.

41.2. La Pladicop es un sistema a través del cual se gestionan las transacciones electrónicas, el intercambio de información y la difusión y transparencia de las contrataciones públicas. Las entidades contratantes registran de forma obligatoria la

información correspondiente a todas las fases de los procesos de contratación en esta plataforma digital.

41.3. La Pladicop contiene información histórica de los proveedores de acuerdo a la determinación del OECE.

41.4. Las actuaciones y actos realizados en la plataforma digital tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios manuales, más aún los sustituyen para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación en la citada plataforma digital.

41.5. El OECE desarrolla y administra la Pladicop, en el marco de los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Asimismo, es responsable de la mejora continua de la referida plataforma digital, así como de los mecanismos que garanticen su seguridad, interoperabilidad e integración. Con ese fin, gestiona periódicamente una auditoría especializada en ciberseguridad, bajo estándares internacionales.

41.6. **El OECE emplea la información de la Pladicop para gestionar el conocimiento en materia de compras públicas, a través del acceso a información procesada a fin de colaborar en la adopción de decisiones de los actores de la contratación pública, así como en la mejora del rendimiento en la gestión de las contrataciones públicas.**

41.7 **La información procesada de la Pladicop debe ser de fácil acceso para la ciudadanía en general y representar el conocimiento compartido a fin de facilitar la ejecución de las contrataciones públicas e impulsar la innovación.**

Artículo 42. Estandarización de requerimientos

42.1. La estandarización de requerimientos es el proceso realizado para uniformizar los términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación o condiciones de ejecución contractual de los bienes, servicios, u obras, según corresponda; así como para identificar la naturaleza de los bienes y servicios con el propósito de determinar su estandarización.

42.2. La estandarización debe estar sustentada en base a argumentos técnicos o económicos que **justifiquen la decisión de estandarizar**.

42.3. Los instrumentos para la estandarización de requerimientos son la ficha técnica y la ficha de homologación, las cuales son de uso obligatorio para las entidades contratantes, con independencia del monto de contratación, salvo las excepciones previstas en el reglamento. Los citados instrumentos también son de uso obligatorio en aquellas contrataciones que no se encuentran bajo el ámbito de la ley o estén sujetas a otro régimen de contratación.

42.4. El proceso de estandarización de requerimientos para generar fichas técnicas es conducido y ejecutado por Perú Compras.

42.5. El proceso de estandarización de requerimientos para generar fichas de homologación en el ámbito de su competencia es ejecutado por los ministerios, a través de su equipo de homologación, sujeto a las disposiciones que establezca Perú Compras.

Artículo 43. Catálogos electrónicos de acuerdos marco

43.1. Las entidades contratantes contratan, aplicando criterios de precio y calidad en la evaluación y sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios incluidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco. La contratación a través de estos catálogos resulta obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras, **salvo las excepciones contempladas en el reglamento.**

43.2. Perú Compras identifica los bienes y servicios que se incluyen en los catálogos electrónicos de acuerdos marco.

43.3. Los catálogos electrónicos de acuerdos marco puede incorporar catálogos abiertos, creados y administrados por los proveedores, a fin de optimizar recursos y acceso a tecnologías, reducir costos de administración y facilitar la estructuración de servicios no homologables a través de fichas técnicas. **Los proveedores seleccionados, en atención a sus modelos de negocios, pueden adicionar productos y servicios que se ajusten a las especificaciones de los catálogos licitados por Perú Compras.**

43.4. El reglamento establece las condiciones para el uso de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, así como los procedimientos para implementar, identificar y mantener catálogos electrónicos de acuerdos marco, los criterios para selección de proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores, los requisitos de los representantes de marca, sus procedimientos y demás particularidades.

Artículo 44. Acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición (MDA)

44.1. Las entidades contratantes determinadas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, ESSALUD y sanidades de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, así como el INEN de conformidad con el artículo 5 de la Ley 31336 Ley Nacional del Cáncer, mediante resolución ministerial, pueden celebrar acuerdos a través de mecanismos diferenciados de adquisición (MDA) de tipo financiero, de riesgo compartido o híbridos, con el objeto de contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, enfermedades oncológicas y de enfermedades de alto costo, así como tecnologías sanitarias innovadoras.

44.2. El reglamento establece los tipos, las definiciones, **los** criterios y **las** condiciones para el uso de los referidos acuerdos, así como **los** procedimientos de selección específicos para su contratación.

TÍTULO IV
PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 45. Proceso de contratación

El proceso de contratación es el conjunto de etapas, procedimientos y actividades desarrollados por las entidades contratantes con el objeto de abastecerse de bienes, servicios u obras. Este consta de tres fases:

a) Actuaciones preparatorias.
b) Selección.
c) Ejecución contractual.

CAPÍTULO I
ACTUACIONES PREPARATORIAS

Artículo 46. Elaboración del requerimiento

46.1. El requerimiento da inicio al proceso de contratación, **y es realizado por la entidad contratante en el marco de la PMBSO y a las etapas de formulación y programación presupuestarias correspondientes, considerando el principio de valor por dinero**. El área usuaria o área técnica estratégica, según corresponda, determina el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, en el cual se identifican la finalidad pública y los objetivos de la contratación.

46.2. Las entidades contratantes gestionan las contrataciones considerando todo el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras, los cuales se orientan a prevenir o atender una necesidad, o a afrontar un problema relevante para el cumplimiento de los fines públicos.

46.3. El requerimiento permite el acceso de los proveedores al proceso de contratación en condiciones de igualdad, sin obstaculizar la competencia o direccionar el proceso de contratación a un determinado proveedor.

46.4. El requerimiento se formula de manera clara y objetiva, y debe expresar el bien, servicio u obra a contratar, preferentemente, en función a su desempeño y funcionalidad. El requerimiento de bienes se plasma en especificaciones técnicas; el de servicios en términos de referencia; y el de obras en el expediente técnico de obra u en los objetivos funcionales, según el sistema de entrega utilizado. En los documentos integrantes del expediente de contratación, **según corresponda,** se **aplica** expresamente el principio de valor por dinero.

46.5. El expediente técnico de obra deberá contar con una estructura de costos definida de acuerdo **con** las particularidades que demanda la complejidad del proyecto. Con respecto a los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, el requerimiento puede plasmarse en aquellos documentos que precisen su alcance.

46.6. Para la elaboración de expedientes técnicos de obra, las entidades contratantes utilizan la metodología BIM en el marco del Plan BIM Perú y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para la gestión de la información de las inversiones.

46.7. En el caso de la compra pública de innovación, es posible definir el requerimiento únicamente en atención a los objetivos o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, de forma tal que los proveedores presenten ofertas con soluciones innovadoras.

Artículo 47. Interacción con el mercado

47.1. A través de la interacción con el mercado, las entidades contratantes determinan la existencia de oferta y competencia, perfeccionan su requerimiento, estiman el presupuesto requerido para la contratación y el mecanismo de contratación estratégica o procedimiento de selección más idóneo para proveerse de bienes, servicios u obras.

47.2. El reglamento establece los mecanismos y criterios de la interacción con el mercado.

Artículo 48. Cuantía de la contratación

48.1. Las entidades contratantes establecen la cuantía de la contratación conforme a la PMBSO y lo dispuesto en el reglamento, a fin de gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios.

48.2. El reglamento establece en qué casos el presupuesto estimado de la contratación se considera punto de referencia para las ofertas.

Artículo 49. Estrategia de contratación

49.1. La estrategia de contratación es el proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública, en aplicación de los enfoques y principios de la presente ley. Esta estrategia es elaborada por la dependencia encargada de las contrataciones, en consideración a la planificación de la entidad contratante a través de la PMBSO para la atención de las necesidades dentro de su competencia. Contiene, entre otros, el tipo de procedimiento de selección o mecanismo de contratación, la modalidad de pago, la verificación de la estandarización del requerimiento y la identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación. La estrategia de contratación integra el expediente de contratación.

49.2. La estrategia debe comprender, además, una correcta asignación de riesgos, reflejada en el perfil de riesgos de la contratación, de acuerdo a los objetivos de la adquisición, sea de bienes, servicios u obras.

49.3. Tratándose de obras y consultoría de obras, cuya complejidad técnica haya sido determinada por el área usuaria o por el área técnica estratégica, la propuesta de estrategia de contratación incluye, adicionalmente, el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra, la evaluación del uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, la valoración del empleo de metodologías de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública (Building Information Modeling - BIM), en caso se proponga su utilización, y la consideración que dicho contrato establezca incentivos a cambio de beneficios de naturaleza técnica, económica y de plazo para la entidad y la obra, entre otros.

Artículo 50. Supuestos de fraccionamiento

50.1. Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea mediante la realización de dos o más procedimientos de selección o dando lugar a contratos menores, con los fines siguientes:

a) Evitar el empleo del procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual.
b) Evadir la aplicación de la presente ley y su reglamento o el cumplimiento de los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

50.2. No constituye fraccionamiento:
a) La contratación de bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, en caso de que la contratación completa no se haya podido realizar en su oportunidad debido a que se carece de los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratación completa, o haya surgido una necesidad imprevisible adicional a la programada, de acuerdo a los criterios señalados en el reglamento.
b) La contratación se efectúa a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, conforme a las disposiciones señaladas en el reglamento.
c) Otros supuestos debidamente justificados que determine el reglamento.

Artículo 51. Expediente de contratación

51.1. El expediente de contratación contiene la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual.

Artículo 52. Evaluadores

52.1. Los procedimientos de selección competitivos están a cargo de evaluadores, los cuales pueden ser compradores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, comités o jurados, conforme a los requisitos, condiciones y excepciones establecidas en el reglamento.

52.2. Los comités o jurados cuentan en su conformación con expertos en el objeto de la contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento.

52.3. Los comités o jurados adoptan las decisiones necesarias para el desarrollo del procedimiento de selección, sin alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación, salvo los factores de evaluación y las excepciones que sean establecidas en el reglamento.

CAPÍTULO II
SELECCIÓN

Artículo 53. Procedimiento de selección

Las entidades contratantes realizan procedimientos de selección para las contrataciones de los requerimientos previstos en su PMBSO. El procedimiento de selección se determina considerando el objeto de la contratación y su cuantía, entre otros criterios establecidos en el reglamento, de conformidad a los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

Artículo 54. Contrataciones sujetas a procedimientos de selección competitivo

54.1. Son procedimientos de selección competitivos:

a) La licitación pública para la contratación de bienes y obras.
b) El concurso público para la contratación de servicios.

54.2. Las modalidades abreviadas de los referidos procedimientos de selección competitivos, así como las modalidades diferenciadas, como son la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y los procedimientos de selección de compra pública de innovación, entre otros, son establecidos en el reglamento. Igualmente el reglamento fija las reglas que se adapten específicamente a los objetos contractuales, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, la envergadura, la complejidad y la especialización de dichos objetos, entre otros, así como las reglas diferenciadas para la licitación pública de bienes y para la licitación pública de obras.

54.3. Las entidades contratantes realizan procedimientos de selección competitivos, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. Cualquiera sea el procedimiento de selección aplicable, este contempla condiciones necesarias para que la adjudicación se realice en favor de la oferta más conveniente para la entidad contratante conforme al principio de valor por dinero.

Artículo 55. Contrataciones sujetas a procedimiento de selección no competitivo

55.1. Sin perjuicio de la sujeción a los principios que rigen las contrataciones públicas, las entidades contratantes se encuentran facultadas para contratar directamente; en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate con otra entidad contratante, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.

b) Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia.
c) Ante una situación de desabastecimiento que afecte o impida el funcionamiento de la entidad contratante o el cumplimiento de sus funciones.
d) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.
e) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales.
f) Para contratar medios de comunicación tales como el radial, televisivo, escrito, **digital,** entre otros, para fines de publicidad estatal conforme a la ley y su reglamento.
g) Para la adquisición de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades de investigación, desarrollo e innovación, en el ejercicio de sus funciones. Este supuesto implica a las entidades públicas que pertenezcan al nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti), de acuerdo con lo previsto en la ley de la materia; y que, a su vez, cuenten con una certificación emitida por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación o por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), según corresponda.
h) Para la adquisición de inmuebles de propiedad privada y para el arrendamiento de inmuebles de propiedad privada, con la posibilidad de incluir el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del inmueble.
i) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, de acuerdo con lo establecido en las normas de la materia.
j) Para la asesoría legal o técnica en la defensa de las entidades contratantes en cualquier etapa de los procesos arbitrales o judiciales, lo que puede incluir el asesoramiento previo al inicio de los referidos procesos.
k) Para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del párrafo 71.1 del artículo 71 de la presente ley, siempre que el contrato derive de un procedimiento de selección competitivo. Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de expedientes técnicos y de contratos de supervisión vinculados a los saldos de obra derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a las causales antes señaladas.
l) Para contratar servicios de capacitación de interés de la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas, siempre que tales

contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.

m) Las contrataciones de bienes, servicios u obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que hayan sido declaradas de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector correspondiente. Para efectuar dicha contratación, se requiere la opinión previa favorable de la Contraloría General de la República.

55.2. Las contrataciones directas son aprobadas por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad, según disponga el reglamento. En el caso de que sea aprobada por la autoridad de la gestión administrativa, dicha facultad será indelegable.

55.3 El reglamento establece las condiciones para la configuración de los requisitos y formalidades de cada uno de estos supuestos, así como para la aprobación del procedimiento de selección no competitivo.

Artículo 56. Declaratoria de desierto

56.1. Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no se valide ninguna oferta. La declaración de desierto, en la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rige por lo señalado en el reglamento.

56.2. El reglamento establece el procedimiento de selección por utilizar luego de una declaratoria de desierto.

Artículo 57. Cancelación

57.1. La entidad contratante puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la buena pro basada en razones de fuerza mayor o, de caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando en persistencia de dicha necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Comprobada la desaparición de la necesidad, la entidad notifica mediante resolución las razones por las cuales se cancela el procedimiento de selección. La resolución se notifica a través de la Pladicop.

57.2. La entidad contratante no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas.

CAPÍTULO III
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Subcapítulo I
Ejecución Contractual

Artículo 58. Contratos

58.1. Los contratos regulados por la presente Ley son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor, con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras. El reglamento establece el procedimiento para su perfeccionamiento.

58.2. Cuando se trate de obras y consultoría de obras, operación y mantenimiento, las entidades contratantes utilizan los sistemas de entrega establecidos en el reglamento, los cuales pueden considerar la metodología de ejecución que permite iniciar los trabajos de construcción paralelamente al diseño, conforme al tipo, cuantía de las contrataciones y condiciones establecidas en el reglamento.

58.3. La entidad contratante verifica si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones establecidas en esta ley. En tales casos, antes de suscribir el contrato, se incorpora una cláusula de compromiso de pago de la multa, la que se efectúa a través de la retención del monto adeudado. El procedimiento de retención se establece en el reglamento.

58.4. En los contratos de ejecución de obras, el reglamento incorpora la obligación de realizar liquidaciones parciales según el plazo de ejecución, así como las condiciones, excepciones, contenido y la posibilidad de aplicar penalidades por su incumplimiento.

Artículo 59. Contratos estandarizados

59.1. Los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, reconocidos como tales por la DGA mediante resolución directoral.

59.2. Para el caso de consultoría de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones, las entidades contratantes pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que así lo determine la estrategia de contratación. La ejecución de estos contratos se somete a control gubernamental simultáneo y posterior a cargo de la Contraloría General de la República y demás órganos del Sistema Nacional de Control.

59.3. La ejecución contractual de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional se rigen por lo dispuesto en los propios contratos y conforme a las disposiciones que la ley y su reglamento.

59.4. Cuando los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional establezcan que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo y el monto del contrato es sancionado con la pérdida del derecho a modificarlos o con el no reconocimiento de la reclamación, el referido plazo es considerado como uno de caducidad.

Artículo 60. Cláusulas obligatorias en contratos

Los contratos regulados por la presente ley incluyen obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como mínimo, las siguientes cláusulas:

a) Garantías.
b) Cláusula anticorrupción y antisoborno.
c) Solución de controversias.
d) Resolución de contrato por incumplimiento.
e) Gestión de riesgos.

Artículo 61. Garantías

61.1. El cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir el adelanto de pago, el fiel cumplimiento del contrato, así como el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias.

61.2. Los mecanismos de garantía son los siguientes:

a) El fideicomiso, constituido tanto para el adelanto de pago y para el fiel cumplimiento del contrato.
b) La carta fianza financiera, otorgada como garantía de adelanto de pago, fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias.
c) La retención de pago, otorgado como garantía de fiel cumplimiento del contrato y fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias.

61.3. Las entidades contratantes aceptan el fideicomiso a propuesta del proveedor, **de acuerdo con la cuantía de la contratación establecida en el reglamento**. En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante.

61.4. En el caso de las garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.

61.5. Las empresas que emiten garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

61.6. En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y ocasiona el pago de intereses legales en favor de la entidad contratante.

61.7. Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente norma, facilitan su verificación a las entidades públicas beneficiarias y a la Contraloría General de la República. Para ello, deben implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición.

61.8. Las entidades contratantes pueden establecer que el proveedor tiene la facultad de optar, como mecanismo alternativo la retención del monto total de la garantía correspondiente. La retención debe efectuarse durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato.

61.9. Lo dispuesto en el párrafo 61.8 es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario;

b) Se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

61.10. El reglamento establece las disposiciones referidas a la constitución u otorgamiento del fideicomiso, carta fianza financiera y retención de pago, con el fin de garantizar exclusivamente la aplicación de dichos recursos a la ejecución del contrato correspondiente.

61.11. Las modalidades, montos, condiciones y excepciones al otorgamiento de las garantías son reguladas en el reglamento, así como las disposiciones especiales para el otorgamiento de garantías por parte de las micro y pequeñas empresas.

61.12. **El reglamento desarrolla los supuestos de reducción de la garantía de fiel cumplimiento conforme al avance del contrato.**

Artículo 62. Supervisión de la ejecución contractual

62.1. Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación por supervisar y comprender como mínimo hasta la recepción de la obra o la conclusión del servicio. El reglamento establece mecanismos aplicables a las eventuales discrepancias en supervisión sometidas a arbitraje.

62.2. Durante el periodo de supervisión, el inspector o el supervisor deben informar a la entidad contratante sobre todos los actos que puedan poner en riesgo la correcta ejecución y culminación de la obra o del servicio, bajo responsabilidad.

62.3. Las disposiciones previstas en los numerales precedentes no son aplicables para los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional.

62.4. Sobre las obras, el reglamento establece, en los casos que corresponda, los supuestos en que se requerirá de un supervisor de obra, inspector de obra u otros.

62.5. Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. El reglamento establece las condiciones necesarias para su aplicación.

Artículo 63. Modificaciones contractuales

63.1. Los contratos celebrados dentro del alcance de la presente ley y su reglamento pueden modificarse, por acuerdo de las partes, por disposición de la entidad contratante o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente y en consideración a la estrategia de contratación. La modificación es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa, con la excepción de los supuestos establecidos en la presente ley y el reglamento.

63.2. Las modificaciones contractuales no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en aplicación del principio de equidad.

63.3. Son supuestos para la modificación del contrato:

a) La ejecución de prestaciones adicionales.
b) La reducción de prestaciones.
c) La autorización de ampliaciones de plazo.
d) **Modificación por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato no imputable a las partes, según las condiciones que establezca el reglamento.**
e) Otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional.

Artículo 64. Reglas para la aprobación de prestaciones adicionales

64.1. En caso de bienes, servicios y consultorías de obras, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios, consultorías u obras hasta por el mismo porcentaje.

64.2. Tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados.

64.3. En el supuesto referido en el párrafo anterior, se contemplan las siguientes excepciones:

a) El titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obras mayores al 15% y hasta un máximo de 30% del monto

originalmente contratado, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que cuente con los recursos necesarios.

b) El titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales mayores al 30% hasta un máximo de 50%, previa autorización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista.

En el reglamento se establecen las condiciones para la aplicación de este párrafo.

64.4 La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince días hábiles en primera instancia, y treinta días hábiles para resolver el recurso de apelación, bajo responsabilidad, para emitir el pronunciamiento referido en el párrafo anterior. En el caso de adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emite previamente al pago.

64.5. En caso de aprobarse adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico, se debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República, a fin de que inicien a los procesos administrativos que correspondan de acuerdo con sus competencias.

64.6. En el caso de obras que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, se rigen por lo dispuesto en los propios contratos. No pueden exceder el 50% del valor del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico aprobado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento.

64.7. Los acuerdos de riesgo compartido para contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, y de enfermedades de alto costo se encuentran exceptuados de los límites establecidos en los párrafos precedentes; y se sujetan a las disposiciones de los respectivos contratos.

64.8. El reglamento establece las condiciones para la autorización, ejecución y pago de las prestaciones adicionales de la supervisión de la obra.

Artículo 65. Cesión de derechos y de posición contractual

65.1. El contratista puede ceder su derecho al pago a favor de terceros o de un fideicomiso, salvo cuando exista alguna disposición legal o reglamentaria que lo prohíba. No procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento.

65.2. Las entidades contratantes pueden ceder su posición contractual, con conocimiento de la otra parte, sin necesidad de aprobación previa o posterior.

Artículo 66. Adelantos

66.1. La entidad contratante puede entregar adelantos al contratista con la finalidad de otorgarle financiamiento o liquidez para la ejecución del contrato en las condiciones establecidas y fundamentadas en la estrategia de contratación.

66.2. Los adelantos pueden ser:

a) **Directo.**
b) **Para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario.**
c) **Otros que sean establecidos en el reglamento.**

66.3. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del 30% del monto del contrato original.

66.4. El reglamento establece las condiciones y demás criterios para otorgar los adelantos y para su amortización, **así como asegurar que se cumpla la finalidad de los adelantos.**

Artículo 67. Pagos

67.1. Las entidades contratantes realizan el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la correcta ejecución de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento y los contratos. Se pueden contemplar pagos a cuenta.

67.2. Excepcionalmente, el pago puede realizarse integra o parcialmente al inicio del contrato cuando este sea condición de mercado para la ejecución de las obligaciones a cargo del proveedor para la entrega de bienes o la prestación de los servicios, conforme a las disposiciones que establece el reglamento.

67.3. El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. **En el caso de valorización de obra, el reglamento establece el plazo.**

67.4. Constituye falta grave de la autoridad de gestión administrativa o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al

contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera como falta muy grave, en caso el contratista acreedor inicie acciones legales en contra la entidad por la infracción.

67.5. En caso de retraso en el pago por parte de la entidad contratante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, dicha entidad reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la entidad contratante en caso sea la acreedora.

67.6. El reglamento establece las condiciones para la utilización del fideicomiso como forma de pago.

Artículo 68. Resolución del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.

68.2. Cuando la resolución del contrato se produce por causa imputable a una de las partes, corresponde resarcir los daños y perjuicios acreditados.

68.3. En caso de corrupción de funcionarios o servidores no corresponde el pago de resarcimiento por daños y perjuicios al contratista, aun cuando este último no lo haya propiciado.

68.4. El reglamento establece las condiciones y procedimientos para resolver los contratos.

68.5. En el caso de los mecanismos diferenciados de adquisición para la contratación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, enfermedades oncológicas y de enfermedades de alto costo y en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, rige lo establecido en los respectivos contratos.

Artículo 69. Responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual

69.1. La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados.

69.2. Rigen las siguientes reglas en los supuestos que se detallan:

a) En los casos de subcontratación, el contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la entidad contratante.
b) En los contratos de ejecución de obra, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774 del Código Civil, que regulan las obligaciones del contratista. El plazo de responsabilidad por vicios ocultos no puede ser inferior a siete años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
c) En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación.
d) En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, el contratista es responsable por errores, deficiencias o por vicios ocultos, los cuales pueden ser reclamados por la entidad contratante en un plazo no menor de tres años después de la conformidad de obra.
e) En los contratos de consultoría para la supervisión de obra, la responsabilidad por defectos en la prestación del servicio no puede ser inferior a la cantidad de años de responsabilidad para el contratista bajo el contrato de obra sobre el que se realizó la supervisión.
f) Para los contratos de ejecución de obra, los límites a la indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato, en observancia de los documentos del procedimiento de selección y de la estrategia de contratación, conforme a los criterios señalados en el reglamento.

Subcapítulo II
Nulidad Precontractual y de Contrato

Artículo 70. Nulidad de actos procedimentales

70.1. Procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección en los siguientes supuestos:

a) Cuando hayan sido dictados por órgano incompetente.
b) Cuando contravengan las normas legales.
c) Cuando contengan un imposible jurídico.
d) Cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento.
e) Cuando prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando ésta sea insubsanable.

70.2. La nulidad puede ser declarada por:

a) El Tribunal de Contrataciones Públicas, solo en los casos que conozca por interposición de recurso de apelación, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco.
b) La autoridad de la gestión administrativa, de oficio, hasta el otorgamiento de la buena pro, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación.

   Luego del otorgamiento de la buena pro, la autoridad de la gestión administrativa solo puede declarar la nulidad del procedimiento de selección de configurarse alguno de los siguientes supuestos:

   1. **Por haber advertido un vicio trascendente y que la entidad contrante considere puede afectar la finalidad de la contratación.**
   2. **Por encontrarse el adjudicatario impedido de contratar.**

   De advertirse otros vicios, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la suscripción del contrato, previos informes técnicos y legales favorables que sustenten tal necesidad sobre la base de un análisis costo-beneficio orientado al cumplimiento de la finalidad pública del contrato y de los principios que rigen esta ley, sin perjuicio de realizar la denuncia al Tribunal para el inicio del procedimiento sancionador, de corresponder. Esta facultad es indelegable.

c) El jefe de Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco.

70.3. El instrumento que dispone la declaración de nulidad determina, en caso corresponda, el inicio del deslinde de responsabilidades.

70.4. Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores, bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación, esta se tramita conforme a lo establecido en el artículo 73 de la presente ley.

Artículo 71. Nulidad del contrato

71.1. Después de perfeccionados los contratos, la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante puede declarar su nulidad en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado.
b) Cuando se verifique que, durante el procedimiento de selección, se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta, **que haya sustentado la adjudicación de la buena pro en el procedimiento de selección**, previo descargo del contratista.
c) Cuando se haya suscrito, a pesar de encontrarse en trámite un recurso de apelación.
d) Cuando se haya suscrito prescindiendo del procedimiento de selección competitivo respectivo o no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo o cuando, pese a que correspondía aplicar los procesos de contratación previstos en la presente ley, se simuló la aplicación de alguno de los supuestos excluidos a los que se hace referencia en el artículo 7 de la presente ley.
e) Cuando por sentencia consentida o ejecutoriada, se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados, haya pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. Esta nulidad se declara sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal a que hubiere lugar.

71.2. El instrumento que dispone la declaración de nulidad del contrato determina, en caso corresponda, el inicio del deslinde de responsabilidades.

71.3. Aun cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad del contrato, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la continuación de su ejecución, previos informes técnicos y legales favorables que sustenten tal necesidad basada en un análisis costo-beneficio orientado al cumplimiento de la finalidad pública del contrato y de

los principios que rigen esta ley, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que corresponda. Esta facultad es indelegable.

71.4. Cuando corresponda al tribunal arbitral evaluar la nulidad del contrato, se consideran, en primer lugar, las causales previstas en la presente ley y en su reglamento, y; luego, las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional.

TÍTULO V
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVIAS AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 72. Supuestos impugnables

72.1. Las discrepancias surgidas entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

72.2. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

72.3. No se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni las actuaciones que establece el reglamento.

Artículo 73. Oportunidad de presentación de recurso de apelación

73.1. El recurso de apelación solo puede interponerse después los siguientes hechos:

a) Otorgamiento de la buena pro.
b) Declaración de desierto.
c) Publicación de los resultados de adjudicación, en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco.

73.2. La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante o del OECE, según corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 0.5% de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. En ningún caso la garantía es mayor a cincuenta UIT. Salvo para las micro y pequeñas

empresas cuyo límite es veinticinco UIT vigentes al momento de interponer el recurso de apelación.

Artículo 74. Órgano competente para resolver el recurso de apelación

74.1. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades:

a) El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
b) La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, en los demás casos. Esta autoridad verifica que, en las actuaciones del recurso, al interior de la entidad contratante, no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación.

74.2. En el caso de las compras corporativas, compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente.

Artículo 75. Efectos del recurso de apelación

75.1. El recurso interpuesto deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que sea resuelto, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución.

75.2. La resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

75.3. En el caso de que la entidad contratante o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelvan ni notifiquen sus resoluciones dentro del plazo establecidos en el reglamento, los interesados consideran denegados sus recursos, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente, debiendo la entidad que debió resolver el recurso de apelación, devolver la garantía a la que hace referencia el párrafo 73.2 del artículo 73.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 76. Mecanismos de resolución de controversias

76.1. Las controversias surgidas durante la ejecución contractual se resuelven mediante:

a) Junta de Prevención y Resolución de Disputas.
b) Conciliación.
c) Arbitraje.
d) Otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

76.2. Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado. Se mantiene obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.

76.3. No pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación o arbitraje, las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Contraloría General de la República. Estos supuestos son de competencia del Poder Judicial.

76.4. Las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje.

76.5. El inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario, de acuerdo con el plazo y condiciones establecidos en el reglamento.

Artículo 77. Requisitos para resolver controversias en contrataciones públicas

77.1. Para administrar u organizar un arbitraje o una Junta de Resolución de Disputas que resuelven controversias en contrataciones públicas, se requiere formar parte del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas que administra el OECE, los cuales deben cumplir mínimamente con lo siguiente:

a) Estar debidamente constituidos como personas jurídicas.

b) Contar con un Código de Ética y reglamento interno de acuerdo con los lineamientos del OECE.
c) Contar con no menos de tres años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales.
d) <u>Para arbitrajes o junta de prevención y resolución de disputas de contrataciones que superen las dos mil UIT, la institución arbitral o centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas deben contar con certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno.</u>

77.2. Los requisitos adicionales para el registro de las instituciones arbitrales y los centros de administración de las juntas de prevención y resolución de disputas se establecen en el reglamento. En el caso de arbitrajes de mayor envergadura, el reglamento establece requisitos diferenciados.

77.3. La incorporación de las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas en el registro al que hace referencia el párrafo precedente es constitutivo. Su exclusión o suspensión de dichos registros impiden el ejercicio de la administración de junta de prevención y resolución de disputas o arbitrajes respecto a controversias en el ámbito de aplicación de la presente ley.

77.4. La suspensión o exclusión del registro prohíbe el inicio de nuevos procesos de resolución de controversias por parte de las instituciones arbitrales o centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas.
Los procesos distintos a los que fueron motivo de la suspensión o exclusión del registro, continúan su curso hasta su culminación.

77.5. Los requisitos para la reincorporación de las instituciones arbitrales o centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, así como las consecuencias del incumplimiento del párrafo 77.2 y del presente párrafo son establecidos en el reglamento.

77.6. Para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia, se requiere formar parte de las nóminas de una institución arbitral o centro de prevención y resolución de disputas que se encuentre en el registro que administra el OECE, o ser confirmado por la respectiva institución arbitral o centro de resolución de disputas, si es que los profesionales propuestos no forman parte de sus nóminas.

77.7. Los profesionales deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

a) Contar con título profesional o equivalente, registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu.
b) Experiencia no menor de tres años en arbitrajes en contrataciones con el Estado o seis años en arbitrajes en otras materias.
c) Además, en caso de árbitro único o presidente del tribunal arbitral, ser abogado con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado.

77.8. Los impedimentos para desempeñarse con árbitro o adjudicador son establecidos en el reglamento. El reglamento establece requisitos adicionales para desempeñarse como árbitro o adjudicador.

77.9. Las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de **prevención y** resolución de disputas remiten al OECE sus nóminas de árbitros y adjudicadores que cumplen los requisitos establecidos en el reglamento.

77.10. La supervisión del desempeño de las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas se realiza a través de las disposiciones que emita el OECE. De manera residual y con la debida justificación presentada ante la DGA, puede encargarse la supervisión del desempeño a una institución privada de reconocido prestigio, imparcialidad y neutralidad, escogida a través de concurso público dirigido por el OECE cada tres años, prorrogable una sola vez. **Los resultados de la medición del desempeño de las instituciones arbitrales se fundamentan en criterios determinados por el OECE en la directiva que emita para tal efecto. Anualmente, se publica en la Pladicop los resultados de esta evaluación y el ranking de las instituciones arbitrales con mejor desempeño.**

77.11. Las entidades contratantes, los árbitros, los adjudicadores, las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, así como los centros de conciliación cumplen con registrar en la Pladicop la información referida a los procesos arbitrales y resoluciones de disputas que establezca el reglamento y aquella que requiera el OECE.

Artículo 78. Medios de solución de controversias en contratos estándar de ingeniería y construcción

En el caso de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, la entidad contratante puede optar por los medios de solución de controversias que en ellos se contemplen, los cuales se regulan según lo expresado en las cláusulas pertinentes en el propio contrato. Cuando no incluyan una cláusula que exprese que la decisión final es vinculante para las partes, la entidad contratante propone una cláusula particular o modificatoria para regularlos en ese sentido.

SUBCAPÍTULO I
Junta de prevención y resolución de disputas

Artículo 79. Competencia de la junta de prevención y resolución de disputas

79.1. La junta de prevención y resolución de disputas promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias surgidas en contratos de bienes, servicios y obras de acuerdo con lo establecido en el reglamento, desde el inicio del plazo de ejecución hasta el pago final o la liquidación total, según corresponda.

79.2. La junta de prevención y resolución de disputas tiene competencia para las siguientes acciones:

a) Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico.
b) Resolver controversias técnicas y contractuales.
c) Otras establecidas en el reglamento.

79.3. La junta de prevención y resolución de disputas resuelve controversias a través de decisiones. No puede conocer controversias relativas a la validez, nulidad, o eficacia del contrato. Sus decisiones son obligatorias y son de inmediato cumplimiento.

Artículo 80. Procedimiento ante la junta de prevención y resolución de disputas

80.1. Las partes tienen un plazo de caducidad de veinte días hábiles para someter sus controversias a decisión de la junta de prevención y resolución de disputas, desde la fecha en que cualquiera de las partes comunica a la otra su desacuerdo con la materia.

80.2. Si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra y a la junta de prevención y resolución de disputas su desacuerdo total o parcial con la decisión en un plazo veinte días hábiles computado desde el día de notificada o habiéndolo comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro de los plazos de caducidad regulados en el artículo 84 de la presente ley, la decisión de la junta de prevención y resolución de disputas adquiere mérito ejecutivo.

80.3 El procedimiento ante la junta de prevención y resolución de disputas es un presupuesto de arbitrabilidad en aquellos contratos en los que se haya contemplado la inclusión de una cláusula de sometimiento a esta junta.

SUBCAPÍTULO II
Conciliación

Artículo 81. Controversias pasibles de conciliación

81.1. Las partes pueden pactar en el contrato la conciliación como mecanismo de solución de las controversias, previo al inicio del arbitraje. Son controversias materias de conciliación las siguientes:

a) Resolución de contrato.
b) Ampliación de plazo contractual.
c) Recepción y conformidad de la prestación.
d) Valorizaciones o metrados.
e) Liquidación de contrato.
f) Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato.
g) Otras dispuestas en el reglamento.

81.2. La nulidad de contrato no es materia de conciliación.

81.3. En el caso de contratos menores, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de las controversias.

Artículo 82. Reglas aplicables a la conciliación

82.1. La conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de los plazos de caducidad establecidos en el artículo 84 de la presente ley, según corresponda, y es llevada a cabo por un conciliador certificado por dicho ministerio.

82.2. La decisión de conciliar le corresponde a la autoridad de la gestión administrativa, se realiza al amparo del principio de eficacia y eficiencia, previsto en la presente ley, considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos de un eventual proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Asimismo, se consideran los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecución contractual,

incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio. La mencionada decisión de conciliar o no, se materializa en un informe que es parte del expediente, e integra el sustento de los criterios evaluados.

82.3. El acuerdo de conciliación al que arriban las partes es el resultado de la aplicación del rigor técnico dispuesto en el artículo 27 de la presente ley por parte de los funcionarios que participan en el proceso de conciliación.

82.4. En caso de haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación sin acuerdo o con acuerdo parcial, el plazo para acudir al arbitraje respecto de las materias no conciliadas se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación.

SUBCAPÍTULO III
Arbitraje

Artículo 83. Controversias pasibles de arbitraje

83.1. Todas las controversias surgidas entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, salvo que lo contrario se halle expresamente previsto en la presente ley.

83.2. En todos los casos, bajo responsabilidad de la autoridad de la gestión administrativa, el convenio arbitral debe adoptar la forma de una cláusula incluida en el contrato, y debe ajustarse a las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

Artículo 84. Reglas aplicables al arbitraje

84.1. El arbitraje al que se refiere la presente ley es de derecho, nacional o internacional y se desarrolla en idioma español. Cuando hubiere arbitraje internacional, se podrá acudir a cortes arbitrales en otros países o foros de reputación reconocidos internacionalmente. El arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT. En todos los demás casos, es institucional, y el convenio arbitral debe identificar la institución que administra el arbitraje, la cual debe encontrarse en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Todo pacto en contrario es nulo. En caso de arbitraje internacional, se podrá acudir a cortes arbitrales en otros países o foros de reputación reconocidos internacionalmente, sin necesidad de que se encuentren en el referido registro. Las condiciones para acudir al arbitraje internacional se establecen en el reglamento.

84.2. El arbitraje es resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por tres miembros, según el acuerdo de las partes en el convenio arbitral o en el reglamento arbitral aplicable.

84.3. A falta de acuerdo o ante la existencia de dudas sobre el mismo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral.

84.4. El arbitraje que verse sobre las controversias respecto de la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato es solicitado en un plazo máximo de treinta días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia.

84.5. En todas las demás controversias, cualquiera de las partes da inicio al arbitraje, como máximo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a estas acciones:

a) La entrega del bien final, en el caso de los contratos de adquisición de bienes.
b) La presentación del entregable final, en el caso de los contratos de prestación de servicios.
c) La entrega de la obra, en el caso de los contratos de obra.

84.6. El cómputo del plazo regulado en los párrafos 84.4 y 84.5 del presente artículo tiene las siguientes excepciones:

a) Cuando con posterioridad a las actuaciones señaladas en los párrafos 84.4 y 84.5 aún se encuentre pendiente la decisión de la junta de prevención y resolución de disputas, el plazo se computa desde la fecha en que se emita la decisión de dicha junta o en la fecha en que esta quede disuelta.
b) En las controversias referidas a la conformidad del bien, servicio u obra, el plazo se computa desde la negativa de esta o desde el vencimiento del plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.
c) En las controversias referidas a la liquidación del contrato de obra, el plazo se computa desde la culminación del procedimiento de liquidación.
d) En las controversias referidas al pago final o prestaciones pospago de bienes y servicios, el plazo se computa desde la fecha en que se produce el pago final, o desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final, o la prestación pospago que es materia de controversia.
e) En las controversias referidas a defectos o vicios ocultos, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta sesenta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en la ley.

84.7. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, el plazo es de diez días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia.

84.8. Los plazos señalados en los párrafos 84.4, 84.5, 84.6 y 84.7 del presente artículo son de caducidad.

84.9. El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación a través de la Pladicop. Contra dicho laudo, solo cabe interponer recurso de anulación. Las entidades contratantes solo pueden iniciar la acción judicial de anulación de laudo previa autorización del titular de la entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. Para tal efecto, se realiza el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso judicial, la expectativa de éxito de seguir la anulación. Constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. Solo en caso de indicios de comisión de delitos, la decisión de impugnar un laudo arbitral es objeto de control por parte de la Contraloría General de la República.

84.10. El pago del laudo arbitral es obligatorio, el reglamento establece los mecanismos de pago y su exigencia.

84.11. Los laudos arbitrales que versen sobre materias de la presente ley son de acceso público. El árbitro ad hoc o el tribunal arbitral es responsable de cuidar la información sensible contenida en el laudo, de acuerdo con la Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública y al Decreto Supremo 030-2019-PCM, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, entre otras normas.

84.12. El OECE aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas, es aplicable a los arbitrajes ad hoc. El incumplimiento de dicho código constituye un incumplimiento al encargo como árbitro. El código es aplicable a los arbitrajes ad hoc.

84.13. Las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas aprueban sus propios Códigos de Ética y aplica de manera supletoria el Código de Ética para el arbitraje en contrataciones públicas del OECE.

CAPÍTULO III
MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 85. Reglas generales aplicables a las medidas cautelares

85.1. Las medidas cautelares presentadas respecto de los contratos en aplicación de la presente ley, tanto en la vía judicial como en la arbitral, se rigen por las siguientes reglas, según corresponda:

a) Es competente para resolver las solicitudes cautelares interpuestas antes de la constitución del tribunal arbitral, en donde no sea de aplicación el arbitraje de emergencia, el juez subespecializado en lo comercial o, de no existir tal subespecialidad, el juez civil. La competencia por razón del territorio corresponde al juez del lugar señalado por la entidad contratante como su domicilio en el correspondiente contrato. Esta competencia es improrrogable y puede ser declarada de oficio por el juez como justificación para declarar la improcedencia de la medida cautelar solicitada. La contravención a lo dispuesto en el presente literal constituye causal de nulidad de las medidas cautelares otorgadas por la autoridad judicial.
b) La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre.
c) Previa a su decisión, el juez o el tribunal arbitral, según corresponda, deben evaluar la irreversibilidad de la medida, así como el perjuicio que de esta se derive contra el interés público.
d) No procede la concesión de una medida cautelar por el juez o el tribunal arbitral sin traslado previo a la contraparte.
e) No proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de obras en salud, educación, infraestructura vial y saneamiento, y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial.

85.2. En todo lo no previsto y, siempre que no se opongan a la presente norma, se aplica el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, o el Código Procesal Civil, en ese orden de prelación.

Artículo 86. Contracautela

86.1. El contratista que solicite una medida cautelar en la vía judicial o arbitral está obligado a ofrecer una contracautela en favor de la entidad contratante. Procede como contracautela la caución juratoria para contrataciones de hasta 200 UIT, así como para la

contratación con micro y pequeñas empresas. En los demás casos, la contracautela es la carta fianza financiera, patrimonial o bancaria, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, en favor de la entidad contratante, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, de ser el caso. Las demás condiciones se establecen en el reglamento.

86.2. El juez o el tribunal arbitral que reciba la solicitud cautelar verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de recibir la contracautela. Constituye causal de nulidad de la medida cautelar en caso se conceda con inobservancia de tales requisitos.

86.3. En los casos que la medida cautelar se refiera a pretensiones relativas a la validez, resolución o eficacia del contrato, el valor de la contracautela debe reflejar los potenciales daños y no **debe ser** menor a la garantía de fiel cumplimiento. Si la controversia se refiere a una pretensión cuantificable y el monto en disputa es menor a la garantía de fiel cumplimiento, el valor de la contracautela es equivalente al monto de la pretensión referida en la solicitud cautelar.

TÍTULO VI
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 87. Infracciones administrativas a participante, postores, proveedores, y subcontratistas

87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes:

a) **Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.**
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar acuerdos marco.
c) Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.
d) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.
e) Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP.
f) Elaborar expedientes técnicos de obra con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados, o no absolver

oportunamente las consultas formuladas por la entidad contratante respecto del expediente técnico durante la ejecución contractual de la obra, de modo que ocasionen retraso en su ejecución.

g) Supervisar la ejecución de obras de manera negligente, de modo que perjudiquen económicamente a las entidades contratantes.
h) Perfeccionar el contrato, luego de notificada la suspensión en la Pladicop o recomendación de nulidad por el OECE o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones.
i) Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley.
j) Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos aquellos contratos que se perfeccionen a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, siempre que dicha resolución no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
k) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad contratante, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral.
l) Presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio **concreto** en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio **concreto** debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.
m) Presentar documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras.

87.2. Para los contratos menores, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales d), h), i), k), l) y ***m)*** del párrafo 87.1 del presente artículo.

87.3. **En el supuesto a) del numeral 87.1 del presente artículo, el reglamento establece los criterios y condiciones en los que procede la sancion sobre la base de la reiterancia de la conducta.**

Artículo 88. Sanciones por infracciones administrativas

88.1. El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, y subcontratistas, cuando incurran en las infracciones señaladas en el párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar.

88.2. Las sanciones a imponer pueden ser:

a) Multa
b) Inhabilitación temporal
c) Inhabilitación permanente

88.3. La multa o inhabilitación que se impongan no eximen de la obligación de cumplir con los contratos ya perfeccionados a la fecha en que la sanción queda firme.

Artículo 89. Multa

89.1. La sanción de multa es impuesta por la comisión de las infracciones señaladas en los literales a), b), c), d) y **e),** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que se trate de la primera o segunda comisión de infracción en los últimos cuatro años.

89.2. La multa no es menor de 3% ni mayor al 10% del monto de la oferta económica o del contrato. En ningún caso puede ser inferior a una UIT. Si no pudiera determinarse el monto de la oferta económica o del contrato, la multa será entre una y quince UIT.

89.3. En el caso de las micro y pequeñas empresas, la multa no puede ser mayor al 8% de la oferta económica o del contrato. Cuando no se pueda determinar el monto de la oferta económica o el contrato, la multa no puede ser mayor a ocho UIT.

89.4. En el caso de los contratos menores y aquellos derivados de los catálogos electrónicos de acuerdo marco cuyo valor corresponda a contratos menores, el Tribunal de Contrataciones Públicas puede imponer una multa por debajo de los montos indicados.

89.5. En caso de no pagarse la multa impuesta en el plazo establecido, el OECE puede iniciar los actos de ejecución coactiva correspondientes. La falta de pago de la multa es un criterio de graduación para las siguientes infracciones cometidas por el proveedor.

89.6. El reglamento establece descuentos de hasta el 30% por el pronto pago de las multas.

Artículo 90. Inhabilitación temporal

90.1. La sanción de inhabilitación temporal es impuesta en los siguientes supuestos:

a) Por la comisión de las infracciones previstas en los literales a), b), c), d) y **e),** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que, en los últimos cuatro años, ya se hubieran impuesto al proveedor dos o más sanciones de multa o inhabilitación temporal. La sanción a imponer no puede ser menor de tres meses ni mayor de doce meses.

b) Por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los literales f), g), y **h),** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. La sanción a imponer no puede ser menor de seis meses ni mayor de dieciocho meses. En caso de reincidencia en las referidas infracciones, la sanción no podrá ser menor de doce meses ni mayor a veinticuatro meses.

c) Por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los literales i), j), k) y **l)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. La sanción por imponer no puede ser menor de seis meses ni mayor de veinticuatro meses.

d) Por la comisión de la infracción prevista en el literal **m)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, la sanción a imponer no puede ser menor de veinticuatro meses ni mayor de sesenta meses.

90.2. El Tribunal de Contrataciones Públicas, a través de la resolución de sanción de inhabilitación temporal que emita, puede otorgar al proveedor sancionado la opción del pago de una multa, conforme a lo establecido en los artículos 88 y 89 de la presente ley, por la comisión de las infracciones establecidas en los literales f), g) y **h)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que se trate de la primera o segunda sanción impuesta al proveedor en los últimos cuatros años y el plazo de la sanción impuesto sea igual o menor de ocho meses.

90.3. En el supuesto previsto en el párrafo precedente, en caso de que el proveedor realice el pago total de la multa, la inhabilitación temporal queda sin efecto al día siguiente de efectuado el pago respectivo.

Artículo 91. Inhabilitación definitiva

91.1 La sanción de inhabilitación definitiva es impuesta en los supuestos de infracción previstos en los literales i), j), k), l) y **m)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que, en los últimos cuatro años, ya se hubieran impuesto al proveedor más de dos sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis meses.

91.2 Para efectos de la aplicación de la inhabilitación definitiva, no se consideran las sanciones impuestas por contratos menores y aquellos derivados de los catálogos

electrónicos de acuerdo marco cuyos valores correspondan a contratos menores, salvo aquellas derivadas de la infracción contenida en el literal ***m)*** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley.

91.3 El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona con inhabilitación definitiva los casos en los que el proveedor ya cuenta con dicha sanción y se determina que corresponde sancionarlo por la comisión de alguna de las infracciones previstas en los literales i), j), k), l) y **m)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley.

Artículo 92. Criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones Públicas.

92.1. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el artículo 87 es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta.

92.2. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, así como las formas de aplicar sanciones a consorcios. Las reglas sobre graduación y proporcionalidad de la imposición de la sanción, eximentes de responsabilidad, el régimen de caducidad y demás reglas necesarias se establecen dentro del marco de lo establecido en el capítulo III, sobre Procedimiento Sancionador, del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS, de acuerdo a cada tipo infractor. El Tribunal de Contrataciones Públicas debe motivar su decisión cuando se pronuncia sobre estos aspectos.

92.3. El reconocimiento expreso de responsabilidad por la comisión de infracción por parte del administrado, luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador, es considerado para la graduación de la sanción, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

92.4. En el caso de las infracciones establecidas en los literales l) y **m)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que concurran los siguientes elementos: (i) se demuestre que la información inexacta o el documento falso o adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él, y (ii) se demuestre que éste actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada. En estos casos los participantes, postores, proveedores o subcontratistas adoptan las acciones necesarias para la determinación de la responsabilidad originaria de

quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado y comunica a la entidad contratante, sobre dichos resultados, con la finalidad que se inicien las acciones legales correspondientes contra el citado responsable.

92.5. En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. Tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante.

92.6. El RNP incluye las sanciones impuestas a los proveedores.

92.7. En caso de reorganización societaria, el Tribunal de Contrataciones Públicas inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso de que el mencionado tribunal determine su existencia.

Artículo 93. Prescripción de las infracciones administrativas

93.1. Las infracciones establecidas en la presente ley prescriben, para efectos de las sanciones, a los cuatro años de cometida de acuerdo con la clasificación de tipos infractores, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS.

93.2. Tratándose de la infracción contenida en el literal **m)** del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, la sanción prescribe a los siete años de cometida la infracción.

93.3. El plazo de prescripción se suspende en los siguientes supuestos:

a) Cuando para la determinación de responsabilidad sea necesario contar previamente con decisión judicial o arbitral. En este supuesto, la suspensión es por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional.
b) Cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador.

Artículo 94. Infracciones administrativas de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas

94.1. El OECE sanciona a las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que se encuentren en el registro de instituciones

arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OECE.

94.2. Constituyen infracciones pasibles de sanción:

a) No proporcionar dentro del plazo otorgado la información que el OECE solicite para poder ejercer sus funciones supervisoras ni aquella que, conforme a la presente ley y su reglamento, deba remitir al OECE.
b) No publicar en la Pladicop o en su sede digital la información solicitada en el reglamento, en los plazos correspondientes.
c) No verificar que los árbitros o adjudicadores de sus nóminas acreditados ante el OECE publiquen en la Pladicop la información solicitada en el reglamento dentro de los plazos correspondientes.
d) No actualizar o adecuar su código de ética a las disposiciones imperativas establecidas en el reglamento, o en las directivas que para tal fin establezca el OECE, pese a haber sido requerido para ello.
e) No sancionar a los árbitros o adjudicadores, acreditados en sus nóminas ante el OECE, cuando incumplan con las disposiciones expresamente establecidas en la presente ley o su reglamento, para el desarrollo del arbitraje o la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en el que participa, o cuando incumplan disposiciones establecidas en su Código de Ética.
f) Incorporar en las nóminas que remitan al OECE a árbitros o adjudicadores que incumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, para poder ejercer como árbitros o adjudicadores.
g) No mantener los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento que dieron origen a su incorporación en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
h) Presentar documentación falsa o inexacta ante el OECE.
i) Adulterar la información obrante en los expedientes arbitrales o en los expedientes de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas que administran.
j) Permitir, encubrir o no tomar acciones respecto a que los árbitros o adjudicadores de sus nóminas acreditados ante el OECE y/o los profesionales y/o auxiliares que brinden soporte y asistencia a los árbitros y a los adjudicadores y/o en general, cualquier personal que forme parte de la institución o centro de administración, soliciten y/o acepten de las partes procesales o de terceros, pagos, donativos, promesas o cualquier otra ventaja para afectar el desarrollo del arbitraje o procedimiento de resolución de disputas para favorecer o perjudicar a las partes o a terceros.

k) Administrar arbitrajes y/o juntas de prevención y resolución de disputas en el ámbito de la ley encontrándose vretirado temporalmente o excluido del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que administra el OECE.

Artículo 95. Infracciones administrativas a Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

Las sanciones que aplica el OECE por las infracciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar, son las siguientes:

a) Amonestación escrita.
b) Multa.
c) Retiro temporal del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OECE.
d) Exclusión del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OECE.

Artículo 96. Amonestación escrita

96.1. La sanción de amonestación se aplica por la comisión de las infracciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, siempre que se trate de la primera infracción cometida.

96.2. La sanción se materializa mediante comunicación escrita, la que quedará incorporada en la información obrante en Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que administra el OECE, correspondiente a la institución sancionada.

Artículo 97. Multa

97.1. La sanción de multa se aplica por la comisión de las infracciones señaladas en los literales e), f) y g) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley. Asimismo, se aplica en caso de las infracciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, a partir de la segunda infracción cometida.

97.2. La multa a imponerse no será menor de una UIT ni mayor de cinco UIT. En caso de no pagar la multa impuesta en el plazo establecido, el OECE puede iniciar los actos de ejecución coactiva que corresponda.

Artículo 98. Retiro temporal del Registro

98.1. La sanción de retiro temporal del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OECE se aplica por la comisión de las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley. Asimismo, se aplica en caso de las infracciones señaladas en los literales e), f) y g) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, a partir de la tercera infracción cometida.

98.2. El retiro temporal no puede ser menor de tres meses ni mayor de treinta y seis meses, e implica que, la institución arbitral o el centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas no administre ninguno de los precitados mecanismos en materia de contrataciones públicas mientras se encuentre sancionado.

98.3. El incumplimiento de dicha sanción, dentro del plazo establecido, conlleva a la exclusión del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que administra el OECE.

Artículo 99. Exclusión

La sanción de exclusión del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas que administra el OECE se aplica por la comisión de la infracción señalada en el literal k) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, y por la reincidencia en la comisión de las infracciones señaladas en los literales h), i) y j) del referido párrafo.

Artículo 100. Criterios para la aplicación de sanciones por OECE

100.1. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el párrafo 94.2 del artículo 94 es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta.

100.2. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los rangos correspondientes a las sanciones establecidas en los literales b) y c) del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley. La gradualidad, proporcionalidad, caducidad, eximentes de responsabilidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias se determinan conforme a lo previsto en al párrafo 92.2 del artículo 92 de la presente ley.

100.3. Las infracciones establecidas en el presente artículo prescriben, a los cuatro años de cometidas, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Prevalencia de las normas de contratación pública
La presente ley prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables, salvo en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones Públicas, y de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del OECE respecto de las infracciones de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas; así como en el caso de los contratos estandarizados que se regulan conforme a sus cláusulas. Son de aplicación supletoria a los regímenes especiales de contratación siempre que no resulten incompatibles con tales normas especiales, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la presente ley.

La conciliación y el arbitraje, en materia de contratación pública, se regulan especialmente por lo establecido en la presente ley y su reglamento, y se sujetan supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

SEGUNDA. Pertinencia de las exigencias a las entidades contratantes
El reglamento puede establecer determinadas condiciones especiales para los contratos menores y los catálogos electrónicos de acuerdo marco, teniendo en cuenta los principios de la presente ley, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales de los que el Perú es parte, que incluyan disposiciones en materia de contratación pública.

Perú Compras establece condiciones especiales en los catálogos electrónicos para fomentar la participación de las micro y pequeñas empresas.

TERCERA. Modernización del proceso de pago
El Ministerio de Economía y Finanzas implementa de forma progresiva el pago a través de medios electrónicos y la transparencia de su procedimiento, mediante el uso de aplicativos de seguimiento virtual para los proveedores.

CUARTA. Excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información
Se exceptúa el ejercicio del derecho de acceso a la información en los siguientes casos:

1. Por calificar como información confidencial, la contenida en el banco de preguntas utilizado para la rendición de las evaluaciones para la certificación de los compradores públicos, y la información, con respecto a las ofertas, originada en los catalógos electrónicos de acuerdo marco y que contenga secretos comerciales y hojas de vidas de personas de conformidad con el numeral 6 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS.

2. La información que constituya secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que se revele como consecuencia de la negociación derivada de los mecanismos diferenciados de adquisición para la adquisición de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, de enfermedades oncológicas y de enfermedades de alto costo, a la que hace referencia el numeral 2 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS.

QUINTA. Regímenes especiales de contratación

1. Las entidades contratantes habilitadas a utilizar regímenes especiales de contratación efectúan la contratación de sus bienes, servicios y consultoría y ejecución de obras conforme a lo establecido en dichos regímenes, en tanto se implemente la integración progresiva de estos al régimen general, de ser el caso.

2. Las contrataciones realizadas a través de regímenes especiales de contratación cumplen con los principios establecidos en la presente ley.

3. La creación o modificación de las normas que regulan los regímenes especiales de contratación requieren opinión previa de la DGA, a excepción del Régimen especial para las contrataciones de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

4. Las disposiciones sobre el uso de la Pladicop y del RNP para los regímenes especiales de contratación, entre otras disposiciones que resulten aplicables, se establecen en el reglamento de la presente ley.

5. El Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores que correspondan, elaboran, cada dos años, informes de evaluación de los regímenes especiales de contratación. Dichos informes abarcan variables de cumplimiento contractual y la medición de la eficacia y

eficiencia de las contrataciones bajo los regímenes especiales. Sobre la base de estos documentos, el Poder Ejecutivo evaluará, para cada régimen, la justificación de su vigencia y la pertinencia de ser integrado progresivamente al régimen general.

SEXTA. Régimen especial para las contrataciones de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)

Proinversión, mediante acuerdo de su consejo directivo, establece o modifica las disposiciones del régimen especial para las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos que realice y que sean necesarias para la promoción de la inversión privada reguladas en el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y en el Decreto Legislativo 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado, así como las normas que los modifiquen y complementen.

SÉPTIMA. Contrataciones de las empresas del Estado

1. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios pueden ser contratados a través de proveedores nacionales o internacionales mediante el procedimiento de selección y las condiciones que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el titular de la entidad. No se requiere la verificación de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluida la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o servicios.

2. La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa, es establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

OCTAVA. Profesionalización de los compradores públicos

1. La DGA y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, establecen progresivamente las medidas que permitan la profesionalización de los compradores públicos. Estas medidas incluyen diagnósticos de conocimientos, estandarización de perfiles de puestos, programas de capacitación y desarrollo de competencias para el desempeño de sus funciones, así como la incorporación progresiva al régimen del servicio civil y progresión de carrera en este, entre otros. Progresivamente se establecerá la estrategia nacional de profesionalización, que incluye la evaluación del nivel actual de la

profesionalización y los mecanismos que garanticen la participación de las partes interesadas.

2. La entidad contratante es responsable de supervisar que se cumplan las disposiciones referidas a la profesionalización de los compradores públicos que se emitan en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

3. El OECE, en coordinación con la DGA, determina los componentes específicos de la profesionalización de los compradores públicos, incluida la certificación.

4. La DGA y el OECE desarrollan, con la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General de la República, capacitaciones para los funcionarios y servidores a cargo de la defensa pública y del control gubernamental, con la finalidad de generar predictibilidad en la aplicación de los principios y disposiciones de la presente ley por parte de dichos funcionarios y servidores durante el proceso de contratación pública.

NOVENA. Colaboración entre entidades

1. Bajo responsabilidad, de manera gratuita y sin límite de consultas, en el marco de la legislación vigente sobre la materia, todas las entidades públicas de las que se pueda requerir información deben proporcionar el acceso a la información pertinente y oportuna con la finalidad de que la DGA, el OECE y Perú Compras puedan desarrollar las funciones que la presente ley les otorga.
2. Se efectúa el acceso a la información mediante mecanismos de interoperabilidad entre las entidades públicas, salvaguardando las reservas o excepciones previstas por ley. Las entidades que no cuenten con las capacidades tecnológicas para interoperar con la Pladicop proporcionan el acceso a la información mediante cualquier otro canal digital o físico.

DÉCIMA. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras

Las actuaciones relativas a la PMBSO desarrolladas de manera previa al proceso de contratación, se realizan de conformidad con el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y las disposiciones que emita la DGA.

UNDÉCIMA. Contrataciones para el mantenimiento vial

1. El reglamento de la presente ley establece los procedimientos de selección para la contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial regulado en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial.

2. Las entidades contratantes pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional en este tipo de servicios, conforme a las disposiciones que se establezcan en el reglamento.

DUODÉCIMA. Remisión de información a la Contraloría General de la República

1. El OECE y Perú Compras informan a la Contraloría General de la República las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico y/o perjuicio a la prestación de servicios al Estado, o de comisión de delito o de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo con el marco legal vigente.

2. El supervisor de obra está obligado a remitir a la Contraloría General de la República, cuando este órgano lo solicite y bajo responsabilidad, la información de la ejecución de la obra, de acuerdo con los lineamientos regulados por dicho organismo autónomo de control a través de directiva. Esta obligación no representa la paralización del plazo de ejecución de obra, sin perjuicio del ejercicio del control simultáneo que realice la Contraloría General de la República o el órgano de control al que este encargue, de ser el caso.

DÉCIMA TERCERA. Acciones a cargo del OECE y de Perú Compras

1. Se habilita la asignación de recursos en favor del OECE y Perú Compras para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el mandato de la presente ley.

2. Se dispone que el OECE y Perú Compras, en un plazo no mayor de noventa días hábiles a partir del día siguiente de publicada la presente ley en el diario oficial El Peruano, elaboren el Plan de Implementación que identifique las acciones conducentes para dar cumplimiento a las funciones establecidas en el párrafo 11.3 del artículo 11 y en el párrafo 20.2 del artículo 20 de la presente ley, respectivamente. Dicho plan será remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para la evaluación y asignación de recursos.

DÉCIMA CUARTA. Previsión presupuestal en las compras centralizadas

Tratándose de compras centralizadas, cuando las etapas de la Programación Multianual Presupuestaria y la Formulación Presupuestaria hubieran culminado y no se haya realizado la inclusión referida en el párrafo 36.2 del artículo 36 de la presente ley, la emisión de la

constancia de previsión presupuestaria para la convocatoria del procedimiento de selección se realiza previa comunicación del titular de la entidad encargante garantizando la disponibilidad de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes, sujetándose a lo siguiente:

a) Cuando el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realizan en el año fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección, y la ejecución del contrato supera el año fiscal, la oficina general de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad encargada otorgan una constancia de previsión presupuestaria de la contratación que se ejecuta en los años fiscales posteriores.

b) Cuando las convocatorias a procedimientos de selección se realicen en el último trimestre del año fiscal respectivo, y el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realicen en el año fiscal siguiente, la oficina general de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad encargada otorgan una constancia de previsión presupuestaria de dicha convocatoria.

c) Dentro de los treinta días calendario de iniciado el correspondiente ejercicio presupuestal, la entidad encargante gestiona la transferencia financiera señalada en el párrafo 36.2 del artículo 36 de la presente ley.

DÉCIMA QUINTA. Contrataciones de productos farmacéuticos o dispositivos médicos estratégicos con proveedores no domiciliados

1. Excepcionalmente, la adquisición de productos farmacéuticos o dispositivos médicos clasificados como estratégicos que realice el Minsa o Essalud para la satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema puede efectuarse con proveedores no domiciliados, siempre que se sustente que dicha contratación resulte objetivamente más ventajosa a través de un informe técnico y legal, con la debida aplicación de los artículos 5, 6, 8, 44, 46 y 47 de la presente ley, en lo que resulte aplicable.

2. Los requerimientos se publicarán en la sede digital del Minsa y Essalud. El plazo mínimo que debe otorgarse a los proveedores para presentar sus cotizaciones no debe ser menor de ocho días hábiles, el mismo que puede ser prorrogado o ampliado. El Minsa y Essalud están obligados a registrar en la Pladicop las contrataciones que realicen con proveedores no domiciliados. Dichas contrataciones están sujetas a supervisión del OECE.

3. El Estado promoverá la creación de un régimen especial con el fin de mejorar la eficiencia, oportunidad y costos en el proceso de adquisición de medicamentos, así

como ***equipos y dispositivos*** médicos o tecnologías sanitarias estratégicas, prefiriendo a aquellas que acrediten su seguridad, calidad y eficacia.

DÉCIMA SEXTA. Régimen de incentivos para los evaluadores

Los servidores de las entidades contratantes que participen como miembros de los comités de selección en los procedimientos de selección competitivos pueden recibir bonificaciones económicas de carácter anual sobre su remuneración, conforme a las condiciones, criterios y metas establecidas en el Reglamento.

DÉCIMA SÉPTIMA. Competencia judicial para actuaciones del OECE

1. Cuando el objeto de una acción contencioso-administrativa verse sobre actuaciones de los órganos del OECE, es competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior respectiva correspondiente al distrito judicial donde tiene su domicilio el OECE. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en grado de apelación y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en casación.

2. Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior y, en apelación, la Sala **Civil** de la Corte Suprema, correspondientes al distrito judicial donde tiene su domicilio el OECE.

3. Los procesos constitucionales de amparo sustentados en la presunta vulneración de derechos constitucionales, relativos a actuaciones de los órganos del OECE, son conocidos en primera instancia por la Sala Superior Especializada en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia respectiva y, en grado de apelación, por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia y, en apelación, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

4. No procede el proceso constitucional de amparo cuando exista una vía específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

5. Las medidas cautelares y demás resoluciones dictadas por jueces en contravención de lo dispuesto serán puestas en conocimiento de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del distrito judicial correspondiente, así como de la Oficina de Control de la Magistratura respectiva, a fin de que, de oficio, se inicie el proceso disciplinario, según corresponda.

DÉCIMA OCTAVA. Contrataciones para la continuidad de proyectos bajo el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos

Cuando se produzca la caducidad de un contrato de asociación público privada o proyecto en activos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, la entidad titular del proyecto puede contratar directamente bajo el supuesto de desabastecimiento contenido en el literal c) del párrafo 55.1 del artículo 55 de la presente ley a aquellos proveedores necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.

DÉCIMA NOVENA. Mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores

1. El OECE administra el mecanismo valorativo **del desempeño** de los proveedores **inscritos en el RNP**, que **comprende la difusión** información objetiva, oportuna y fidedigna, como incentivo **positivo** para **su** adecuada actuación **en** contratación pública.

2. **Este mecanismo considera la siguiente información de valoración positiva y de méritos de los proveedores:**
   a) **Certificación de programas de cumplimiento específicos en materia de contratación pública.**
   b) **Cumplimiento de plazos de entrega de contrataciones de bienes, servicios y obras.**
   c) **Condenas judiciales con calidad de cosa juzgada impuestas por la comisión de delitos en el marco de relaciones con el Estado y realización de negocios, en tanto se mantengan vigentes.**
   d) **Resoluciones de sanciones de inhabilitación temporal o permanente, durante el plazo de vigencia.**
   e) **Resoluciones de contrato celebrados con el Estado, que hayan alcanzado condición de firmeza.**
   f) Nivel de riesgo **financiero** registrado en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
   g) Adecuación a estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado peruano.

3. La información requerida para efectuar la clasificación se obtiene de ***la*** Pladicop, así como de otros sistemas de información del Estado establecidos en el reglamento, mediante mecanismos de interoperabilidad.

4. **La información de esta medición es considerada en la evaluación de postores en función de las bases de los procedimientos de selección, sin calificársele por sí mismos como impedimentos adicionales para contratar.**

5. **La información completa y desagregada de esta medición es de acceso público, difundida por el OECE**, salvo las excepciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS.

VIGÉSIMA. Procedimientos especiales de contratación en el marco del párrafo 11.4 del artículo 11 de la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

1. Las controversias que surjan entre las partes en el marco de la ejecución de los contratos celebrados derivados de los procedimientos especiales de contratación previstos en el párrafo 11.4 del artículo 11 de la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, que versen sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, además del trato directo y de los Dispute Boards, a través del arbitraje, según el acuerdo de las partes. Los plazos de caducidad son aquellos señalados en los párrafos 84.4, 84.5, 84.6 y 84.7 del artículo 84 de la presente ley.

2. Los impedimentos establecidos en el artículo 30 de la presente ley se aplican a las contrataciones que deriven de la aplicación de los Procedimientos Especiales de Contratación previstos en el párrafo 11.4 del artículo 11 de la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura.

3. Las discrepancias que surjan entre las partes respecto de los procedimientos especiales de selección previstos en el párrafo 11.4 del artículo 11 de la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, que versen sobre la etapa de invitación a licitar y la etapa de evaluación, según el procedimiento especial de contratación, se resuelven mediante apelación.

4. El recurso de apelación se interpone ante el Tribunal de Contrataciones Públicas a los actos que dictan los resultados de las etapas mencionadas en el párrafo 3 de la presente disposición complementaria final, tras la adjudicación del contrato.

5. Las materias a las cuales el participante del procedimiento puede interponer recurso de apelación son las siguientes:
   a) Haberse realizado la evaluación sin tener en cuenta los documentos presentados por el apelante en el plazo y formato requerido.
   b) Haberse realizado la evaluación incurriendo en error aritmético en el cálculo y ponderación de los puntajes, cuando dicho error haya perjudicado al apelante en la adjudicación del contrato.

6. El plazo para interponer el recurso de apelación es de diez días hábiles desde la publicación de la adjudicación en la Pladicop. El plazo no es prorrogable.

7. En todos los demás aspectos, el procedimiento administrativo que resuelve la apelación se rige por el Título V, Capítulo I, referido a la solución de controversias antes del perfeccionamiento del contrato y por el reglamento.

VIGÉSIMA PRIMERA. Contratos de gobierno a gobierno

1. Mediante las contrataciones de gobierno a gobierno, la adquisición de bienes, la contratación de servicios, la ejecución de obras, su mantenimiento y/u operación, pueden ser ejecutadas por otro gobierno, a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Estas contrataciones se regulan bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional.

2. Las contrataciones de gobierno a gobierno solo pueden utilizarse en los siguientes casos: (i) para objetos contractuales de alta complejidad, en los que el Estado peruano requiera asistencia técnica especializada por parte de otro Estado; o, (ii) para bienes y servicios estratégicos para la defensa nacional y el orden interno debidamente declarados como tales por los sectores competentes.

3. Mediante decreto supremo refrendado por el ministro del sector, se autoriza al ministerio, sus organismos públicos adscritos, programas o proyectos especiales a realizar una contratación de gobierno a gobierno. Para la aprobación del referido decreto supremo, el ministerio del sector, sus organismos públicos adscritos, programas o proyectos especiales, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Elaborar un informe que sustente el alcance, las ventajas objetivas y el análisis costo-beneficio para el Estado peruano de contratar con otro Estado, así como el análisis respecto a otras modalidades de contratación o ejecución que contenga como mínimo lo siguiente:
    1. La identificación del objeto contractual, conforme a las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente disposición complementaria final.
    2. El sustento de la alta complejidad del objeto contractual así como de la necesidad y alcance de la asistencia técnica especializada requerida por parte de otro Estado o, el sustento de que la contratación tiene por objeto bienes y servicios estratégicos para la defensa nacional o el orden interno, según corresponda.
    3. Un cronograma preliminar de todas las fases del proceso de contratación, hasta el cumplimiento de todo su alcance.
    4. Análisis costo-beneficio del comparativo con otros mecanismos de contratación existentes que sustenten que la contratación de gobierno a gobierno es ventajosa, en términos objetivos de oportunidad y alcance.
b) Elaborar un informe en el cual se identifique a los potenciales gobiernos que puedan cumplir con lo requerido por la entidad contratante. Este informe debe evaluar como mínimo los siguientes criterios:
    1. Niveles de transparencia.
    2. Solvencia técnica en el objeto a contratar.
    3. Experiencia en mecanismos de cooperación técnica similares.
c) En el caso de proyectos de inversión o programa de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, adicionalmente se debe contar con la opinión de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del sector funcionalmente responsable sobre el alineamiento con los objetivos priorizados y metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios establecidos en la Programación Multianual de Inversiones y sobre el cumplimiento de los criterios de priorización aprobados por el sector. Asimismo, la opinión incluye la verificación de que los proyectos de inversión o programa de inversión cumplan con la metodología específica sectorial en el marco del referido Sistema Nacional, los estándares de calidad y los niveles de servicio que le sean aplicables. Dicha opinión se realiza, sobre la base de los informes de la unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones de la entidad responsable del proyecto o programa de inversión o del órgano técnico correspondiente.
d) Contar con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPP) respecto a la capacidad presupuestal

del pliego. Para tal efecto, la oficina de presupuesto o la que haga las veces en el pliego correspondiente, remite un informe en el que sustente que esta cuenta con la capacidad presupuestal para el financiamiento necesario para dicha contratación, así como para los proyectos de inversión o programa de inversión, salvo que requiera concertar una operación de endeudamiento, en cuyo caso la misma debe estar contemplada en el Programa Anual de Endeudamiento del año respectivo. Para ello, debe sustentar que el presupuesto que requiere es parte de la asignación presupuestaria multianual vigente y/o de los recursos a ser incorporados mediante otras fuentes de financiamiento en el presupuesto institucional.

4. En el caso de las contrataciones de gobierno a gobierno para objetos contractuales de alta complejidad, se deben cumplir adicionalmente las siguientes condiciones:
   a) Los proyectos de inversión que formen parte de la contratación de gobierno a gobierno deben tener un costo de inversión actualizado igual o mayor a cuarenta mil UIT.
   b) En el caso de programas de inversión que formen parte de la contratación gobierno a gobierno deben tener un costo de inversión actualizado igual o mayor a seiscientos mil UIT.
   c) En la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión, la unidad formuladora debe haber determinado el sistema de entrega, en el que se hubiera evaluado que el proyecto de inversión se ejecute mediante la modalidad de contratación de gobierno a gobierno.
   d) En caso de los proyectos de inversión que hubieran sido declarados viables previo a la entrada en vigencia de la presente ley, y que aún no cuenten con expediente técnico o documento equivalente, la unidad formuladora actualiza la información contenida en los documentos técnicos que sustentaron la declaración de viabilidad, sobre la base del sustento de la unidad ejecutora de inversiones, de manera previa a la solicitud de opinión de la OPMI del sector al que hace referencia el literal c) del párrafo 3 de la presente disposición complementaria final, registrando dicha actualización en el aplicativo informático del Banco de Inversiones.
   e) En caso que los contratos suscritos en el marco de la contratación de gobierno a gobierno que cuenten con un componente de ejecución física de obra, superen el 40% respecto al costo de inversión actualizado en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones registrado a la fecha de suscripción del contrato correspondiente a su ejecución, la oficina de presupuesto o la que haga las veces en el pliego correspondiente debe contar con opinión favorable de la DGPP respecto a la capacidad presupuestal para el

financiamiento del proyecto de inversión o programa de inversión, previo a emitir la respectiva certificación y previsión presupuestal.

f) El pliego debe remitir trimestralmente a la DGPP las actualizaciones de las proyecciones de costos de la cartera de inversiones y/o intervenciones asociadas a las contrataciones de gobierno a gobierno a su cargo.

5. La contratación de gobierno a gobierno puede formalizarse mediante contratos o acuerdos, los cuales incluyen, como mínimo, cláusulas que contemplen las siguientes obligaciones:

a) Por parte del otro gobierno:
   1. Plan de gestión de transferencia de conocimientos, en caso este se encuentre referido a objetos contractuales de alta complejidad, innovación o especialización. Este plan, debe incluir como mínimo:
      1.1 El diagnóstico inicial y evaluación de madurez de las capacidades de la entidad contratante que permita dar trazabilidad de la mejora de las capacidades de los servidores durante el desarrollo de la contratación gobierno a gobierno.
      1.2 La transferencia de conocimientos por cada componente respecto del cual se prestará asistencia técnica especializada.
   2. Plan para el legado a individuos y organizaciones del país, según corresponda.
   3. La obligación de remitir al Estado peruano la documentación referida a la ejecución de la contratación de gobierno a gobierno, incluyendo cualquier contrato que se derive de éste y que haya sido financiado con fondos públicos.
   4. La terminación de pleno derecho de los contratos derivados de la contratación de gobierno a gobierno, por actos de corrupción.

b) Por parte del ministerio, organismo público adscrito, programa o proyecto especial:
   1. La obligación de remitir la documentación referida a la ejecución de la contratación de gobierno a gobierno y los contratos que se deriven de este a la Contraloría General de la República, cuando esta lo solicite.
   2. La obligación de remitir la documentación solicitada por el OECE en el marco de su función de supervisión.

c) Para la suscripción del contrato o acuerdo de gobierno a gobierno, la entidad contratante debe contar con una estructura de gestión de proyectos en el marco de

lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica, o la norma que lo sustituya.

6. La ejecución de las contrataciones que se deriven de la contratación de gobierno a gobierno se somete al control gubernamental. El control es simultáneo y está a cargo de la Contraloría General de la República.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Contrataciones en el marco de la Ley 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

1. Para la validez y eficacia de la convocatoria y demás actos que correspondan, en los procesos de adquisición y contratación a cargo de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. regulados en la Ley 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., dicha entidad está obligada a emplear la Pladicop.

2. Los recursos impugnativos que se presenten en el marco de los procesos de selección que convocados por Petroperú S.A. son conocidos en vía de apelación por dicha empresa a través de un comité de apelaciones. Únicamente en aquellos procesos de adquisición o contratación que se encuentren sujetos a los acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano se puede impugnar lo resuelto por el comité de apelaciones de Petroperú S.A. mediante la interposición de un recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE.

3. La garantía por interposición de los recursos impugnativos es de hasta el 0.5% del monto estimado del proceso de selección o del ítem que se decida impugnar, de acuerdo con los límites establecidos en el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

4. El Tribunal de Contrataciones Públicas ejerce potestad sancionadora en el marco de los procesos de contratación de Petroperú S.A. de acuerdo con las infracciones y sanciones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas.

5. Petroperú S.A. adecua la presente disposición en su reglamento en el plazo de treinta días calendario, contados a partir de la publicación de la presente ley.

VIGÉSIMA TERCERA. Emisión de documentos metodológicos de elaboración de expedientes técnicos de obra

El OECE elabora en coordinación con los sectores y entes rectores del inversión pública y abastecimiento los documentos metodológicos que orienten la generación de los expedientes técnicos de obra en observancia del principio de valor por dinero.
Los mencionados documentos establecen los criterios, estándares y procedimientos técnicos requeridos para asegurar la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de las obras. Además, buscan estandarizar los procesos de elaboración de expedientes técnicos a escala nacional, lo que facilita su revisión, aprobación y supervisión.

VIGÉSIMA CUARTA. Referencias al Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes (OECE)

Toda referencia, en las leyes y sus normas de desarrollo, al Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), debe entenderse como Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

VIGÉSIMA QUINTA. Protección y promoción de la competencia y prevención del delito

1. Cuando las entidades contratantes, el OECE o el Tribunal de Contrataciones Públicas verifiquen la existencia de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección en los términos de la normativa especial, deben remitir toda la información pertinente a la Secretaría Técnica de las Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi para que esta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. Esta decisión debe ser mantenida en reserva y no debe ser notificada a los presuntos responsables a fin de asegurar la eficacia de la investigación.

2. Cuando el OECE, en el marco de sus funciones, tome conocimiento de que un requisito o regla en los documentos del procedimiento de selección afectan la competencia, contraviniendo los principios de publicidad, libertad de concurrencia y competencia, ordena a la entidad contratante que los elimine. Adicionalmente, si el OECE toma conocimiento de la existencia de indicios de delito, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Público.

VIGÉSIMA SEXTA. Información de los beneficiarios finales de proveedores del Estado

1. El OECE integra en el RNP la información de los beneficiarios finales de los proveedores inscritos en éste, para lo cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, mediante mecanismos de interoperabilidad, le remite la información obtenida en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo

1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.

2. El Ministerio de Economía y Finanzas emite la normativa complementaria para la implementación de lo señalado en el numeral anterior.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Reglamentación

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueba la reglamentación de la presente ley, en el plazo de ciento ochenta días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Dicha reglamentación desarrolla en títulos diferenciados por tipos de procesos y sus modalidades, entre otros, los procedimientos, requisitos y condiciones aplicables a las disposiciones previstas en la presente ley.

VIGÉSIMA OCTAVA. Vigencia de la ley

La presente norma entra en vigor a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente a la publicación de su reglamento, excepto la décima tercera, décima séptima, vigésima y vigésima séptima disposiciones complementarias finales, **así como la única disposición complementaria modificatoria,** que entran en vigor a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el diario oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modificación de la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada por el Decreto Legislativo 1584

Se modifica el párrafo 5.12 del artículo 5 de la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada por el Decreto Legislativo 1584, en los siguientes términos:

"Artículo 5. Reactivación de la obra pública paralizada contratada bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado

(...)

5.12 ***Las entidades*** *pueden contratar el saldo de obra que incluya el diseño y construcción a través de las modalidades llave en mano que incluye el expediente técnico de obra, o concurso oferta, según corresponda, conforme a los requisitos, condiciones y demás disposiciones establecidas* ***para dichas modalidades*** *en el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF,* ***o norma que lo sustituya****".*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Integración de la información de las plataformas sobre contrataciones públicas

1. La Pladicop es parte de los sistemas de información que administra el Ministerio de Economía y Finanzas. La información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el RNP, la Plataforma para contratos menores y otros sistemas complementarios sobre contrataciones públicas forman parte de la Pladicop. La integración de la información de dichos sistemas es progresiva y su implementación está a cargo del OECE.

2. La obligatoriedad del uso de la Plataforma para contratos menores se implementa de manera progresiva, conforme las disposiciones del reglamento.

SEGUNDA. Pilotos para mecanismos diferenciados de adquisición para la adquisición de tecnologías sanitarias

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Ministerio de Salud, y las entidades designadas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud mediante resolución ministerial, con el acompañamiento de Perú Compras, realizan pilotos para la utilización de los mecanismos diferenciados de adquisición para la adquisición de tecnologías sanitarias a los que hace referencia el artículo 44 de la presente ley.

TERCERA. Vigencia de la designación de los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas

1. Los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas que a la entrada en vigor de la presente ley cuenten con designación vigente continúan en el ejercicio de sus funciones hasta completar el período para el cual fueron elegidos.

2. Una vez vencido el período para el cual fueron elegidos y en caso no se haya designado a los vocales que los sustituyan, como resultado del concurso público conducido por el comité multisectorial respectivo, pueden permanecer en el cargo por un periodo máximo de un año.

3. Tratándose de los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren con designación vencida, su permanencia en el cargo puede extenderse únicamente por un periodo máximo de seis meses.

CUARTA. Aplicación de la norma en el tiempo

Los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la presente ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

QUINTA. Régimen laboral

En tanto culmine el proceso de implementación al régimen del Servicio Civil, el personal del OECE y de Perú Compras mantiene su régimen laboral.

SEXTA. Servicios no exclusivos a cargo de la Dirección de Arbitraje del OECE

1. Los procesos arbitrales a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje que hubiesen iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente ley seguirán siendo organizados y administrados por el OECE hasta su finalización.

2. Del mismo modo, se atienden hasta su culminación los servicios que estuvieron a cargo de la Dirección de Arbitraje y que se encuentran en el Texto Único de Servicios No Exclusivos del OECE y que hubiesen ingresado antes de la entrada en vigencia de la presente ley, con excepción del servicio de solicitud de copia de documentación obrante en expediente arbitral administrado por la Dirección de Arbitraje a solicitud de parte acreditada en el proceso arbitral, de árbitro único o miembros del tribunal a cargo del proceso arbitral, que seguirá brindándose.

3. Los árbitros que integran el Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA-OSCE) continuarán en él hasta la finalización de los procesos arbitrales a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje y solo podrán ser designados residualmente para los procesos arbitrales a cargo del mismo, hasta su finalización, no habiendo posibilidad de incorporar a nuevos árbitros al RNA-OSCE.

4. Asimismo, se atienden hasta su culminación las solicitudes relativas a recusación y designación residual que surgieran dentro de los procesos arbitrales a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje, hasta su finalización.

5. De manera excepcional, por única vez y por un plazo máximo de seis meses, los árbitros que conformaban el RNA-OSCE podrán ser designados para arbitrajes institucionales, así no se encuentren incorporados en las nóminas de la institución arbitral que administrará el arbitraje.

SÉPTIMA. Implementación de la validación de impedimentos en la Ficha Única de Proveedor (FUP)

1. En tanto culmine el proceso de implementación de la validación de impedimentos en la FUP del RNP, la verificación de no existencia de los impedimentos indicados en el párrafo 30.1 del artículo 30 de la presente ley, se realiza mediante la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para ser participante, postor, contratista o subcontratista. El OECE informa a las entidades contratantes, mediante comunicado, el inicio de la verificación del impedimento mediante la referida FUP.

2. Las entidades públicas distintas al OECE, responsables de las bases de datos o registros necesarios para la implementación de la validación de impedimentos en la FUP, realizan las acciones correspondientes para brindar el acceso al OECE a la referida información, ya sea mediante mecanismos de interoperabilidad u otros, bajo responsabilidad de dichas entidades. Asimismo, son responsables de que la información que obre en sus registros sea veraz y se encuentre debidamente actualizada.

OCTAVA. Equivalencias para la determinación de los procedimientos de selección

El reglamento establece las equivalencias para la aplicación de los márgenes establecidos en la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, para los procedimientos de selección contemplados en esta.

NOVENA. Retención de pago como garantía en procesos de contratación iniciados

La retención del pago como mecanismo alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigor de la presente ley, siempre que se cumpla con lo siguiente:

a. Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.
b. Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

DÉCIMA. Incorporación de las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas al registro

El proceso de incorporación de las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas es conducido por el OECE de acuerdo con los lineamientos que para este fin emita.

El proceso es progresivo hasta el 31 de diciembre del 2026. Desde el 01 de enero de 2027 las entidades contratantes designan a los árbitros o adjudicadores de las nóminas que las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas tengan a disposición.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación

Se derogan los siguientes dispositivos y disposiciones, a partir de la vigencia de la presente norma:

a) Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
b) Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
c) Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
d) Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras.
e) Artículo 6 de la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, modificado por el artículo 1 de la Ley 31738, Ley que modifica la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas.
f) Segundo párrafo del numeral 2 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

Lima, 30 de abril de 2024

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: REVILLA VILLANUEVA Cesar Manuel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 11:08:08-0500

ALEJANDRO CAVERO ALVA
Presidente
Comisión de Descentralización Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado

CÉSAR REVILLA VILLANUEVA
Presidente
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 14:39:46-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: REVILLA VILLANUEVA Cesar Manuel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 11:09:24-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RUIZ Victor Seferino FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 12:43:28-0500

DICTAMEN CONJUNTO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR, QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 16:11:46-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 16:15:50-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PALACIOS HUAMAN Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 16:41:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ESPINOZA VARGAS Jhaec Darwin FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/05/2024 15:00:06-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OBANDO MORGAN Auristela Ana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 10:51:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAMONES SORIANO Lady Mercedes FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 15:52:17-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HUAMAN CORONADO Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 15:09:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 11:40:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 12:23:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 12:23:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CUETO ASERVI Jose Ernesto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 13:13:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: YARROW LUMBRERAS Norma Martina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 10:04:11-0500

DICTAMEN CONJUNTO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR, QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VARAS MELENDEZ Bias Marcial FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 18:00:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 14:58:02-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ANDERSON RAMIREZ Carlos Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 13:31:01-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/05/2024 11:09:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 14:46:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 15:39:14-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JULON IRIGOIN Elva Edhit FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 12:33:44-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JULON IRIGOIN Elva Edhit FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 15:47:48-0500

CONGRESO de la REPÚBLICA
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2024 14:13:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2024 16:48:24-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/05/2024 11:41:39-0500

MP Dictamenes

De: Notificacion Sistemas
Enviado el: martes, 7 de mayo de 2024 11:51
Para: Katherine Margaret Larco Ubillus; MP interno
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: 0dc9d5ab4b7892b1a70c91043a8bbe99.pdf

[Solicitante]: klarco@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: SE ADJUNTA EL DICTAMEN CONJUNTO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR, QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. SE INDICA QUE LA VOTACIÓN FIGURA EN LA PRIMERA PÁGINA DEL DICTAMEN Y QUE SE PIDIÓ LA DISPENSA DEL TRÁMITE PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS TOMADOS. ASIMISMO, INDICAR QUE LA CONGRESISTA NOELIA ROSSVITH HERRERA MEDINA VOTO A FAVOR PERO NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SU FIRMA DIGITAL.
[Fecha]: 2024-05-07 11:50:49
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.